

# Nicaragua 2018

## La Insurrección cívica de abril



Fondo Editorial

**UCA**  
Publicaciones

# Nicaragua 2018

## La Insurrección cívica de abril



Fondo Editorial

**UCA**  
*Publicaciones*



Nicaragua 2018. La Insurrección cívica de abril.



Autores/as: Manuel Ortega Hegg, Irene Agudelo Builes, Jessica Martínez Cruz, Mario Sánchez, Hloreley Osorio Mercado, Jessica Pérez Reynosa, Sergio Ramírez, Hellen Castillo Rodríguez, Juan Pablo Gómez

Foto de portada: La Prensa/ Oscar Navarrete

Editorial: UCA Publicaciones, Universidad Centroamericana (UCA)

*Primera edición, 2020*





# Contenido

<b>Presentación .....</b>	<b>7</b>
<b>Introducción.....</b>	<b>11</b>
<b>I. Revueltas de abril: Narrativas, redes y espacios en disputa .....</b>	<b>21</b>
<i>Irene Agudelo Builes, Jessica Martínez Cruz</i>	
<b>II. Abril 2018, Nicaragua: El desafío de la democracia frente al autoritarismo .....</b>	<b>73</b>
<i>Mario Sánchez, Hloreley Osorio Mercado</i>	
<b>III. Política, violencia y humanidad.....</b>	<b>117</b>
<i>Juan Pablo Gómez</i>	
<b>IV. “El problema es la política, no la economía”: Una mirada crítica a la economía nicaragüense a propósito de la crisis de abril de 2018 .....</b>	<b>155</b>
<i>Jessica Pérez Reynosa</i>	
<b>V. Algo nuevo va a nacer .....</b>	<b>177</b>
<i>Sergio Ramírez</i>	
<b>VI. La crisis en Nicaragua: Cronología de los principales sucesos.....</b>	<b>185</b>
<i>Hellen Castillo Rodríguez</i>	



# Presentación

## *Aportando a la formación de conciencia crítica en tiempos de crisis*

En julio de 2020, la Universidad Centroamericana (UCA), conmemora sus 60 años de existencia. Como institución que ha cumplido un papel relevante en la historia del país, y desde su misión académica, la universidad siempre ha intentado contribuir a los grandes procesos de transformación de la realidad nacional.

En el curso del tiempo, particularmente durante los últimos 40 años, los diversos equipos de investigación y acción social han procurado atender la necesidad del desarrollo humano y social con sustentabilidad.

Con el propósito de responder eficazmente a las exigencias de la modernidad, desde 2016, la universidad emprendió un proceso de reestructuración interna que comprendió también la conformación de dos nuevos institutos interdisciplinarios de investigación: el Instituto Interdisciplinario de Ciencias Naturales (IICN) y el Instituto Interdisciplinario de Ciencias Sociales (IICS).

La apuesta ha sido que los nuevos institutos estudien los fenómenos sociales y naturales de forma holística y a mayor profundidad, facilitando que los problemas se aborden en su vasta dimensión. Por ello, con la reorganización del sistema de investigación e innovación, la universidad ha motivado a los investigadores a trabajar de manera sinérgica e interdisciplinaria. Esta estrategia, mucho más creativa y provechosa, permite que los equipos de trabajo integren información, datos, técnicas, conceptos y perspectivas desde las diversas disciplinas de conocimiento, y de ese modo atender o resolver problemas cuyas soluciones sobrepasan el alcance de una sola disciplina o área de investigación.

Si bien ese esfuerzo no es fácil porque enfrenta un sinnúmero de obstáculos, no siendo el menor la resistencia intrínseca de las disciplinas, el trabajo de los nuevos institutos se ve confrontado también con una realidad más compleja que impone retos adicionales a los investigadores: entra en crisis el sistema de gobierno corporativo autoritario que duraba ya doce años.

Al momento de su fundación en enero de 2018, el Instituto Interdisciplinario de Ciencias Sociales se propuso ahondar en el conocimiento de los procesos de cambio en la sociedad contemporánea de Nicaragua y de Mesoamérica e indagar las características fundamentales de la estructura social a fin de aproximarse a la comprensión de problemas complejos para

los que urgen soluciones alternativas. Quedaba claro que tal tarea tendría que ser interdisciplinaria, y que tendría que valerse de las perspectivas teóricas y metodológicas más relevantes, involucrando a sociólogos, filósofos, historiadores, educadores, antropólogos y estudiosos de otras disciplinas.

Sin embargo, a raíz de la rebelión de abril que pondría en evidencia la naturaleza represiva del régimen, el Instituto – que apenas arrancaba – debió priorizar una línea de trabajo más apremiante: identificar y analizar los factores políticos, económicos y socioculturales que pusieron en crisis la construcción social. Para ello debían formularse las preguntas correctas y elaborar recomendaciones que contribuyeran a la comprensión de una gesta heroica liderada por jóvenes universitarios y por el movimiento campesino, entre otras fuerzas. Debían identificarse, además, las vías para construir una sociedad más democrática y justa sobre la base de institucionalidades sólidas, de nuevas formas de hacer política, de nuevos liderazgos, nuevos comportamientos sociales y nuevas maneras de pensar. En otras palabras, hacia la transformación del mundo, como se plantea el proyecto académico de AUSJAL, la red de 30 universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina.

Al fragor de los acontecimientos de abril, los investigadores e investigadoras del IICS se dieron a la doble tarea de construir una agenda interdisciplinaria innovadora de largo plazo a la par de crear opinión sobre la rebelión de abril. Algunos de esos primeros trabajos se recogen en el libro *Nicaragua 2018. La Insurrección cívica de abril*, con el interés de seguir fomentando el debate académico sobre lo que podría juzgarse como el acontecimiento más importante de las últimas décadas, la rebelión de abril.

Después de *Autoconvocados y conectados: los universitarios en la revuelta de abril en Nicaragua*, de José Luis Rocha, este nuevo libro de UCA Publicaciones trata diversas interrogantes planteadas por el levantamiento popular, como son el control de los poderes en manos de una familia, la desintegración del incipiente sistema democrático, la corrupción generalizada, la politización de la justicia, la violencia y la pérdida de los derechos más elementales, la pobreza y la desigualdad y, en fin, el cuestionamiento de todo el sistema político que privilegia a las elites económicas.

Siendo que desde el 2018 se han agravado aceleradamente los problemas que originaron las protestas sociales, consideradas como las mayores en la historia reciente del país, únicamente podemos esperar que en los años siguientes continúen por toda Nicaragua las manifestaciones de descontento popular. En ese sentido es oportuno recordar las palabras del ex rector de la UCA, P. Xabier Gorostiaga, S.J. (q.e.p.d), quien afirmaba que “En periodos caóticos de posguerra, de crisis políticas o desastres naturales, las universidades pueden servir de plataformas y foros para el análisis y la creación de los consensos, así como de conciencia crítica en circunstancias de parálisis”.

De modo que resulta de la mayor importancia que el equipo del IICS continúe intentando comprender los problemas profundos del país y provocando opinión informada que contribuya a formular propuestas de soluciones duraderas para un conflicto que, más allá del estancamiento

económico, ha dejado una tragedia humana de proporciones inimaginables, con crímenes de lesa humanidad y centenares de personas asesinadas, prisioneras o desaparecidas por motivos políticos, y más de cien mil personas exiliadas.

**José Alberto Idiáquez Guevara, S.J.**

Rector de la Universidad Centroamericana





# Introducción

*Manuel Ortega Hegg*<sup>1</sup>

El libro *Nicaragua 2018. La Insurrección cívica de abril*, reúne artículos de un grupo de investigadores del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Sociales (IICS) de la Universidad Centroamericana (UCA) de Managua, Nicaragua. Todos ellos tratan sobre la coyuntura crítica que se abrió en Nicaragua por la represión de abril de 2018 ante las protestas públicas estudiantiles, juveniles, campesinas y multclasistas más numerosas que se hayan registrado en la historia del país y que se suscitaron a raíz de la negligencia gubernamental para atender los incendios en la Reserva Indio-Maíz, así como por las medidas inconsultas para reformar la Ley de Seguridad Social, reforma que afectaba las raquílicas pensiones de los jubilados. Estas protestas sólo dejaron de expresarse en las calles de la capital y de las principales ciudades del país por la feroz represión gubernamental, cuyos excesos incurrieron en lo que los organismos internacionales han tipificado como crímenes de lesa humanidad.<sup>2</sup> A partir de la respuesta represiva, las demandas de los manifestantes subieron de tono y pidieron el recambio del gobierno por la vía de las elecciones adelantadas, justicia para castigar el abuso de la fuerza, y democracia. La negativa de los gobernantes a dar respuestas apropiadas a estas demandas ciudadanas y la criminalización de la protesta han sumido al país en una crisis que sigue abierta y sin visos de solución, dada la persistencia de la represión y la falta de voluntad política del gobierno para llegar a acuerdos, además de que el gobierno ha incumplido los pocos puntos

---

1 Sociólogo. Investigador asociado al Instituto Interdisciplinario en Ciencias Sociales de la Universidad Centroamericana (IICS-UCA).

2 El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue constituido por el gobierno de Nicaragua, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (SG OEA) y la CIDH, mediante un acuerdo suscrito el 30 de mayo de 2018 con la finalidad de “coadyuvar y apoyar las acciones iniciadas por el Estado de Nicaragua” en la investigación y esclarecimiento de los hechos violentos ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018 “para la obtención de justicia para todos y reparación del daño a las víctimas”. Este grupo llegó a la conclusión de que “El Estado de Nicaragua llevó a cabo conductas que, de acuerdo con el derecho internacional, deben considerarse crímenes de lesa humanidad” (...) y que las acciones delictivas correspondieron a hechos decididos y avalados desde la cúspide del poder estatal, incluyendo al presidente de la República. *Informe sobre los hechos de violencia ocurridos en Nicaragua entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018*. Disponible en [https://www.oas.org/es/cidh/actividades/giei-nicaragua/GIEI\\_INFORME.pdf](https://www.oas.org/es/cidh/actividades/giei-nicaragua/GIEI_INFORME.pdf)

acordados en los dos intentos de diálogo fallidos que han tenido como objetivo encontrar una salida pacífica al conflicto.

La represión se dirigió prioritariamente a paralizar y desmovilizar las protestas; al no lograrlo, se procedió a la “Operación Limpieza” con el fin de eliminar violentamente los tranques levantados por los manifestantes como defensa ante la represión indiscriminada de las fuerzas policiales y parapoliciales; y una vez conseguida la eliminación a sangre y fuego de las barricadas, la fuerza se utilizó para intimidar a los jóvenes en los barrios mediante patrullajes, allanamiento de domicilios, encarcelamientos sin órdenes judiciales, redadas y vigilancia armada, además de impedir de manera violenta y desmedida que los manifestantes desarmados hicieran uso de espacios públicos, calles y rotondas. Para ello el gobierno utilizó las fuerzas combinadas de grupos de choque, cuerpos policiales, grupos parapoliciales y francotiradores. En la práctica se impuso un estado de excepción y un régimen policial-parapolicial que ha mantenido invalidados todos los derechos ciudadanos.

Sin embargo, la lucha cívica ciudadana se mantiene firme. Si bien el patrullaje permanente y las sirenas omnipresentes de la Policía han logrado desalojar las calles y los espacios públicos e imponer el silencio de los manifestantes en las ciudades, la resistencia se mantiene, y se expresa de diversas maneras: acciones de desobediencia civil, plantones *express*, vigilias, bocinazos de carros a ciertas horas, aparición de pintas azul y blanco en paredes y calles, *performances* colectivas en centros comerciales, globos azul y blanco surcando el aire o las calles, papelillos, ayunos, huelgas de hambre, misas, paros totales, paros de consumo y diversas acciones de resistencia en las cárceles. Todo ello revela que nada está normal en la “normalidad” impuesta por la represión y el miedo. Hay espacios en la conciencia que no pueden ser ni encarcelados, ni patrullados, ni silenciados.

Aunque se escribieron en los días más duros de la represión gubernamental y al fragor de las protestas, estos capítulos no carecen sin embargo de calidad académica, dada la metodología empleada que combina investigación documental y lo que puede considerarse como observación participante, ambas sometidas al rigor normativo que exigen esos procedimientos.

Estos textos utilizan indistintamente varios términos al hablar de que lo que ha ocurrido en Nicaragua desde el 18 de abril. Los términos más frecuentes son “revueltas”, “insurrección”, “revolución”. Según el Diccionario de la Real Academia, una de las acepciones de *revuelta* es “alboroto, alteración, sedición”, pero también “Punto en que algo empieza a torcer su dirección o a tomar otra”; la palabra *insurrección* significa, según ese mismo diccionario, “levantamiento, sublevación o rebelión de un pueblo, de una nación”; y la palabra *revolución*, en una de sus acepciones, significa “cambio profundo, generalmente violento, en las estructuras políticas y socioeconómicas de una comunidad nacional”. Según los autores, todo eso ha acontecido en Nicaragua desde abril de 2018.

Sin embargo, la diferencia en este caso es que todo lo sucedido desde las protestas de abril de 2018 ha demostrado que los manifestantes se distancian

de la violencia y que han seguido un curso deliberadamente pacífico. Este es un rasgo inédito de esta rebelión en Nicaragua. Porque como dice el Diccionario de la Real Academia, las revoluciones son generalmente violentas. Ejemplos de ello son la revolución francesa, la revolución mexicana, la revolución rusa, la revolución cubana, la misma revolución sandinista de los años 80 del siglo pasado. Poco se habla de revoluciones pacíficas como la llamada “revolución gloriosa” de Inglaterra en el siglo XVII, o la misma revolución costarricense de 1948, donde la violencia, la partera de la historia al decir de Marx, no tuvo un papel fundamental en las transformaciones profundas de los regímenes políticos y sociales de estos países, sino que ellas fueron llevadas a cabo de forma pacífica. Cabe indicar que los grandes teóricos de la revolución, como Marx y Engels, ya habían considerado la posibilidad de las revoluciones pacíficas, al aparecer en su época la democracia electoral, que introducía el potencial poder emancipador del voto ciudadano.<sup>3</sup>

Las demandas planteadas por la población manifestante en Nicaragua incluyen muy tempranamente la de elecciones adelantadas como la manera pacífica de recambio del poder. De esta manera, la revolución de abril en un país tildado tradicionalmente de violento ha pretendido hacer sus transformaciones por la vía pacífica de las elecciones. La demanda de elecciones anticipadas tiene antecedentes recientes en Nicaragua. Para poner fin de manera pacífica a la guerra de los años 80, el mismo gobierno de Daniel Ortega accedió, bajo los acuerdos de Esquipulas II de 1987, a negociar con la contrarrevolución armada en los Acuerdos de Sapoá de marzo de 1988 el anticipo al mes de febrero de 1990 de las elecciones que, según la ley, deberían haberse efectuado en noviembre de 1990. En el actual contexto, el mismo gobierno que adelantó las elecciones de entonces, hoy considera que un adelanto del proceso electoral sería el equivalente de un golpe de Estado.

Las protestas juveniles no han pretendido la toma del poder. Surgieron como protestas sociales autoconvocadas para exigir atención al medio ambiente, justicia y reconsideración de las afectaciones a los jubilados por las reformas de seguridad social, además de que se tomase en cuenta a la población en las decisiones del gobierno. Tales demandas se

---

3 Pasada la experiencia de la revolución de 1848, Marx y Engels prevén la posibilidad de revoluciones pacíficas. Un estudioso del tema afirma: “En efecto, en su «Discurso en Ámsterdam», después de la clausura de un Congreso de la Internacional en 1872, Marx dice: «conocemos la parte que corresponde a las instituciones, a las costumbres y a las tradiciones de las diferentes regiones; y no negamos que existen países como Estados Unidos, Inglaterra, y si conociera mejor vuestras instituciones agregaría Holanda, donde los trabajadores pueden llegar a su meta por medios pacíficos. Pero ese no es el caso de todos los países»”. Y sobre Engels: “En 1895, la clase obrera se había encontrado con un nuevo instrumento que era el sufragio universal. Engels recuerda que ya desde el Manifiesto Comunista se había proclamado la lucha por la democracia «como una de las primeras y más importantes tareas del proletariado militante». Pero Engels advierte que se requiere transformar el sufragio «de medio de engaño, que ha sido hasta ahora, en instrumento de emancipación»” Olivé, A. (2013). El papel de la violencia: Marx, Engels y el marxismo. Disponible en <https://kmarx.wordpress.com/2013/12/16/el-papel-de-la-violencia-marx-engels-y-el-marxismo/>

considerarían normales en cualquier democracia. Pero las respuestas del gobierno agudizaron la crisis: el régimen no emitió una sola autocritica al violento abordaje de las fuerzas gubernamentales ante las manifestaciones, no reconoció responsabilidad alguna en los asesinatos de los manifestantes, antes bien, la represión se acentuó con las armas de guerra que usaron las fuerzas policiales, parapoliciales y francotiradores, al tiempo que se descalificaba y criminalizaba a los manifestantes. La contrarrespuesta de los protestantes fue pedir el recambio del gobierno por la vía constitucional: renuncia de los gobernantes o elecciones anticipadas.

Además de ser una revolución pacífica, esta es una revolución juvenil. Si bien dio comienzo como manifestaciones estudiantiles universitarias, muy pronto convocó a toda la juventud y a gran parte de la población. La reacción ciudadana ante los agravios a diversos sectores de la población, acumulados durante once años de gobierno, traspasaron la frontera del miedo y salieron a la calle con la juventud a la cabeza.<sup>4</sup> Los autoconvocados se manifestaron en calles, plazas y rotondas en cantidades nunca antes vistas en Nicaragua, ni por su frecuencia (diaria durante casi tres meses), ni por su masividad, ni por su propagación hacia todas las cabeceras departamentales y muchos municipios, ni por su inclusión de la población rural y urbana. Los capítulos aquí compilados dan cuenta de esta otra característica que hace de esta revolución en marcha una lucha generacional. Una lucha generacional que, sin embargo, no divide a las generaciones estrictamente por cohortes de edad, sino sobre todo por cultura política compartida y por el liderazgo juvenil. Las demandas de derechos, igualdad, democracia, justicia social y ética en la política y en las relaciones sociales establecen claramente la emergencia de otra cultura política abanderada por los jóvenes, pero seguida por otros sectores de la sociedad que comparten las mismas peticiones, sin que necesariamente sean jóvenes en términos de edad. Y ese es el secreto de su fortaleza: desde el comienzo las demandas estudiantiles no se centraron en peticiones gremiales, sino que trascendieron su propio espacio para incluir a toda la sociedad.

Como en toda revolución juvenil en el mundo de hoy, el papel de las redes sociales y de los medios de comunicaciones ha sido central. Por parte de los manifestantes, sus armas más poderosas han sido las redes sociales y el teléfono celular. Sin duda esta ha sido en la historia del país la primera lucha de resistencia autoconvocada por redes sociales y la más documentada en formatos audiovisuales. Ante el desconcierto inicial por la resistencia ante la represión y las denuncias emitidas por los medios independientes, el gobierno optó por sacar del aire los canales de televisión independientes y las radiodifusoras que

---

4 Una muestra del descontento acumulado lo ofrece el Informe de la Región, que señala que entre 2008 y 2013 se presentaron 14,122 acciones colectivas de protesta pública en Centroamérica, habiéndose dado la mayor parte de ellas en Nicaragua (3,410), seguida de Panamá (2,776). Las instancias a quienes se dirigieron las protestas en el caso de Nicaragua fueron al gobierno y al Consejo Supremo Electoral. Quinto Informe Estado de la Región en Desarrollo Sostenible 2016; p.291. Disponible en: [www.estadonacion.or.cr](http://www.estadonacion.or.cr). En el caso de Nicaragua las protestas fueron reprimidas por grupos de choque combinados con la Policía Nacional.

trasmítan lo que iba ocurriendo en esos días, buena parte de lo cual era lo que reportaban los propios ciudadanos con sus celulares, fotografías y videos. Pero sacar del aire esos medios no le reportó al régimen ningún provecho y más bien tuvo un alto costo político. Los canales siguieron transmitiendo por internet y el gobierno no pudo impedirlo. Entonces empezaron a decomisar celulares a todos los ciudadanos considerados opositores, y a emitir noticias falsas y videos trucados por seguidores del gobierno. De esta manera se abrió un nuevo espacio de lucha: el frente de las redes sociales y el ciberespacio, que se mantiene hasta la actualidad. Ante tal situación el gobierno suspendió el suministro gratuito de conexión *wifi* en parques y lugares públicos, adonde acudían los jóvenes y la población en general para conectarse a internet.

Aparte de su papel crucial para convocar y mantener la comunicación y la coordinación de la lucha cívica en las calles, los teléfonos celulares han permitido a la ciudadanía aportar una cantidad abrumadora de videos que registran los hechos ocurridos y que se convierten en evidencias contundentes para los informes de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos sobre los hechos represivos y el vandalismo gubernamental. La difusión de esos videos tiene mucho que ver con la indignación ciudadana interna y con el aislamiento actual del régimen dictatorial en la comunidad internacional.

Todo lo anterior está estrechamente vinculado a la revolución cultural que ha trastocado el mundo de los símbolos dominantes. El tema de la subjetividad y la cultura en la rebelión de abril ha sido un tópico que las multitudes juveniles han puesto en agenda, recordando el lema de que no existe revolución social sin revolución cultural. Más de un centenar de canciones, obras de teatro, poemas, novelas, esculturas de los nuevos héroes criminalizados por el poder dominante, pinturas, caricaturas, memes son una muestra de una insurrección más profunda: la insurrección de la conciencia y de las representaciones de lo nuevo que pugna por nacer y de lo viejo que tiende a fenecer. La cultura y las representaciones forman parte de otras dimensiones de lo real en la lucha, que se expresa como lo subjetivo en las relaciones sociales objetivas: la crisis muestra diversas motivaciones entre los actores sociales y un papel casi decisivo en la lucha de factores tales como la religión, los sentimientos, el arte, la música, el teatro, los símbolos, los colores, las banderas, himnos, escudos, monumentos, que fungen todos ellos como elementos movilizantes de resistencia y de afirmación e identidad; pero también, y como contrapartida, han sido factores presentes en los discursos, el fanatismo, la intolerancia y la violencia represiva del régimen y de sus seguidores.

La resignificación de los viejos lemas (del “Patria libre o morir” al “Patria libre y vivir”) y la reapropiación de las canciones y consignas de la revolución popular sandinista de los años 80 (“Que se rinda tu madre”, “El pueblo unido jamás será vencido”); la apropiación de los héroes nacionales para todos, como Sandino; la relevancia de los símbolos nacionales por encima de los símbolos partidistas: la bandera nacional, el himno nacional, el escudo de la patria; todo esto no es nada más ni nada menos que la expresión subjetiva de esta dimensión cultural de una lucha que se declara incluyente, por cuanto



convoca a todos, reconoce y se reapropia de una cultura sandinista que va más allá del partido FSLN, y al mismo tiempo rechaza la privatización de bienes simbólicos y reales para provecho de ese partido, puesto que se trata de bienes comunes, propios de una patria que es de todos con un gobierno que debe ser para todos. En los momentos en que la represión obliga al silencio, la lucha se mantiene intacta en el campo de la conciencia, en la subjetividad, en la cultura, esperando el momento de volver a apropiarse de las calles. De estos sucesos y procesos hablan los autores de este libro.

En el capítulo primero, titulado “Revueltas de abril: narrativas, redes y espacios en disputa”, Irene Agudelo y Jessica Martínez aportan resultados que parecen provenir de una observación participante en los momentos que, marcados por el fuego de la Reserva Indio-Maíz y la indignación juvenil frente a la injusta medida gubernamental de reducir aún más las míseras pensiones de sus abuelos, desencadenaron la revuelta, como la denominan las autoras. Unas revueltas que luego se descubriría que eran el resultado de una crisis estructural que combinaba elementos coyunturales o circunstanciales con fallas estructurales o de larga data en la construcción social nicaragüense. Estas fallas, lejos de haberse atendido, se desoyeron, se agudizaron, se sumaron a viejos agravios y terminaron incendiando los corazones juveniles, cuyas llamas muy pronto se propagaron a todas las juventudes en su conjunto y a una amplia representación multclasista, multiterritorial, multiétnica y de género, jamás vista en la historia del país.

En vano la dictadura y sus aparatos de represión y tortura intentaron primero verificar y luego imponer en sus interrogatorios policiales sus hipótesis de conspiración externa. Se ensañaron con los pobres, a quienes, por su necesidad y vulnerabilidad, culpaban de haberse dejado manipular y de sumarse a las protestas financiadas por algún oscuro poder que pretendía derrocar a los gobernantes. Ni uno solo de los apresados reveló lo que la dictadura suponía. Y es que nunca existió una conspiración interna ni externa. Las razones de la insurrección eran públicas y siempre fueron objeto de discusión y debate en las redes sociales que llevaban muchos años denunciando los usos y abusos del sistema y del modelo económico, social y cultural de un régimen que se empecinaba en construir una nueva dictadura en el país.

Y es que la indolencia del gobierno no sólo se evidenció en el caso del incendio de la Reserva Indio-Maíz, sino también en la desestimación que hizo de los clamores del pueblo. En sus más de dos períodos de gobierno, el presidente y la vicepresidenta jamás visitaron el interior del país; peor aún, jamás visitaron un barrio de Managua. Nunca concedieron una entrevista ni una comparecencia abierta a periodistas nacionales o extranjeros. El aparato de intermediación —el partido y las llamadas “organizaciones de masas y sindicales” afines— sólo decían lo que el gobierno quería oír, y dejaron de cumplir su función de correa transmisora de abajo hacia arriba y viceversa. La torre de marfil de la pareja gobernante, que ha controlado todos los poderes institucionales y una buena parte de los poderes fácticos, era demasiado alta e inaccesible para perturbarla con las quejas y descontentos de la población. Además de que resultaba peligroso, porque revelaría que, al contrario de lo que afirmaba el discurso oficial, no todo estaba bien. Por ello, ese aparato de

intermediación entre el abajo y el arriba y viceversa se convirtió en un aparato unidireccional de mediación populista y de control del arriba hacia el abajo. El fraude originado en el conteo amañado de los votos en todas las elecciones previas pasó su factura, y dejó al descubierto lo que los gobernantes ya sabían: que no era cierto que el presidente y la vicepresidenta tenían todo el apoyo del pueblo. Por eso tuvieron que hacer fraudes electorales. Pero había algo más. Cuando el control total del poder silencia los mecanismos de alerta del sistema institucional de contrapoderes y del sistema de intermediación acerca de los excesos y abusos del gobernante, sólo queda la soledad del poder, y así la fuente del poder pasa del pueblo a las armas. Porque los fraudes electorales que le dan carta blanca al gobernante en realidad rompen el vínculo que en una democracia relaciona al poder con su fuente originaria, que es el pueblo. La contrapartida en el ciudadano es que deja de apoyar al gobernante, deja de creer en su palabra, y ve acrecentada la desconfianza y la ilegitimidad del poder. De ahí en adelante desaparece la persuasión mediante la palabra y sólo queda la fuerza bruta. Los efectos de la confiscación del voto ciudadano, implícitos en todo fraude electoral, terminan por expresarse fuera de las instituciones formales. Si la voluntad del pueblo no se puede expresar en los votos ni en las instituciones, termina expresándose en la calle. Y eso fue lo que ocurrió en Nicaragua. Las revueltas diversas y las múltiples voces de los agraviados que se expresaron en la calle en las masivas manifestaciones de abril es lo que Irene Agudelo y Jessica Martínez nos cuentan en su capítulo.

En el capítulo segundo “Abril 2018, Nicaragua: el desafío de la democracia frente al autoritarismo”, los autores Mario Sánchez y Hloreley Osorio constatan que en menos de cuarenta años la sociedad nicaragüense ha tenido que afrontar dos crueles y violentas dictaduras de carácter dinástico: la de Anastasio Somoza García, primero, y actualmente la de Daniel Ortega, uno de los nueve líderes revolucionarios que encabezaron el derrocamiento armado de la dictadura somocista en 1979. Ante este hecho, los autores se preguntan cómo se explica el proceso de regresión hacia el autoritarismo y sus niveles de violencia política bajo el régimen Ortega-Murillo. Para ello, los autores analizan detenidamente la estrategia del líder del FSLN, Daniel Ortega, y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, para acceder al poder por la vía electoral en el año 2007. Enseguida los autores explican la estrategia de la pareja presidencial para crear condiciones que garantizaran su continuidad indefinida; eso pareció funcionarles, hasta que se toparon con las movilizaciones de protesta pacífica más grandes de la historia del país, que condujeron a la coyuntura crítica iniciada en abril de 2018.

En opinión de los autores, la pretensión gubernamental de resolver esta crisis mediante la represión más violenta y letal que recuerde la historia de Nicaragua en tiempos de paz, así como sus intentos inútiles de justificar discursivamente los hechos pero sin contar con una justificación real, ha quedado en evidencia por los informes de organismos internacionales de derechos humanos que han calificado los hechos como crímenes de lesa humanidad. Los autores recurren a una amplia bibliografía sobre este período para fundamentar su análisis, constatan los hechos objetivos, analizan los discursos y entrevistas de los actores sociales, y aportan los elementos

socioculturales que dejan al descubierto la estrategia aplicada por el partido del gobierno para acceder al poder después de la derrota electoral de 1990, y para mantenerse al mando por tiempo indefinido. Esos mismos elementos identificados en el análisis les permiten explicar el comportamiento político de sus líderes, el arribo de la crisis y el conflicto, así como los desafíos que plantea a las fuerzas políticas la solución de una crisis que se prolonga hasta el presente.

El gobierno imaginó que la fuerza de las armas bastaría para contener a un “grupo minúsculo” de descontentos. Por ello declaró que las protestas ciudadanas eran una guerra contra el gobierno, y procedió en consecuencia. Pero toda guerra necesita una justificación ante propios y extraños. Por lo que, además de usar armamento de guerra contra una población desarmada que creía en la democracia y en el derecho a la petición y a la protesta cívica, el gobierno afinó un discurso para legitimar su guerra, identificar a sus seguidores, y deshumanizar y descalificar a sus oponentes. Ese discurso sirvió para que los seguidores de la pareja presidencial ubicaran a los “enemigos”, les marcaran sus viviendas con la palabra “plomo” e hicieran de ellos el objetivo del acoso permanente de la Policía, de los parapolicías y del “pueblo”. El análisis del discurso gubernamental que aporta Juan Pablo Gómez en el capítulo tercero “Política, violencia y humanidad” devela el uso de la palabra como arma para descalificar al “enemigo”, aglutinar a sus seguidores y desplegar su narrativa de lo acontecido ante la comunidad internacional. El objeto de este capítulo es analizar el discurso estatal como práctica social que encubre mensajes implícitos y no directamente visibles para así mantener las relaciones sociales de dominación y control. Nos dice el autor:

El discurso estatal constituye un campo estratégico de estudio de la crisis política. Desde sus primeros días, las más altas autoridades políticas del país desconocieron por completo su responsabilidad en el ciclo de represión iniciado en la tarde del 18 de abril de 2018. Utilizaron sus intervenciones públicas para dejar esto en claro y, además, para señalar a las ciudadanías disidentes como las responsables de la ruptura de la paz, de los muertos, de los atropellos a los derechos humanos y de la crisis económica.

La principal preocupación del autor es la violencia como casi única respuesta del gobierno a las protestas pacíficas ciudadanas. En su análisis comprueba que existe un vínculo indudable entre el discurso estatal, la violencia y la violación de los derechos humanos ocurrida en estos meses de protesta cívica, vínculo que fue verificado por los organismos internacionales de derechos humanos. Devela en su análisis la lógica invisible del discurso oficial en cuanto a los relatos sobre la lucha, tanto los relatos del pasado como los del presente: la lucha en el campo de la cultura, de las ideas y de las representaciones de lo que ocurrió y ocurre, la lucha por lo que más tarde será memoria. En resumen, el aporte de este capítulo es develar la lógica del discurso oficial en el contexto social, y reconocer el papel movilizador de la palabra y el carácter social del lenguaje, que le da sentido al discurso, en este caso, al discurso político.

En el capítulo cuarto, Jessica Pérez constata que la crisis sociopolítica actual incluye una dimensión económica que no debería subestimarse. Señala que si bien varios economistas coinciden en que las raíces del problema económico actual no son de orden coyuntural, ellos han omitido en su análisis económico la influencia de la economía en la creación de crisis políticas y sociales como la actual. De ahí que se planteó como objetivo “discutir el papel que ha desempeñado la economía en la crisis sociopolítica y de derechos humanos en Nicaragua a partir de lo sucedido en abril de 2018”. Por eso considera que es necesario retomar la discusión de los últimos años “sobre el agotamiento del modelo de desarrollo económico de Nicaragua, mismo que se considera extractivista y muy dependiente de factores externos: los términos de intercambio, la cooperación internacional, la inversión extranjera y las remesas familiares”.

La autora afirma que es necesario asumir una visión de largo plazo sobre la crisis del país y revisar el modelo económico, pues su agotamiento y sus problemas estructurales abonan a la creación de crisis como la que actualmente sacude al país. Por otro lado, la visión de corto plazo según la cual las raíces del problema económico actual no son de orden económico, sino político, si bien es parcialmente cierta, no permite conjurar a futuro las posibles crisis cíclicas del país, en las que la economía es siempre un componente importante. La autora aclara que “no es nuestro propósito plantear una respuesta económica a un problema estructural que tiene su origen en una multiplicidad de factores, entre ellos, la economía; pero sí esperamos generar espacios de discusión sobre el tema”.

Un rápido análisis del abecé de la economía nicaragüense a partir de lo que produce el país, cómo lo produce y para qué lo produce, nos muestra, en opinión de la autora, que, dados sus precarios resultados, se verifica la necesidad de revisar el modelo económico actual del país. Entre otros efectos, señala que el modelo económico no emplea toda la fuerza de trabajo, no demanda que esa fuerza de trabajo sea calificada, expulsa el capital humano por la vía de la emigración, genera pobreza, ensancha la desigualdad, ocasiona altos costos sociales y naturales y para desarrollarse depende en gran medida de factores externos, como son los términos de intercambio, las condiciones climáticas, las remesas, la inversión externa y la cooperación internacional. Todos estos factores económicos dan lugar a que sucedan crisis periódicas en el país, que no siempre cobran relevancia en los análisis porque en esas crisis se expresan también otros componentes que tienden a hacerse más visibles, como es el factor político.

Incluimos en este volumen un texto de Sergio Ramírez Mercado, quien en calidad de autor invitado acompaña este esfuerzo del IICS. Con una visión esperanzadora patente ya en el título “Algo nuevo va a nacer”, Ramírez nos describe las condiciones que en su opinión hicieron posible el surgimiento de la figura de Daniel Ortega desde una Dirección Nacional colegiada de nueve comandantes con igual rango hasta la “mixture del viejo caudillo latinoamericano que piensa en el poder omnímodo para siempre, y del marxista tradicional que también piensa en el poder para siempre”. Esa figura se enfrenta hoy al desafío de las gigantescas manifestaciones de repudio

iniciadas en abril por una sociedad que ya no acepta más que la democracia. Nos dice el autor: “Le queda el control de las estructuras del Estado, la Policía Nacional, los paramilitares y las fuerzas de choque; el núcleo duro de la militancia, y el aparato judicial, que tiene un papel asignado en la represión”. Pero, asegura Ramírez: “No hay compatibilidad posible entre el caudillo que se apropió de una revolución ya muerta, y la sociedad nicaragüense de hoy, que no acepta nada que no sea la democracia plena”. Y concluye: “El Diálogo Nacional es la única manera de buscar un cambio de gobierno y evitar que se desate en Nicaragua una nueva guerra civil.”

La historia marca hitos de inicio y de fin, de continuidad o ruptura, de acontecimientos y procesos. En una cronología de la crisis, Hellen Castillo nos describe paso a paso los acontecimientos más importantes que han jalonado la coyuntura crítica actual desde abril de 2018. Esta cronología sirve de recurso nemotécnico para tener presente la solidez de los hechos frente a quienes intentan desvirtuarlos contando lo que no sucedió como si realmente hubiese sucedido, e invisibilizando lo que realmente sucedió como si nunca hubiese sucedido. Para evitar esa desvirtuación de los hechos están ahí esos hitos, inamovibles y a la vista de todos. Son recordatorios de lo realmente ocurrido para que no vuelva a ocurrir y para que su uso político no desvirtúe la verdad. Nos recuerdan de manera incesante que el silencio que hoy pretenden imponernos no habrá de constituirse en olvido. Y que la memoria es para que las desgracias de hoy no vuelvan a ocurrir en el futuro. Si bien la cronología inicia con algunos incidentes previos a la crisis del 18 de abril de 2018 y termina a finales de julio de 2019, la crisis continúa abierta hasta hoy.

Los trabajos aquí reunidos son los primeros aportes del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Sociales (IICS) de la UCA, y responden a la necesidad planteada por la sociedad nicaragüense de contribuir a repensar el país.

En su conjunto estos estudios del IICS indican que la crisis de abril ha mostrado nuevamente las profundas fallas estructurales que ha venido acarreado la sociedad nicaragüense. Se abre así la oportunidad de hacer un alto para examinar, reflexionar, discutir y consensuar la posibilidad de una nueva sociedad construida sobre nuevas bases. En la crisis se ha mostrado lo viejo y lo nuevo; lo que debe morir—como es la vieja cultura autoritaria, intolerante, bárbara y enemiga de la vida natural y social— y lo que debe vivir: la solidaridad, la cooperación, la cultura de deberes y derechos, la democracia, la justicia social, el respeto a la vida, a la naturaleza y a la ley, como condición para una convivencia social respetuosa, armoniosa y pacífica.

Como nota personal, hago patente mi agradecimiento por haber tenido el privilegio de acompañar de cerca este trabajo de los autores en su etapa de arranque como investigadores e investigadoras en un equipo interdisciplinario. Deseo animar a ese equipo del IICS a continuar sus investigaciones para aportar elementos que permitan establecer la verdad, y desde ella contribuir al debate que oriente el surgimiento y fortalecimiento de esa nueva sociedad que todos deseamos: incluyente, justa y democrática.

# I. Revueltas de abril: narrativas, redes y espacios en disputa\*

*Irene Agudelo Builes<sup>1</sup>*  
*Jessica Martínez Cruz<sup>2</sup>*



Fuente: @e\_Incandescente, en Twitter

---

\* Este texto fue elaborado entre mayo y octubre de 2018. Una versión de este texto fue publicada en la revista *Itsmo* en 2020.

1 Profesora-investigadora del Instituto Interdisciplinario en Ciencias Sociales de la Universidad Centroamericana (IICS-UCA). Actualmente, estudiante del Programa de Doctorado de Estudios de la Sociedad y la Cultura de la Universidad de Costa Rica (UCR)."

2 Profesora-investigadora del Instituto Interdisciplinario en Ciencias Sociales de la Universidad Centroamericana (IICS-UCA). Actualmente, estudiante del Programa de Doctorado en Filosofía de la Universidad Estatal de Michigan (MSU).



*Cuando algo sucede repentinamente parece como si hubiera surgido de la nada. Pero esa nada, por lo general, es un montón de cosas que están lejos de lo que la mayoría de la gente estaba mirando, es una o muchas personas trabajando fuera de la atención pública durante meses, años o décadas.*

Rebecca Solnit

El 29 de noviembre de 2016 inició en el mercado de Nueva Guinea un enfrentamiento entre jóvenes, adolescentes y fuerzas de la Policía Nacional, que incluía 200 antimotines. El comisionado general Ramón Avellán dirigía la operación. Según la fuente, cerca de 70 chavalas y chavalos resistieron la represión de la Policía contra el campesinado organizado para marchar a Managua, en protesta contra el proyecto de canal interoceánico. La operación policial dejó decenas de campesinos heridos y detenidos, así como comunidades rurales cercadas.<sup>3</sup> La testigo relató que la respuesta de los jóvenes en defensa del campesinado fue espontánea: “No fue nada organizado, eso nació de ellos, al ver tanto atropello a los campesinos. Es que la Policía y los antimotines quedaron en ridículo, porque no pudieron frenar a los chavalos” (...) “Nunca antes se había visto algo similar, es una forma de despertar de los muchachos”.<sup>4</sup>

---

3 La represión, asedio y sitio de comunidades rurales de Nueva Guinea durante el 29 y 30 de noviembre de 2016 dejó dos campesinos heridos de bala, numerosos lesionados, comunidades indignadas y aterrorizadas, la destrucción de infraestructura por parte del estado y una denuncia internacional ante la OEA, presentada en persona por Francisca Ramírez, líder campesina, a Luis Almagro, secretario general de la organización, el 2 de diciembre de 2016. La respuesta de Almagro dejó un mal sabor en las víctimas de la represión. En esos días fue constante el cateo y la requisa a los buses de transporte colectivo en el norte y suroriente del país, a fin de detener el paso de campesinos y campesinas que esperaban sumarse a la caravana campesina que se dirigía a Managua. Estos son apenas dos ejemplos de los acontecimientos de terror y resistencia que vivió el campesinado de Nicaragua en el pasado reciente. Los actos represivos dan cuenta de un aparato estatal que usa su poder coercitivo contra las juventudes y la población campesina. Al incluir aquí este relato no pretendemos restar novedad a las protestas de abril, al contrario, el propósito es historizar brevemente su conexión con otros acontecimientos del pasado, desde los que también se alimenta la creatividad de esas protestas. Es importante además mostrar que el calificativo “vandálicos” ya se había usado para nombrar a poblaciones que se rebelaban contra los mandatos del poder. Fue el comisionado general Francisco Díaz quien lo utilizó en un comunicado de la Policía Nacional en noviembre de 2016 (ver en línea: <https://confidencial.com.ni/balas-bombas-represion-policial-campesinos/>).

4 Redacción de las autoras a partir del artículo de Dánae Vilchez del 1 de diciembre de 2016, “Balas, bombas y represión policial contra campesinos”. Confidencial. Recuperado de: <https://confidencial.com.ni/balas-bombas-represion-policial-campesinos/>

## 1. Los fuegos de abril

El incendio en la Reserva Indio-Maíz empezó el martes 3 de abril de 2018. Una semana después, el día 9, cuando, ante el asombro del país entero, el fuego había acabado con más de 5,000 hectáreas del bosque; 40 bomberos costarricenses se desplazaron a la frontera con Nicaragua para colaborar en las tareas de gestión del desastre. El Ministerio de Gobernación nicaragüense declinó el ofrecimiento de ayuda alegando que para apagarlo había aumentado el número de efectivos del Ejército. Otro fuego ardió: decenas de estudiantes autoconvocados a través de redes sociales se tomaron el 12 de abril la Plaza de las Victorias, en airada respuesta por el negligente manejo de la crisis que hizo el gobierno. En pocos minutos la Policía Nacional, en coordinación con miembros del brazo juvenil de la organización Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), la Juventud Sandinista 19 de Julio (JS19J), llegaron y reprimieron la movilización. El lugar en cuestión —el cruce de la avenida Cardenal Miguel Obando y la Carretera a Masaya en el nuevo centro de Managua— es el espacio donde el “oficialismo” hace sus concentraciones desde el 2008.<sup>5</sup> Todos los intentos de expresión por parte de otras manifestaciones políticas en ese lugar habían sido, hasta ese día, sistemáticamente reprimidos y dispersados. “Alto el fuego”, “Nos estamos quemando vivos”, “Si la patria se quema, uno verde la sueña” eran algunas de las frases de la protesta por Indio-Maíz. Apropiarse del espacio y tomar la palabra en defensa de la tierra constituyen, sin duda, el posicionamiento político de juventudes que, curiosamente, fueron estereotipadas por largo tiempo —en diversas investigaciones que más adelante discutiremos brevemente— como apáticas y desencantadas de la política.

El fuego del bosque finalmente fue sofocado el 14 de abril, por obra de comunidades locales, bomberos nicaragüenses, soldados del Ejército Nacional y las lluvias. El otro fuego, el de las protestas, avivó pocos días después, el 16 de abril, cuando el gobierno anunció la reducción del 5% de la pensión de los jubilados, el aumento en las cargas tributarias de los trabajadores y empleadores al Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS), a fin de “garantizar la sostenibilidad financiera de la institución”, cuyo déficit en ese momento ascendía a 75 millones de dólares. La medida, publicada en *La Gaceta Diario Oficial* el 18 de abril, generó una reacción inmediata: esa misma mañana en León y Matagalpa asociaciones de personas jubiladas, jóvenes y mujeres de diversos sectores salieron a la calle a protestar. La pancarta de un jubilado expresaba demanda y agravio: “INSS, entreguen medicinas que ya pagamos”.

En la tarde del 18 de abril, en Managua, un plantón, en el que destacó la participación de grupos de la diversidad sexual, ocupaba una de las principales

---

5 En noviembre de 2008 distintos grupos de oposición se dieron cita en ese cruce a fin de protestar por el resultado de las elecciones municipales. A partir de ese momento la dinámica represiva intensificó su accionar en contra de los manifestantes, y el cruce se convirtió en la nueva plaza del oficialismo. La toma y ocupación de distintos espacios públicos, antes controlados por el partido de gobierno, fueron parte de la contienda.

zonas comerciales de la capital, el Camino de Oriente en la Carretera a Masaya. En la noche, un grupo de estudiantes se manifestó en contra de las reformas en el portón principal de la Universidad Centroamericana (UCA) de Managua. Todas las expresiones de descontento y rechazo contra las reformas al seguro social realizadas en espacios públicos fueron violentamente reprimidas. En la noche del 19 de abril, tras un día entero de manifestaciones de estudiantes, de tomas de universidades y de plantones, fuerzas de choque del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional y de efectivos de la Policía Nacional reprimieron y provocaron una estampida de participantes en un plantón de estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y de la UCA. En su huida, los estudiantes corrieron en dirección al barrio Edgar Munguía. Ante las cámaras de televisión un joven universitario respondió por qué protestaba: “Yo estoy aquí porque no le van a quitar a mi abuela 450 pesos más de lo que ya le han robado. Estoy aquí para decirle a Daniel [Ortega] que él no manda en Nicaragua, que el INSS no es suyo” (semáforos del monumento a Rigoberto López Pérez, cercanías de la UCA). “Agravio moral” llama Barrington Moore (1996) al sentimiento de injusticia que enuncia este joven, y que consiste, según explica el autor, en experimentar el rompimiento o transgresión de una regla o contrato social que se consideraba sagrada. A este agravio se suman otros por contratos rotos con anterioridad y durante la protesta: el derecho a la vida, a protestar, a la libertad de expresión.

Dimensionar el alcance de la indignación que sintieron muchos jóvenes por causa de las reformas y la represión es tarea compleja. La misma cámara y equipo que filmó y entrevistó al joven de los semáforos del Rigoberto López Pérez registró en Managua cómo la población quemó y derribó, en una mezcla de furia y alegría, el primer cartel gigante con una fotografía de la pareja presidencial rotulado con el lema del régimen: “Nicaragua Cristiana, Socialista y Solidaria”. Ese sentimiento de indignación moral persiste en el reclamo que la población hace a la Policía por no respetar la presunción de inocencia de las poblaciones, sus derechos fundamentales, ni la vida misma. La denuncia de Anielka Hernández Trejos, una joven detenida por los antimotines en el cruce de Ticuantepe el 20 de abril de 2018, mientras caminaba hacia el gimnasio, es otra manifestación de las afrentas vividas: “No se me hace justo que ellos anden oprimiendo al pueblo cuando somos el pueblo los que les damos de comer a ellos. (...) La Policía está para defendernos, no para que nos golpee, nos asalte y viole nuestros derechos como ciudadanos”.<sup>6</sup>

Anielka se resistió a la detención por considerarla injusta. Ella simplemente caminaba, pasaba por ahí. Intentó, sin saberse filmada por la cámara de un canal de televisión, detener la embestida de un uniformado mucho más corpulento que ella; después quiso correr, pero no logró escapar. En una grabación posterior denunció el abuso policial. Lo que pasó con ella frente a la cámara —y después, durante su detención, cuando la llevaron a la estación y la obligaron a desnudarse y hacer sentadillas frente a policías

---

6 <https://www.facebook.com/Canal100Noticias/videos/obligan-a-joven-a-desnudarse-en-distrito-v/1849815648659633/>

varones— es parte del microrrelato de esos días: los cuerpos de las personas jóvenes en espacios en disputa convertidos en objeto de abuso y exterminio por la autoridad estatal, e igualmente convertidos en la resistencia encarnada.

Ilustración 1: Semilla de libertad



Fuente: Ilustrador anónimo.

Ese mismo día, 20 de abril, durante el sitio policial a la UNI y a la Catedral Metropolitana de Managua, ardió el primer árbol de hierro. Después de la quema sobrevino su derrumbe. Inició así otro periodo de fuego. Durante los siguientes meses de protesta la población quemó y derrumbó 40 “arbolatas” bajo el mismo procedimiento.<sup>7</sup> Los “árboles de la vida”, “arbolatas” o “chayopalos” como se les conoce, también fueron objeto de resignificaciones. Entre las expresiones artísticas de protesta visual destaca la imagen diseñada por un joven ilustrador: el dibujo de una paloma azul que alza el vuelo al romper, cual si saliera de una suerte de huevo, una de las bujías de los “árboles de la vida”. En su propuesta, este autor resignifica el que ha sido uno de los símbolos de poder del régimen: las bujías de distintos colores de los árboles de la vida, souvenir altamente valorado al inicio de las protestas. Durante las marchas este diseño fue “esprayado” con esténcil en calles, postes y muros.

En Bluefields, también el 20 de abril, al final de la tarde, afloró en la memoria una vieja consigna: “Nos han quitado tanto que nos quitaron el

---

7 <https://www.laprensa.com.ni/2018/09/04/nacionales/2467012-acusan-a-joven-de-terrorista-por-participar-en-el-derribo-de-figuras-diabolicas-de-arbolatas-en-nicaragua>

Las “arbolatas”, también conocidas entre la población como “chayopalos”, son estructuras arboriformes de hierro de varios metros de altura. Se adjudica su diseño y promoción a la vicepresidenta Rosario Murillo. Las “arbolatas” son parte de la decoración instalada en los bulevares de la capital y en algunas cabeceras departamentales del país. Se las asocia con los árboles de la vida elaborados por artesanos en la India y en México.

miedo”. Lo dicho: no bastó el anuncio presidencial de derogación del decreto del 22 de abril sobre el INSS. El fuego continuó y a la lista de agravios agregaron el hecho de que en sus comparecencias en cadena nacional de radio y televisión el presidente Ortega no reconoció la responsabilidad de sus fuerzas en el uso de la violencia que dejó más de dos docenas de víctimas mortales, ni ofreció palabras de consuelo para las familias dolientes. Policías antidisturbios intentaron tomarse esa noche la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), la primera de las universidades atrincheradas. Los estudiantes resistieron con fuego de morteros a los disparos de fusiles AK y Dragunov. Una investigación de la revista *Confidencial* demostró que el patrón de disparos contra manifestantes y atrincherados correspondía a heridas letales en cabeza, cuello y tórax.<sup>8</sup> El 23 de abril, decenas de miles de personas marcharon pacíficamente con banderas azul y blanco, a lo largo de seis kilómetros, en solidaridad con los estudiantes de la UPOLI. Todos los sectores participaron, incluso el empresarial. Hasta el 24 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contabilizó por lo menos 25 personas asesinadas en el marco de las protestas. Destaca la muerte del periodista Miguel Ángel Gahona en Bluefields mientras cubría el final de una manifestación.<sup>9</sup> A estas cifras se suman decenas de personas detenidas y heridas, y el cierre de medios de comunicación independientes.

Incendio, reformas y represión fueron detonantes de un proceso de insurgencias al que llamaremos revueltas.<sup>10</sup> El Diccionario de la Real

---

8 [https://www.prensa.com/mundo/muertos-ataque-policia-universidad-Managua\\_0\\_5013998688.html](https://www.prensa.com/mundo/muertos-ataque-policia-universidad-Managua_0_5013998688.html)

<https://confidencial.com.ni/42701-2disparaban-con-precision-a-matar/>

9 En un juicio denunciado por sus irregularidades desde el principio, el 29 de agosto de 2018 el juez Ernesto Rodríguez declaró culpables del asesinato del periodista Ángel Gahona a dos jóvenes que participaban en las protestas de ese día: Brandon Lovo y Glen Slate, de la comunidad afrocreole de Bluefields. (<https://confidencial.com.ni/sentencia-a-brandon-y-glen-tuvo-que-ser-de-no-culpabilidad/>). La periodista Migeliut Sandoval, viuda de Ángel Gahona, junto al resto de la familia del periodista, han cuestionado esta versión y exigen que se acuse a los verdaderos culpables.

<https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/472784-viuda-periodista-asesinado-nicaragua-pide-justicia/>

<https://www.laprensa.com.ni/2018/08/28/nacionales/2464688-migeliut-sandoval-viuda-de-periodista-angel-gahona-fue-un-antimotin-bajito-el-asesino>

Tanto los abogados defensores de Brandon Lovo y Glen Slate, como el de Migeliut Sandoval han denunciado amenazas por realizar su trabajo, y dos de ellos están ya en el exilio.

<http://www.oas.org/es/cidh/actividades/visitas/2018Nicaragua/ReportesPrensa/2018-08-29.pdf>

10 En su trabajo *Insurrección no violenta en El Salvador*, Patricia Parkman (2006) da cuenta de las protestas que ocurrieron en 1944 en ese país y que provocaron la caída del general Maximiliano Hernández Martínez. Parkman describe cómo se unieron personas de diferentes estratos sociales con el objetivo de derrocar a un régimen, sin contar para ello con una fuerza militar. Lograron no sólo la salida de Hernández, sino que además inspiraron protestas en la región. Parkman ofrece un análisis de la larga tradición en Latinoamérica de luchas no armadas en forma de paros, huelgas generales y protestas cívicas, entre otras, mismas que no han recibido la atención que merecen en la región.

Academia de la Lengua define “revuelta” como alboroto, alteración; “el punto en que algo empieza a torcer su dirección o a tomar otra; vuelta o mudanza de un estado a otro, o de un parecer a otro”. En este trabajo consideramos la palabra revuelta en al menos tres sentidos. El primero alude a la alteración, alboroto o irrupción generada por el curso de las cosas en el contexto nacional. La frase *Las insurgencias no tienen un plan, ellas son el plan*, título de un ensayo de Benjamín Arditi (2013), define certeramente esta forma de acción política. Fue en la calle, en las marchas, donde una profesora universitaria encontró la frase que describe con más claridad el sentido de las insurgencias de las que habla Arditi: “Así como el Frente nos quitó la bandera rojinegra a los sandinistas, la derecha nos había secuestrado la bandera azul y blanco; ya no más”. El segundo sentido nos permite, como la refracción de la luz, ver distintos ángulos de la revuelta del poder, con jóvenes y pobladores desafiando el poder estatal sin intención de tomarlo, retomando y arrebatando al estado, a los partidos políticos y al *statu quo* símbolos, palabras, consignas y lugares de poder, resignificándolos y ocupándolos. El tercer sentido alude a una aparente repetición o regreso a un lugar conocido como memoria directa de los hechos, o como memoria transmitida por los padres y abuelos y vivida desde el dolor, es decir, como posmemoria, diría Marianne Hirsch, de una nueva vuelta a la revolución de los años 80 y la insurrección contra Somoza, a pensar la historia como repetición o como reapropiación para darle otro sentido.

Ilustración 2. Nadie es eterno



Fuente: Abstracto



Los estudios de memoria plantean que hay un tiempo corto, al que nombran memoria reciente; en Centroamérica este refiere a la violencia de los años 70 y 80, y la transición posterior a las democracias que traerían la paz— y un tiempo largo “de conformación de estructuras sociales e históricas, donde las desigualdades de poder, las discriminaciones y exclusiones ocupan otros lugares” (Jelin, 2014). Es cuando se estudian las memorias de “grupos específicos que aparece la condensación del tiempo largo y el tiempo corto; hay memorias de larga duración y memorias más cortas, y están interrelacionadas” (Da Silva Catela, 2007, en Jelin, 2014). Como han señalado pensadores y pensadoras indígenas e indianistas, si bien el horizonte corto se constituye con eventos de la historia reciente, este se nutre de un horizonte largo vinculado en nuestras tierras a los ciclos de resistencia indígena ante la dominación colonial (Rivera Cusicanqui, 2010). Esos diferentes horizontes emergen en las memorias locales, y es ahí donde se producen dos niveles de comprensión sobre el tiempo: memorias largas y memorias cortas (Da Silva Catela, 2017). Es ineludible señalar las rebeliones que emergen reiteradamente en nuestra geografía nacional, en el tiempo, en lugares de raíces indígenas de larga data: Nueva Segovia, Monimbó, Sutiava, la región central, Matagalpa y la Costa Caribe.

Pensamos con Rebecca Solnit que los cambios preceden a las revueltas. Para que estas ocurran, necesariamente debe haber un cambio que las anteceda. Las revueltas no son la causa, son la consecuencia. La vuelta al poder anunciada por los actos políticos realizados por las juventudes en estos meses no se entiende únicamente a través de la lista de demandas e intereses individuales o colectivos puestos en una mesa de negociación. Estos *performances* políticos desafían la lógica de la representación democrática occidental liberal y producen otra forma, otro tiempo y otros espacios de política al margen de la arena estatal y en contrapeso a la búsqueda de utopías lineales.

Desde el 18 de abril de 2018 el estudiantado mostró diferentes maneras de organizarse y de comunicar sus proclamas: no representan a nadie; no son vanguardia ni liderazgo; son voceros, y su unidad viene de la “solidaridad”.<sup>11</sup> Un momento que lo ejemplifica: la conformación de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ) fundada el 28 de abril de 2018. En el video que circuló en redes la vocería fue plural: la palabra era cedida a todas las personas jóvenes situadas en torno a la mesa, e incluso las que se encontraban atrás leyeron en voz alta los párrafos del comunicado; no quedó persona sin dar lectura pública.<sup>12</sup> Días antes, el grupo de personas atrincheradas de la UPOLI, que después conformarían el Movimiento

---

11 Término empleado por Harley Morales, miembro de AUN (Alianza Universitaria Nicaragüense) al momento de las declaraciones. <https://confidencial.com.ni/las-expresiones-organizativas-tendran-que-unirse-para-conformar-un-vehiculo-electoral/>

12 Esta puesta en escena ha sido repetida como forma de comunicación incluso por la Alianza Cívica, que se formó posteriormente, donde estaba representada gran parte de los sectores de la insurrección de abril.

Universitario 19 de Abril y el Movimiento Estudiantil 19 de Abril, habían hecho algo similar, aunque sólo con dos o tres voceros, no con todos los que ocupaban la mesa.

Uno de los propósitos de este capítulo es entender las actuaciones políticas de las juventudes autoconvocadas nicaragüenses y de sus acompañantes como entramado de intervenciones micropolíticas que hacen, a su vez, democracia directa y radical:

David Graeber, antropólogo anarquista y figura clave en los movimientos *Ocuppy*, sostiene que el acto político, la acción directa, es en sí mismo una demostración de la posibilidad de una democracia directa. La relevancia de estos eventos, en otras palabras, no se puede evaluar simplemente en términos de “resultados” o cambios estructurales que instigan. Se trata de darse cuenta de la posibilidad de actuar de la manera que uno siente que es correcto, independientemente de la ley y la autoridad (Khanna et al., 2013, p.11).

Hablamos de ver la política más allá del marco de la legalidad donde ha sido ubicada en términos de representación, de relaciones ciudadanía y estado y de sistemas de gobierno. Importante referente en este trabajo, y en esta línea de argumentación, es el conjunto de reflexiones y trabajos producidos por el grupo de investigación “Unruly Politics” del Institute of Development Studies (IDS) y ‘SOUR’ (‘A Summer of Unruly Reading’) realizadas en 2011 en la Universidad de Sussex, en donde una de las autoras de este capítulo participó activamente.

Este trabajo también se propone mostrar que los y las jóvenes, en colectividad, no solamente los y las estudiantes, manifestaron su inconformidad de varias maneras: en su modo de hacer la política, y en ese arte de crear; en el cuestionamiento, por ejemplo, al mandato de heroísmo que la sociedad les reclama; en los nuevos artefactos de lucha política que se confeccionan; en los espacios de la política que se producen como alternativa a las arenas institucionales; y en los actos políticos cuyo *performance* se mueve en red<sup>13</sup> en espacios interrelacionados entre sí: el virtual y el analógico. La vivencia y la propuesta política de las revueltas están lejos de ser una irrupción coyuntural en las protestas. Sin embargo, varios estudios afirmaron, en los años 90 y en este siglo, que las juventudes del periodo posrevolucionario eran la antítesis de los jóvenes de los 80 y los 70. Para mostrar esta situación recurrimos a trabajos producidos por el Centro de Investigación de la Comunicación, CINCO, así como a la investigación de un reconocido investigador de las juventudes de los años 90, Melvin Sotelo.

*Jóvenes y cultura política en Nicaragua. La generación de los noventa* (2001) de CINCO, se presentó como “la primera investigación realizada en Nicaragua sobre jóvenes y cultura política” —dato no del todo cierto si

---

13 Castells & Toret en Reguillo (2017).

pensamos, por ejemplo, en las investigaciones que durante años realizó el Centro de Análisis Sociocultural de la Universidad Centroamericana. A manera de ejemplo nombramos dos trabajos de la autoría de Françoise Houtart y Genevieve Lemercinier, el de 1983: “Encuesta sobre los modelos socio-políticos y religiosos de los jóvenes en Managua”, y el de 1989: “Modelos ideológicos, opiniones socio-económicas y políticas de los jóvenes en Nicaragua”. En el estudio de CINCO de 2001, los jóvenes fueron caracterizados como poco o nada interesados en la política. En *Jóvenes y cultura política en Nicaragua. La generación del 2000* (2011), las autoras insisten en que el estudio de 2001 marcó un “hito” en los estudios de juventud. Entre ambos esfuerzos, 2001 y 2011, no hay mayores diferencias en cuanto a resultados; dice por ejemplo sobre la generación del 2011 algo similar a lo dicho sobre la de 2001:

Forman parte del grupo de ciudadanos desencantados, (...) poco comprometidos con los problemas del país, desinteresados de la política, tienen una confianza muy baja en las instituciones y actores de la política, no están dispuestos a sacrificarse por causas políticas sino por causas personales y no están muy dispuestos a participar en actividades políticas ni en organizaciones juveniles (CINCO, 2011, pp. 6-9).

La investigación *La masculinidad hegemónica en los jóvenes de la posrevolución* (Montenegro, 2011) generó una fuerte controversia entre su autora y las juventudes en los medios de comunicación, debido a algunos de sus resultados, como el siguiente:

En contraste con la generación de los padres que escasamente tuvieron tiempo para enunciar proyectos de vida personales y vivieron su juventud de cara a un proyecto general de cambio y bajo el mandato de la “heroicidad belicosa”, las principales motivaciones para el futuro de los jóvenes posrevolución están vinculadas a la movilidad social, una aspiración de certidumbre, autonomía, independencia y bienestar económico (Montenegro, 2016, pp.55-56).

Parte de esta controversia estuvo motivada por los puntos de partida del estudio en lo que atañe a la política y a los lentes metodológicos con los que se estudió a toda una generación. En palabras del joven Ernesto Rogelio Valle Moreno:

¿Qué tanta representatividad tiene la investigación (...)? ¿Es científica por estar sustentada en encuestas? ¿Qué es política? ¿Realmente son apáticos los jóvenes? ¿Son solamente los jóvenes actuales, los machistas de nuestra historia? ¿El conservadurismo, a través de las iglesias y religiones está volviendo a captar a la juventud?<sup>14</sup> ¿Qué participación tiene la juventud

---

14 Ya desde los años 80 Houtart y Lemercinier mostraron la alta religiosidad que impulsaba a la sociedad nicaragüense, y ese impulso incluía a la población joven.

contemporánea en los espacios políticos tradicionales? (Valle Moreno, 2017, p. 55).

Nuestro afán es subrayar la persistencia de los argumentos de estos estudios que refieren el desinterés por la política entre las juventudes estudiadas, así como el ánimo comparativo con respecto a la generación revolucionaria y el giro hacia el espacio familiar. Esto último Melvin Sotelo ya lo había planteado en 1995 en su libro *Jóvenes: otra cultura*, pero en relación a los jóvenes que a inicios de los 90 tenían entre 23 y 28 años. Es decir, los que habrían de ser progenitores de esta generación llamada posrevolución. Un aspecto crítico de estas investigaciones es creer que ese repliegue a lo íntimo consiste en regresar a un espacio vacío de política. Cuestión que contradice lo que señalaron Guattari y Deleuze y los movimientos feministas. Los fuegos de abril nos demostraron que fue en este espacio también, y no únicamente, donde las juventudes actuales reelaboraron y crearon su política.

Es decir, los análisis no detectaron en las juventudes ningún interés en la política. Una de las preguntas recurrentes sobre las recientes revueltas fue ¿por qué nadie lo vio venir? Este vacío en los análisis sociales obedece a esta distancia entre generaciones, y esta distancia a su vez está marcada por el hábito actual de no escuchar y de no hacer comparación crítica sobre el pasado, que de ese modo se concibe como lo ideal por conocido o porque se le considera revolucionario. Los análisis se basaron en premisas convencionales de las ciencias sociales, en una visión de la historia como repetición y no como singularidad, en un entendimiento de la política enfocada únicamente desde la relación entre el estado y la ciudadanía, además de formas de hacer investigación basadas en constatación de premisas y prescripciones.

Este capítulo no se propone hacer una etnografía, ni una explicación comprehensiva de lo sucedido y lo que sucede. Tampoco pretende ser un relato exhaustivo de los hechos. Es un esfuerzo por entender, explorar y aproximarnos a las narrativas presentes en las revueltas, en los acontecimientos, los episodios y los actos, para luego formular nuevas preguntas y cuestionamientos sobre lo que nos enseñan.

### *1.1 Trastocar las miradas*

En su discusión sobre quién es el sujeto joven, las ciencias sociales destacan como uno de sus principales hallazgos las emociones y posturas en las jóvenes generaciones que mencionan su desencanto de la política. Desde 1988, Edelberto Torres Rivas en su estudio *Escépticos, narcisos y rebeldes* advirtió sobre el “reduccionismo de escándalo” que suelen “padecer” los trabajos sobre la juventud. Las palabras de Torres Rivas pueden explicarse a partir de los resultados de las investigaciones hechas en el país en los tres decenios anteriores. Como vimos, el caso nacional no puede ser más representativo. En su mayoría, las investigaciones que se hicieron sobre juventud durante las dos últimas décadas reforzaron el estereotipo de los jóvenes como indiferentes e individualistas. Aunque es la segunda vez en los últimos años que las juventudes salen a la calle para protestar con y por los “viejitos”, y enfrentan

respuestas violentas por parte de la autoridad —la primera fue en 2013 con el movimiento OcupaInss—<sup>15</sup> la frase “no están dispuestos a ‘sacrificarse’ por ninguna causa” fue el cliché desde el cual se les discriminó por mucho tiempo y que les situó en una suerte de cadalso.

Ahora bien, al analizar acciones tales como el arrojo para disputar la Plaza de las Victorias por causa del incendio de miles de hectáreas de bosques, así como las consignas en las marchas y la protesta del muchacho de los semáforos del Rigoberto López Pérez, resulta evidente que estamos ante formas de relacionarse con la naturaleza, con otras personas y con la vida misma. En el lapso de una semana, el fuego en Indio-Maíz y el decreto del INSS agudizaron la tensión y la desposesión sobre la base material que sostiene la vida, tema central en las críticas de pensadoras indígenas y feministas no liberales al sistema económico político imperante en el mundo.

Sobre esta dimensión material, Rossana Reguillo ha insistido reiteradamente en el caso de las juventudes. En su libro *Paisajes insurrectos: Jóvenes, redes y revueltas en el otoño civilizatorio* retoma su idea sobre el neoliberalismo como “un poder de ocupación, que para subsistir y reproducirse requiere de engullir ‘cuerpos’, ‘territorios’, ‘riqueza’, ‘imaginarios’, ‘vidas cotidianas’. Engullir para luego vomitar en un acto bulímico que se convierte en un bucle” (Reguillo, 2017 posición en Kindle 432-435). Reguillo hace notar la extrema crueldad del sistema al responsabilizar a las personas jóvenes de esta situación, y cómo al excluir su propia responsabilidad se fortalece: “la narrativa precarizada de la propia vida, la sensación de ser culpable de algo inaprensible, fortalecen los dispositivos del sistema y sus máquinas de producción de vidas desechables, prescindibles, sacrificables, matables” (Reguillo, 2017 posición en Kindle 432-435).

Las revueltas son sobre todo una rebelión contra este sistema y contra todas las interpretaciones que muestran su incomprensión hacia el sector joven de la población. Las interpretaciones sobre las jóvenes generaciones no parecen entender las narrativas propias de las juventudes, ni sus lenguajes. Principalmente no se trató, ni se trata, como hemos insistido, de un problema de agencia de parte de ellas. Lo problemático está, insistimos, en quién mira. En buena medida, se trata de incomprensión, de ausencia de etnografía, de inapetencia por generar espacios de diálogo y de escucha activa. En otras palabras: no hemos entendido las formulaciones de las juventudes. Lo que en particular nos interesa del argumento sobre la apatía de las juventudes es su

---

15 El tema del acercamiento a los y las jóvenes organizados en la Juventud Sandinista y en la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN) durante estos últimos once años sobrepasa los alcances de este trabajo, aunque sí señalamos que en la narrativa de las revueltas es evidente la participación de jóvenes provenientes de estas organizaciones, como es el caso de estudiantes de las universidades públicas en Managua y de los departamentos. Dilon Zeledón fue uno de los presos políticos que pasó más tiempo en cautiverio: estudiante de la carrera de Contaduría Pública en la Facultad Regional Multidisciplinaria (FAREM-Matagalpa), Dilon Zeledón fue miembro de UNEN y ahora sus antiguos compañeros lo consideran “traidor”. Por ello fue severamente castigado, según relata su madre, Eimy Ramos. <https://niu.com.ni/presos-politicos-la-traicion-de-dilon-zeledon-exmiembro-unen/>

punto de quiebre: el concepto mismo de política. Quienes les vieron y les ven apáticos, desorientados, carentes de liderazgos, y las juventudes, entienden la política desde distintos lugares de experiencia y de conocimiento. Mientras para las generaciones mayores la política se manifiesta principalmente en la democracia del voto, en la plaza pública, en el estado como centro de la política, en el sentido de sacrificio a la vieja usanza cristiana, las nuevas generaciones responden, usualmente, a una conceptualización de la política desde lo cotidiano, de su forma de cabalgar en las redes sociales, de habitar el espacio, de relacionarse con sus pares y con las otras personas, por ejemplo. Rossana Reguillo ha dicho que en toda época “ser joven nunca fue fácil”.<sup>16</sup> Esto, creemos, en parte ha sido porque, como bien ha planteado José Ortega y Gasset, el conflicto entre generaciones es intrínseco<sup>17</sup> en sociedades occidentales y urbanas, “una faena” entre “viejos” y “nuevos”. Sin embargo, “hoy es especialmente difícil” ser joven, “se cierran cada vez más las posibilidades de acceso para millones de jóvenes”.<sup>18</sup>

Sobre las tensiones entre generaciones y sus narrativas, Edelberto Torres Rivas plantea en su libro *Revoluciones sin cambios revolucionarios* —al referirse al sacrificio de los jóvenes revolucionarios de los años 60 y 70 en Centroamérica— que “no hay expresión que resuma la calidad del enorme sacrificio humano que hubo en estos años. El sujeto popular aparece escindido en tanto su subjetividad integralmente revolucionaria más como mártir, más como víctima, sin oportunidades (...)” (Torres-Rivas, 1995, p.449). No es casual que algunas de las juventudes de las revueltas se distancien de esa narrativa, como veremos en el siguiente acápite.

## 2. Narrativa: Del “patria libre o morir” al “patria libre y vivir”

*Patria libre o morir* fue la consigna que acompañó buena parte de las luchas políticas y sociales a lo largo del último siglo en Nicaragua. Fue en 1927 cuando, en el contexto de la ocupación estadounidense, Augusto C. Sandino escribió al capitán Hatfield “yo quiero patria libre o morir”, para hacerle saber que no se rendiría:

---

16 <https://hipermediaciones.com/2013/09/01/entrevista-a-rossana-reguillo-jovenes-sociedad-digital-y-politica/>

17 “Para cada generación, vivir es, pues, una faena de dos dimensiones, una de las cuales consiste en recibir lo vivido —ideas, valoraciones, instituciones, etc.— por el antecedente; la otra, dejar fluir su propia espontaneidad. Su actitud no puede ser la misma ante lo propio que ante lo recibido” (Ortega y Gasset, 1985, p.7).

18 <https://hipermediaciones.com/2013/09/01/entrevista-a-rossana-reguillo-jovenes-sociedad-digital-y-politica/>

*Campamento del Chipote<sup>19</sup>  
Al Capitán G. D. Hatfield,  
Ocotlán*

*Recibí su comunicación ayer y estoy entendido de ella. No me rendiré y aquí los espero. Yo quiero patria libre o morir. No les tengo miedo; cuento con el ardor del patriotismo de los que me acompañan.*

*Patria y Libertad.  
Augusto C. Sandino  
12 de julio de 1927*

Augusto Calderón Sandino fue asesinado la noche del 21 de febrero de 1934; en el año 1961 Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista, propuso “retomar la bandera de Sandino y proseguir su inconclusa lucha de liberación nacional hasta derrocar la dictadura e instaurar el socialismo” (Kinloch, 2004, p. 291). Bandera y consigna se convirtieron en los símbolos de la lucha contra la dictadura de Somoza, pero sólo hasta el año 1979 el pueblo nicaragüense logró derrocar la dictadura, a través de un programa moderado que unía a varios sectores y de una insurrección armada. Hay bibliografía extensa sobre este momento de la historia nacional, no es nuestro interés abundar en él.

Veamos ahora brevemente cómo la poesía nicaragüense fue un vector importante para transmitir el legado de Sandino y su papel modélico de héroe nacional. La poesía reprodujo y promovió un prototipo de héroe: joven, masculino, fuerte, atlético, arrojado y antiimperialista. Enaltecer al héroe antiimperialista ha sido una constante en la poesía de la década de los 60 y principios de los 70. La antología *Poesía revolucionaria nicaragüense*, reeditada siete veces entre 1962 y 1973, según refiere Gregorio Selser (1981), contiene poemas de intelectuales como Ernesto Cardenal, Ernesto Mejía Sánchez y Fernando Gordillo. Todos escribieron sobre ese espíritu de resistencia enalteciéndolo: *Un joven muerto* y *Andrés*, de Fernando Gordillo; *Paz en la guerra*, de Ernesto Mejía Sánchez, y los epigramas, el *Epitafio para Adolfo Báez Bone* o la *Hora O* de Ernesto Cardenal son ejemplos de la modelidad en cuestión. Como advierte Tzvetan Todorov, la muerte está en el destino del héroe: “(...) el héroe desea siempre alguna cosa más allá de su vida (su excelencia, justamente: no está, pues, del lado de los valores vitales); por lo tanto, está también ligado, de inmediato, a la muerte” (Todorov, 1993, pp.53-54).

---

19 La política de memoria del gobierno sandinista en los 80 dio el nombre de El Chipote a la loma de Tiscapa donde fue asesinado Sandino, como una manera de honrar la gesta del guerrillero antiimperialista cuyo campamento en Las Segovias tenía ese mismo nombre. En la ladera suroeste de la loma estaban ubicadas las cárceles donde Somoza Debayle enviaba a sus opositores. Como si de un ciclo perverso se tratase, El Chipote volvió a ser un lugar temido.



*Patria libre o morir* era un destino. Y la fuerza de ese destino dejó miles de héroes y mártires en la guerra de liberación contra Somoza. Sí, aquellos que vivían como los santos y dieron nombre a barrios, avenidas, calles, hospitales y escuelas.

La condición de héroe será también una modalidad que alcanzar durante la revolución. En el contexto de la guerra de agresión estadounidense la consigna siguió vigente en aras de la defensa de la patria, amenazada por La Contra. Luego, finalizada la guerra, vinieron los procesos de desarme y pacificación. Tras la desmovilización de los ejércitos esa consigna parecía haber quedado atrás junto con aquel pasado doloroso. No fue así, o al menos no del todo. Las revueltas de abril irrumpieron trayéndola de nuevo, pero para mostrarnos, entre otras cosas, su reapropiación. De ninguna manera proponemos en este trabajo un concepto unívoco de juventud, ni una respuesta uniforme a tal reapropiación. Entre las juventudes, algunos abrazaron la vieja consigna sintiendo el llamado del heroísmo a la vieja usanza. Esto puede observarse, por ejemplo, en algunos de los mensajes en video que compartieron estudiantes atrincherados en la UNAN-Managua el 13 de julio de 2018, día en que el campus fue tomado por “paramilitares y policías”, mediante un “incesante ataque armado de quince horas” que dejó dos muertos y quince heridos<sup>20</sup>: “Mamá, perdoname, salí a defender mi patria”; “Morí por una causa”.<sup>21</sup> Es necesario advertir que muchos de los jóvenes asesinados en el temprano abril de 2018 salieron a la calle creyendo que volverían a sus casas. Una profesora universitaria relató que uno de sus estudiantes le comentó sobre su participación en esa protesta: “Yo pensé que íbamos a tirar unos morteros y después nos íbamos a ir para la casa”. El horror de saber que estaban ante la probabilidad de morir ahí mismo vino después.

Otros y otras jóvenes resignificaron el sentido de la consigna dándole el giro hacia el vivir: *Patria libre y vivir*. Durante la primera de las multitudinarias marchas, la del 23 de abril, se escuchó *Patria libre y vivir*, también *Matria libre y vivir*. Fueron las feministas jóvenes quienes insistieron en ello. No es casual la consigna que cabalga en las redes: *La revolución será feminista o no será*. Casi un siglo después, la vida se mueve hacia la vida y la consigna de consignas es resignificada por generaciones a las que el escritor Sergio Ramírez ha bautizado como “los nietos del sandinismo”. Las autoras

---

20 <https://confidencial.com.ni/ortega-ataco-con-sana-la-unan-pese-a-%E2%80%A8negociacion-de-estudiantes/>

21 <https://www.youtube.com/watch?v=JAr4gXEetNY>



creemos que son más bien los bisnietos y bisnietas de Sandino.<sup>22</sup>

“Valgo más vivo que muerto”, decían muchos. La muerte no forma parte de la ecuación, es una posibilidad, pero no es la modelidad a seguir. Leemos como una expresión de la micropolítica la apuesta por la vida. Félix Guattari y Suely Rolnik en *Micropolítica. Cartografía del deseo* la definieron como la posibilidad de que “los agenciamientos sociales tomen en consideración las producciones de subjetividad en el capitalismo, problemáticas generalmente dejadas de lado en el movimiento militante” (Guattari & Rolnik, 2006, p. 202).

Y en ese sentido lo leemos también como un distanciamiento del ideal guevarista del hombre nuevo que se proponía como modelidad de las formas en que las personas jóvenes “debían” hacer política en los movimientos de izquierda. Desde esa propuesta, las y los militantes debían encarnar valores tales como “humildad, honestidad, firmeza, voluntad, disciplina, espíritu colectivista, valentía y templanza” (ver el libro del Instituto Nicaragüense de Investigación y Educación Popular, 1995). Bajo ese “ideal” el interés privado quedaba subordinado al interés público.<sup>23</sup> En aras del bienestar colectivo se postergaron la vida familiar, la vida afectiva y los estudios. La individualidad, muchas veces igualada en el discurso con el individualismo, fue, en alguna medida, la adversaria del espíritu colectivista que atravesaba los principios de la juventud revolucionaria. Si la afirmación individual implicaba una posibilidad de desertión, el interés individual se convertía en una amenaza; y su demanda fue señalada muchas veces como una debilidad “pequeñoburguesa”, o como una “desviación ideológica” del proyecto revolucionario (Agudelo, 1998).

Para algunas de estas juventudes la apuesta parece estar en las subversiones. Como propone Judith Butler, el desafío está en revertir el orden desde “las formas en que las relaciones sociales cotidianas son rearticuladas y nuevos horizontes conceptuales abiertos por prácticas anómalas o subversivas” (Butler, 2003, p.20). La apuesta por la vida en este contexto es subversiva, rompe la norma y fractura el poder narrativo del *Patria libre o*

---

22 Los nietos de Sandino son una generación que también tuvo rupturas y continuidades con la generación de los hijos y Las hijas de Sandino, título del famoso libro de Margaret Randall. La generación de nietas y nietos tampoco fue vista, escuchada, ni entendida. Parte de ella la conforman los “cachorros de Sandino”, los reclutas del servicio militar, poco nombrados y estudiados en los escritos sobre la revolución. Los textos más numerosos, interesantes y honestos sobre ellos, a la fecha, son los producidos por ellos mismos. A pesar de haber puesto miles de muertos, el pecho a las balas en la guerra de los años 80, esta generación no fue ni es reconocida por la narrativa revolucionaria hegemónica. Es más, los desmovilizados del servicio militar no son parte de la narrativa oficial de este gobierno. Otra parte de esta generación fueron los llamados “mimados de la revolución”, nosotras estamos incluidas ahí —al menos por un tiempo, porque en la misma década transitamos a la adolescencia— aunque fue una generación que marcó distancia crítica y rupturas sustantivas con la narrativa revolucionaria y contrarrevolucionaria, con activismos diversos en los años 90 y en el presente siglo; es una generación que también pasó desapercibida en una visión adultista y estadocéntrica sobre las juventudes.

23 Y ese concepto se interpretaba como lo define Albert O. Hirschmann: como la acción realizada en el terreno político, la participación del ciudadano en asuntos cívicos y comunitarios (Hirschmann, 1986).

*morir*. El convencimiento de muchos jóvenes de valer más vivos que muertos puede verse también en su repliegue ante el operativo policial y parapolicial, denominado por la Policía Nacional como “Operación Limpieza”. A este respecto un periodista del diario digital *El Faro* relató lo siguiente:

Camionetas Hilux cargadas con paramilitares combatieron a los llamados autoconvocados que protegían los tranques en Jinotega, Matagalpa, Chontales, Diriamba, Masaya, Jinotepe, León. La UNAN era el último atrincheramiento en la capital. (...) Muchos jóvenes huyeron a otras ciudades o se ocultaron en los cerros aledaños.<sup>24</sup>

Igualmente, durante el asalto a los pueblos blancos del domingo 15 de julio, el “Comandante H” de Niquinohomo le dijo a una periodista de *El Diario Montañés*: “Todo el pueblo tiene miedo. Aquí no volverán a alzarse barricadas. Sólo nos queda huir... Le seguiré armando la guerra de otras maneras (...) ¿A qué vamos a salir, a morir en las calles? No necesitamos más mártires. Le sirvo más a mi país vivo que muerto”, mientras, según el diario, se preparaba para salir del país.<sup>25</sup> No podemos dejar de mencionar las palabras de Álvaro Conrado, padre de Alvarito Conrado, el primer adolescente asesinado: “Yo no quiero mártires, a mí no me sirve eso, yo lo que solicito es justicia”.<sup>26</sup>

Al igual que para el “Comandante H”, para muchas de las personas involucradas en las revueltas y para sus familias, la posibilidad de *vivir* implica forzosamente salir del país. El exilio de miles de nicaragüenses en los últimos meses ha sido una de las formas de resistir con vida. El número de solicitudes de asilo en Costa Rica ha aumentado drásticamente. De abril a julio de 2018 ese país había recibido 23,000 solicitudes, según registro de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR.<sup>27</sup> Un reporte publicado por la CIDH sobre su visita *in situ* a los refugiados nicaragüenses en Costa Rica señala que, en el momento de la visita, había más de 40,000 solicitudes de asilo en aquel país.<sup>28</sup>

Además de la narrativa del *Patria libre y vivir*, las revueltas de abril han mostrado cómo el espacio virtual es un espacio político para las juventudes.

---

24 <https://elfaro.net/es/201807/centroamerica/22306/La-generación-rota-de-Nicaragua.htm>  
Como una acción similar pensamos “el repliegue táctico” de Managua hacia Masaya que ocurrió durante la insurrección contra Somoza. Hay también otras maneras de resguardar la vida: el exilio que ha habido en varios momentos de nuestra historia. Acude a la mente también la imagen de las huellas de Acahualinca, el sitio arqueológico donde se conservan las huellas de los pies de poblaciones ancestrales que huían de una erupción volcánica.

25 <https://www.eldiariomontanes.es/internacional/america-latina/nicaragua-asalto-pueblos-blancos-represion-20180716085954-ntnc.html>

26 <https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/462800-alvaro-conrado-protestas-nicaragua/>

27 <http://www.acnur.org/noticias/briefing/2018/7/5b6082454/acnur-aumenta-su-respuesta-a-medida-que-miles-de-personas-huyen-de-la-violencia.html>

28 <http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/233.asp>

### 3. Desde el celular: horror sobre la palma de la mano

Fotografía 2



Fuente: Orlando Valenzuela. *El Nuevo Diario*. Protesta estudiantil contra las reformas del INSS frente a los antimotines cerca de la UNI. 19 de abril de 2018. Managua.

En este trabajo nos posicionamos desde la noción de horrorismo de Adriana Cavarero. Ella propone el término como una jugada teórica cuyo objetivo es desplazar nuestra atención “y que en lugar de dirigirla hacia quien comete un acto criminal, la posemos sobre la víctima de dicho acto” (Cavarero, 2009:41). Desde ahí analizamos la transmisión por Facebook Live del intento de toma de la UPOLI por parte de fuerzas policiales y parapoliciales. La experiencia de la transmisión del horror se repetiría tres meses más tarde con el asalto a la UNAN Managua.

La noche del domingo 22 de abril de 2018 circularon en las redes sociales videos y transmisiones en vivo que denunciaban la llegada de policías antidisturbios a las inmediaciones de la UPOLI. Camionetas Hilux llenas de civiles, algunos encapuchados, acompañaban a la fuerza pública; las motos iban con parejas de efectivos policiales armados con fusiles AK y Dragonov, listos para disparar. A los pocos minutos experimentamos el terror al escuchar a través del Facebook Live los relatos de quienes desde dentro de la universidad sufrían el asedio de las balas de las fuerzas policiales: “Sector de la UPOLI,

sector de la UPOLI, atacando con fuerza para desalojar a la UPOLI”.<sup>29</sup> “Están atacando por todos lados. Estamos aquí en la UPOLI. Necesitamos ayuda, refuerzos. Había un cese el fuego. Tenemos un herido con herida en la cabeza. No podemos sacarlo. Por favor necesitamos ayuda. Hay que mandar a muchos a hospitales”.<sup>30</sup> El horror sobre nuestra mano, visto desde el celular, y la reacción que provocó: al día siguiente se realizó la marcha más grande en la historia de Nicaragua: miles de personas avanzaron desde la rotonda de Metrocentro hasta la UPOLI para solidarizarse en cuerpo y espíritu con las juventudes que permanecían ahí.

El asalto a la UPOLI evidenció la decisión del gobierno de abordar el desacuerdo como si de una guerra se tratase. Con esto no pretendemos decir que esta sea una guerra. Por el contrario, la población nicaragüense mostró su vocación de paz al poner su cuerpo y una bandera ante el asedio y la represión. Recurrimos al trabajo de Adriana Cavarero, *Horrorismo*, para exponer las consecuencias de la asimetría que conlleva esta situación donde existe una violencia armada unilateral. Muy lejos de un conflicto armado entre dos fuerzas donde se sigue “el modelo del guerrero homérico” en la que se “prevé una violencia recíproca, simétrica”; acudimos a “una violencia unilateral que se descarga sobre quien está indefenso” (2009, p. 28): en este caso la población civil.

Las balas salieron de un lado, porque las armas de alto calibre fueron disparadas por “las fuerzas del orden”. La tarde del 22 de abril de 2018 el presidente Daniel Ortega había advertido en cadena nacional:

Tenemos que restablecer el orden. Nosotros no podemos, no podemos, permitir que aquí se imponga el caos, el crimen, el saqueo. No lo podemos permitir y vamos a actuar conforme la ley, conforme la Constitución. Para asegurar y garantizar el restablecimiento de la estabilidad de la paz social.<sup>31</sup>

La noche del 22 de abril en que se intentaba “restablecer” ese orden, el horror estaba sobre la palma de nuestra mano y, también, a escasa distancia, en la misma ciudad, a kilómetros, a pocas cuadras, a la vuelta de la esquina. Cualquiera podía ser blanco. Las redes sociales mostraron “un baño de sangre organizado por el gobierno”.<sup>32</sup>

Sobre esta asimetría Antonia Urrejola, comisionada de la CIDH, ha señalado reiteradamente que “no hay excusa para el uso desproporcionado de la fuerza”.<sup>33</sup> Así lo ha dicho también Brian Castner, experto en armas y municiones del equipo de Amnistía Internacional, quien realizó un peritaje

---

29 <https://www.youtube.com/watch?v=jZKVTJbZj94>

30 <https://www.youtube.com/watch?v=JFDjQuYsLsY> / <https://www.youtube.com/watch?v=9GIY6oS2uic>

31 <https://www.youtube.com/watch?v=9GIY6oS2uic>

32 <https://www.nytimes.com/es/2018/07/19/opinion-dada-nicaragua-ortega-revolucion/?smid=tw-espanol&smtyp=cur>

33 <https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/477350-antonia-urrejola-cidh-crisis-nicaragua/>

sobre las armas y municiones utilizadas en Nicaragua a partir de docenas de fotografías, videos y testimonios.

El equipo a su cargo identificó el aumento constante tanto en el número de armas, como el tipo de armas utilizadas por grupos parapoliciales como por la Policía. Al principio vimos morteros improvisados utilizados por manifestantes y grupos parapoliciales. Pero luego notamos un aumento en el número de pistolas semiautomáticas utilizadas por grupos parapoliciales, así como rifles de asalto, sobre todo tipo AK, y después con el paso del tiempo, en las semanas siguientes, vimos que la Policía Nacional estaba más fuertemente armada, tanto con sus propios rifles tipo AK, como con rifles de francotirador, incluyendo Dragunovs de Rusia, M24 Remington de Estados Unidos y rifles FNSPR de Bélgica, así como ametralladoras RPK y PKM. Incluso al final, vimos varios lanzagranadas tipo RPG-7. Quiero subrayar que no existe ninguna función policial legítima para el uso de la mayoría de estas armas al trabajar con manifestantes civiles.

La apuesta por la represión y el terror se manifestó también en el asalto a la UNAN el viernes 13 de julio de 2018, a plena luz del día:

decenas de paramilitares abrieron fuego contra las instalaciones de la UNAN, en la que se mantenían atrincherados unos 300 estudiantes. El asalto duró casi quince horas. La Policía nicaragüense escoltó a los paramilitares hasta las inmediaciones de la universidad en lugar de controlar o capturar a los atacantes. Por el contrario, patrullas policiales obstaculizaron el paso de una caravana ciudadana que se dirigía a rescatar a los atrincherados. La Iglesia católica nicaragüense tuvo que negociar con el gobierno para que se permitiera la evacuación de heridos.<sup>34</sup>

Queda la duda de si el objetivo de la Policía Nacional y los parapoliciales era recuperar la UNAN o disciplinar, desde las pedagogías de la crueldad, a las juventudes atrincheradas refugiadas. Nos preguntamos por qué si las instalaciones de la UNAN ya habían sido tomadas por las fuerzas paramilitares, estas continuaron avanzando durante horas hasta llegar a la iglesia de la Divina Misericordia, donde se encontraban refugiadas una buena parte de las personas atrincheradas, y abrieron fuego contra ellas. El ataque terminó en la mañana del sábado 14 de julio. Gerald Vásquez, “El Chino”, y Francisco José Flores, “El Oso”, los dos jóvenes asesinados en la madrugada del sábado, cayeron en los alrededores de la Divina Misericordia.

Las redes nos mostraron lo que Adriana Cavarero nombra “violencia del horror”, aquella que “golpea siempre a alguien, abatiendo a los seres humanos uno a uno”. Las víctimas, dice esta autora, “son siempre criaturas singulares, con un rostro, un nombre y una historia” (Cavarero, 2009, p.41).

---

34 <https://www.nytimes.com/es/2018/07/19/opinion-dada-nicaragua-ortega-revolucion/?smid=tw-espanol&smtyp=cur>

Son cientos los artefactos culturales que las poblaciones, particularmente las juventudes, han producido para conservar la singularidad de cada una de estas víctimas de la violencia. Las redes sociales son usadas como una suerte de memorial para las víctimas, son decenas los perfiles compartidos, los testimonios elaborados, las fotografías que nos presentan la persona que fue, y no el cuerpo herido, inerte y muchas veces desfigurado que quedó. Resultará un ejercicio provechoso analizar estas voluntades de memoria que circulan en las redes. Nos preguntamos si estas voluntades de memoria rompen con tradiciones y políticas memorialísticas que daban el nombre de un caído a barrios, hospitales y escuelas. En las redes sociales es un ejercicio autoconvocado que nos recuerda que todos esperamos que se haga justicia.

#### 4. Asaltar la palabra, navegar en la red

En su estudio sobre las juventudes, Rossana Reguillo persevera en analizar los procesos a través de los cuales se precariza a los jóvenes. Como ya hemos mencionado, esta autora sostiene que el neoliberalismo hace de las juventudes seres desechables. No tan lejos de ese lugar están aquellas voces que a través de operaciones discursivas han presentado a las juventudes como seres sin lugar, sin futuro... Nos preguntamos entonces si no es a partir de las redes sociales, aunque no exclusivamente a partir de ellas, que esas voces logran hacer escuchar su relato interrumpiendo con ello “el hilo de la versión dominante”<sup>35</sup> que les condena a un “no lugar”.

Fueron las “primaveras árabes” las que nos mostraron otros usos y poderes de las redes sociales. Sobre todo nos permitieron ver que otras conectividades son posibles; así nos han mostrado en esta región los trabajos de Reguillo (2017) y Ardití (2013). Hasta que estallaron las revueltas de Oriente, las redes sociales —esa “ventana siempre abierta y conectada con decenas de personas al mismo tiempo”, según las describe Paula Sililia (2017, p.15)— habían sido asociadas a megalomanía, excentricidad, escasa transparencia, y sobre todo, superficialidad. A raíz de las insurgencias, las redes dejaron de verse únicamente como un ejercicio autorreferencial de sus usuarios, y dieron paso al análisis de “una inmensa red de conversaciones colectivas, de acciones, de estéticas y lenguajes que, de la red a la calle” lograron “interrumpir el monólogo de los poderes” (Reguillo, 2017 en Kindle posición 110-115).

La narrativa que pone en tensión e interrumpe ese relato hegemónico la observamos también en los productos culturales que dejan las insurgencias: consignas, diseños, grafitis, comunicados, fotografías, documentales, videos, blogs, sitios de internet, mismos que se reproducen en Twitter, YouTube o Facebook Live, entre otros. En su libro *Robinson Crusoe ya tiene celular*, Rosalía Winocur insiste en el hecho de que “la intensa experiencia de socialización digital no sustituye al mundo ‘palpable’ sino que cabalga sobre

---

35 En su ensayo *Las voces de la historia*, Ranahit Guha dice: “si las voces bajas de la historia han de ser escuchadas en algún relato (...), ello sólo se logrará interrumpiendo el hilo de la versión dominante, rompiendo su argumento y enmarañando su trama” (Guha, 2002, p.31).



el mismo” (Winocur, 2009, p. 23). No es pues lo virtual una realidad aparte: lo virtual también es real. Existe una relación de continuidad, también, de simultaneidad, entre lo virtual y lo analógico. Lo virtual no está en una dimensión desconocida o aparte de lo real.

Este nuevo lugar de la política abre posibilidades de dirigirse, interpelar, confrontar y, a veces, inclusive, controlar y auditar a otros actores estatales y no estatales y sus actuaciones. Es la reapropiación del habla y la proclama, ideas sustantivas de la política de las revueltas actuales, dirigidas al actor estatal. Ejemplo de esto es el video del “Comandante Caperucita” en el que lo sustantivo es la discusión sobre quién toma la palabra, quién habla.

Llamamos la atención sobre acontecimientos que tensionaron o interrumpieron las narrativas hegemónicas por su contenido y alcance. Estas narrativas no agotan la infinidad de experiencias producidas; nos propusimos identificar cómo y qué se interrumpió. La tarea está ahí, nos corresponde a todas analizar y seguir sobre ello. En este trabajo proponemos dos acontecimientos registrados mediante teléfonos celulares, principales artefactos tecnológicos usados en esta revuelta. Whatsapp fue la aplicación a través de la cual se compartían en un principio; también se usó Facebook Live. La viralidad de las producciones culturales se logró a través de plataformas como YouTube, Facebook y Twitter. Las revueltas se mueven de lo virtual a lo analógico, y viceversa, sin mediación. Por lo general, al frente de ese movimiento en red estuvieron y están las juventudes. Identidades como “Bacanalnica”, “Polar Vandálico”, “Rey Mapache”, “Sobreviviente de la Narco-Genocida-Dictadura Or-Mu”, “Doctor Paracetamol”, entre otras, dan cuenta de la juventud de la revuelta en la red virtual.

El primer acontecimiento tiene que ver con asaltar la palabra: la irrupción del video del “Comandante Caperucita” o “Comandito Monimbó”, video tomado el 21 de abril, y que contaba con cerca de 92 mil vistas en YouTube hasta octubre de 2018. El “Comandante Caperucita” interpeló al presidente Daniel Ortega haciéndole saber que quedaba desterrado afectivamente de Masaya. Hablando en nombre del pueblo de Monimbó —cuya población levantó tranques— el “Comandante Caperucita” envió un mensaje contundente a Ortega y Murillo: “en junio en el Repliegue Managua-Masaya no te queremos ver ni en pintura, ni verga, ni a vos ni a la Chayo (...) Peor en Masaya, Monimbó, que comenzó la guerra”. El mensaje anuncia una ruptura y, en efecto, el Repliegue no se llevó a cabo en la fecha en que se celebraba cada año: 27 de junio. Fue hasta julio que fuerzas policiales y parapoliciales lograron tomarse la ciudad de Masaya a sangre y fuego, con armamento de guerra, según refieren diversos reportes de derechos humanos y de la prensa internacional a los que aludiremos más adelante.

El segundo acontecimiento es la acción del “Pico Rojo”, la protesta inspirada por Marlen Chow, activista del movimiento feminista, que se convirtió en viral. Ella relató —al salir libre de la cárcel El Chipote donde la tuvieron retenida por unas ocho horas— que durante los interrogatorios a los que fue sometida sus captores le preguntaron a qué organización pertenecía, y ella respondió: “Soy de la Asociación de Mujeres Nicaragüenses Pico Rojo”. De inmediato las redes se vieron inundadas por memes, *hashtags*, decenas de

fotografías de mujeres, y de algunos hombres, con los labios pintados de rojo, con los *hashtags* #yosoypicorajo, #soypicorajo y #todassomospicorajo, que propagaban la rebeldía de Marlen Chow.<sup>36</sup>

Veamos ahora con mayor detenimiento cada acontecimiento.

#### 4.1 “The making of” del performance, y el performance del “Comandante Caperucita” en Monimbó

Fotomontaje 1



Fuente: Anónimo. Recuperado de <https://sosnicaraguareporte.com/memes#gallery-72>

Es 21 de abril de 2018 en Monimbó. Un grupo de hombres mira a la cámara, todos están listos para el video. Alguien pregunta “¿Quién va a hablar?”. “Yo voy a hablar” dice el que lleva una capucha roja y un mortero en su mano izquierda. Empieza eufórico su discurso, interpela al presidente: “Daniel Ortega...”, dice, y entonces se escucha otra voz que grita “¡Se acabó!”. El hombre de la capucha roja pierde los modales, voltea y le grita improperios a quien interrumpió su alocución: “¡Calmate! ¿Y qué es la verga? Te pica el culo, dejame hablar...”. “¡Cortá, cortá!” grita enojado al camarógrafo.<sup>37</sup> El video en cuestión, bautizado como *Making of* llevaba en menos de dos semanas 37,000 visitas en la plataforma de YouTube. Su protagonista, a quien

36 Lo viral se refiere a aquel flujo informativo bidireccional y permanente que impulsa la información para que circule veloz entre usuarios de las redes sociales. Es la capacidad de reproducir un mensaje exponencialmente. Es una comunicación similar a la “de boca en boca”, con la salvedad de que la propagación viral presenta una ventaja: el mensaje no sufre cambios desde el origen hasta el usuario final porque se transmite siempre el mismo contenido. En la propagación “de boca en boca” cada persona añade o modifica el contenido (Acosta et al., 2011, p. 52).

37 <https://www.youtube.com/watch?v=ddbjuJldZoA>



preferimos llamar por su mote “Comandante Caperucita”, se convirtió en símbolo de las protestas, su imagen apareció en camisetas, llaveros y perfiles de Facebook.

“Déjame hablar” expresa una de las reivindicaciones más fuertes de las revueltas: el derecho a la palabra, a la posibilidad de expresar ideas, emociones, demandas, impresiones y opiniones con libertad. “Déjame hablar” interrumpe el monólogo del poder que durante once años se mantuvo en Nicaragua. No fue casual que ese emplazamiento se haya hecho desde las redes sociales. Es ampliamente conocido que la familia Ortega Murillo es dueña de una robusta cadena de radiodifusoras y televisoras, y por ello cuenta con el control mediático del país.<sup>38</sup> En particular de los medios televisivos: de los nueve canales de televisión abierta que hay en el país, ocho están bajo control de la familia presidencial. No fue casual que el 19 o 20 de abril se haya suspendido el acceso gratuito al sistema *wifi* en los parques.

La anécdota de este video —tomado el 21 de abril de 2018— tiene dos partes. El making of ya referido y otro completo (sin interrupciones) con más de 90,000 vistas en YouTube. Una de las partes más simbólicas del video es cuando el “Comandante Caperucita” dice: “Aquí la gente estamos apoyando todos nuestros derechos”, pero principalmente el derecho a hablar. Culmina cuando emplaza a Ortega diciéndole: “Tocaste a Monimbó, el corazón de Nicaragua”. En la lucha contra la dictadura somocista no hubo un lugar más emblemático que el barrio de Monimbó, en la ciudad de Masaya: se le considera la cuna de la revolución; fue ahí donde se inventaron las bombas de contacto. Las fotos de su temprana insurrección y de los guerrilleros con máscaras de cedazo recorrieron el mundo y dieron celebridad a la fotógrafa, Susan Meiselas. Fue ahí donde cayó Camilo Ortega Saavedra un 26 de febrero de 1978, el hermano de Daniel Ortega. Monimbó, en el corazón de Nicaragua, fue uno de los últimos lugares en caer durante la “Operación Limpieza”.

El 16 de mayo otro emplazamiento se viralizó en las redes sociales. Un estudiante de la Universidad Centroamericana que formaba parte de la delegación de jóvenes que asistirían al Diálogo Nacional, Lesther Alemán, interrumpió el orden de quienes tomarían la palabra. Cuando Daniel Ortega iniciaba su alocución, Lesther Alemán intervino con vehemencia:

Usted es el jefe supremo de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua, por ello le pedimos que ahorita mismo ordene el cese de esos ataques, represión y asesinatos de las fuerzas paramilitares, de sus tropas, de las turbas adeptas al gobierno (...) ¿por qué me salto la palabra suya? Porque nosotros hemos puesto los desaparecidos, los que están secuestrados, nosotros los hemos puesto (...) Esta no es una mesa de diálogo, es una mesa para negociar su salida, y lo sabe muy bien porque el pueblo es lo que ha solicitado.<sup>39</sup>

---

38 <https://ondalocal.com.ni/especiales/305-los-medios-de-la-familia-presidencial-nicaraguense/>

39 <https://www.youtube.com/watch?v=9NXcz-ItgWI>

Ortega entonces retomó la palabra y entre otras cosas dijo desconocer la cantidad e identidad de los estudiantes muertos. En ese momento otra joven, Madelaine Caracas, intervino con voz emocionada: “Pidieron lista de nuestros muertos y aquí se la tenemos: Moroni López García, Managua, UNI”, y el resto de los estudiantes contestaba: “¡Presente!”, y así siguió: “Franco Valdivia Machado, Estelí”, “¡Presente!”, “Darwin Manuel Urbina, Managua”, “¡Presente!”. Y así fue nombrando uno a uno hasta completar la lista de los 50 muertos que hasta ese día había dejado la represión.

Al asaltar la palabra se interrumpe, se interpela y se trastoca el monólogo del poder. A partir de sus *performances*, “Comandante Caperucita”, Lesther Alemán y Madelaine Caracas emplazan un ejercicio del poder que se ha olvidado de su función, su deber y su promesa: gobernar para todos.

## 4.2 Los picos rojos

Marlen Chow, 68 años, activista feminista, integrante del sandinismo histórico, fue detenida por la Policía Nacional el domingo 14 de octubre de 2018 cuando participaba en un plantón en el que también fueron capturados 38 reconocidos opositores al régimen, que pedían paz y democracia. “La China” Chow, como se le conoce desde sus años de militancia universitaria, se convirtió en símbolo de resistencia la tarde de su arresto cuando relató, al salir de la cárcel de El Chipote, que durante los interrogatorios a los que fue sometida sus captores le preguntaron a qué organización pertenecía, y ella respondió: “Pertenezco a la Asociación de Mujeres Nicaragüenses Pico Rojo”. Durante su cautiverio notó en el policía que la interrogaba “una actitud agresiva, pero que con su respuesta se quedó en total desconcierto y no supo cómo reaccionar”. Para Chow “lo normal es que la gente [capturada] apenas responda unas palabras o no hable cuando la interrogan”.<sup>40</sup>

En sus reflexiones sobre la resistencia, Michel de Certau propone los conceptos de estrategia y táctica. Para él la estrategia es aquello que tiene un lugar propio y una posición de fuerza para operar, de la cual elabora sistemas sociales y discursos totalizadores, mientras que la táctica es el arma de los grupos debilitados de la sociedad y no dispone de un lugar propio, sino designado por el otro, de manera que actúa en terreno impuesto, por lo que debe aprovechar las coyunturas propicias para avanzar en sus propósitos (De Certau, 1996, pp. XLIX-LI). Coyunturas como el interrogatorio fue aprovechado por Marlen Chow para responder desde una afirmación, con su pertenencia a un grupo, y no desde la negación, como probablemente esperaba el interrogador; esto lo sugiere el desconcierto que al policía le provocó la respuesta de ella.

Desde el planteamiento de De Certau observamos la táctica en lo que sigue: el hecho de declararse perteneciente a la supuesta asociación y afirmar tal pertenencia pintándose los labios de rojo. Es ella misma quien denomina

---

40 <https://www.eluniversal.com.mx/mundo/pico-rojo-la-rebeldia-femenina-del-lapiz-bial-contra-ortega-en-nicaragua>

y asume su pertenencia. Y es ella misma quien decide rebelarse desde el sarcasmo. Su táctica es tomar la palabra (nuevamente tomar la palabra) frente a una agresión, y no “estar dispuesta a achumicarse”, como ella misma dijo.

Ante los interrogatorios yo tomé un sentimiento de sarcasmo. (...) la tortura comienza desde que te agarran: la manera como te doblan el brazo, la manera como te pegan aquí, los golpes en las costillas. Ya allí nadie puede decir “No me hicieron nada, estoy bien”. Luego la manera como te tiran en esa zaranda, uno sobre otro, que es algo de lo más horrible y seguramente mucha de esa gente sale súper golpeada.<sup>41</sup>

Los levantamientos también han emplazado la narrativa hegemónica desde las redes sociales, esas que atraviesan husos horarios, procesan eventos en tiempo real y los expanden ante el lente del microscopio virtual en un flujo interminable de comentarios que son retuiteados, gustados y compartidos día y noche. Las redes sociales dislocan la territorialidad al ignorar las fronteras y al crear información a una velocidad y escala que todavía nos causa vértigo. Twitter, Facebook y las demás redes sociales han pasado a ser cajas de resonancia de las insurgencias, rompiendo la distinción tradicional entre espectador y actor (Arditi, 2013, pp.14-15), pero más que difundir un mensaje, han logrado que los mensajes, a través de fotografías, consignas, diseños, grafitis, comunicados, documentales, videos, blogs y sitios de internet se instalen en las conversaciones que las personas usuarias ya mantienen entre sí y que llevan también al espacio analógico. En estas revueltas las redes sociales devinieron en grieta por donde entró la luz,<sup>42</sup> que es también la voz y el lugar de la revuelta.

## 5. Ocupar espacios, habitar territorios, enraizar autonomías

La tarea esencial de la política es la configuración de su propio espacio, lograr que el mundo de sus sujetos y sus operaciones resulten visibles. La esencia de la política es la manifestación del disenso, en tanto presencia de dos mundos en uno (Jacques Rancière 2001).

De distinta forma, desde distintos lugares de lo que conocemos como Nicaragua y bajo diversas expresiones los acontecimientos de abril produjeron la calle como lugar preferencial de la política. La calle es usada aquí en un sentido literal y figurado, pues es en la calle, en ese espacio, en ese territorio, donde se producen —desde abril hasta el momento en que escribimos estas líneas— una cantidad infinita de actos políticos arrojados, líricos, sentidos, irónicos, divertidos, desdeñosos, delirantes, estéticos, encarnados, rabiosos, crueles y apasionados. Las más de las veces estos actos generan otros actos que

---

41 <https://www.youtube.com/watch?v=1oh-upYg1K4>

42 <http://www.jornada.com.mx/2017/11/08/cultura/a04n1cul>

resultan semejantes, diferentes y desiguales en su impacto directo o mediático. Es ahí donde se ha podido crear el espacio, en palabras de Rancière (2016), para la enunciación de un “nosotros”: donde todo aquello y aquella persona excluida del sistema entra en franca contradicción con el mundo oficial, el de las élites políticas y financieras; donde gente de horizontes muy diferentes han ocupado el mismo lugar para actuar como cuerpos colectivos produciendo la energía “autoconvocada”. Las demostraciones dentro de las demostraciones son parte de ello.

**20 de abril.** La represión pone cerco a la marcha/plantón juvenil que se apostó esa mañana frente al portón de la UCA en protesta por la violencia paraestatal de la noche anterior. Ocurre el ya mencionado sitio de la UNI y posteriormente el de la Catedral Metropolitana de Managua, que ocupó por su magnitud una sección especial del informe de la CIDH:

A pocas cuadras de allí [la UNI], cientos de estudiantes acopiaban víveres y materiales para apoyar las tomas de las universidades y, de acuerdo con diversos testimonios recibidos por la CIDH, aproximadamente a las 4 p.m. fueron atacados en la explanada de la Catedral por decenas de agentes antimotines que habrían trabajado en forma coordinada con turbas irregulares (2018, pp.13-14).

Gente salía de todos lados convocada desde diversos lugares de la ciudad; los alrededores de la catedral y la Carretera a Masaya se convirtieron en territorio de lucha de grupos heterogéneos. Había al menos tres plantones autoconvocados por la protesta que no tenían un propósito programado o consensuado de antemano pero que buscaban un mismo fin: disminuir la ferocidad y desmesura de la violencia policial y parapolicial y permitir un respiro para que “los muchachos” lograran evadir el cerco y salvar sus vidas. Detrás de la catedral levantaron barricadas grupos de jóvenes y pobladores del barrio Jorge Dimitrov, estos últimos en una antigua y contenciosa relación con la Policía, y por ello excluidos de toda posibilidad de ciudadanía. Este grupo se enfrentaba a pedradas con las fuerzas policiales a fin de abrir paso a los estudiantes, mujeres y hombres, y que pudieran pasar de la universidad a la catedral, lo que logró la mayoría a media tarde.

En la Carretera a Masaya dos plantones autoconvocados apostados en puntos distantes de esa vía se juntaron repentinamente en el punto más alejado del centro e iniciaron una marcha enardecida de regreso que gritaba: “¡A la UNI, a la UNI, a la UNI!”. Mujeres y hombres profesionales, oficinistas de edificios aledaños que se habían sumado a los plantones, jóvenes autoconvocados, profesores universitarios, adultos mayores, excombatientes y también estudiantes se juntaron en una gran marcha que tenía que atravesar el espacio ocupado por los grupos de choque de la JS ubicados en la Plaza de las Victorias para lograr llegar a la UNI. La marcha finalmente topó con el cuerpo antidisturbios de la Policía Nacional; la JS había desaparecido. Era media tarde. Objetivo logrado: disminuir presión sobre la UNI. La marcha resistió la primera embestida, pero finalmente fue dispersada bajo el ardor y el ahogo producido por los gases lacrimógenos y las balas de goma. Diversos

segmentos de la marcha se reagruparon a los gritos; equipos de jóvenes paramédicos ayudaban a quien caía en la huida, mientras todos reintentaban, sin éxito, romper la muralla policial. Esto se repite varias veces, hasta que algunos jóvenes gritan “¡Hey, hey, vámonos a hacer plantón otra vez a...!”. Esa misma noche, gran parte de las personas que participaron en las protestas, incluso aquellas menos jóvenes que no se atrincheraron o que siguieron montando plantones y corridas sucesivas en diferentes lugares, lograron ver desde sus teléfonos o en las noticias televisadas que lo que se había vivido en su plantón o en su marcha pasaba también en todos lados. El efecto hongo de las insurgencias juveniles iniciadas en abril y en su ciclo de vida, la capacidad de proliferar como esporas nació y se instaló ese día en el subsuelo del país, y al igual que esos órganos microscópicos, resistió y resiste ante toda adversidad, para propagarse y lograr su supervivencia.

Fueron días duros, la diversidad y multiplicidad de actuaciones políticas vino acompañada de un recrudecimiento de la represión, aun así, el horror y la muerte concurrieron junto con la alegría y la vida. La gente ejercía su autonomía. En dos de las rotondas principales de la Carretera a Masaya, la Jean Paul Genie y la de Ticuantepe, donde hubo “arbolatas” plantaban árboles, se instalaban vírgenes y/o cruces con los nombres de los asesinados, se pintaban proclamas: “Queremos justicia”.<sup>43</sup> Después de varios días de tensiones e incursiones nocturnas de grupos de choque que destruyeron la efigie de la Virgen de Cuapa<sup>44</sup> instalada por los grupos que autogestionaban el follaje, la tierra y el hierro de la rotonda de Ticuantepe, la alcaldesa de ese municipio tuvo que negociar qué virgen poner y dónde. La efigie quedó según diseño autogestionario.

---

43 <http://diariometro.com.ni/nacionales/175187-pobladores-reinstalan-cruces-y-llevan-a-la-virgen-de-cuapa-a-la-rotanda-de-ticuantepe/>

44 Esta efigie trajo al espacio de disputa una cuestión compleja y poco discutida de la historia reciente del país: la Virgen de Cuapa es la representación de una virgen campesina cuya narrativa de aparición se localiza en los años más cruentos de la guerra de los años 80, en un territorio identificado en su mayoría como “contra”. Esta “aparición” dio lugar a que en el catolicismo y en el imaginario popular del campesinado antisandinista surgiera la creencia de que esa virgen traería la paz. En los años 80 los sandinistas la llamaban la “Virgen de La Contra”.

## Captura de pantalla 1



Fuente: Cuenta Twitter del periodista Maynor Salazar. 21 de abril. Rotonda de Ticuantepe. En el video se escuchan gritos, pitos y pailas.

Los sonidos de las pailas,<sup>45</sup> las vuvuzelas y cualquier cosa que hiciera ruido y elevara el sonido de las revueltas se hicieron frecuentes para contener a la Policía, para denunciar al estado, para proclamar inconformidad, para “volverlos locos”. Los plantones y marchas de protesta carecían de tarimas y podios, las voces circulaban de forma horizontal con gritos, voceo, murmullos y pasamanos de artefactos de lucha, viejos y nuevos, en una interacción directa, cuerpo a cuerpo. Las cabezas sólo se alzaban para vitorear las hazañas de los que subían a ... o para ver árboles de metal caer, o rótulos gubernamentales arder, o banderas rojinegras descender obligadamente de las astas de parques y lugares públicos donde el estado las había impuesto arbitrariamente por más de once años, así como el color rosado chicha impuesto por la vicepresidenta. En las protestas predominó, y predomina, una y otra vez, el azul y blanco, los colores de la bandera de Nicaragua.

**23 de abril.** “(...) Una multitud de ciudadanos nicaragüenses caminó desde la rotonda Rubén Darío, en Metrocentro, hasta la sede central de la UPOLI, para expresar su solidaridad con los estudiantes, y su rechazo a la

45 En la lucha contra la dictadura somocista un objeto usado para proclamar la oposición del pueblo fueron las pailas: mujeres de diferentes clases sociales hacían sonar cazuelazos para mostrar su rechazo al régimen somocista. En la actualidad muchos hombres se han sumado a estas prácticas políticas.

violencia desplegada en contra del pueblo, que dejó alrededor de 30 fallecidos” (Olivares, 2018).

La monumental marcha hacia la UPOLI sin ruta prevista fue otra de las demostraciones de cómo funcionó el cuerpo colectivo en la calle. Se llamó la “Caminata por la paz y el diálogo”. Antecedente principal: la noche anterior había sido de horror, escenas que se multiplicaban en las redes sociales sobre ataques de fuerzas policiales y paraestatales al estudiantado y jóvenes de los barrios aledaños a la universidad ya atrincherados, acontecimiento relatado páginas atrás. El otro antecedente resulta contextual aunque no inmediato: el cuestionamiento generalizado al *statu quo*, que circulaba por todas las redes sociales, planteado por un variopinto conglomerado de sectores. Por su papel en la convocatoria a la marcha del 23 de abril, nos centraremos en el análisis de los cuestionamientos dirigidos al Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP).

Para fines de este escrito podemos agrupar en dos tendencias estas críticas: por un lado estaban quienes planteaban que si era cierto que el sector empresarial había roto el “acuerdo” con el gobierno, entonces que lo demostrara saliendo a la calle con el pueblo. Por otro lado estaban quienes creían que la cuestión más bien radicaba en la barrera ideológica de salir a marchar con la empresa privada, misma que había formado parte de las élites que llevaron al país a la situación del 18 de abril de 2018, que marginó a todos aquellos que se opusieron a su proyecto económico y al orden social que este requería, y que impulsaron, junto con el estado, un orden que agudizó el despojo y la desigualdad en el país. En los acalorados debates virtuales de esos días una participante opinó airadamente en un foro de Facebook sobre si participar o no: “No le voy a dejar la calle a los empresarios”. Mostrar que la calle es de las insurgencias y responder a la urgencia de acciones en ese espacio de repudio masivo a la actuación del estado —que puso en el sepulcro los cuerpos jóvenes de estudiantes y trabajadores— saldó la cuestión: el pueblo salió y marchó en Managua;<sup>46</sup> mucha gente vestía de luto por los asesinados, y acudió de blanco a la convocatoria que había hecho el COSEP. Hubo también manifestaciones en otras ciudades del país.

Puestos ahí, en Managua, se respiraba dolor contenido. Las fotos de los asesinados acompañaron toda la manifestación: fotos, rostros, nombres y apellidos de cada uno de ellos en singular. Además de incontables gestos callejeros que se fueron produciendo en la marcha. Había una energía emanada de los cuerpos. Nos detendremos para hablar de ello como parte de la política. Si bien el plan inicial convocaba a una marcha con trayectoria más bien breve hacia la UNI, cuando la presión de la gente aglomerada en la rotonda Rubén Darío, lugar de la convocatoria, se hizo inmanejable por el imparable arribo de personas que se sumaban, la multitud empezó a moverse. Alguien dijo: “¡A la UPOLI!”. La gente se puso en marcha y al llegar a la rotonda siguió hacia la derecha con rumbo a la UPOLI, en vez de doblar a la izquierda en dirección

---

46 Testigos hablan de que fue sin lugar a duda la marcha más grande que hasta ese momento se había dado en el país.



a la UNI, como había anunciado la convocatoria. Fue una caminata de más de seis kilómetros, según registros; no hubo trayectoria prevista, no hubo dirigentes. La gente se movió como si siempre hubiera sabido cuál dirección tomaría, con fluidez, sin contradicción.

La ruta original de la marcha trazada por el sector privado fue modificada por los ciudadanos autoconvocados hacia la UPOLI, el bastión universitario que todavía no ha podido ser quebrado por la represión. En su camino, los manifestantes pintaron de rojo la fachada de la sede de la Policía Nacional en Plaza el Sol como protesta a los asesinatos de los jóvenes.

Los símbolos Ortega Murillo fueron derribados por los manifestantes. Los rótulos con los rostros de la pareja presidencial fueron pateados y en su lugar fueron colocadas banderas de Nicaragua. (Crónica de Iván Olivares, *Confidencial*, abril 24, 2018).

Al llegar al sector de la universidad, la calle resultó insuficiente para la cantidad de gente que la invadió. Tanto los que no recorrieron la ruta hasta el final como los que llegaron hasta la universidad buscaban un lugar sin tarima, ese espacio donde un desconocido daría un discurso reproducido a través de parlantes y micrófono o megáfono e inaugurara o clausurara con él las típicas marchas políticas. La mayor parte de la aglomeración alzaba la mirada para ver a las y los atrincherados apostados en lugares altos de la infraestructura de la universidad en su deseo de ver la marcha. Las personas que llegaron a la UPOLI buscaban alcanzar a las muchachas y muchachos. Fue como una romería a un lugar sagrado, con filas de gente que entraban y salían entre el aire sofocante de la multitud, aunque estaban al aire libre y no en una iglesia o un templo cerrado. Hubo que abrirse paso entre el gentío, llegar a los portones de la universidad para ver e incluso tocar a “los muchachos”. Fue un apiñamiento de gente diversa y hasta opuesta en otros terrenos de la política que estaban allí para agradecer, rendir tributo, honrar en un plano horizontal a quienes estaban arriesgando la vida, y que nos regalaron, de nuevo, la ilusión, la esperanza de cambiar el país. En un plano de iguales no se puede endiosar a los héroes, como ha sido la norma. En ese lugar, un segmento de un barrio popular de Managua, Villa Progreso, lugar de asedio policial hasta el cierre de este capítulo, proclamaron, sin que hubiera un guion preparado, que las juventudes y la “justicia” son motores de la lucha.<sup>47</sup>

Suceden acciones tras acciones. Marchas, plantones y otro tipo de demostraciones convocadas por diversos actores o autoconvocadas, imposibles de describir con propiedad en este texto.

**7 de mayo.** Atrincheramiento de la UNAN, acción que se concibió en las dinámicas estudiantiles ya fortalecidas tras 19 días de lucha en las calles y en los atrincheramientos universitarios anteriores; la acción de atrincherarse no sólo reivindicaba su autonomía, era la biopolítica que atravesaba esta

---

47 <https://confidencial.com.ni/ahora-minuto-a-minuto-la-caminata-de-miles-de-nicaraguenses-en-managua/>

<https://confidencial.com.ni/marcha-multitudinaria-eran-estudiantes-no-eran-delincuentes/>



lucha, donde la gente desde un inicio puso y pone el cuerpo con el que realiza el *performance* y con el que también puede ser aniquilada y morir. Agamben, en su *Homo Sacer* (2016) construye desde el concepto de Foucault la idea de que en el portal de la modernidad el estado, en su versión estado-nación, no sólo decide cómo morimos sino también cómo vivimos. Por tanto, toda política es biopolítica y en ella la *nuda vida* es la forma de vida donde el ciudadano, cualquiera que sea su sexo, es despojado de su ser político y es sacrificable.<sup>48</sup> Khanna et al. (2013) le dan una vuelta a la perspectiva de Agamben donde la biopolítica es la regulación de la vida de los seres humanos por parte del estado. El grupo de trabajo en el que participa Khanna fijó su mirada en las condiciones por las cuales la *nuda vida* y la cuestión misma de la muerte y la vida se convierten —por aquellos grupos y personas cuyas vidas son desechables— en una acción política efectiva. Cuerpos como instrumentos de lucha, cuerpos como el del maratonista conocido como Don Alex, de quien hablaremos más adelante, o cuerpos aglomerados actuando tácticas de resistencia como las que ocurrieron en los tranques y barricadas. De esto forma parte también la insistencia de las juventudes y autoconvocados de no incurrir en la lucha armada, a pesar del disciplinamiento colectivo que el régimen se propone imponer a punta de balas, encarcelamiento y amenazas a través de comunicados y continuas prohibiciones.

**9 de mayo.** Rotonda Rubén Darío en Managua. En una especie de simulación-adaptación-contrapropuesta al “Te pica el culo” del “Comandante Caperucita”, mujeres jóvenes autogestoras de la basura usan camisetas con la leyenda “Te pica el vicho. No te han dicho”. A petición del público, detuvieron su trabajo para dejarse tomar foto, exhibieron la camiseta, orgullosas y divertidas por haber llamado la atención.<sup>49</sup> Su marcha continúa bajo la amenaza de ser reprimidas. Con su camiseta y su labor demuestran su humor, su poder de apropiación del espacio público, su irrupción contra la norma y su voluntad de gestionar el espacio en colectivo.

Lo usual en las marchas que se convocaron en esos meses, salvo cuando había balazos, golpes y garrotazos, era que en las protestas, principalmente eran las juventudes las que autogestionaban el manejo de la basura, se organizaban en pequeños grupos que recorrían las marchas con bolsas grandes; a veces eran personas en solitario, como una chavala pelo rosado *punky* que por su cuenta y voluntad limpiaba de basura la Carretera a Masaya.

---

48 Cabe señalar aquí que la enunciación sobre las vidas sacrificables y desechables ya había sido desarrollada por Aimé Césaire a propósito de las vidas de las poblaciones negras esclavizadas. En el foco de Agamben está el campo de concentración nazi y la experiencia judía.

49 Dada la situación actual del país, como medida de protección se han difuminado los rostros de las personas en las fotos.



Fuente: Jessica Martínez Cruz. Colección Makarov. Marcha Nacional por la Democracia en la Rotonda Rubén Darío, Managua.

Por momentos, la dinámica de la política de la calle de la que hablamos logró un reconocimiento entre pares que no se ha alcanzado en el ámbito de la gestión del poder estatal. Igualmente, esta dinámica materializó formas de expresión y comunicación entre sectores y grupos tan antagónicos como las feministas y la gente católica, o evangélicos y católicos, que evadieron, fracturaron e hicieron irrelevantes para la calle los mecanismos estatales y del mercado para controlar y formalizar la política, que habían sido hegemónicos en la gestión del poder en el país. Hablamos aquí, por ejemplo, del “pacto” entre el partido de gobierno FSLN y el PLC (Partido Liberal Constitucionalista) establecido desde 1998. Ese pacto allanó el camino para que el Frente Sandinista regresara al gobierno en 2006 y se reeligiera en las siguientes elecciones. Algo similar ocurrió con el “modelo de consenso” entre el Frente Sandinista y el sector empresarial, agrupado principalmente en el COSEP, que permitió el afianzamiento de un gobierno autoritario con estabilidad macroeconómica en los últimos once años. Estas prácticas que emergen en la calle como espacio privilegiado de esta política evocan las ideas de Luis Tapia sobre el subsuelo político. Tapia define el subsuelo como el lugar donde sociedades como las nuestras —él habla de Bolivia— urden hoy en día las transformaciones del orden social, conmoviéndolo hasta sus cimientos (Tapia, 2008). También evoca la propuesta de infrapolítica del Colectivo Situaciones de Argentina, que supone la capacidad de demostrar:

La intolerabilidad de ciertas situaciones (privatización de la ciudad y de las tierras, actos de racismo, degradación de la inversión pública en escuelas y

hospitales, contaminación y robo de recursos naturales, violencia doméstica, precarización del trabajo, etc.) y, al mismo tiempo, independizar prácticas y enunciados de la red hegemónica que los preformatea (Colectivo Situaciones et al., 2012).

Un alto aquí. Como propone Gustavo Esteva inspirado en el dos de octubre de 1968 en México, a 50 años de la matanza de Tlatelolco, los reflectores no sólo deben dirigirse al año 68, sino a toda esa “década revolucionaria” en el mundo. Además, escribe en coincidencia con los acontecimientos en nuestras calles: “(...) tenía razón el finado *sup Marcos* cuando señaló que 68 era más que Tlatelolco. Fue ‘la calle como territorio de la otra política, la de abajo, la nueva, luchadora, la rebelde’. Fue ‘aprender de la abierta confrontación entre varias formas de hacer política’. Treinta años después, escribí en 1998, ‘la lucha continúa’” (*La Jornada*, octubre 8, 2018).

El alto que propone Esteva, a propósito de recordar revueltas y masacres, resulta ser uno de los puntos medulares de nuestro argumento: la urgencia de apuntar los reflectores al pasado, y poder ir así tras esa memoria. Lo cual nos acerca aún más a la potencialidad de centrarnos en la producción de la performatividad política actual.

A la hora de hablar yo sé muy bien qué decir,  
y la mentira la verdad nunca podrá contradecir,  
por delito de franqueza querrán mi mente encarcelada,  
pues de justo su justicia jamás ha tenido nada  
(“Renfan”, 2017).

“Ésta es mi escuela del pensamiento” era la frase inicial que Franco “Renfan” Valdivia decía en sus *raps* publicados en la red. Era, además, el nombre del álbum que publicó. Fue asesinado el 20 de abril de 2018 durante las protestas en Estelí, en un parque, frente a la Alcaldía. Tenía 24 años, era estudiante, padre, árbitro de béisbol y rapero, con dos lugares nombrados en su memoria, según lo describen en uno de los perfiles que está disponible en las redes (Villavicencio, 2018). “Renfan” es parte de una generación de raperos y raperas, cuyo compromiso, desde hacía varios años, era hacer música de fuerte crítica social. Música no sólo dirigida al estado y su aparato —la canción citada habla del proceder injusto de la Policía— sino también a la sociedad. “Renfan” había postado en su cuenta de Facebook el 18 de abril: “...Y aunque a mi vida días le reste. Seguiré diciendo verdades cueste lo que cueste. Sandino tenía un sueño y les aseguro que no era éste. Que les moleste que proteste” (Miranda, 2018). La presión de los familiares de Franco Valdivia y de la familia de Orlando Pérez, adolescente asesinado ese mismo día en Estelí, consiguió la exhumación de sus cuerpos para realizarles un análisis forense, y logró que permitieran la presencia de un abogado independiente con conocimientos de medicina forense. El peritaje fue concluyente sobre la existencia de francotiradores:

Según el abogado (Francisco Raúl Ortega Guzmán)... “El proyectil de pólvora entró sobre la ceja izquierda de arriba hacia abajo, lo que indica que el tirador estaba en posición privilegiada, es decir estaba en superficie alta respecto a la víctima. Esta información es determinante porque ubica al ejecutor” (100% Noticias, mayo 6, 2018).

Frente a la violencia estatal florece en la calle un sentido de justicia, tanto en las juventudes como en la gente en general. Fue en ese espacio de la política donde se produjeron las tácticas de contención contra el estado: el tranque, y las biopolíticas: el uso performativo del azul y blanco. Estas prácticas permitieron a la población encontrarse, identificarse, agruparse, actuar políticamente y ejercer autonomía, entre otras aún posibles de describir, fuera ya del alcance de este escrito.

### 5.1 La política del tranque: De mercados, barricadas y atrincheramientos

“Cuando la pesca se vino encima en la barricada yo me escondí...” dice en tono chinamero la canción *Yo me enamoré* (Los minúsculos) del grupo musical La Cuneta Son Machín. Hacer tranque, levantar barricadas, atrincherarse fue desde el primer momento un movimiento de autodefensa y protección.

Vale recordar que en el país existe una larga historia de lucha por la autonomía universitaria, que viene desde los años de la dictadura somocista. Parte de ella fueron las huelgas estudiantiles por el 6% constitucional en los años 90. En la memoria más reciente se encarna Roberto González “El Chino”, estudiante de tercer año de Derecho de la UNAN Managua, de 24 años, asesinado el 20 de abril de 1999 por el impacto de una bala de goma disparada por la Policía. Hecho ocurrido frente al Banco Central de Nicaragua. Diecinueve años después y en fechas cercanas (18 y 19 de abril de 2018), las juventudes, estudiantes y autoconvocadas estaban decididas a ocupar la calle para demostrar su apoyo a las personas adultas mayores y manifestar su descontento ante la corrupción, el autoritarismo, la centralización de decisiones por parte del estado y el control estatal sobre los medios de comunicación. El 19 de abril de 2018 era evidente la indignación contra la Policía y las fuerzas de choque de la JS. La determinación parecía venir de las entrañas, basta con mirar las escenas. Las muchachas y muchachos, además, gestionaban el tranque para no interrumpir el tráfico de forma permanente, y para que así lo notaran quienes pasaban:

Prensa libre sí se suma. Ortega y Somoza son la misma cosa. Señor, señora, no sea indiferente, se están robando el INSS en la cara de la gente. [Otra versión:] Señor, señora, no sea indiferente, están matando gente en la cara de la gente. No queremos violencia. Pueblo Unete. Fuera Daniel, Fuera Daniel. El INSS es del pueblo, no del estado”.<sup>50</sup>

---

50 <https://es-la.facebook.com/Canal100Noticias/videos/asi-empez%C3%B3-la-protesta-contra-reformas-inss-en-sector-upoli/1847815355526329/>

En las universidades las clases quedaron suspendidas, según registran las noticias: los portones de todas estaban cerrados. Fue reprimido el plantón de la UPOLI en la mañana del 19 de abril que sumó a estudiantes de la UNI RUPAP (Recinto Universitario Pedro Araúz Palacios). En el momento del conflicto con la Policía y fuerzas de choque, los y las jóvenes se replegaron hacia los portones de la universidad; una joven furibunda exige a quienes resguardan los portones y todavía dudaban, que les abran: “Es nuestro derecho constitucional como estudiantes, por eso la universidad recibe el 6%”.<sup>51</sup> El acto de protesta forzado a replegarse hacia el interior de la universidad hace de la protesta el *performance* del atrincheramiento. Al día siguiente pasa igual en la UNA. Este movimiento que reactiva la subyugada autonomía universitaria, olvidada a estas alturas por muchos, fue en sí mismo un ejercicio de autonomía, acto que rompió el “mapa policial” de lo posible, en palabras de Rancière (2010); un orden normalizado por la propiedad sobre el poder por parte de UNEN en los recintos universitarios.

El 7 de mayo inició el emblemático atrincheramiento de la UNAN Managua: el llamado a clases de la universidad más grande del país y su toma por parte de estudiantes y juventudes autoconvocadas de todas las edades, desde adolescentes hasta exalumnos y exalumnas, quienes exigen la salida de UNEN, trastorna la geografía vial de la capital por su ubicación central. Al igual que la UPOLI y la UNA, el recinto pasó bajo asedio policial y parapolicial y causó víctimas fatales entre los chavalos que estuvieron atrincherados hasta el traumático 13 de julio.

### Sólo el pueblo salva al pueblo

Recuerdo esas palabras que se convertían en gritos de uno de los compañeros en esa barricada del Arlen estábamos cerca de la rotonda mientras  
las ráfagas de tiros de las armas de los paramilitares  
cómo saber si viviré cuando las balas te pasan avisando la muerte  
o saber que morirás pero sin miedo después de ver agonizando a  
Chester y de ver cómo un compañero agonizaba después que un tiro atravesara  
su cabeza al Chele Gato que murió solo con su bolso que contenía tres  
sobres de Tang que era para hacer fresco para los mismos compañeros de las  
barricadas pero el día la Marcha de las Flores murió...

(PdP, Puesto médico Arlen Siu, UNAN).

Los atrincheramientos en las universidades —algunas con una temporalidad más larga que otras, unas fugaces y otras más duraderas— han contado con el respaldo popular en muchos momentos de sus luchas por la autonomía. Basta recordar el apoyo del sector transporte o de mercados en las huelgas estudiantiles del 6% en los años 90. Sin embargo, los fuegos de abril dan cuenta de disputas centrales que se entretajan como maraña en el país

---

51 <https://www.youtube.com/watch?v=W3WTLbSnI7A>

y que hay que intentar desenredar: aunque existe un rechazo a los manejos de la UNEN y la JS, las revueltas no están convocadas en las juventudes universitarias por esta oposición en singular, están constituidas por una pluralidad de llamados: las pensiones del INSS, Indio-Maíz, democracia para todos y todas y de todo tipo, el llamado a la justicia y el cese de la represión. No es pues un solo llamado identitario político como juventudes universitarias, sino al estilo de los movimientos *Ocuppy* y *Tahir Square*: pluralidad. En palabras de Rancière:

Movimientos como los *Ocuppy Wall Street*, por dar un ejemplo, resultan de la conjunción de muchos grupos, de muchas identidades, de muchas formas de subjetivación. En este sentido, el lugar de los oprimidos es heterogéneo, es múltiple, (...) pero a la vez estos oprimidos se construyen a sí mismos en oposición a la gestión neoliberal del poder (Rancière, en Galende, 2016).

En esta línea de pensamiento queremos insistir en la novedad de la propuesta. La Coalición Universitaria y las expresiones de los movimientos universitarios que forman parte de ella, y de la Alianza Cívica, y ahora la UNAB (Unidad Nacional Azul y Blanco), no existían antes del 18 de abril. La hegemonía de UNEN en el ámbito nacional o del CUUN (Centro Universitario de la Universidad Nacional) en León y el control estatal en las universidades era casi total en términos organizativos formales.<sup>52</sup> La irrupción en el orden natural de dominación que se había instalado se produjo desde muchos lugares, y desde ellos hablan las juventudes en insurgencia. En términos formales, las juventudes estaban desorganizadas como estudiantes antes de abril, y la modalidad de su organización resulta ser uno de los desafíos al poder estatal, que quiere evitar las nuevas protestas que surgen a pesar de su brutal represión. El efecto hongo que identificamos en el subsuelo político del país puede también ilustrarse con la idea de rizoma que emplean Deleuze y Guattari, expresiones de una forma sin un centro fijo: “Un rizoma puede ser roto, interrumpido en cualquier parte, pero siempre recomienza según ésta o aquella de sus líneas, y según otras” (Deleuze & Guattari, 1988, p.15 en Arditi, 2014, p.11). Es esa pluralidad lo que hace imposible el control estatal sobre la protesta.

---

52 En algunos de estos artículos se hace referencia a los descontentos, trifulcas y acusaciones entre los grupos de estudiantes contendientes durante las elecciones en recintos universitarios o en las elecciones nacionales de la UNEN en diversos años. De manera implícita e invariable los artículos publican que las “planchas” [planillas] estudiantiles que quedaban eran las que el partido [FSLN] decidía. En este panorama sólo la UNA parece haberse librado de esa hegemonía: es el único de los movimientos estudiantiles actuales que goza de la representatividad ganada a través de una elección antes del 18 de abril.

<https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/96849-siguen-disturbios-elecciones-rucfa/>

<http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/191121/violencia-y-amenazas-tras-las-elecciones-en-el-rucfa/>

<https://confidencial.com.ni/elecciones-unen-con-candidato-unico/>

El título del poema del adolescente atrincherado de la UNAN “Sólo el pueblo salva al pueblo” ha sido una de las consignas revividas en estos tiempos. Esta resonaba en todos lados como en esas barricadas en la capital y ha sido usada con mucha fuerza por el Movimiento Campesino Anticanal y por una de sus líderes icónicas, doña Francisca “Chica” Ramírez, ahora en exilio forzado. La consigna en voz de doña “Chica” recoge la idea de una estrategia defensiva y de presión del campesinado y el pueblo autoconvocado en los tranques. Así, ante la imposibilidad de acantonarse por carecer de sentido militar y ante la necesidad de presionar al gobierno y detener la violencia estatal, las personas, los grupos y colectivos no organizados y los movimientos y organizaciones sumadas a las revueltas de abril “entrancaron” el país. Al menos en Jinotega, Masaya y León, las barricadas sirvieron para detener las amenazas de saqueo y agresión en los mercados ejecutados por las JS y otras fuerzas parapoliciales, según refieren diversas publicaciones de medios de comunicación.

La política del tranque, ya extendida, se arreció por el ataque al tranque de León del 24 de mayo de 2018, cuando hirieron gravemente al estudiante de medicina Manuel de Jesús Chévez, quien murió días después. Igualmente por el ataque a un plantón en Yalagüina, Madriz. También por la falta de resultados del diálogo que se había iniciado el 16 de mayo.

“Hacer masa”, como dijo doña Francisca Ramírez, alude a estar juntos, protegerse, detener la violencia y actuar/estar en libertad. Parte de esta política consistió en presionar por la salida del presidente también, porque se consideraba que esa era la única alternativa que garantizaba la vida de las personas que participaban en estas protestas. Doña Francisca analizó este comportamiento del estado como una política de dueñitud y una estrategia pública de disciplinamiento a base de balas. Ambas, política y estrategia, explican la negativa de levantar tranques, barricadas y atrincheramientos:

(...) es que Daniel firma y no cumplen, se han enfermado tanto del poder que se sienten dueños de Nicaragua, se han enfermado tanto que no sólo se creen que son los dueños: se creen que pueden quitarnos la vida... es que no nos queda otro camino a los nicaragüenses; los nicaragüenses tenemos que seguir adelante; Daniel hoy nos ve como enemigo, y si nosotros nos vamos a sentar de regreso en nuestras casas, uno a uno nos va ir deshaciendo, porque si en las masas es capaz de tirar balas sin lástima, mandar camionetas a tirar balas ¿qué no va hacer con nosotros cada uno por su lado?<sup>53</sup>

Después de la masacre del 30 de mayo los tranques y barricadas proliferaron en varios puntos del país, y creció la presión para llamar a paro nacional. Es clave retomar el enraizamiento de estos *performances* políticos en los territorios donde actuaban ejerciendo su autonomía. Por falta de espacio,

---

53 <https://www.youtube.com/watch?v=wxNY5hqfOUM>

Las palabras de Doña Francisca fueron premonitorias de lo que vendría después de la desaparición de los tranques, situación que perdura hasta ahora: son práctica cotidiana los secuestros y encarcelamientos sin orden judicial ejecutados por las fuerzas del Estado.



nuestro análisis se ha centrado sobre todo en acciones ocurridas en la capital, sin embargo, como ya expresamos antes, los actos políticos de los que hemos querido dar cuenta ocurrieron en los territorios y de forma territorial. El líder campesino Medardo Mairena, al terminar una de las sesiones del Diálogo Nacional en la que el gobierno exigía el levantamiento de los tranques como condición para que continuase este mecanismo de diálogo entre resistencia y gobierno, declaró: “El pueblo de Nicaragua se ha manifestado; últimamente hay muchos tranques autoconvocados, y lógicamente cada tranque tiene su autonomía para funcionar”.<sup>54</sup> Medardo Mairena y Pedro Mena, también líder del Movimiento Campesino, fueron detenidos en el aeropuerto el 13 de julio de 2018 cuando viajarían a Estados Unidos en representación de la Alianza Cívica. El proceso judicial que siguió a su detención fue señalado de tener numerosos vicios y ser violatorio de sus derechos humanos. Mientras estuvieron en prisión, ambos líderes fueron considerados presos políticos por la población autoconvocada.

En las ciudades y localidades donde había tranques se produjeron actos de declaración de autonomía o ejercicios de autogobierno, nombrados como tales en las redes y en las calles. Estos actos sólo ilustran las muchas formas de autoconvocatoria, autoorganización y autogestión que se fueron produciendo en las dinámicas de las calles como parte de su emergencia en el espacio de la política. Son varios los que podemos mencionar: la gestión colectiva y popular en el sostenimiento de los tranques de La Trinidad, en Estelí; de Ticuantepe, en Managua; de Diriamba, Jinotepe y Dolores, en Carazo; y de Juigalpa, en Chontales. La variedad de autoconvocatoria, autoorganización y autogestión incluía, por ejemplo, garantizar la provisión de comida, el manejo de la basura y la gestión de la seguridad en las localidades. Las actuaciones singulares en las que se declaró la autonomía del gobierno central en Masaya y León son también muestra de esta variedad de actos dentro de la política del tranque. León fue la primera ciudad en llamar a un exitoso paro total el 12 de junio;<sup>55</sup> sobre ese día también se guarda uno de los recuerdos más atroces de la represión por parte de las fuerzas policiales y parapoliciales. Otro acto fue el de los arrinconamientos a los gobiernos locales y a la Policía Nacional, por su papel en la represión y el saqueo en lugares tan distantes como Matiguás, en Matagalpa; la ciudad de Granada; la ciudad de Jinotega; y Jinotepe, en Carazo, además de otros.

Después llegó la “Operación Limpieza”.

El breve relato de la fuga de “El Lobo” y sus compañeros de barricada también reapropia al héroe y lo ancla al espacio que se disputa donde se produce el acto político. Una semana después de la “limpieza” de Masaya, “El Lobo”, uno de los dirigentes de barricadas, contó a Univisión cómo huyeron él

---

54 [https://www.youtube.com/watch?v=P1P6gA\\_8U64](https://www.youtube.com/watch?v=P1P6gA_8U64) (suspensión de tranques y Medardo Mairena: minuto 10.54/16.57)

55 El primer paro nacional tuvo lugar el jueves 14 de junio de 2018.



y su grupo de las fuerzas policiales y parapoliciales por la laguna de Masaya. No se representó heroico: contó que de no haber sido por sus compañeros, él se habría quedado en la laguna, derrotado por el cansancio. Habla también de su llanto:

“El Lobo” se desplomó en una butaca, pidió que lo dejaran solo y comenzó a llorar desconsoladamente. Eran sentimientos encontrados. Lloraba por todo: porque pensaba que no iba a volver a mi casa, por cómo nos ganaron el territorio, por los cuatro chavalos que mataron, por dos compañeros heridos, lloraba por la situación que vivimos en la laguna.<sup>56</sup>

En ese espacio territorio donde se ejerce el terror estatal a través de la “Operación Limpieza” el héroe huye. Cavarero (2009) nos muestra cómo el terror, más que un arma estratégica de guerra ha sido la esencia de la misma, y el miedo es parte indisoluble de esta trama, cosa negada en nuestras narrativas hegemónicas de conflictos. Remontándose a los poemas homéricos, la autora, en su descripción de la confrontación entre griegos y troyanos, describe el efecto de Aquiles –un verdadero “masacrador”– en las tropas de Troya: “Héroes que tiemblan y también saben hacerse ‘maestros de la huida’” (Cavarero, 2009, p.29).

En las fugas hacia la vida o en los sostenimientos de las resistencias y de las acciones de protesta los grupos de mujeres han jugado un papel fundamental. Ellas han puesto el cuerpo una y otra vez. Aquí nos centraremos en una forma particular de protesta: las mujeres sonando pailas para frenar los ataques de las fuerzas antimotines. Barbara Sutton, en su análisis sobre el papel que desempeñan los cuerpos de mujeres en el activismo y en la resistencia política que sucedió a las protestas del 2001 en Argentina pregunta cómo es que el cuerpo, particularmente el cuerpo de mujer, se convierte en vehículo y agente de resistencia (2007, p.129). Nosotras traemos aquí el *performance* corporal de las mujeres de levantar y sonar las pailas contra la Policía en muchos lugares, práctica que fue seguida después por jóvenes y hombres de todas las edades. Otra muestra de ese *performance* consistió en increpar directamente a la Policía armada, y después la gente seguía a esas mujeres en los momentos de mayor represión armada.

Veamos con mayor detenimiento cuatro episodios. El **9 de junio**, cuando cayó el tranque de Ticuantepe en la Carretera a Masaya, ante el ataque de las fuerzas policiales salieron a contenerlo mujeres de diferentes edades con sus pailas; fueron rociadas y dispersadas con bombas lacrimógenas, pero sostuvieron su acción para dar espacio a que “los muchachos” se fugasen del tranque.<sup>57</sup> Ese mismo día en Jinotega una mujer se dirigió a los antimotines apostados en su barrio diciéndoles: “¡Ya, hombre, ya!” y avanzó hasta ellos, seguida por otras mujeres; se inició la revuelta del habla, los pobladores a coro les exigieron finalmente “¡Que se vayan, que se vayan!” y sin más recurso

56 <https://www.univision.com/noticias/america-latina/era-la-unica-salida-la-arriesgada-huida-de-200-jovenes-de-las-balas-de-los-paramilitares-en-nicaragua>

57 <https://www.youtube.com/watch?v=-if6UWXGEYs>

que sus cuerpos y sus palabras lograron sacar a las fuerzas antimotines.<sup>58</sup> Una gesta similar se repite el 23 de julio en las primeras horas del ataque policial y parapolicial al barrio Sandino, conocido como el “pequeño Monimbó” del norte, último bastión de las barricadas en caer; las mujeres lograron contenerlos por varias horas hasta que se les unió una caravana de autoconvocados; las fuerzas policiales y parapoliciales finalmente entraron al barrio y arrasaron con la misma violencia que ejercieron en los otros lugares.<sup>59</sup> En la rotonda Las Flores, en Masaya, ya ejecutada la “Operación Limpieza”, una mujer increpó a un paramilitar armado que detuvo a jóvenes ciclistas y les pidió el carnet de ciclistas. Se interpuso entre él y ellos: “¿Le ve algo a ellos que le puede hacer algo? [...] Usted mire lo que anda, y esta es el arma de ellos: una bicicleta. ¡Son deportistas, señor!”<sup>60</sup> Estos actos contuvieron en varios momentos a los cuerpos antimotines, a los parapoliciales, por la potencia simbólica de la mujer —la mamá, la abuela o la que te da de comer— y por el cuerpo materialmente presente en la calle, como una táctica biopolítica que no sólo contiene, sino que empuja al cuerpo armado estatal.

## 5.2 *El azul y blanco de la calle, la gente azul y blanco en la calle*

Como ocurrió en las marchas anticanal del relato del 2016, la bandera azul y blanco de Nicaragua y el himno nacional han sido parte de los artefactos de lucha. Ambos fueron usados junto a las camisetas estilo béisbol con los colores azul y blanco, las huleras/tiradoras, los morteros, las piedras, los adoquines, las flores y el cancionero político, cuyo repertorio variaba desde cantos testimoniales como “Que vivan los estudiantes”, de Los Guaraguao, hasta los *raps* más provocadores como “Plomo” del grupo Nicoya. Especialmente significativo es el uso de la primera de estas canciones, pues fue usada hasta el cansancio en las luchas del 6% durante los años 90 y los inicios de este siglo. Las revueltas de abril la recuperaron del uso que le daba UNEN.

El himno, cantado al inicio o al final de plantones o durante las marchas, fue invocado como protesta y mantra de protección en los momentos de mayor tensión ante la posibilidad de represión por parte de la Policía, los parapoliciales o las fuerzas de choque. Como mantra a veces tuvo éxito, otras no.

---

58 <https://www.youtube.com/watch?v=DkpS3VBGMs0>

59 <https://confidencial.com.ni/tres-fallecidos-en-ataque-brutal-a-jinotega/>

60 <https://confidencial.com.ni/paramilitar-detiene-paso-de-ciclistas-en-masaya-es-zona-res-tringida-dijo/>

### Ilustración 3: La Macha



Fuente: Fernando Art. Ilustración inspirada en una foto tomada por Maynor Salazar a la “Comandante Masha”<sup>61</sup> en el tranque de Carazo.

El uso de la bandera azul y blanco, gesto usualmente leído como nacionalista, no se presentó en los *performances* como el símbolo sagrado nacional; más bien la gente en la calle, y sobre todo, las juventudes, esgrimían

---

61 El autor de la ilustración nombró su obra como “La Macha”. En redes sociales se le nombró “Comandante Masha”.

la bandera con desenfado y vehemencia. Quien la llevaba, se la ataba con fuerza al cuello o a la mano: bandera capote de toreo, bandera pancarta política, bandera tranque, bandera manta voladora alzada sobre las cabezas, bandera cobija portátil en las marchas, bandera carpa caminante y bandera capa de súper héroe o súper heroína, y otras muchas formas que pudimos observar. El azul y blanco estuvo desde el primer día de las revueltas, usado por estudiantes y autoconvocados ante la hegemonía de las fuerzas de choque, e irónicamente, también ante la Policía Nacional.

El azul y blanco forjó encuentros e interacciones entre personas de diferentes horizontes sociales; dio espacio para soñar en común. La disputa inicial alrededor de las banderas, así como la violencia y las agresiones sufridas por quienes usaban el azul y blanco, alimentaron el sentido insurgente de su uso. La idea de pensar Nicaragua como una sociedad profundamente fragmentada y con un tejido social erosionado fue emplazada por la gente en la calle, espacio que posibilitó una política colectiva. Las ciencias sociales tienen un desafío pendiente acerca de la comprensión de lo común en Nicaragua.

**20 de abril.** Las banderas azul y blanco y la rojinegra ondeaban a la par en los espacios públicos de toda Nicaragua. En Granada y Jinotepe las juventudes, con las emociones a flor de piel, gritaron y actuaron: “¡Quemala, quemala! ¡No tenemos tiempo, que ahí vienen!”; “¡Que viva el azul y blanco!”. Los jóvenes bajaron las banderas rojinegras y las quemaron. Entre las muchas consignas otra voz dice: “¡Hey! ¡Hay que movilizarse, agárrense de las manos, estamos unidos!”... cantaron el himno y al finalizar gritaron: “¡Viva Nicaragua libre!”. Estas escenas se repitieron a lo largo y ancho del país, en videos grabados por celulares, compartidos por Whatsapp y publicados en páginas de las juventudes como maje.com y Facebook. También en redes sociales militantes del Frente Sandinista compartieron videos en los que quemaban sus banderas y carnets de militancia. La bandera azul y blanco no llegó sola a la revuelta, se constituyó en ella como el símbolo que rompió con la saturación del rojo y negro, de la violencia ejercida con lenguaje de amor, de la hegemonía del estado-partido. Son colores resignificados en la calle como promesa de una Nicaragua posible.

**4 de mayo.** Niquinohomo tarde-noche. En el lugar que es la cuna del guerrillero antiimperialista Augusto C. Sandino inició un fin de semana de represión que se extendió hasta el vecino pueblo de Catarina. La disputa comenzó porque los autoconvocados pintaron de azul y blanco el pedestal de la estatua de Sandino, a lo que la JS y las fuerzas de choque de la Alcaldía de Niquinohomo reaccionaron con violencia. Inició un conflicto cuerpo a cuerpo, golpes, gritos y agarrones entre ambos grupos, los colores rojo y negro del Frente Sandinista que lucían en el cuello de Sandino cambiaron varias veces por los colores de la bandera nacional. Luego de una marcha de apoyo a Monimbó, en Masaya, la Policía llegó acompañada por las fuerzas de choque de la JS. Dio comienzo la represión y el asedio a la población.

El **7 de mayo**, Edwin Román, sacerdote de Masaya, sobrino-nieto de Sandino, se presentó a mediar. El conflicto seguía porque la población se negaba a retirarse y dejar la estatua de Sandino con los colores rojo y negro:

El sacerdote dejó la sede de la Alcaldía con tres folios en sus manos, firmados por Pérez [alcaldesa] y el representante de la Policía. Los entregó a los jóvenes que los esperaban fuera del edificio y al leerlos estos corrieron por todo el municipio alzando el documento y al grito de “¡Ganamos, ganamos!”. Además del cese a la represión, se establece que la estatua de Sandino se mantendrá vestida de azul y blanco, sin pañuelos rojinegros o cualquier otro símbolo del Frente Sandinista. Daniel Ortega sufrió una derrota simbólica el lunes en Niquinohomo (Salinas, 2018).

Más tarde, en una sesión con la alcaldesa y autoridades municipales, la población increpó a la autoridad por la represión vivida. A esta reunión llegó Marcia Ramírez, en ese entonces ministra de la Familia; la gente de Niquinohomo irrumpió en el espacio, esta vez haciendo uso de la palabra, y expresó su disenso. Este acto borró los límites impuestos por el mapa policial —entendido este no como el cuerpo de las fuerzas del orden que ejerce una función represiva, sino como el sistema de legitimaciones del orden del poder (Rancière, 2010).

“Sandino sigue intacto” dijo alguien cercano, al presenciar desde nuestros celulares los videos sobre la disputa que ocurría en Niquinohomo. En estas revueltas el héroe nacional fue revisitado, reeditado, revestido y arrebatado de la retórica gubernamental y del Frente Sandinista. Sandino continuó presente en la lírica del *rap* de “Renfan”, en las consignas reescritas para las marchas, en la estatua revestida una y otra vez en el pueblito donde nació.

Azul y blanco también son los colores que usaron sin cesar mujeres y hombres populares de la resistencia gandhiana de estas protestas. Don Alex, el imparable corredor que desde su sexto arresto por su acto maratónico —realizado esta vez en el cementerio “Milagro de Dios” el *Día de los Muertos*—, se encontraba detenido en la siniestra cárcel El Chipote. Doña Coquito, la señora de 77 años, fiel marchista autoconvocada que regaló toda su venta de agua helada, y doña Flor, de 63 años, que bailó folklore en las marchas con un atuendo que ella misma confeccionó, ambas arrestadas el mismo día cuando se dirigían a una marcha, liberadas al cabo de unas horas de presión mediática. A riesgo de cárcel, de golpes y de violencia verbal, él y ellas son ejemplo de cómo se hace biopolítica azul y blanco, cuerpos individuales que subvierten el orden impuesto y actúan su solidaridad, su rabia, su enojo, su desobediencia, así como también su mofa y su parodia del régimen: “Yo vi cómo una joven que andaba bailando fue agredida y luego se la llevaron [la Policía]. Entonces yo dije ‘¿Qué tiene?’ ‘¿Cuál es la molestia?’ Fue entonces que empecé a elaborar mi traje y lo usé por primera vez el día de la Marcha de las Flores” (Niú, 2018). Doña Flor imitó la gesta de una estudiante exatrincherada de la UNAN que fue arrestada después de participar bailando en un plantón frente al portón principal de la UCA. O la repuesta ingeniosa de doña Coquito grabada en un video ante la amenaza de que le iban a “pasar la cuenta”: “Si me van a pasar la cuenta, que sea en dólares”. Doña Flor fue golpeada cerca de su casa, y tanto ella como doña Coquito han recibido toda clase de amenazas.

Así es que estos cuerpos aquietados aparentemente por el encarcelamiento y la represión dan espacio al surgimiento de otros cuerpos. La bandera —otra vez el artefacto de insurgencia y subversión del orden— reapareció en las manos de un maestro motorizado en Camoapa, Chontales, y en un ciclista solitario bajo la lluvia en Camino de Oriente en Managua. El primer desenlace fue el 27 de octubre de 2018 cuando la Policía citó al maestro de Camoapa, Humberto Hernández, quien acudió solo, firme y digno el día de la citatoria con su bandera al hombro, caminando hacia la delegación policial por las calles del pueblo. La gente se autoconvocó para acompañarlo y hacer un plantón en las afueras de la delegación; según el video que circuló en redes algunas personas se presentaron con el “pico rojo”. A su salida el maestro respondió así a un periodista:

Todo bien. Me citaron todavía no sé por qué. Dicen que ando organizando una caravana, me insistieron bastante, pero se portaron a la altura, todo a manera de conversación, no hubo presión, pero sí insistieron bastante en que andaba organizando [—¿Le dijeron algo por portar la bandera azul y blanco?] —No, no. Solamente yo tomé la decisión de salir el jueves en una moto y esta bandera que ando aquí. Yo dije: “Si es por eso, se las voy a entregar” [...] A pie y con mi bandera, porque a raíz que están prohibiendo las protestas, yo me siento como preso político en mi propio pueblo, preso.<sup>62</sup>

En tono tranquilo cerró el acto; con el rostro sonriente dijo que seguirá usando su bandera, e hizo una proclama política contundente: al decir que se siente como “preso político” nombró una coyuntura en que la autoridad estatal niega la existencia de detenciones y encarcelamientos por razones políticas. Al día siguiente, Miguel Mendoza (@Mmendoza1970) reportó en Twitter la invasión de antimotines para impedir la posible caravana de motos autoconvocada en Camoapa.

El segundo relato es el del joven ciclista apostado en uno de los lugares donde iniciaron las revueltas de abril. En una tarde de domingo se detuvo y junto a su bicicleta ondeó la bandera azul y blanco en el Camino de Oriente. Los datos de Galo Gabriel Gradiz, de 33 años y originario de Somoto, Madriz, inundaron las redes al difundirse el video de su detención desde la cuenta Rodolfo@RodolfoNicaragu.<sup>63</sup> Actualmente Galo Gabriel está libre.

Ante la imposibilidad de usar las banderas, otra forma de utilizar el azul y blanco fue en las chimbombas: grandes racimos de chimbombas azul y blanco se echaban a volar al cielo, y de ese modo se cumplían dos propósitos: se evitaba que las personas que así manifestaban su repudio al régimen fueran “agarradas” en el acto por la Policía, y se provocaba la ira y el ridículo de los cuerpos policiales.

Estamos pues frente a estas actuaciones políticas revestidas de legitimidad social ante las audiencias que las miran o las leen, con sentidos

---

62 <https://www.laprensa.com.ni/2018/10/27/departamentales/2489547-policia-de-camoapa-cita-a-ciudadano-solo-por-portar-una-bandera-de-nicaragua-en-su-moto>

63 <https://twitter.com/i/status/1056593619824640001>



y significados profundos de lo que la gente entiende y reclama como justicia (Shankland, en Khanna et al., 2013).

Como hemos venido señalando, el subsuelo político refiere a las prácticas y narrativas políticas que emergen como formas de asociación, interacción, solidaridad y comunicación y que se expresan en forma de “crítica, desdén, ironía, sabotaje, parodia” (Tapia, 2008). En las recientes revueltas el humor ha sido una de las principales tácticas de resistencia, y esto se ha visto claramente en las redes sociales, con los memes, canciones, videos, caricaturas y con las respuestas de doña Coquito y doña Flor ante las agresiones. Este florecimiento puede leerse en el texto cultural y amerita diversidad de miradas. Un solo trabajo no basta para dar cuenta de todas esas prácticas y narrativas. La tarea es gigantesca.

## Epílogo

Los levantamientos urbanos no fueron obra de “los políticos” o de un plan inteligente de la “organización”; al menos no en una dimensión programada como lo dice el mayor estrategia del sandinismo, el comandante Humberto Ortega, cuando reconoce que hubo momentos en que las masas eran la vanguardia, a la que se sumaban los cuadros guerrilleros. Relata que los comandos sandinistas no estuvieron inicialmente a la cabeza de las insurrecciones urbanas; la iniciativa fue siempre espontánea, natural, de un pueblo iracundo que sólo tenía a su favor un coraje ofensivo, una voluntad destructiva, desclasada, con dirección dispersa. Los cuadros sandinistas aprendieron de las masas y no al revés, se dejaron conducir por ellas inicialmente y luego le dieron sentido, es decir, dirección. El sujeto popular se volvió revolucionario (Torres-Rivas, 2011, pp. 364-365).

Los fuegos que avivaron las insurgencias recientes en Nicaragua cuestionan la idea de que las rebeldías son ideológicas. Muestran que los agravios, la indignación, la “arrechura” por lo que se cree justo o injusto es el germen fundamental de la rebelión. Bien dice la consigna: “No somos izquierda, no somos derecha, somos la Nicaragua arrechura”. Barrington Moore lo desarrolló en su amplio trabajo sobre las revueltas: *La injusticia, bases sociales de la obediencia y la rebelión*. Volvemos aquí a la idea de que el cambio antecedió a las revueltas. La irrupción, el desorden, la ruptura son expresiones de un nuevo lugar desde donde se interpela y se convoca a todos y todas. La historia adquirió nuevos sentidos.

La visión de masas actuando sin dirección y sin racionalidad —según la perspectiva de “la vanguardia”— no permite entender las lógicas de las revueltas. La cita de Torres-Rivas nos lleva a cuestionar, desde los estudios de memoria, la narrativa hegemónica sobre el papel del Frente en la insurrección popular: fue el Frente Sandinista quien aprendió del pueblo, y no el pueblo del Frente Sandinista. En sus palabras: “Los cuadros sandinistas aprendieron de las masas y no al revés, se dejaron conducir por ellas inicialmente”. Vemos en estas tácticas —las de la insurrección nacional contra Somoza y las de las revueltas de abril— la emergencia de una memoria larga de rebelión que no es aprendida ni de los textos marxistas, ni de los partidos. La rebelión está más



allá de la ideología; está instalada en el subsuelo de esta sociedad, aprendida de gestos y sentires que es necesario explorar más a fondo.

Es por perspectivas estadocéntricas y partidocéntricas que no hemos entendido las formulaciones políticas de las juventudes. Esta visión ha estado instalada en la sociedad en su conjunto, y al reproducir esta idea, la academia y los medios de comunicación han tenido una responsabilidad. A las juventudes se les etiquetó como apáticas, egoístas, egocéntricas, superficiales. Esos trabajos no comprendieron la política desde los distintos lugares, experiencias y conocimientos desde donde hablaron las juventudes. Estos prejuicios a su vez reforzaron el poder del neoliberalismo sobre los cuerpos jóvenes y sobre la sociedad en general. Y en este juego hay un hecho de honda perversidad: se ha responsabilizado de “su fracaso” a las personas jóvenes, y no a un sistema económico y político que ha cerrado posibilidades de vida, en lo material y en lo simbólico.

Contra estas ideas y poderes han hecho su revuelta las juventudes. Las propuestas de las juventudes consisten, como dice Ardití, en revolver, desordenar: la insurgencia es el plan. El objetivo no es insertarse en el sistema de poder del que han sido excluidas las juventudes y la gente que se ha sumado a las revueltas. El quiebre en la estructura de este sistema permite imaginar otras formas de hacer política. En estas revueltas participaron aquellas personas que el sistema excluyó —y sigue excluyendo— de la ciudadanía.

La apuesta de las juventudes y de la gente que se suma es por un nuevo sistema que no cabe en el modelo de la democracia del voto. Pensamos con Tapia que estas acciones están en el subsuelo, como “la política sin ciudadanía”, como un espacio de ensayo donde se experimentan posibles cambios, reducciones y ampliaciones. Nada está dado. Es desde aquí que retomamos el pensamiento de que en tiempos de crisis las ideas más inusitadas se pueden convertir en política.<sup>64</sup>

---

64 Esta idea fue compartida por Manuel Ortega Hegg durante las discusiones sobre los trabajos de investigación que conforman este volumen.

## Referencias bibliográficas<sup>65</sup>

- Acosta, Yanet; Joao Canavilhas & Vicente Gosciola (2011). La información viral. Estudio del caso del cierre temporal de elBulli. *Pangea*, Año 2, Artículo No. 3, págs. 275-296.
- Agamben, Giorgio (2016). *Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida*. Valencia: Pre-textos.
- Agudelo, Irene (1998). *La política después de la política. Una aplicación del método generacional de Karl Mannheim a los sectores medios de la militancia sandinista nicaragüense*. Tesis de maestría. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Sede México.
- Arditi, Benjamín (2013). Las insurgencias no tienen un plan—ellas son el plan: performativos políticos y mediadores evanescentes. *E-misferérica 10.2 disidencia*, 10 (2). Recuperado de <http://hemisphericinstitute.org/hemi/es/e-misferica-102/arditi>.
- Butler, Judith; Laclau, Ernesto; & Žižek, Slavoj (2003). *Contingencia, hegemonía, universalidad. Diálogos contemporáneos en la izquierda*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Cavarero, Adriana (2009). *Horrorismo. Nombrando la violencia contemporánea*. México: Anthropos.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2018a). *Informe de país Nicaragua. Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua*. 21 de junio. Washington DC. Recuperado de <http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Nicaragua2018-es.pdf>
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2018b). *CIDH expresa preocupación por muertes en el contexto de protestas en Nicaragua*. Washington: CIDH. Recuperado de <http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/090.asp>
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2018c). *Observaciones preliminares sobre la visita de trabajo para monitorear la situación de personas nicaragüenses que se vieron forzadas a huir a Costa Rica*. Washington: CIDH. Recuperado de <http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/233.asp>
- Centro de Investigaciones de la Comunicación (2001). *Jóvenes y cultura política en Nicaragua. La generación de los noventa*. Managua: CINCO.

---

65 Según las normas editoriales APA, los autores y autoras se citan por su apellido, pero su nombre personal queda reducido a una inicial. Sin embargo, en este texto optamos por escribir el nombre personal de las autoras y autores como una manera de visibilizar la diversidad de género en la academia, y evitar con ello invisibilizar el aporte de las mujeres.

- Colectivo Situaciones: Sztulwark, Diego, & Gago, Verónica (2012, octubre). Manifiesto de infrapolítica. El pasaje de las micropolíticas de la crisis a las del impasse. *Epai en Blanc*, (9). Recuperado de [http://espaenblanc.net/?page\\_id=599](http://espaenblanc.net/?page_id=599)
- Cuadra, Elvira & Leonor Zúñiga (2011). *Jóvenes y cultura política en Nicaragua. La generación del 2000*. Managua: CINCO.
- Dada, Carlos (2018, 25 de julio). La generación rota de Nicaragua. *El Faro*. Recuperado de <https://elfaro.net/es/201807/centroamerica/22306/La-generación-rota-de-Nicaragua.htm>
- Da Silva Catela, Ludmila (2017, diciembre). De memorias largas y cortas: Poder local y violencia en el Noroeste argentino. *Interseções* [Rio de Janeiro], v. 19 n. 2, p. 426-442.
- De Certau, Michel (1979). *La invención de lo cotidiano*. México: Universidad Iberoamericana.
- Esteva, Gustavo (2018, 9 de octubre). El Olvido Otro. *La Jornada*. Recuperado de <https://www.jornada.com.mx/2018/10/08/opinion/024a1pol#>
- Galende, Federico (2016, 04 diciembre). Jacques Rancière: “La extrema derecha está volviendo a ser exitosa en su evocación de símbolos identitarios muy primitivos”. *The Clinic*. Recuperado de <http://www.theclinic.cl/2016/12/04/jacques-ranciere-la-extrema-derecha-esta-volviendo-a-ser-exitosa-en-su-evocacion-de-simbolos-identitarios-muy-primitivos/>
- Gallego, Mercedes (2018, 16 de junio). Nicaragua: Asalto a los Pueblos Blancos. *Diario El Montañés*. Recuperado de <https://www.eldiariomontanes.es/internacional/america-latina/nicaragua-asalto-pueblos-blancos-represion-20180716085954-ntrc.html>
- Goitia, Fernando (1999, 22 de abril). Disturbios en Managua tras la muerte de un joven a manos de la policía. *El País*. Recuperado de [https://elpais.com/diario/1999/04/22/internacional/924732017\\_850215.html](https://elpais.com/diario/1999/04/22/internacional/924732017_850215.html)
- Guattari, Félix & Suely Rolnik (2013). *Micropolítica. Cartografía del deseo*. Buenos Aires: Tinta Limón Ediciones.
- Hirsch, Marianne (2012). *La generación de la posmemoria. Escritura y cultura visual después del Holocausto*. Madrid: PanCrítica.
- Hirschmann, Albert O. (1986). *Interés privado y acción pública*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Houtart, Françoise & Genevieve Lemercinier (1983). *Encuesta sobre los modelos socio-políticos y religiosos de los jóvenes en Managua*. Documento de trabajo. Managua: Centro de Análisis Socio-Cultural.
- Houtart, Françoise & Genevieve Lemercinier (1989). *Modelos ideológicos, opiniones socio-económicas y políticas de los jóvenes en Nicaragua*. Documento de trabajo. Managua: Centro de Análisis Socio-Cultural.
- Instituto Nicaragüense de Investigación y Educación Popular (1995). *Testimonios de Brigadistas. Cruzada Nacional de Alfabetización*. Managua: Autor.
- Jelin, Elizabeth (2014, mayo-agosto). Memoria y democracia. Una relación

- incierta. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, 59 (221), 225-242.
- Khanna, Akshay; Mani, Priyashri; Patterson, Zachary; Pantazidou, Maro & Shqerat, Maysa (2013, septiembre). The Changing Faces of Citizen Action: A Mapping Study through an ‘Unruly’ Lens. *IDS Working Paper*. 2013 (423).
- Kinloch, Frances (2004). *Historia de Nicaragua*. Managua: IHNCA-UCA.
- López, Eddy; Martínez, Saúl & Rodríguez, Melvin (2018, 18 de abril). Orteguistas agreden a ciudadanos que protestaban por las reformas al INSS en León. *La Prensa*. Recuperado de <https://www.laprensa.com.ni/2018/04/18/departamentales/2405636-agresiones-protesta-en-leon-inss>
- Milos, Diego (2018). “*Rossana Reguillo, antropóloga mexicana: ‘La oposición al retorno fascista pasa por Twitter y Facebook, pero ellos hacen su chamba por WhatsApp’*”. Recuperado de <http://www.theclinic.cl/2018/10/31/rossana-reguillo-antropologa-mexicana-la-oposicion-al-retorno-fascista-pasa-por-twitter-y-facebook-pero-ellos-hacen-su-chamba-por-whatsapp/>
- Miranda, Wilfredo (2018, 16 de mayo). El barcelonista y el rapero, dos de las víctimas fatales en Estelí. *Niú*. Recuperado de <https://niu.com.ni/el-barcelonista-y-el-rapero-dos-de-las-victimas-fatales-en-esteli/>
- Montenegro, Sofía (2016). *La masculinidad hegemónica en los jóvenes de la posrevolución*, Managua: CINCO.
- Moore, Barrington (1996). *La injusticia: bases sociales de la obediencia y la rebelión*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Niú (2018, 18 de octubre). Tres personajes de la rebelión cívica en Nicaragua. Recuperado de <https://niu.com.ni/tres-personajes-de-la-rebelion-civica-en-nicaragua/>
- Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2018). *Violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua 18 de abril - 18 de agosto 2018*. Recuperado de [https://www.ohchr.org/Documents/Countries/NI/HumanRightsViolationsNicaraguaApr\\_Aug2018\\_SP.pdf](https://www.ohchr.org/Documents/Countries/NI/HumanRightsViolationsNicaraguaApr_Aug2018_SP.pdf)
- Olivares, Iván (2018, 24 de abril). Marcha multitudinaria: “¡Eran estudiantes, no eran delincuentes!” *Confidencial*. Recuperado de <https://confidencial.com.ni/marcha-multitudinaria-eran-estudiantes-no-eran-delincuentes/>
- Ortega y Gasset, José (1985). *El tema de nuestro tiempo*. México: Porrúa
- Parkman, Patricia (2006). *Insurrección no violenta en El Salvador*. San Salvador: Biblioteca de Historia Salvadoreña.
- Rancière, Jacques (2010). *Dissensus on politics and aesthetics* (Editado y traducido por Steven Corcoran). Londres, Nueva York: Continuum.
- Reguillo, Rossana (2017), *Paisajes insurrectos: Jóvenes, redes y revueltas en el otoño civilizatorio* (Huellas y Señales / Biblioteca de Infancia y Juventud N° 2015) (Spanish Edition) Ned Ediciones. Edición de Kindle.

- Reguillo, Rossana (2012), Navegaciones errantes. De músicas, jóvenes y redes: de Facebook Youtube y viceversa. *Comunicación y Sociedad*. 18, 135-171.
- Rivera Cusicanqui, Silvia (2010), *Oprimidos pero no vencidos. Luchas del campesinado campesino Aymara y Qhechwa. 1900-1980*. La Paz, La Mirada Salvaje.
- Salinas, Carlos. (2018, 8 de mayo). La disputa por los símbolos del sandinismo divide Nicaragua. *El País*. Recuperado de [https://elpais.com/internacional/2018/05/08/america/1525747451\\_922429.html?rel=mas](https://elpais.com/internacional/2018/05/08/america/1525747451_922429.html?rel=mas)
- Scolari, Carlos A. (2013). *Narrativas transmedia. Cuando los medios cuentan*. Barcelona: Deusto.
- Selser, Gregorio (1981). *Apuntes sobre Nicaragua*. México: Nueva Imagen.
- Sililia, Paula (2017). *La intimidad como espectáculo*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Solnit, Rebeca (2018, 8 de marzo). “Las feministas han cambiado el equilibrio de poder: ya no hay vuelta atrás”. *eldiario.es*. Recuperado de [https://www.eldiario.es/theguardian/Lentamente-feministas-cambiado-balance-vuelta\\_0\\_747875778.html](https://www.eldiario.es/theguardian/Lentamente-feministas-cambiado-balance-vuelta_0_747875778.html)
- Sotelo, Melvin (1995), *Los jóvenes: otra cultura*. Managua: Editorial Nueva Nicaragua.
- Sutton, Barbara (2007). Poner el Cuerpo: Women’s Embodiment and Political Resistance in Argentina. *Latin American Politics and Society*. 49(3), 129-162. Recuperado de <http://www.jstor.org/stable/30130813>
- Tapia, Luis (2008). Subsuelo político. En: Tapia, Luis. (2008). *Política salvaje*. La Paz: Muela del Diablo Editores, Comuna, CLACSO.
- Todorov, Tzvetan (1993). *Frente al límite*. México: Siglo XXI.
- Torres-Rivas, Edelberto (1988). *Escépticos, narcisos, rebeldes. 6 estudios sobre la juventud*. San José: FLACSO.
- Torres-Rivas, Edelberto (2011). *Revoluciones son cambios revolucionarios*. Guatemala: F&G Editores.
- Valdivia, Franco “Renfan” (2017). With Honesty. En *La escuela del Pensamiento* [Digital]. Nicaragua: DLM. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=L7ctMSND8M>
- Valle Moreno, Ernesto (2017). Lo que nos dejó la revolución: narrativa transmedia, conciencia generacional y posmemoria en Nicaragua. *Revista Istmo*. Recuperado de <http://istmo.denison.edu/n33/articulos/index.html>
- Valle Moreno, Ernesto (2017). Millennials: Caso nicaragüense. (Tesis inédita de maestría). Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, Managua, Nicaragua.
- Vílchez, Danae (2016, 1 de diciembre). Balas, bombas y represión policial contra campesinos. *Confidencial*. Recuperado de <https://confidencial.com.ni/balas-bombas-represion-policial-campesinos/>

- Villavicencio, Franklin (2018). *Raperos nicas rinden homenaje a Franco 'Renfan' Valdivia*. Recuperado de <https://niu.com.ni/raperos-nicas-rinden-homenaje-a-franco-renfan-valdivia/>
- Winocur, Rosalía (2009). *Robinson Crusoe ya tiene celular: la conexión como espacio de control de la incertidumbre*. México: Siglo XXI.
- 100% Noticias (2018, 6 de mayo). Autopsia de Franco Valdivia confirma uso de francotiradores en protestas de Estelí. *100% Noticias*. Recuperado de <https://100noticias.com.ni/nacionales/90618-autopsia-de-franco-valdivia-confirma-uso-de-franco/>

## II. Abril 2018, Nicaragua: el desafío de la democracia frente al autoritarismo

*Mario Sánchez*<sup>1</sup>

*Hloreley Osorio Mercado*<sup>2</sup>

### Antecedentes

En menos de cuarenta años, el pueblo nicaragüense se ha enfrentado a dos dictaduras recurriendo para ello a distintos repertorios contenciosos: ante la primera, en 1979, derroca al dictador Anastasio Somoza Debayle mediante una insurrección armada, y ante la segunda, treinta años después, se enfrenta al régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo mediante una insurrección pacífica de la ciudadanía autoconvocada. Esta rebelión cívica tuvo su estallido a mediados de abril de 2018 y ha escalado hasta llegar a ser una de las crisis sociopolíticas más devastadoras que ha sufrido el país en su historia reciente. Aunque el talante prevaleciente de esta insurrección rechaza la violencia, el gobierno Ortega-Murillo ha respondido con una represión desmesurada, cuyos graves atropellos a los derechos humanos han sido documentados, denunciados y condenados por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales<sup>3</sup> como es el caso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que ha documentado exhaustivamente y catalogado como crímenes de lesa humanidad los

---

1 Candidato a Doctor del Programa en Ciencias Sociales de la UCA-Nicaragua y profesor investigador del Instituto Interdisciplinario en Ciencias Sociales de la Universidad Centroamericana (IICS-UCA).

2 Candidata a Doctora del Programa en Ciencias Sociales de la Universidad de Granada, España. Profesora investigadora del Instituto Interdisciplinario en Ciencias Sociales de la Universidad Centroamericana (IICS-UCA).

3 Entre los primeros de esos organismos cabe destacar el Centro Nicaragüense para la Defensa de los Derechos Humanos (CENIDH), la Asociación Nicaragüense para la Defensa de los Derechos Humanos (ANDPH) y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH); y entre los segundos, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OAC-NUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).



atropellos a los derechos humanos cometidos por el régimen, y ha exhortado a la comunidad internacional a que se inicien procesos de judicialización al respecto (GIEI, 2018).

La intensidad de la violencia gubernamental, patente en los niveles de coordinación y organización con que ha respondido a esta crisis sociopolítica irresuelta, ha cobrado un alto costo humano: al menos 325 personas fallecidas (CIDH, 2018), miles de heridos, más de 5,000 detenciones y secuestros, más de 600 presos políticos reclusos en condiciones inhumanas (Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, 2019), la expulsión forzada de unos 42,000 nicaragüenses (Amnistía Internacional, 2019); a ello hay que sumar la suspensión de facto de las garantías constitucionales, la destrucción de la frágil institucionalidad del Estado y la poca legitimidad del régimen, tanto en el plano nacional como en el internacional. De ahí la preocupación que da origen a este trabajo, y que formulamos en la siguiente pregunta: ¿Cómo explicar el proceso de regresión del régimen Ortega-Murillo al autoritarismo y a la violencia política?

En este proceso de desdemocratización del régimen Ortega-Murillo se constata lo que Levitsky y Zibblat (2018) denominan la destrucción larvada de la democracia, en la que los autócratas electos instrumentalizan progresivamente las mismas instituciones y mecanismos legales de la democracia, para vaciarla de contenido y convertirla en un régimen autoritario. Frente a este escenario de represión, la ciudadanía nicaragüense organizada en la Alianza por la Justicia y la Democracia (AJD), y en otras expresiones sociales, como es la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), se han mantenido en resistencia exigiendo la reinstitucionalización del Estado y las condiciones necesarias para enrumbar el país hacia la reconstrucción de la democracia sobre la base de la justicia. La regresión al autoritarismo no sucedió de forma súbita y trágica, como suelen ser los golpes de Estado por la vía militar, sino que fue un proceso menos dramático, pero con un alto grado de desinstitucionalización y gran poder de destrucción multidimensional, como veremos más adelante.

Para explicar la ruta hacia el autoritarismo desencadenada por la actual crisis sociopolítica en Nicaragua hay que analizar tres elementos: primero, la apuesta de la cúpula del FSLN por el rediseño y control de los poderes del Estado conforme a sus intereses, lo que Schedler (2016) denomina la estrategia de *control del poder horizontal* en la lógica de la política de la incertidumbre, a través de reformas constitucionales y negociaciones acordadas en pactos políticos y alianzas con las élites económicas y políticas; segundo, la dinámica de implantar una estructura sociopolítica partidista de control territorial, la estrategia de *control del poder vertical*, que requirió dismantelar previamente la gestión local descentralizada, la autonomía municipal y los espacios de participación multipartidarios y plurales para luego imponer las estructuras partidistas mencionadas; y tercero, la institucionalización de la violencia sistemática y su justificación ideológica, como repuesta gubernamental a los conflictos sociales y a las acciones contenciosas, mediante un discurso y una práctica política populista de corte autoritario que sólo ha conseguido agudizar la actual crisis.

## 1. De la vía electoral al quiebre de la democracia: la estrategia de control del poder horizontal

Un aspecto clave para comprender la naturaleza del régimen Ortega-Murillo es su forma de acceder y controlar el poder político frente a sus aliados y adversarios. Para ello haremos un recorrido histórico que explique cómo el FSLN logra transitar de una fuerza de oposición a convertirse en una autocracia, y una vez conquistado el Poder Ejecutivo, Ortega afianza su control en los demás poderes del Estado, lo que garantiza su hegemonía en la arena política electoral. La ruta hacia la democratización o a la desdemocratización ha significado un proceso doloroso para la sociedad nicaragüense, por los altos costos humanos y materiales que conlleva una conquista o una pérdida. Uno de estos precedentes hacia la democratización fue la contienda electoral de 1990, no sólo porque puso fin al desgastado proyecto revolucionario y al conflicto armado interno, sino por su inédita naturaleza democrática, misma que McConell (2011) definió como las *elecciones fundacionales* de la democracia nicaragüense, dadas sus características y consecuencias: 1) permitieron por primera vez una verdadera participación electoral multipartidaria; 2) establecieron la lógica competitiva como elemento fundamental de la democracia electoral; 3) fortalecieron el pluralismo político y reencauzaron la actividad política dentro del marco constitucional; es decir, la contienda política transgresora mediante la opción armada dio paso a la política formal; 4) reconfiguraron la correlación de fuerzas entre los actores políticos (McConell, 2011, citada en Martí, 2016, pp.308-309).

A pesar de este precedente histórico hacia la democratización, el liderazgo del FSLN –con la complicidad del Partido Liberal Constitucionalista (PLC)– impulsó una creciente involución del sistema electoral al contaminar con intereses partidistas la gobernanza electoral, conforme a sus respectivas ambiciones. La apuesta inicial del FSLN era recuperar el control de los aparatos del Estado y crear las condiciones para su retorno al poder; una vez alcanzado este propósito –en el año 2006, su estrategia se reenfocó en extirpar lo que Green, Slatter y Schedler (2015) denominan el *núcleo democrático* de la contienda electoral: su naturaleza competitiva. En consonancia con este propósito, el FSLN promovió una serie de reformas y procedimientos que fueron neutralizando el carácter competitivo del sistema electoral (Martí, 2016), primero implantando el bipartidismo competitivo, que favoreció el control del Poder Legislativo entre sandinistas y liberales, para luego alcanzar una hegemonía sin competencia real frente a cualquier adversario que pudiese propiciar la alternancia en el poder. Es importante destacar que Ortega, estando en la oposición, logró introducir en el sistema electoral disposiciones jurídicas discriminatorias que estrecharon la arena electoral a su favor.

En cuanto a las estrategias encaminadas a controlar el sistema electoral, el FSLN recurrió a mecanismos legislativos tales como las reformas parciales de la Constitución Política, lo que le permitió el rediseño funcional del Consejo Supremo Electoral (CSE) conforme a los intereses propios y de sus aliados del momento, el PLC. Un paso estratégico en el *diseño institucional* fue la reforma

de la Constitución de 1995, que modificó la forma y los criterios para la elección de los magistrados del CSE, pasando de los parámetros de la idoneidad ética y profesional a las ternas propuestas por los dos partidos políticos hegemónicos. A partir de esta modificación se inicia el proceso de lo que Schedler denomina el *control de los agentes*, mediante una estrategia de selección y saturación de las magistraturas del CSE con candidatos considerados “afines” o “leales” a los dos caudillos y a sus respectivos partidos políticos. Estos magistrados electos, denominados abiertamente como magistrados liberales y magistrados sandinistas, fueron sometidos al control partidista por medio de incentivos o castigos según su desempeño partidista. Así se incrustó el sesgo partidista en la administración pública, sobre todo en la gobernanza electoral. Tanto el diseño institucional como el control de los agentes socavaron de raíz las bases de la institucionalidad del CSE, lo que dio lugar a las condiciones calculadas para suprimir reiteradamente las condiciones de libertad e igualdad en los procesos electorales.

Otro mecanismo que Ortega utilizó para hacerse del control de los poderes del Estado fue la gestión de arreglos políticos al margen de la institucionalidad, como fue el controvertido “pacto de gobernabilidad” acordado entre las cúpulas del FSLN y el PLC en el año 2000. Una de las motivaciones que dinamizaron el acercamiento entre ambos caudillos fue la urgente necesidad de garantizar su respectiva impunidad ante los abusos de poder perpetrados por uno y otro: por un lado, los delitos de corrupción cometidos por Arnoldo Alemán y algunos de sus funcionarios durante su administración, cuyos escándalos y posible judicialización representaban una amenaza para este mandatario una vez que finalizara su período presidencial; y por otro lado, la posible desaforación y judicialización del caudillo —y en ese entonces diputado sandinista, Daniel Ortega— ante la demanda judicial por los delitos de trato deshonesto, violación con agravante y acoso sexual en perjuicio de su hijastra, Zoilamérica Narváez Murillo, un caso apoyado por organizaciones del movimiento feminista de Nicaragua y que había cobrado resonancia internacional en su momento (Martí, 2012; Narváez, 2012). El inicio de este ciclo de “negociaciones” tuvo como base un acuerdo de impunidad recíproca, que luego dio paso al desarrollo de otras agendas y acuerdos políticos que culminaron con el pacto del año 2000. En este pacto político se estableció el control bipartidista de los poderes del Estado: del CSE, de la Corte Suprema de Justicia y de la Procuraduría General de la República. Además, se instauró un sistema de competencia electoral bipartidista, favorable a sus artífices, y por último, las condiciones jurídicas que allanaron el retorno de Ortega a la presidencia, con la reducción del porcentaje mínimo necesario para ganar la presidencia de la república<sup>4</sup> (Medina, 2018; Calderón et al., 2016; Martí, 2016).

---

4 El acuerdo de reducir del 45% al 35% el porcentaje mínimo para ganar la presidencia si la diferencia entre el primer candidato y el segundo con mayoría de votos resultara superior al 5%.

Una vez que Ortega llega al poder en el año 2007, diversifica sus estrategias: a) intensifica el proceso de erosión y dismantelamiento de las instituciones democráticas para instaurar un régimen autocrático funcional a sus intereses; b) a la par de esta dinámica, el liderazgo del FSLN apuesta por el control hegemónico de los poderes del Estado a base de reducir y relegar la capacidad de incidencia de su aliado, Arnoldo Alemán, en dichos poderes; c) ligado a lo anterior, intensifica el proceso de desgaste y fractura del PLC, producido por un lado por los escándalos de corrupción de su líder y de sus funcionarios allegados, y por otro, por la división inconciliable que provocó el pacto entre sus correligionarios: unos apoyando ese pacto y otros en franca oposición. Prácticamente el PLC y otras expresiones liberales quedaron disminuidos en bancadas legislativas con poca incidencia política o contrapeso. De esta manera, el líder sandinista fue asegurando su hegemonía ante cualquier adversario político. Este conjunto de reformas pactadas constituye lo que Schmitter (2011) denomina un *autogolpe de Estado*, puesto que traza una ruta clara hacia el autoritarismo.

### 1.1.- El autoritarismo electoral y su *apartheid* político

Una vez logrado el *diseño institucional* del régimen, Ortega procedió al siguiente paso, que Schedler (2016) denomina el *menú de la manipulación institucional*, un proceso que le garantizaría no sólo su hegemonía, sino su permanencia en el poder y la consolidación de su régimen. Un hecho sin precedentes, pero con enormes consecuencias políticas, fue la “legalización” de la reelección de Ortega a la presidencia, a través de dos sentencias emitidas por los magistrados sandinistas, quienes transgrediendo sus competencias constitucionales se atribuyeron facultades legislativas con el propósito de dejar sin efecto el artículo 147 de la Constitución de la República, que representaba un obstáculo jurídico constitucional para esa reelección.

En un estudio sobre el comportamiento político-jurídico de las Cortes Supremas de Justicia de Centroamérica ante los problemas de las candidaturas presidenciales, Barahona y Barahona (2012) constatan la relevancia que ha adquirido el Poder Judicial en la contienda política, como un actor clave en los procesos de democratización o desdemocratización, y cuya función ha tenido dos tipos de derroteros: “velar por el cumplimiento y resguardo del Estado de derecho o generar efectos perniciosos a la vida democrática” (p.166). En los cuatro estudios de casos<sup>5</sup> los autores aplican el modelo teórico del *balance táctico* de Kapiszewski (2009) para identificar los factores explicativos del comportamiento jurídico y político de los magistrados en sus dictámenes o sentencias ante los casos de las candidaturas presidenciales. En el caso de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, surtió efecto lo que Schedler (2016) denomina la *estrategia de contención y control de los agentes*, del que ya se ha hecho mención. Esta estrategia parte de la premisa que los gobiernos

---

5 Costa Rica, con Oscar Arias; Guatemala, con Efraín Ríos Montt y Sandra Torres; Honduras, con Manuel Zelaya, y Nicaragua con Daniel Ortega.

autoritarios consideran necesario: primero, garantizar las condiciones para tratar a los poderes divididos e interdependientes del Estado y sus agencias como poderes delegados, estableciendo la relación de *principal-agente*; y segundo, incentivar y contener a los agentes que ellos mismos han puesto, más allá de sus periodos establecidos, para que operen conforme a sus intereses y se garantice la estabilidad del régimen autocrático. A partir de la estrategia de contención y control de agentes el régimen de Ortega logra consolidar su control sobre el Poder Judicial. Ello explica en parte la racionalidad con la cual el bloque de magistrados sandinistas operó a favor de la reelección presidencial, según se reseña a continuación.

Desde octubre del año 2007 y antes de acudir a la Corte Suprema de Justicia, el presidente Daniel Ortega había intentado infructuosamente anular el artículo 147 de la Constitución Política en la Asamblea Legislativa. Al no contar con los suficientes votos, decidió cambiar su estrategia y optó por el *atajo judicial*, con la finalidad de trasladar y resolver “el problema legislativo” en el foro judicial, atribuyéndole competencias constitucionales a un poder del Estado al que no le correspondían. Con un Poder Judicial *politizado y domesticado*, Ortega logró asegurar su ambicioso propósito de la reelección continua. Las dos sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia –19 de octubre de 2009 y 30 de septiembre de 2010– se realizaron con un plenario viciado e ilegal por su composición: los magistrados liberales y de otras fuerzas políticas fueron sustituidos por los suplentes de los magistrados sandinistas, con el propósito de garantizar el “quorum necesario e incondicional”. En efecto, la primera sesión emitió un dictamen favorable al recurso de amparo que Ortega y 109 alcaldes municipales habían interpuesto directamente ante la Corte Suprema de Justicia el 16 de octubre de 2009. En esta resolución, la sala valoró la incompatibilidad entre dos cláusulas de la Carta Magna y resolvió la prioridad de una sobre la otra (Rocha, 2019) apelando al “principio de igualdad incondicional de todo ciudadano nicaragüense [por lo que] «Es obligación del Estado eliminar los obstáculos que impidan de hecho la igualdad entre los nicaragüenses y su participación efectiva en la vida política, económica y social del país» (Art. 48 Cn.)”.

Sin embargo, este argumento fue interpelado por el magistrado de la Sala Constitucional, Sergio Cuarezma, quien había sido excluido de dicha sesión:

Pienso que el presidente Ortega, como cualquier otro en su situación, tiene igualdad dentro de las reglas del juego ya suscritas previamente (...) La igualdad de participar en igualdad de condiciones entre todos y contra todos. Pero en este caso concreto, lo que usted está diciendo es que quiere ser igual ante quién ... si nadie se ha reelegido continuamente (Entrevista a Sergio Cuarezma realizada por Amelia Brenes Barahona el 2 de marzo de 2010, en Barahona & Barahona, 2012, p.183).

Este modo de proceder de los magistrados violentó los ordenamientos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley 260. Se trató de un procedimiento contrario a las normas de interpretación constitucional

aceptadas en la comunidad internacional, dado que fue una reforma encubierta que violentó preceptos de enmienda previstos en la misma Constitución, y que son prerrogativas del Poder Legislativo. En todo caso, los magistrados estaban obligados a remitir un informe de su apreciación de incompatibilidad a la Asamblea Legislativa Nacional para que esta determinara si procedía o no una reforma de la Constitución (Rocha, 2019). Prácticamente, la instancia de máximo nivel del Poder Judicial, y que en teoría debería tener mayor competencia en materia constitucional, reformó bajo lineamientos del Ejecutivo la “Constitución Política”. Este precedente refrenda las palabras de Schedler (2016): “los límites a la innovación y a la imaginación autoritaria no son lógicos, sino empíricos” (p.132).

A partir de las elecciones del 2011, el ciclo electoral nicaragüense transita de un sistema de elecciones autoritarias contestadas a un sistema autoritario hegemónico, en el que las condiciones del sistema electoral no admiten ni permiten incertidumbre sustantiva al régimen de Ortega; su control sobre el Poder Electoral le permite manipular los procedimientos que determinan los resultados electorales con anticipación, como han denunciado algunos informes de observadores nacionales e internacionales (Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, 2011; Centro Carter, 2011). La ecuación de que se vale el régimen ha consistido en combinar la opacidad del sistema electoral y sus irregularidades calculadas con las certezas sustantivas que garantizan los resultados esperados. Como es propio de regímenes autoritarios, para el gobierno de Daniel Ortega y el FSLN la posibilidad de una derrota electoral ha representado un escenario de pérdidas incalculables, por el que ya ha transitado en el pasado, cuando perdieron las elecciones y el poder en 1990, con el triunfo inesperado de la candidata de la Unión Nacional Opositora (UNO), Violeta Barrios de Chamorro. Con este antecedente histórico, el día 26 de julio de 2009 el exministro del Interior y fundador del FSLN, Tomás Borge Martínez, en una entrevista a la cadena venezolana *Telesur* expresó que el FSLN estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para no perder el poder:

Todo puede pasar aquí, menos que el Frente Sandinista pierda el poder. Me es inconcebible la posibilidad del retorno de la Derecha en este país. Yo le decía a Daniel Ortega: hombré podemos pagar cualquier precio, digan lo que digan, lo único que no podemos perder es el poder; digan lo que digan, hagamos lo que tengamos que hacer...el precio más elevado será perder el poder. Habrá Frente Sandinista hoy, mañana y siempre (*El Nuevo Diario*, 14 de octubre de 2011).

Estas declaraciones públicas expresan claramente las intenciones del partido en el gobierno, el FSLN, de despejar o erradicar cualquier posibilidad de incertidumbre institucional que ponga en riesgo su permanencia en el poder. En función de este propósito y como se ha expuesto, Ortega y sus operadores fueron implantando lo que Schedler (2016) denomina un



*autoritarismo electoral*,<sup>6</sup> cuyo repertorio de manipulación e irregularidades les ha permitido alcanzar una hegemonía en los ámbitos de las contiendas electorales: presidenciales, municipales y legislativas, como se observará en el siguiente apartado.

## 1.2.- La efectividad del autoritarismo electoral

Apartir de las elecciones municipales del 2008 desaparece en Nicaragua la competencia multipartidaria y se da un franco proceso de pauperización de la actividad electoral y un incremento de la apatía del electorado, dado el nivel de control y manipulación del sistema electoral (McConell, 2009; Martí, 2016). En estas condiciones adversas, los actores que intentan “competir” en contra del partido en el gobierno enfrentan un doble desafío: por un lado, la obtención del mayor número de votos, y por otro lado, la lucha para que las reglas de la contienda se respeten y el voto ganado sea reconocido con el mismo valor (Peraza, 2016; Martí, 2016). En la práctica el reto ha sido lograr una reforma institucional que permita superar esta suerte de *apartheid político electoral*, cuyos fraudes e irregularidades han desencadenado conflictos entre la clase política y sus correligionarios no sólo en el presente, sino a lo largo de la historia de Nicaragua, según ha documentado Esgueva (2011) en su extenso estudio sobre las elecciones desde 1821. Cabe destacar que la efectividad de la gobernanza electoral controlada por el FSLN no ha sido contrarrestada en sus propósitos por la movilización social y su escalada a la conflictividad, ello debido a dos factores: primero, por la represión y criminalización de las protestas, con niveles de violencia que han sido objeto de preocupación y denuncias de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, como es el caso de Amnistía Internacional (2014):

Las continuas acusaciones de fraude electoral desembocaron en enfrentamientos entre simpatizantes del Partido Liberal Constitucionalista y seguidores del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nueva Guinea, Región Autónoma del Atlántico Sur. Organizaciones de derechos humanos informaron que la policía detuvo y maltrató bajo custodia a simpatizantes del PLC. Hay detenidos que denuncian haber sido golpeados, y mujeres y niñas detenidas, afirman que las obligaron a desnudarse en frente de agentes varones, que las humillaron y amenazaron con someterlas a violencia sexual (p.6).

Esta denuncia, formulada hace cinco años por Amnistía Internacional para el examen periódico universal de la ONU, no sólo evidencia la violencia política que se venía perpetrando contra la ciudadanía, sino el abuso de poder y el trato inhumano y degradante que da la Policía a mujeres campesinas, y

---

6 Schedler (2016) define los regímenes electorales autoritarios como aquellos que “practican el autoritarismo tras las fachadas institucionales de la democracia representativa. Celebran elecciones pluripartidistas regulares a nivel nacional, pero violan sistemática y profundamente las normas mínimas de la democracia liberal” (p.15).



más grave aún, por su condición de vulnerabilidad, a niñas. Estos agentes del Estado fueron señalados por ejercer violencia sexual como una forma de torturar a ciudadanas privadas de libertad ilegalmente y cuyo “delito” fue reivindicar sus derechos políticos. El segundo elemento ha sido la combinación de la opacidad del sistema electoral y el variado repertorio de manipulación del proceso electoral, *ex ante* y *ex post* las elecciones, según se puede apreciar en el Cuadro 1, que detalla las dimensiones y los principios normativos democráticos transgredidos en la cadena de decisiones democráticas en Nicaragua.

**Cuadro 1. Mecanismos de manipulación electoral**

Dimensiones de decisión electoral y premisas normativas de elecciones democráticas	Estrategia de manipulación, según casos
El objeto de elección se trata del derecho de empoderamiento que tienen los ciudadanos de delegar la autoridad para la toma de decisiones públicas.	La adecuación inconstitucional de posiciones y dominios reservados: las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, que favorecieron la reelección de Daniel Ortega en 2011 y luego la candidatura de su esposa, Rosario Murillo, a la vicepresidencia en 2016.
El rango de opciones se refiere a la libertad de oferta por la que cualquier ciudadano goza de la libertad de formar y apoyar a cualesquier partidos, candidatos y políticas públicas.	<p>El sistema electoral ha recurrido a varios mecanismos de exclusión:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Candidatos: casos de Pedro Solórzano, José Antonio Alvarado, Joaquín Cuadra (<i>Envío</i>, 2000, 2001).</li> <li>▪ Partidos políticos: El 29 de agosto de 2000 el CSE canceló la personería de 26 partidos políticos y llevó a efecto la “exclusión legal”<sup>7</sup> de fórmulas de organización de suscripción popular, como el caso de YATAMA<sup>7</sup> en las elecciones regionales en septiembre de 2000.</li> </ul>

7 Aunque YATAMA ganó su demanda ante la CIDH (Corte IDH, 2005), el Estado de Nicaragua no garantiza este derecho en su legislación ni en su régimen electoral.

<p>La formación de preferencias es el derecho a la libertad de demanda que tienen los ciudadanos para enterarse de las opciones disponibles mediante fuentes de información alternativas.</p>	<p>La supresión del principio de equidad en la distribución del financiamiento para la campaña electoral entre los partidos políticos contendientes, a través de las leyes 330 y 331, cuyo efecto modificó la entrega previa de los fondos por la modalidad poselectoral. Este cambio significó una clara desventaja para los partidos políticos con menos recursos económicos.</p>
<p>Agentes de decisión: alude al derecho a la inclusión de los ciudadanos para participar en condición de igualdad en el ejercicio del sufragio.</p>	<p>El Consejo Supremo Electoral ha suprimido formal e informalmente el derecho al voto en las elecciones presidenciales, legislativas y del Parlamento Centroamericano, al negar el derecho de cedulaación a más de 200 mil ciudadanos de los municipios considerados base social de partidos políticos de oposición o de la exresistencia campesina: Ciudad Antigua, Ciudad Darío, Nueva Guinea y San Fernando (Sánchez et al., 2015, p.83).</p>
<p>Expresión de preferencias: todo ciudadano tiene derecho a ser libre de presiones externas para expresar sus preferencias electorales.</p>	<p>La estrategia de coerción e intimidación de los votantes. Según el testimonio de Ligia Gómez presentado ante la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos, los empleados públicos han sido sometidos a presiones y amenazas por el mismo presidente del Consejo Supremo Electoral, Lumberto Campbell, y por el presidente de la Asamblea Legislativa, Gustavo Porras (Gómez, 2018, p.2).</p>
<p>La agregación de preferencias: plantea que todos los votos tienen el mismo valor.</p>	<p>Un caso de acciones de fraude e impunidad electoral fueron las irregularidades en el proceso de conteo de votos en las elecciones municipales del 2008, específicamente de las alcaldías de Managua y León: falsificación de actas, quema de urnas. Según el conteo de 239 actas recuperadas por el MRS, el candidato de la Alianza PLI, Eduardo Montealegre, ganaba la alcaldía de Managua. La organización Ética y Transparencia (2008) constató anomalías e irregularidades en el 32% de las juntas receptoras de votos y en centros de cómputo municipales y departamentales del país (<i>Envío</i>, 2008).</p>

Consecuencias de decisiones: se trata del derecho que tienen los partidos y candidatos ganadores a asumir sus cargos, ejercer el poder y concluir su mandato. Las elecciones deben ser decisivas <i>ex ante</i> y <i>ex post</i> .	<p>Destitución de funcionarios de elección popular: en junio del 2013 el CSE separa de su cargo a la diputada Xóchitl Ocampo, del FSLN, por haberse abstenido de aprobar la Ley del Canal Interoceánico.</p> <p>En julio de 2016 la Junta Directiva de la Asamblea General destituye a 28 diputados de la oposición por no haber apoyado el reemplazo de Eduardo Montealegre en la presidencia del PLI.</p>
--	---

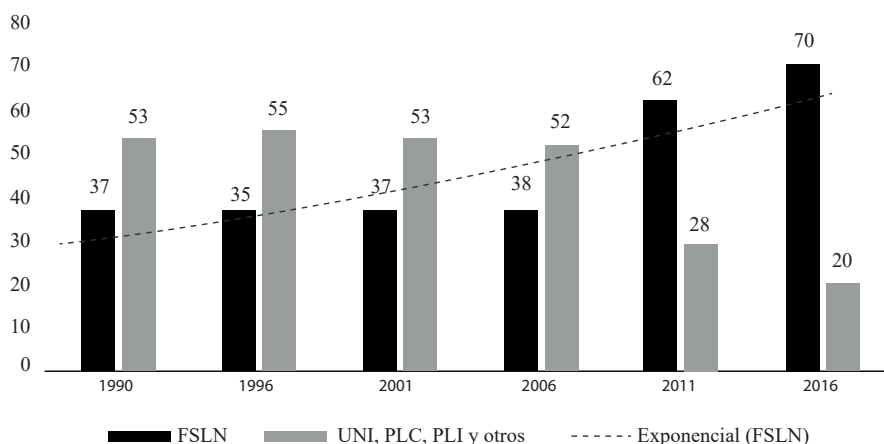
Fuente: Elaboración propia a partir de Schedler (2016), Martí i Puig (2016), Calderón et al., (2016), Cerda (2018), Gómez (2018), Sánchez et al., (2015), *Envío* (2008).

Esta progresiva regresión democrática del sistema electoral a través de las estrategias de manipulación ha sido un proceso consustancial a la dinámica de consolidación del régimen autoritario, en dos ámbitos importantes: el control del Poder Legislativo y el del poder local.

### *1.2.1.- El Poder Legislativo*

A partir de las elecciones del año 2011 el FSLN incrementó el número de sus escaños en un 63.15%, al pasar de una bancada de 38 diputados a 62, para luego disponer de 70 diputados en la actualidad, según resultados de las últimas elecciones legislativas del 2016 (ver Gráfico 1).

Gráfico 1. Número de diputados del FSLN y de otros partidos<sup>8</sup> (1990-2017)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CSE.

La actual composición de la Asamblea Nacional ha contribuido a reforzar el modelo centralizado del gobierno y a exacerbar el presidencialismo de Ortega (Costafreda, 2013), por dos razones: en primer lugar, su bancada opera de manera “dócil y disciplinada”;<sup>9</sup> y segundo, su grupo parlamentario representa la mayoría absoluta, lo que garantiza un margen de votos incondicionales para impulsar cualquier reforma que requiera de la aprobación de una mayoría calificada, según el rango establecido en el Art. 8 de la Ley 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo. De esta manera se pierde la posibilidad de que haya un contrapeso en el Poder Legislativo frente al Ejecutivo al tramitar cualquier iniciativa de ley por decreto presidencial, debido a la composición e incondicionalidad partidista de este quórum legislativo. Tres casos emblemáticos ilustran esta situación: la aprobación de la Ley 840, la Ley de Constitución del Banco Nacional y la Ley de Amnistía o Ley 996.

- La primera ley, denominada “Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense Atingente a El Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas”, ha sido rechazada por distintos actores y sectores de la sociedad nicaragüense, entre ellos, el Movimiento Campesino por la Tierra, Lago y Soberanía, que ha realizado

<sup>8</sup> Hemos agrupado a los demás partidos no porque hayan ido en alianza, sino para ilustrar mejor los resultados del FSLN frente al conjunto de partidos políticos.

<sup>9</sup> La única diputada que votó sin acatar las orientaciones de la bancada sandinista fue Xóchitl Ocampo, quien en el 2013 se abstuvo de votar a favor del controvertido proyecto de Ley del Canal Interoceánico. El haberse abstenido dio lugar a que se le destituyera de su curul (Enriquez, 2013).

más de 90 marchas públicas. Esta ley concesionaria ha sido cuestionada desde diversas disciplinas por la Academia de Ciencias de Nicaragua (ACN, 2015), por organismos de derechos humanos (CENIDH, 2013) e incluso se ha interpuesto un recurso por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, sustentado por un exhaustivo análisis de 25 artículos que contravienen claramente la Carta Magna, dado que atentan contra la soberanía del país y contra múltiples derechos individuales y colectivos, en especial los derechos de los pueblos originarios y de las comunidades campesinas e indígenas (López, 2013). Cabe agregar que el 13 de junio de 2019 se venció el plazo de seis años, pues según la cláusula 15.2 del Acuerdo Marco de Ejecución e Implementación, el concesionario HKND debía de confirmar la gestión del financiamiento de dicho proyecto, por la cantidad de cincuenta mil millones de dólares. En caso contrario, “el Gobierno o el Patrocinador correspondiente tendrán el derecho de terminar la concesión para tal subproyecto y todos sus derechos, beneficios y obligaciones según el presente Acuerdo” (Gobierno de la República de Nicaragua, 2013, p.72). Frente a este incumplimiento, y a las amenazas que representa este megaproyecto –de despojo para muchos y acumulación de riqueza para unos pocos–, el movimiento campesino ha exigido el retiro de dicha concesión y la derogación de la Ley 840.

- La segunda ley consistió en un trámite de urgencia solicitado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, por el cual el anteproyecto de ley fue aprobado en cuestión de horas, con 70 votos a favor –emitidos por la bancada sandinista–, 15 en contra y dos abstenciones. A través de esta ley, el Estado de Nicaragua compraba el BANCORP por un monto de más de 743 millones de córdobas, para convertirlo en una institución pública. Este banco privado, BANCORP, ha sido señalado por “asistir, patrocinar, proveer y apoyar en la realización de transferencias financieras involucradas en corrupción y en el lavado de dinero de ALBANISA” (Flores, 2019). Según Farah y Yates (2019), esta operación no fue más que un intento de dificultar, ante el escrutinio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos, la identificación de fondos ilícitos que se mueven en el sistema bancario nicaragüense, y tenía el propósito de evadir las sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense sobre los fondos de ALBANISA –empresa conjunta de PDVSA, de la estatal Petróleos de Nicaragua y de BANCORP. Esta maniobra del Ejecutivo en complicidad con el Poder Legislativo y con la pasividad de la Superintendencia de Bancos no sólo representa una respuesta desesperada y fallida por eludir este tipo de sanciones financieras internacionales, sino que evidencia el nivel de corrupción coludida entre las altas esferas de los poderes del Estado bajo el régimen Ortega-Murillo.

- Ley 996 o Ley de Amnistía: La Ley de Amnistía, aprobada el 8 de junio de 2019 por la bancada sandinista ha sido una acción de carácter unilateral, inconsulta y agravante por parte del régimen, pues no toma en cuenta las demandas de las organizaciones de víctimas de la violencia política ni la opinión de los representantes de la Alianza. Esta ley no cumple los parámetros recomendados por los organismos especializados en materia de derechos humanos (CIDH, 2018; Amnistía Internacional, 2018 y 2019; OACNUDH, 2018) ni los estándares establecidos por el sistema universal de protección de los derechos humanos. Según la Alianza por la Justicia y la Democracia, esta ley “es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita y ratificada por el Estado de Nicaragua, porque impide la investigación y sanción a los responsables de graves violaciones de derechos humanos” (Calero, 8 de junio de 2019). En la esfera internacional, el director de la División de las Américas de *Human Rights Watch*, José Miguel Vivanco, expresó su rechazo a esta ley porque es un intento de “consolidar la impunidad del régimen” (Álvarez & Navas, 9 de junio de 2019). La representante de la Asociación Madres de Abril (AMA), Francis Valdivia, en entrevista brindada al medio digital *Confidencial* ha afirmado que el artículo 1 de esta ley viola la Constitución porque “todo nicaragüense tiene derecho al acceso a la justicia. Para nosotras como familiares de las personas asesinadas es sumamente importante el conocer y tener un debido proceso, que se investigue quiénes fueron los culpables de los asesinatos de nuestros familiares”. En esta línea, también expresó que el artículo 2 “se contrapone a nuestra legislación en vista de que no se reconoce en el Código Penal lo que son los delitos políticos. En relación a nuestra Constitución, se contrapone con el artículo 17, en el cual establece que todas las personas son iguales ante la ley sin (distinción) alguna sobre raza, credo político, sin discriminación alguna”. Sobre el artículo 3 advirtió que “es uno de los artículos nunca antes visto en una ley de amnistía, porque las medidas de no repetición, es en base a quién está ejerciendo un delito. En este caso, el Estado de Nicaragua fue quien cometió los crímenes de lesa humanidad y quien asesinó a una población totalmente desarmada, principalmente jóvenes estudiantes, obreros. En ese sentido nosotras, pues, objetamos este artículo, y nos basamos en el artículo 7 de la Constitución” (*Confidencial*, 2019, 10 de julio). Finalmente, la representante manifestó que presentarán un recurso de inconstitucionalidad en contra de esta ley ante la Corte Suprema de Justicia, y que lucharán “de forma incansable para que los cientos de familias que fueron afectadas puedan obtener verdad y justicia para sus seres queridos, y para que un país entero no se hunda en la violencia y la impunidad que pretenden imponer Ortega y sus secuaces, a través sus políticas de terrorismo de Estado” (Navas, 8 de junio de 2019).

Los mecanismos de manipulación de la cadena de decisiones democráticas no sólo han propiciado el ilegítimo crecimiento del número de diputados de una bancada subordinada a las directrices del Ejecutivo, sino que han reforzado la complicitad de este poder del Estado, la Asamblea Nacional, en la privatización del funcionamiento de las instituciones políticas para ponerlas al servicio del régimen y sus aliados económicos. Luego de la ruptura de la alianza gobierno-sector privado en abril de 2018, la bancada legislativa del orteguismo se ha enfocado a aprobar leyes que recrudecen la criminalización y represión de las protestas sociales, y en esta colusión también se ven involucrados otros poderes, en razón de su competencia y del efecto vinculante, como es el caso del Poder Judicial y la Fiscalía. Por ejemplo, el 16 de agosto de 2018,

la Asamblea Nacional adoptó legislación que incluye nuevos tipos penales relacionados con el terrorismo. Los juicios de las personas acusadas por su participación en las protestas adolecen de serios vicios y no se desarrollan conforme a las garantías del debido proceso, incluyendo el principio de imparcialidad de los jueces y tribunales (OACNUD, 2018, p.8).

Según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, esta tipología penal ha sido aplicada a líderes del Movimiento 19 de Abril de Masaya, como son Christian Fajardo y María Adilia Peralta, quienes habían sido secuestrados, encarcelados y acusados de “terrorismo, financiamiento del terrorismo, crimen organizado, asesinato, secuestro y profanación de un cadáver, entre otros cargos” (OACNUD, 2018, p.20). Otro mecanismo represivo al que recurre el Poder Legislativo es la supresión injustificada de la personería jurídica de nueve organizaciones privadas y sociales dedicadas al desarrollo y la defensa de derechos humanos,<sup>10</sup> cuya labor institucional ha denunciado los abusos y las vulneraciones a los derechos humanos que el régimen ha venido perpetrando en estos once años. En otras palabras, el dominio partidista del FSLN sobre el Parlamento ha convertido a este poder en otro aparato represor dirigido contra las víctimas seleccionadas por el régimen, y lo ha convertido también en cómplice de su impunidad. Como bien señala la defensora de los derechos humanos, María Luisa Acosta:

Ortega llegó a acumular todo ese poder porque muchos nicaragüenses le permitieron hacer eso: todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que han vivido de la Corte, que han estado ahí como soldados, no como juristas ni como ciudadanos; todos los del Consejo Supremo

---

10 Nos referimos al Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO), Instituto para el Desarrollo y la Democracia (IPADE), Popol Na, Fundación del Río e Instituto de Liderazgo en Las Segovias (ILS), el Centro Nicaragüense para los Derechos Humanos (CENIDH), Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), Hagamos Democracia y Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS).



Electoral, la misma historia; la gente de la Asamblea, o sea, son gente que definitivamente son asalariados, no son ciudadanos. Pero también el Frente no actúa como un partido, sino como un cártel: si te querés salir te matan; te quedas ahí, tenés todas las prebendas; si te vas te matan. Estamos ante un Estado que se ha desfigurado, un gobierno que no actúa como gobierno ni como estadista, sino que actúa como un cártel. Tenemos que reinventarnos, porque ya la teoría clásica política no cabe aplicarla a estos gobiernos que definitivamente no son los gobiernos clásicos, no son el Estado clásico, han mutado a institucionalizarse con actitudes criminales, como los de la mafia” (Comunicación personal, 10 de julio de 2019).

El realineamiento y subordinación de los poderes del Estado y de sus operadores han convertido al Estado de Nicaragua en un actor con una racionalidad criminal, cuyas funciones de coacción, intimidación y represión han tenido la intención de destruir a cualquier costo a todo adversario del régimen y encubrir las múltiples formas de violencia.

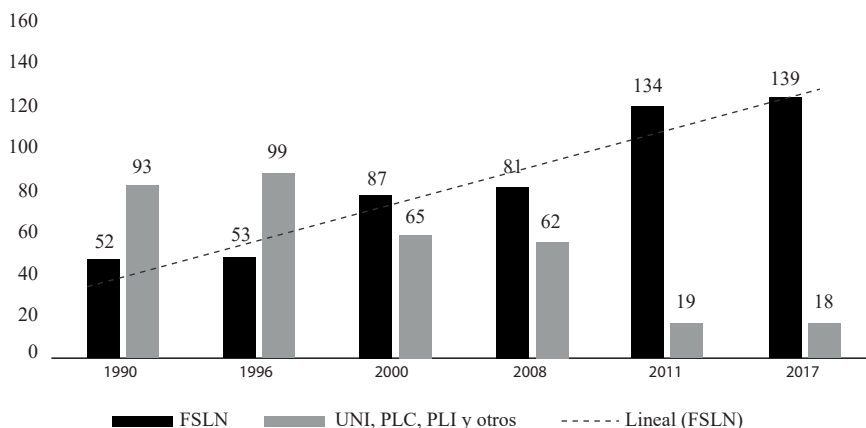
### *1.2.2.-El poder local*

Otro efecto del autoritarismo electoral ha sido el incremento del número de alcaldías bajo el dominio del FSLN (ver Gráfico 2). Actualmente, desde las elecciones municipales de 2017 el FSLN tiene el control del 88% de las alcaldías del país, en su mayoría cabeceras departamentales. La combinación de este “resultado electoral” con la expansión de la red territorial de Consejos de Poder Ciudadano (CPC) y Gabinetes de Poder Ciudadano (GPC)<sup>11</sup> ha representado una enorme posibilidad de intervención y control social a nivel territorial, a través de los diversos eslabones de gobierno.

---

11 El 29 de noviembre de 2007 fue aprobado el Decreto 112-2007, por medio del cual se crean los Consejos y Gabinetes de Poder Ciudadano.

Gráfico 2. Número de alcaldías ganadas por el FSLN y por otros partidos (1990-2017)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CSE.

Un aspecto crítico que Stuart (2009) ha constatado en esta estrategia de control del poder vertical-territorial es el hecho de que este modelo de participación “hace una fusión del Estado con el partido y la organización comunitaria, en la que el partido [el FSLN] es el factor dominante” (p.40) en detrimento de la autonomía municipal y de la naturaleza pluralista de la participación ciudadana. Este tendido social de naturaleza partidista –los CPC y los GPC– ha tenido cierto impacto político, por su rol de coordinación y canalización de programas sociales impulsados por el gobierno central y los ministerios. Los beneficiarios han sido familias y comunidades seleccionadas por los secretarios políticos del partido (FSLN) o por representantes de los CPC en sus comunidades y municipios. Esta estructura territorial se ha constituido en una maquinaria política electoral, por su permanente campaña proselitista a favor del partido-gobierno, al instrumentalizar los programas sociales para ganar nuevos adeptos al partido y mantener sus bases históricas (Stuart, 2009; Prado, 2016; Enríquez, 8 de junio 2015). Por más de diez años, el discurso proselitista que subyace a esta gestión sesgada ha vendido la idea de que las obligaciones constitucionales del Estado de garantizar los derechos a la ciudadanía no han sido más que “un favor” debido a la generosidad del presidente Daniel Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo. Esta narrativa populista ha sido repetida como letanía por funcionarios desde el más alto nivel hasta secretarios políticos en los barrios, con la finalidad de reforzar la personificación del poder político en la pareja presidencial, en el marco de la publicidad de los programas sociales. Este uso indebido de los recursos estatales para realizar eventos de campaña, sean estos de forma permanente o coyuntural, es lo que el Centro Carter denomina *ventajismo* (Coma, Norris & Frank, 2015, p.52).

Este tendido organizativo-territorial partidista ha ampliado la enorme disparidad de condiciones de competencia electoral que existe entre el FSLN y los demás partidos, debido al control de las instituciones del Estado y a la

canalización de recursos con sesgo partidista. Precisamente esto es uno de los factores que explican por qué Daniel Ortega es de los pocos candidatos políticos del hemisferio que no realiza en persona campaña electoral en los territorios para promover o garantizar el voto electoral durante la fase previa a los comicios electorales: en primer lugar, cuenta con el control del Poder Electoral, y en segundo lugar, es de los regímenes que mantiene siempre activa su maquinaria electoral, a través de sus estructuras burocráticas de canalización de recursos y de control social, como son los Gabinetes de Poder Ciudadano y los Comités de Poder Ciudadano.

El análisis de la progresiva implantación de este sistema electoral autoritario y sus efectos en la incipiente transición política de Nicaragua plantea las siguientes consideraciones: a) los regímenes autoritarios constituyen sistemas de dominación política y están basados en instituciones de dominación (Schedler, 2016); b) las transformaciones del sistema electoral tenían la finalidad de adecuar los parámetros legales a las posibilidades e intereses de cada caudillo (en este caso, Ortega y Alemán); sin embargo, el primero logró consolidar su hegemonía en el poder (Prado, 2018, p.144); c) dichas reformas políticas evidenciaron la frágil institucionalidad que se había alcanzado en el proceso de transición política iniciada en los años 90, frente a la capacidad y ambiciones de los caudillos de revertir los incipientes avances en la ruta iniciada hacia la democratización del país; d) asumir que las elecciones representativas bajo las condiciones que hemos señalado pueden constituirse en un recuento de manipulaciones autoritarias, con la fachada de una saga de triunfos democráticos. En otras palabras, las elecciones pueden constituirse, de forma progresiva y conforme a la ley, en un instrumento de control autoritario y una forma de garantizar la permanencia de los gobernantes en el poder.

## 2. El control del poder vertical y el cierre de los espacios en lo local

Una vez en el poder, Ortega apostó por la consolidación de su hegemonía no sólo en el control del poder horizontal, sino también en el poder vertical en los territorios. Según Schedler (2016) se trata de una necesidad común de los regímenes no democráticos: construir instituciones sólidas de dominación con el propósito de que el régimen autoritario prospere y sobreviva

**Cuadro 2. Proceso de dismantelamiento de la descentralización y de la autonomía munic**

Ci-clo	Año	Leyes	Efecto político
Autonomía municipal	2000	Ley de Régimen de Presupuesto Municipal o Ley 376	Norma los procedimientos para elaborar, modificar, ejecutar, monitorear, cerrar y evaluar el presupuesto municipal.
	2003	Ley de Transferencia Presupuestaria a los Municipios, o Ley 466	Establece el 10% del Presupuesto General de la República para las transferencias municipales. Se establecen criterios de asignación según tipología de alcaldías.
		Ley de Participación Ciudadana o Ley 475	Organiza la participación ciudadana como un sistema articulado en lo municipal, departamental y nacional.
Implantación de modelo de gestión centralizado y vertical	2007	Decreto Presidencial 03-2007, reforma de la Ley de Organización, Competencias y Procedimientos del Poder Ejecutivo, Ley 290.	Se inicia el proceso de dismantelamiento de la autonomía municipal y la involución de los avances en materia de descentralización, mediante la creación del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, instancia que además de coordinar la relación con los medios de comunicación dirige el Gabinete Social y diseña las políticas de participación ciudadana en todo el territorio nacional a través de los Consejos de Poder Ciudadano. Otra consecuencia política es que se restringe la naturaleza multipartidaria y plural de la participación ciudadana, al imponerse un canal unipartidario.
		Decreto Presidencial 112-2007	Con el aval de la resolución de la Corte Suprema de Justicia (enero de 2008) por decreto presidencial se establece formalmente la organización de los Consejos y Gabinetes de Poder Ciudadano en los territorios y por sectores. Los CPC serán instancias integradas por 16 coordinadores que se corresponderán con los ministerios y programas sociales del gobierno central. Se consolida el modelo centralizado en detrimento de la autonomía de la gestión del desarrollo local. La asignación presupuestaria de recursos a las municipalidades opera con criterios político-partidistas y bajo la lógica de premio-castigo, según la naturaleza política del gobierno local.
	2008	Modificación del Decreto Presidencial 03-2007	Se reformula el nombre de la Secretaría de Comunicación y Ciudadanía a Secretaría de Comunicación y Ciudadanía para el Desarrollo Social, y se amplían sus funciones para coordinar todos los programas sociales del gobierno con cobertura nacional.

Fuente: Elaboración propia a partir de Stuart (2009) y Prado (2016).

Bajo esta lógica, el presidente Ortega decreta desde los primeros días de su mandato un nuevo sistema de participación multinivel —nacional, regional, departamental, municipal y comunitario— por el cual desconoce y desmantela las modalidades y estructuras ya existentes, como puede verse en la Tabla 2. Con el Decreto Presidencial 03-2007 se reforma la Ley de Organización, Competencias y Procedimientos del Poder Ejecutivo, Ley 290, e instaura el tendido de los Consejos y Gabinetes de Poder Ciudadano (CPD). Como ya se ha descrito, son estructuras de funcionamiento vertical del gobierno central, específicamente del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, a través de los cuales se canalizan los programas sociales del Ejecutivo y de sus ministerios.<sup>12</sup> De esta forma, el Ejecutivo inaugura su mandato reforzando un proceso de concentración de poder en varios frentes a fin de obtener el predominio en la Asamblea Legislativa y el control en el ámbito territorial por medio de las alcaldías. Esta agenda política implicó varios pasos: primero, el confinamiento de la Ley de Participación Ciudadana y la disolución de la Oficina de la Administración Pública; segundo, la reorganización de los canales de coordinación entre el gobierno central y las municipalidades a través del Instituto de Fomento Municipal (INIFOM) para asuntos políticos y técnicos, y del Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) para todo lo relacionado con inversión social, ahora condicionada por criterios políticos partidistas.

Por el talante autoritario y excluyente de este nuevo dinamismo político-institucional se restringieron progresivamente otras formas de coordinación y participación ciudadana. Según Prado (2016) la diferencia entre los Comités de Poder Ciudadano (CPC) instituidos por el gobierno sandinista y los Comités de Desarrollo Local (CDL) establecidos por la Ley de Participación Ciudadana (Ley 475), se resume en las siguientes características: a) la interacción más importante de los pobladores ya no será con los alcaldes, sino con los delegados de los ministerios y el secretario político municipal; b) se socava la naturaleza multipartidaria y plural de los espacios de participación ciudadana al ser ahora un canal de participación unipartista; c) los pobladores, ahora organizados en los CPC y en los Gabinetes de Poder Ciudadano (GPC) son integrados en estructuras organizativas orientadas a reconstruir la hegemonía política del FSLN desde la base comunitaria. Esta restricción de los espacios de participación y de asociación de la ciudadanía es una forma recurrente de los regímenes autoritarios, según Schedler (2016), de controlar a la sociedad civil por medio de la organización subordinada de los grupos sociales, con dos propósitos: a) evitar o frenar el (re)surgimiento de una sociedad civil autónoma; b) con la desorganización de las fuerzas sociales

---

12 Entre los ministerios e instituciones del Estado se contemplan los siguientes: Instituto Nicaragüense de la Mujer, Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, Instituto Nicaragüense de la Juventud, Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Transporte e Infraestructura, Ministerio Agropecuario y Forestal, Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal y la Secretaría de Comunicación y Ciudadanía para el Desarrollo Social.

se espera lograr la sumisión popular (pp.107-108). Un desafortunado efecto político de este cambio fue su impacto en la forma de gestión del presupuesto y del plan de desarrollo municipal. El exvicealcalde de Jinotepe, Leonel Rojas, relata su experiencia en los dos modelos de participación ciudadana:

Yo estuve en las administraciones cuando hubo y no hubo autonomía. Cuando había, por ejemplo, el presupuesto que preparábamos para el año siguiente (...) basado en propuestas que hacía el alcalde, los concejales (...) se sometía a los barrios en cabildos. Ahora te dicen “Este es el plan”. En la práctica es lo que a vos te impone el secretario político —explica Rojas. El personero partidario imparte “las orientaciones de arriba” en las alcaldías y decreta “qué es lo que hay que hacer” (Miranda, 2017).

Otro golpe decisivo a la descentralización y autonomía municipal fue la reforma de la Ley de Transferencia Presupuestaria a Municipios, al abolir el porcentaje obligatorio del sistema de distribución de transferencias presupuestarias, que se regía por categorías de municipios. A raíz de esa reforma, la asignación de recursos se vicia con la índole discrecional de la Comisión de Transferencia, que a juicio de Prado (2016) premia o castiga a municipalidades según su bandera política y la “docilidad” o resistencia mostrada para acatar lineamientos del Ejecutivo. De este modo se establece un mecanismo político-financiero del *gobernante* para seleccionar quiénes son los que ganan y quiénes son los que pierden, al conceder y restringir el acceso a los recursos y al poder.

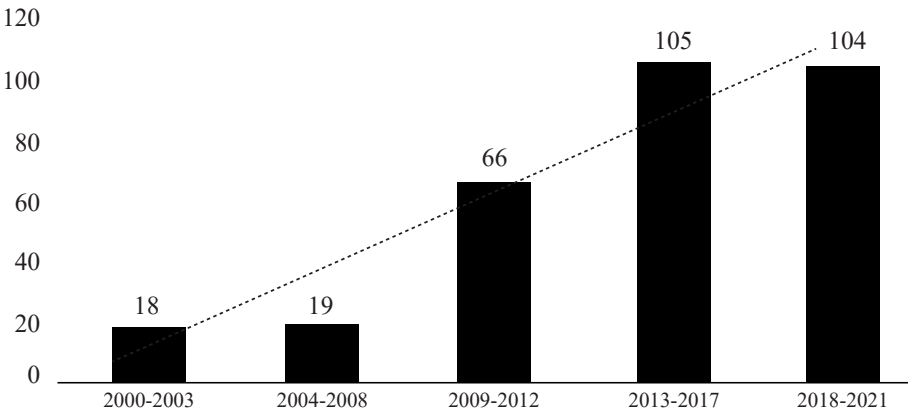
Esta forma de violencia estructural no sólo se ha dirigido contra los opositores y adversarios políticos, sino en contra de sus propios correligionarios y militantes, cuando estos han mostrado un mínimo gesto de “indisciplina” o “insubordinación” o “desacuerdo”. Un ejemplo de esta intolerancia ocurrió con el alcalde del municipio de Muy Muy, Orlando Antonio Blandón Peralta, quien apenas duró tres semanas en el cargo, luego de haber hablado sobre autonomía municipal en una reunión de alcaldes designados por el FSLN, en Managua, donde reciben orientaciones del Ejecutivo cada semana (Martínez & Gallegos, 2018). Otro caso fue la destitución del ya citado vicealcalde de Jinotepe, Leonel Rojas, en el año 2010. A juicio de Mario Mendieta, secretario político del partido en el gobierno, se destituyó a Rojas por problemas de “sumisión”.

Según nota periodística de Miranda (2017) en el medio digital *Confidencial*, Rojas había sido militante histórico del FSLN, excombatiente en la columna del Frente Sur Benjamín Zeledón, además exiliado en México durante la dictadura de Somoza, y había perdido a su hermano, Julio Rojas, en el mes de julio de 1978. En los años 80 fue militar activo en el área de inteligencia del Ejército. Pese a su militancia y su trayectoria política, en su partido no tuvieron cabida sus cuestionamientos ni su sentido crítico, ni se le permitió continuar su carrera en la gestión pública local. Entre 2008-2017 han sido destituidos al menos 34 alcaldes y vicealcaldes.

A juicio del experto en municipalismo y uno de los impulsores de las políticas de descentralización y participación ciudadana, Manuel Ortega

Hegg, en el caso de las destituciones de alcaldes y vicealcaldes “no hay nada dispuesto en la legislación que permita que un partido destituya a un militante de un cargo electo; pero sí a lo interno del Frente Sandinista. No hay ninguna causal para destituir a cualquier funcionario electo en los municipios por diferencias con su partido” (Ortega Hegg entrevistado por Miranda, 2017). Este modelo de gestión centralizado y autoritario impuesto por el régimen de Ortega ha castigado con medidas de destitución de los cargos de elección popular directa, lo cual es ilegal y vulnera múltiples derechos, no sólo de los alcaldes, sino de sus electores. El mensaje político es que los regímenes autoritarios no sólo necesitan ejercer el poder de forma autoritaria, sino demostrarlo. En otros términos, buscan “controlar las amenazas y también manejar las percepciones de las amenazas”, para mostrarse invencibles ante sus seguidores y adversarios (Schedler, 2016, p.67).

Gráfico 3. Alcaldes sandinistas reelegidos, según contiendas electorales (2000-2017)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de *Confidencial* (Cerde, 2018, en *Confidencial* 2 de febrero).

A la par del fenómeno de la inestabilidad de los funcionarios en el ámbito de lo local se ha observado que el FSLN ha promovido la reelección de sus candidatos, según puede verse en el Gráfico 3. Una investigación periodística de un medio independiente señala que el 77% de los alcaldes han resultado reelectos en las últimas elecciones municipales (Cerde, 2018). Según Prado (2018), se trata de un “estancamiento intencionado de las élites” en el FSLN, cuyo propósito no es la selección y postulación de liderazgos locales, sino garantizar de forma calculada la permanencia de funcionarios escogidos *al dedazo* y sometidos al “orden y mando” de la pareja presidencial, es decir, candidatos que han mostrado ser leales y confiables. Ello ha generado descontentos e inconformidad de las mismas bases y de la militancia política – casos como Masaya, Chinandega, El Realejo, Corinto, Jalapa, Ocotal y otros– además de la apatía política entre el electorado en general.



El régimen Ortega-Murillo ha hecho de las instituciones públicas armas políticas para esgrimir las contra sus adversarios y contra su propia “membresía sandinista cuando es considerada indisciplinada”, con tal de lograr una “hegemonía imbatible”. Las estrategias se han reconfigurado según los escenarios de disputa: a) en la *dimensión horizontal*, el gobierno buscó el control por medio del reparto del poder entre los poderes del Estado y las élites; b) en la *dimensión vertical*, aplica el control autoritario entre el régimen y la ciudadanía en el ámbito territorial. En cuanto a lo primero, el FSLN logró neutralizar la interdependencia de los poderes del Estado, y a su vez, capitalizó la mayor concentración de poder en el Ejecutivo, exento de controles y contrapesos por parte de las instituciones públicas. Sumado a ello, el gobierno había establecido durante más de un decenio una alianza interelitista con el sector privado, misma que se fracturó a partir de la violenta represión de abril de 2018. En cuanto a lo segundo, y por efecto de lo anterior, el gobierno central no sólo había logrado centralizar el poder de decisión en materia de canalización de recursos y definición de prioridades en los planes de desarrollo en el ámbito territorial, sino que había restringido, mediante sesgo partidista, los espacios de participación en detrimento de la gestión pluralista de las demandas ciudadanas. Por consiguiente, el régimen de Ortega ha jugado con dos estrategias de poder: por un lado, neutraliza cualquier *amenaza horizontal* subordinando al Ejecutivo los poderes del Estado; y por otro, contiene cualquier *amenaza vertical* suprimiendo la disidencia abierta, tanto en sus filas partidistas como en espacios pluripartidarios de participación en los territorios y en el campo político. Además, el régimen sistemáticamente procura producir expresiones de apoyo popular a base de invertir recursos para garantizar en mítines y rotondas<sup>13</sup> movilizaciones multitudinarias artificiosas, puesto que son obligatorias para los empleados públicos (Gómez, 2018; Luna, 21 de mayo 2018). Así mismo, ha jugado con la emotividad nostálgica y el entusiasmo ingenuo de su militancia al celebrar gestas heroicas del pasado<sup>14</sup> carentes de actualización histórica y de coherencia con la realidad del presente.

El impacto y el alcance político de estas estrategias de poder del régimen de Ortega no pueden atribuirse exclusivamente al despliegue de un conjunto de artimañas políticas del FSLN ni al efecto conspirativo del pacto político bipartidista del año 2000. Sin duda alguna se han combinado otros factores, tanto en el plano nacional como en el internacional, que se resumen en lo siguiente. En el ámbito nacional: a) el desgaste y desprestigio de los partidos políticos contribuyeron a un progresivo distanciamiento de la élite

---

13 Por ejemplo, para el proceso de compactación y reducción del personal en las instituciones del Estado se aplicará una Guía de Evaluación Integral, cuya revisión será mensual y en la que se tomarán en cuenta cinco indicadores clave: a) compromiso y defensa de la revolución; b) aporte monetario al partido; c) cumplimiento de objetivos laborales; d) asistencia a actividades partidarias; e) características de revisión especial (Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, 2019, p.20).

14 El politólogo José Antonio Peraza identifica rasgos necrófilos en estos rituales políticos que exaltan el martirio y la cultura de la guerra frente a un enemigo o adversario, incluso en la consigna tan repetida de “Patria libre o morir” (Comunicación personal, viernes 5 de julio de 2019).

política respecto de la ciudadanía, y al agotamiento de las tradiciones políticas —expresado en el creciente abstencionismo electoral; b) el debilitamiento de la sociedad civil producido en cierta forma por el retiro de la cooperación internacional y la persecución del régimen contra las ONG; c) el cierre de los espacios de participación y gestión de las demandas de las organizaciones sociales y comunitarias, vetadas por el gobierno<sup>15</sup> (Prado, 2012; Stuart, 2010); d) el recrudecimiento de los mecanismos de represión y criminalización de la movilización y la protesta social (Amnistía Internacional, 2014; CENIDH, 2014; Sánchez et al., 2015); e) el restablecimiento de las relaciones entre los empresarios y el gobierno sandinista contribuyó de alguna manera al proceso de reconfiguración del Estado, impulsado por el régimen de Ortega bajo un esquema de mutuo beneficio, en el que “el sector empresarial hacía ciertas concesiones al Gobierno atendiendo a las circunstancias y al progreso de su propia visión de desarrollo”, a cambio de lo cual disponía de espacios de incidencia para impulsar propuestas legislativas<sup>16</sup> y agendas que propiciaran un clima proempresarial (Spalding, 2017, p.170).

Este aparente clima de paz laboral, estabilidad macroeconómica y crecimiento de la inversión extranjera dejó en segundo plano el tratamiento de problemas relacionados con la corrupción, el deterioro de la institucionalidad del Estado, la violación de los derechos humanos y el proceso de desdemocratización, a pesar de algunas críticas y señalamientos del empresariado. Prácticamente, bajo el paraguas de la alianza gobierno y empresariado se toleró, con un alto costo humano y material, el divorcio entre dos desafíos intrínsecamente consustanciales: el desarrollo económico y la democracia. En su momento, la embajadora de los Estados Unidos, Laura F. Dogu, interpeló al empresariado nicaragüense por su pragmatismo político-económico ante el deterioro de la democracia, y por otro lado, reconoció las legítimas aspiraciones de democracia formuladas por los sectores sociales históricamente excluidos de los beneficios del modelo de económico y víctimas de los abusos del régimen:

Las comunidades empresariales valoraban más la estabilidad que la sostenibilidad. Creían que el crecimiento económico traería oportunidades. Pero cuando viajé por Nicaragua y me reuní con pequeños agricultores, jóvenes empresarios, estudiantes, mujeres líderes, comunidades indígenas y tantos otros, escuché algo diferente. Estos nicaragüenses soñaban con un país justo con oportunidades económicas para todos. Donde la corrupción y la identidad política no limitaran las oportunidades a sólo unos pocos. Ahora está claro que la gran mayoría de los nicaragüenses ya no aceptarán más la

---

15 Por ejemplo, la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local (Red Local) no podía trabajar con alcaldías del partido en el gobierno, sino de otros partidos políticos. De igual manera ha sucedido con otras instituciones públicas, como el Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud.

16 Según un análisis interno, COSEP colaboró exitosamente con 105 leyes y 42 reglamentos aprobados por la legislatura durante el periodo 2008-2015 (COSEP, 2016, 9, en Spalding, 2017, p.168).

corrupción de los funcionarios gubernamentales o de las empresas privadas y que ya no confían en las instituciones del gobierno. Quieren un país que proteja sus derechos y quieren elecciones libres, justas y transparentes. Lo que entienden es que la prosperidad, la seguridad y la democracia sólo pueden funcionar bien cuando todas se complementan (Palabras de la embajadora en evento de AMCHAM, 29 octubre de 2018).

En el plano internacional, cabe destacar el flujo de recursos extranjeros, en donaciones y préstamos, que otorgó el gobierno venezolano al régimen de Ortega. Por ejemplo, de Petróleos de Venezuela (PDVSA) se estima que entre cuatro y seis mil millones de dólares fueron transferidos en diez años (Chamorro, 11 de junio 2015; Farah & Yates, 2019). Parte de estos recursos se destinó a financiar programas sociales de producción agropecuaria, proyectos de construcción y mejora de viviendas de familias de escasos recursos, microcrédito para emprendedurismo, subsidio de transporte urbano y de energía eléctrica (Spalding, 2017). Según el economista Acevedo, este flujo de recursos representó un “monto extraordinario para un país tan pequeño como Nicaragua. Esto ha permitido al gobierno una disponibilidad de recursos que supera con creces a la de cualquier gobierno anterior, pese a la disminución de los flujos de cooperación de fuentes tradicionales” (Enríquez, 8 de junio 2015). Gracias a este flujo de capital el régimen logró desarrollar una relación clientelar con las élites económicas y con sectores muy empobrecidos del país (Martí, 2017). A los primeros les propició incentivos y oportunidades de acumular mayor riqueza,<sup>17</sup> y a los segundos les brindó acceso a los programas sociales, entre otros beneficios.<sup>18</sup>

Cabe señalar que la reconfiguración del régimen autoritario ha sido un proceso complejo en el que ambas estrategias de control del poder (la horizontal y la vertical) se desarrollaron al unísono, de tal forma que ambas se retroalimentaron entre sí. Otro elemento que merece mención es la confluencia de otras variables de índole nacional e internacional. Un tercer elemento que ayudará a entender la escalada de esta crisis sociopolítica es el análisis de la correlación entre la naturaleza del régimen y el uso político de la violencia, justificado desde un discurso y una práctica política populista del FSLN e impregnado de una cultura autoritaria.

### 3. La institucionalización de la violencia política

Se analizarán dos características del régimen que ayudan a entender el proceso de institucionalización y recrudescimiento de la violencia ante las expresiones de disidencia y las acciones contenciosas de la ciudadanía. Una de ellas es el populismo autoritario, cuya política y narrativa ha criminalizado a

---

17 Por ejemplo, el acceso privilegiado al mercado venezolano para la exportación de productos agropecuarios; por otro lado, los volúmenes de depósitos financieros procedentes de los fondos del ALBA estimularon aún más la actividad del sector financiero y de la banca comercial.

18 Por ejemplo, los programas Hambre Cero, Usura Cero, Bono Productivo Alimentario, etc.

la ciudadanía contenciosa hasta convertirla en un enemigo, y por consiguiente, en el objetivo de la represión. La otra característica del régimen de Ortega atañe a los antecedentes históricos del FSLN, concretamente a su raigambre política-militar; entre esos antecedentes cabe señalar su persistente cultura autoritaria y el uso histórico de la violencia política como un recurso de orden y de cambio social en las relaciones de poder; ese uso histórico de la violencia política se caracteriza por su verticalidad, su nivel de coordinación y su naturaleza colectiva. Esta violencia es la que se ha manifestado históricamente en el campo de la política como una forma particular de gestionar el conflicto central entre gobernantes y contendientes.

### 3.1 Un régimen con vicios de populismo autoritario

El “otorgamiento” de máximo poder a la figura del presidente o caudillo ha sido una de las características de los regímenes populistas; a juicio de Dubesset y Majlátová (2012) estos regímenes tienen el peligro de que sus líderes autócratas y sus operadores más cercanos actúen con arbitrariedad y autoritarismo en desmedro de las instituciones y al margen o en contraposición con los principios democráticos que les permitieron llegar al poder. En el caso del liderazgo autocrático de Ortega, la dirigencia del FSLN ha justificado su figura política al investirla de una falsa “legitimidad revolucionaria” y de un carácter insustituible, con lo que logran colocarlo por encima de la Constitución y de las leyes del país. Una muestra de esta narrativa fueron las palabras de Tomás Borge Martínez, fundador del FSLN, en el Congreso de su partido en el año 2011. En este espacio calificó de “injusto” el impedimento estipulado en el Art. 147 de la Constitución sobre la relección presidencial, que frenaría las aspiraciones de Ortega de postularse en las presidenciales del 2011. Según Borge, es la voluntad del pueblo la que lo legitima:

La revolución es fuente de derecho y sus posiciones son legítimas y justas más allá de lo formal y lo concreto. Si estamos en una revolución, debemos seguir... por eso la determinación del máximo órgano [la Constitución] de este país es injusta...la máxima legitimidad la tiene la voluntad popular. (Congreso FSLN, 28 de febrero de 2011).

Desde la perspectiva de los regímenes populistas la reelección no representa ningún problema, ya que el mandato del líder se considera indefinido o intemporal en virtud de su mística misión: la redención del pueblo oprimido o agraviado (De la Torre, 2001). Una de las características de los líderes populistas es que se les atribuye un liderazgo casi profético, como un ser poseedor de toda la razón (Malamud, 2010) y del poder para transformar el Estado y la sociedad (Salinero, 2015; De la Torre, 2013). En muchos casos, al líder se le atribuye el papel de representante exclusivo *del pueblo*, lo cual constituye la fuente de legitimidad de sus actos (Azpuru, 2018). En esta lógica, el régimen de Ortega se ha valido del lema que ha acuñado y que repite en toda ocasión: “el pueblo presidente”: “Hoy, queridas

familias nicaragüenses, nuestro compromiso es de multiplicar el trabajo, y multiplicar el trabajo significa multiplicar el servicio, porque el pueblo no puede ser defraudado, *el pueblo ha votado por el pueblo*” (Palabras de Daniel Ortega, 9 de noviembre de 2012, en Espinoza, 2012. [Énfasis agregado]). En esta línea, la coordinadora de la Oficina de Comunicación de la Casa de los Pueblos, Rosario Murillo, presenta a Ortega como el guía de la nación: “Estaba revisando, leyendo, releendo el Mensaje del Comandante Daniel, cuando hablaba del Poder del Pueblo, y decía: «¡No hay que temerle al Poder del Pueblo! El Poder en manos del Pueblo», es lo que nos ha permitido pasar estos cinco años [2007-2011] con una gran Estabilidad (...) Pero además, el Comandante Daniel va marcando la pauta de cómo es que vamos a hacerlo mejor” (Declaraciones de Rosario Murillo en la edición del mediodía de Multinoticias Canal 4, 13 de enero de 2012).

Esta identificación del líder con el pueblo tiene la intención de generar una falsa unidad sin diversidad, sin disenso y sin debate crítico, como lo ha dejado claro Murillo en el primer encuentro con alcaldes, vicealcaldes y concejales electos del Poder Ciudadano en la Casa de los Pueblos: “Nosotros tenemos que estar unidos, cohesionados en una sola lógica...la lógica que establece la dirección del Proyecto Revolucionario, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, bajo el liderazgo del Comandante Daniel. Eso es muy importante que lo tengamos claro porque, de repente, podemos empezar a pensar que somos una diversidad ideológica cuando tenemos que ser Unidad” (*El 19 Digital*, 29 de noviembre de 2008). Se trata una pauta y una clara advertencia de que la diversidad de posiciones no tendrá cabida en el partido bajo el liderazgo del caudillo que lo preside; no se acepta la diversidad ideológica ni el cuestionamiento, como han demostrado las decenas de destituciones de alcaldes y vicealcaldes bajo el pretexto de indisciplina ante la cúpula partidaria. De igual forma sucedió con la destitución de la diputada Xóchitl Ocampo, quien en diez años ha sido la única parlamentaria sandinista que se atrevió a votar en contra de un proyecto de ley de su bancada, en el plenario sobre el proyecto del canal interoceánico.

Otra característica del populismo es su naturaleza polarizante, bajo el principio de que el monopolio de la verdadera representación del pueblo es exclusivo de su líder o caudillo, y por consiguiente, no acepta políticamente una oposición legítima. “Quien está contra el líder está automáticamente en contra del pueblo” y sus intereses (Azpuru, 2018, p.5). De ahí que las categorías y recursos centrales empleados en las narrativas de los regímenes populistas son “el pueblo” y su “enemigo”; y a través de estas categorías se construye una noción polarizada y maniquea de la sociedad, y una visión moralizada de los sujetos de la política: por un lado, *nosotros*, los buenos ciudadanos, dignos de consideración política, con los cuales se comparten características y convicciones en común; y por el otro, *los de afuera*, los otros que no son pueblo, cuyos intereses y demandas pueden ignorarse con total legitimidad, porque son los que representan las causas de los males que afectan a la sociedad (Mounk, 2018; De la Torre, 2013). Debido a esta pugna polarizada entre el pueblo y sus adversarios, la democracia se entiende, según Knight (2001) como “la movilización a favor del líder, quien encarna

las aspiraciones y deseos populares, y con ello, el silenciamiento de sus enemigos”, sin importar la naturaleza del régimen o si los mecanismos de relación entre el Estado y la sociedad se corresponden necesariamente con el Estado de derecho (p.190). Desde esta lógica polarizada, Schedler (2016) sostiene que un régimen autoritario procura enviar dos mensajes inequívocos a la sociedad, sobre todo a los contendientes: por un lado, declaraciones y decisiones de perseguir y castigar a los disidentes, “trazando los límites de las conductas y acciones colectivas toleradas”; y por otro, silencios y omisiones de “no perseguir a los operadores de la violencia organizada de partidarios del régimen”, señalando así los espacios de violencia permitidos y patrocinados con las garantías de su impunidad (p.76).

En el contexto de la crisis sociopolítica de abril de 2018, el régimen de Ortega, lejos de reconocer los derechos civiles y la legitimidad de las demandas de la ciudadanía movilizada, ha recrudecido su discurso criminalizante y su respuesta represiva a los contendientes, justificando el uso desproporcionado de la violencia, según expresan sus discursos y comunicados oficiales: “Desde Abril de este año [2018] nuestro Pueblo fue sometido a un intento de Golpe de Estado por *grupos minúsculos*, que no solo deberán pagar a la justicia su legado de Destrucción y Muerte, también pagarán moral y económicamente a las víctimas de su barbarie” (Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, 2019, p.26). Según el gobierno, se trata de “grupos políticos disfrazados de Organizaciones No Gubernamentales, asociados al crimen organizado y financiados desde el exterior, ejecutando secuestros, torturas, extorsiones, asesinatos, saqueos, obstrucción de vías públicas, destrucción e incendios de edificios públicos” (p.3). Y añade que no se trata de acciones masivas espontáneas, sino de un repertorio de acciones colectivas con un “patrón delictivo y de violencia, [el cual] se replicó en algunas de las principales ciudades del país, lo que reveló la existencia de una planificación y organización previa”, motivada por “un intento de ruptura constitucional e institucional para cambiar a las autoridades legítimamente electas y derrocar al gobierno (léase, intento fallido de golpe de Estado)” (p.8). (Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, 2018b, pp.8-10).

En esta línea el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI, 2018) ha señalado que el proceso de “concentración del ejercicio de poder político [en Nicaragua] ha significado la concentración de los mecanismos de difusión del discurso político” en la pareja presidencial, dado que son las voces oficiales del poder, sus declaraciones, discursos públicos y comunicados “tienen un rol determinante en la construcción de los imaginarios sociales”, concretamente, la imagen negativa de la ciudadanía contendiente (p.64). Muchos de los términos utilizados en la narrativa oficialista tienen una evidente connotación peyorativa cuya intención es producir múltiples efectos:

Primero, minimizar el perfil de los contendientes al considerarlos un sujeto minoritario o poco representativo que es instrumentalizado y financiado por actores externos. “Esos minúsculos, esas almas pequeñas, tóxicas, llenas de odio, no representan el sentimiento, la necesidad de paz, de trabajo y de cariño del pueblo nicaragüense que tanto ha sufrido” (Declaraciones de Rosario Murillo, 19 de abril de 2018). Según el régimen, las protestas las



montó la extrema derecha con la intención de llegar al poder a través de un golpe de Estado, y sus propósitos atentaban contra los intereses del *pueblo presidente*:

la ola de terrorismo y de violencia golpista que azotó a Nicaragua, fue la expresión de un plan de los sectores de derecha extrema del país y los que gobernaron en el período comprendido entre 1990 a 2007, quienes siempre han querido alcanzar el poder, y al no lograrlo por la vía democrática, optaron por las vías violentas, en alianza con actores internacionales que financiaron y respaldaron las acciones de estos grupos (...) las manifestaciones de violencia, tuvieron diferentes fases, que estas obedecieron a una estrategia de Golpe de Estado, donde la víctima ha sido el pueblo de Nicaragua” (Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, 2018b, pp.12-13).

Segundo, la descalificación de las motivaciones de la rebelión ciudadana: “lo que hacen [la ciudadanía autoconvocada] está motivado por el odio, la envidia, están dirigiendo planes criminales” cuyo objetivo “es destruir la imagen de Nicaragua, y que a Nicaragua se la vuelva a ver como un país en guerra nada más” (Discurso de Ortega, 21 de abril de 2018). En consecuencia, se pretende responsabilizar a esta ciudadanía movilizada de todos los hechos trágicos de la crisis, e incluso de aquellos abusos de los que han sido víctimas. En el discurso del 40 aniversario de la revolución sandinista, Ortega reiteró la misma tónica de su discurso, ahora acusándolos de compartir los intereses de quienes asesinaron a Sandino:

Tiempos en los que hay quienes alegremente tocan tambores de guerra, sin pensar que al tocar tambores de guerra ponen en riesgo la existencia de ellos mismos y de su Pueblo (...)

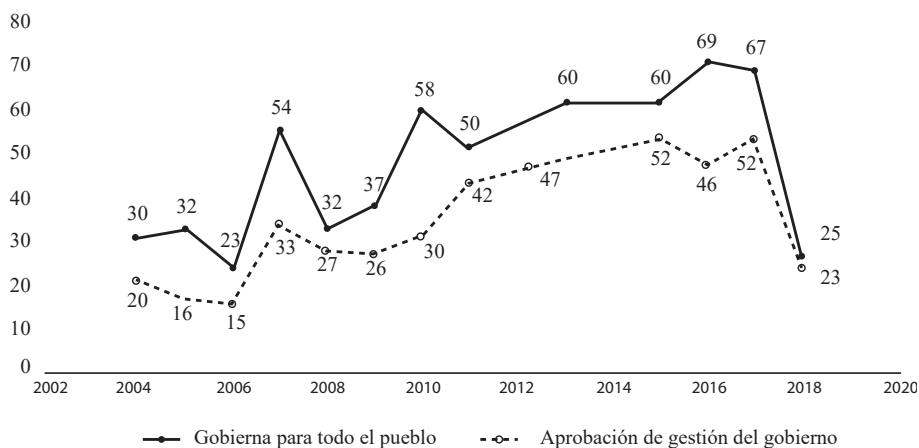
Aquí después de la destrucción que provocó en pérdida de Vidas, en pérdidas Económicas, en Desempleo, el intento de Golpe que le quisieron llamar “levantamiento popular”, aquí tuvimos paciencia. Yo les decía a ustedes: “Yo le pido a Dios que me dé la paciencia de Job”, y tuvimos la paciencia de Job, pero todo tiene un límite, y estaba claro y se fue descubriendo ante los ojos del Pueblo y ante alguna gente que se había sumado de manera engañada, se fue descubriendo que no había tal “levantamiento popular”, que eran los mismos intereses de los explotadores de siempre, que eran los mismos intereses de los que asesinaron a Sandino, que eran los mismos intereses de los somocistas los que se juntaban para intentar derrocar al Gobierno del Pueblo, al Gobierno Sandinista. Ellos son los mismos que trajeron las tropas yanquis tras el derrocamiento de Zelaya, y donde luego se levantó Sandino. Y luego de derrotar Sandino la intervención entonces los yanquis ocuparon a Somoza para asesinar a Sandino de la forma más vil y más cobarde después de que el Presidente lo invitara a una cena, y cuando Sandino viene a la cena lo capturan y lo asesinan... (Discurso de Ortega, 19 de julio de 2019, publicado en *El 19 Digital* del 20 de julio de 2019).



Beristaín y Esquivel (1993) sostienen que los gobiernos y aparatos represivos de Estado consideran que “el enemigo más importante del que tienen que ‘defenderse’, es el interno y lo califican de delincuente, terrorista, enemigo de la patria y de la democracia, de esta forma lo convierten en objetivo de la represión” (p.26).

Los objetivos de la represión y la criminalización no son sólo suprimir la movilización, sino dismantelar las condiciones previas para la acción colectiva, infundir lo que Robin (2009) denomina el *miedo político*. Se trata de la esencia de la dominación totalitaria, *el terror*, diría Arendt (1981). Un efecto no calculado de esta escalada represiva ha sido la acumulación del descontento, la vertiginosa pérdida de legitimidad del régimen y sus instituciones cómplices, como se puede observar en el Gráfico 4, de la encuesta del Latinobarómetro (2018). El porcentaje de aprobación de la gestión del gobierno sufrió una caída de 44% en un año, al pasar de 67% en 2017 a 23% en 2018, y la percepción de que el régimen gobierna para el pueblo descendió de 52% al 25%.

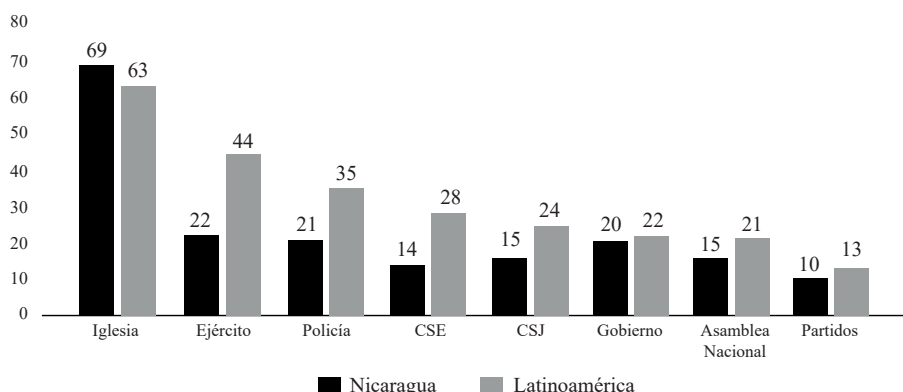
Gráfico 4. Niveles de percepción y aprobación de la gestión del gobierno (2004-2018)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Latinobarómetro 2018.

De igual forma, los niveles de confianza en las instituciones públicas sufrieron una dramática disminución, según el Gráfico 5, cuyos porcentajes están muy por debajo de la media de los países latinoamericanos. Ninguna institución de los poderes del Estado alcanzó el 25% de confiabilidad para la ciudadanía. La Policía de Nicaragua resultó ser la menos confiable a nivel latinoamericano, después de México, con apenas el 21% y 19%, respectivamente. En cambio, la Iglesia es la institución más confiable para la ciudadanía, por su valiente labor de denuncia de los abusos que se han venido perpetrando sistemáticamente a lo largo de estos años de desgobierno.

Gráfico 5. Nivel de confianza en las instituciones de Nicaragua (2018)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Latinobarómetro (2018).

No es de extrañar que en el informe anual de Freedom House (2019) sobre la democracia en retroceso, Nicaragua haya sido el país que más retrocedió (12 puntos) en la escala de las condiciones de los derechos políticos y las libertades civiles (p.6). Como advierte Prado (2019) el régimen de Ortega fue presa de su propia estrategia al destruir los mecanismos institucionales para procesar el conflicto y al eliminar los mecanismos de mediación entre el Estado y la sociedad. Sin puentes ni válvulas de escape, propició que cada ciudadano se sintiera con el derecho de salir a protestar a las calles sin necesidad de que alguna organización lo llamara a la lucha (Prado, en *Confidencial*, 16 de enero de 2019).

Sobre los peligros del deterioro de la institucionalidad y el creciente autoritarismo, ya lo habían advertido los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua en su carta al presidente y a su esposa, el 21 de mayo de 2014: “la institucionalidad no es marginal en un Estado democrático, el cual sólo es posible en un Estado de derecho, en donde el ejercicio del poder está sujeto a la ley y se caracteriza por la independencia y separación de los poderes del Estado”. Y para acreditar esta exhortación, los obispos le recordaron en esa misma epístola las lecciones que la reciente historia nos ha legado “en un país como Nicaragua [donde] el respeto y la fortaleza de la institucionalidad no sólo [es] indispensable, sino que adquiere carácter de urgencia política, pues somos un pueblo con una memoria relativamente reciente de lucha antidictatorial, motivada por el cierre de los espacios democráticos” (CEN, 2014, N° 35 y 36). Desafortunadamente, la advertencia no tuvo el efecto deseado en la pareja presidencial, de tal forma que el régimen prosiguió con el proceso entrópico de desdemocratización del país hasta que ocurrió el estallido de abril de 2018.

### *3.2 La raigambre político-militar y la cultura autoritaria del FSLN*

Una de las variables que determinan el lugar que la violencia ocupa en la vida política de una sociedad es la naturaleza del régimen (Tilly, 2007). Como ha documentado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI, 2018), “el Estado ha sido el protagonista principal en el ejercicio de la violencia” en el contexto de la crisis sociopolítica Nicaragua, según se puede observar en el nivel de letalidad, coordinación y organización de la violencia en los distintos momentos y escenarios (p.177). Se trató de una política de represión planificada y avalada al más alto nivel del gobierno y con garantías de impunidad. Esta violencia tiene su lastre histórico, y en este último decenio de gobierno de Ortega se ha ido institucionalizando. Desde esta perspectiva, es necesario describir dos características históricas del FSLN que ayudan a entender la forma de concebir el control de las instituciones del Estado y su relación con la sociedad: a) la raíz político-militar del FSLN; b) su arraigado liderazgo autoritario.

El FSLN surgió como una organización político-militar, y su programa histórico, diseñado en 1969, señalaba la importancia estratégica de organizar un ejército y un cuerpo policial nuevos, subordinados al partido e identificados con su proyecto político, que en su momento era la revolución sandinista. Como advierte Martí (2008) este afán de hegemonía no sólo derivó en el control del Ejército y la Policía, sino que en los años 80 ambas instituciones asumieron un carácter vigorosamente partidista. A partir de los años 90 se desarrolla en la Policía y el Ejército un proceso de profesionalización y reformas que la invistieron de una naturaleza apartidista. Diecisiete años después, con el retorno del FSLN al poder en el 2007, se revierte este proceso en la Policía, lo que conllevó no sólo a una subordinación política partidista de la institución policial, sino a un progresivo deterioro y descomposición en sus procedimientos. Como ha señalado el Grupo de Expertos Independientes (2018), “con Ortega, la Policía incrementó las acciones represivas y violentas” (p.53).

Un segundo aspecto, relacionado con la raigambre político-militar del FSLN, es su estilo de conducción política, caracterizado por una estructura altamente vertical y jerarquizada con un fuerte control de sus miembros y una cultura autoritaria que se expresaba en la consigna: “¡Dirección Nacional, ordene!”. Esta cultura política y estilo de conducción “limitó la capacidad de rectificación del gobierno sandinista respecto a ciertas políticas [erráticas] y violentó a determinados sectores de la sociedad, que, en un principio sin ser simpatizantes del proyecto sandinista, no se le había enfrentado” en los años 80 (Martí, 2007, p.51). Cabe mencionar dos casos desafortunados en la historia reciente del país: el choque de la política agraria con el campesinado del centro-norte del país (Gianotten & De Wit, 1987; Horton, 2004) y el rechazo a la autonomía que demandaban los pueblos indígenas y afrodescendientes del Caribe; ambas conflictividades escalaron y nutrieron el conflicto armado interno en los años 80 (Sánchez et al., 2016). Este retorno a la actividad militar del FSLN reforzó cierta dinámica de dirección centralizada y un ejercicio de

la autoridad vertical, propia de las situaciones bélicas, en las que se generó una narrativa y una ideología que justificaban los errores y abusos contra ciertos sectores y actores de la sociedad nicaragüense. Como ha señalado Serra (1988) el impacto de este dinamismo estructuró de forma particular las relaciones sociales y el mundo simbólico, “supuso el encuadramiento de gran parte de la población en una estructura militar caracterizada universalmente por su carácter jerárquico, los métodos organizativos fueron permeándose de una lógica militar, sin distinguir si eran partidarios o gubernamentales” (p.44 en Martí, 2007, p.53). Como se ha señalado en los acápites anteriores, esta cultura autoritaria ha sido una característica persistente en este decenio del gobierno de Ortega, que, reflejada en sus estrategias de control del poder político en su doble dimensión –horizontal y vertical– sin duda ha propiciado la relevancia y centralidad del uso de la violencia.

Un tercer aspecto está relacionado con lo que Tilly (2007) denomina las organizaciones especializadas en la violencia y su patrocinio gubernamental. En el contexto del conflicto armado de los años 80, el FSLN creó el Ministerio del Interior (MINT) con la finalidad de “neutralizar los planes contrarrevolucionarios y contrarrestar sus acciones” (Rueda, 2015, p.45). Para este propósito era fundamental la obtención de información; una de las estrategias diseñadas fue su vinculación cercana con la población, a través de una amplia red de organizaciones partidistas territoriales: los Comités de Defensa Sandinista (CDS) y colaboradores encubiertos. Otra forma consistió en la infiltración del enemigo. Gran parte de la labor de inteligencia estaba orientada a identificar y neutralizar la actividad militar contrarrevolucionaria. Habían desarrollado capacidad para obtener información en todos los niveles de la sociedad sobre actividades de organizaciones o actores que eran considerados una amenaza. Muchos de sus operadores trabajaban de forma encubierta, sin ninguna regulación independiente. Este entorno de permisividad y escaso control propició muchos abusos y graves vulneraciones a los derechos humanos, que a la fecha no han sido suficientemente investigados ni judicializados.

Diecisiete años más tarde, en el contexto de la crisis sociopolítica iniciada en abril de 2018, el gobierno reclutó a algunos oficiales retirados del MINT, junto a otros exmilitares y excombatientes de algunos batallones de élite de los años 80, y recicló la experiencia militar de estos para organizar los contingentes de paramilitares, quienes en coordinación con la Policía ejecutaron acciones represivas y llevaron a cabo el desalojo violento de los tranques en la denominada “Operación Limpieza”. Según información documentada por el GIEI (2018) las estructuras represivas también estaban integradas por empleados públicos, militantes de la Juventud Sandinista, miembros del partido e incluso integrantes de pandillas que habían sido parte de los programas de la División de Asuntos Juveniles de la Policía. El nivel de coordinación y planificación de la represión involucró a gran parte del entramado estatal y gubernamental, instituciones públicas, cuerpos de seguridad, gobiernos locales, Comités de Poder Ciudadano y grupos paraestatales. La experiencia militar de estos operadores de la violencia, el armamento de guerra empleado, las garantías de impunidad ofrecidas por el régimen, y el nivel de coordinación

con las estructuras organizativas territoriales y nacionales tuvieron un efecto en el nivel de letalidad perpetrada contra una población desarmada. Información recabada por Amnistía Internacional (2018) indica que la utilización que hizo el gobierno de estos grupos armados particulares tiene la intención de dificultar la identificación de los responsables de violaciones de derechos humanos y de multiplicar su capacidad represora.

Según declaraciones de un exteniente de la Policía al periodista Carlos Salinas, de *Confidencial*,<sup>19</sup> “las órdenes eran precisas: dijeron que el comandante ya dio órdenes y hay libre, no vamos a ser procesados, hay órdenes de salir a matar a la gente”. En esta entrevista, este exteniente aseguró que las caravanas estaban integradas por expolicías, exmilitares e incluso oficiales del Ejército activos. Se encargaban de capturar a líderes de los tranques y luego ejecutarlos: “si vos te fijas en algunos lugares aparecieron muertos. Es porque los levantaron de un lugar y los fueron a matar a otro lado. Hay gente que está desaparecida, y lógicamente nunca la van a hallar” (Salinas, 2019, en *Confidencial* 11 de febrero). Otro caso documentado por el periodista de *La Prensa*,<sup>20</sup> Mynor García, es el de David Moisés Mendoza Rodríguez, exmilitar de 33 años a quien la procuradora Jackeline Torres le había ofrecido a él y a otras 300 familias una propiedad de diez manzanas, tomadas ilegalmente, a cambio de que participaran “en la limpieza de los tranques” durante tres meses (García, 2018, en *La Prensa*, 21 de octubre). El secretario político de FSLN, Jorge Acosta, le entregó una escopeta y luego un AK-47 con sus respectivas municiones en la casa del partido del municipio de San Marcos.

En el contexto de las sofisticadas operaciones combinadas entre cuerpos élite de la Policía y grupos paramilitares, el alarmante número de víctimas, muertos y heridos atacados con deliberada intención letal mediante armas de guerra tuvo como propósito no sólo controlar las expresiones de protesta y privar intencionalmente de la vida a opositores políticos y manifestantes, sino además multiplicar su efecto represor y generar terror en la población. Simultáneamente el Estado propició una cadena de irregularidades que han afectado de manera directa la investigación de estas graves violaciones a los derechos humanos, el esclarecimiento de la verdad y el acceso a la justicia. A pesar de que Amnistía Internacional (2018), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2018), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2018) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (2018) recomendaron la disolución y desarme inmediato de los grupos armados paraestatales, y proteger a la población de todo acto ilegal y violento, el gobierno de Ortega ha institucionalizado en su Política de Estrategia Nacional “La defensa es primero... Por la paz, por el bien común, por la producción”, la integración de estos grupos armados “en los

---

19 Se puede leer el artículo o ver el video de la entrevista en la web de Confidencial: <https://confidencial.com.ni/la-orden-era-eliminar-a-los-lideres-de-la-protesta/>

20 Para leer el artículo y ver la entrevista se puede visitar la edición digital: <https://www.laprensa.com.ni/2018/10/21/departamentales/2487188-las-confesiones-de-los-tomatierras-desalojados-que-fueron-paramilitares>

Gabinetes de Seguridad Ciudadana como líderes comunitarios e instructores de defensa para instituciones, puntos estratégicos y claves para la seguridad de cada comunidad” (Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, 2019, p.12).

Se trata de una estructura multinivel que involucra a gran parte de las instituciones públicas y la infraestructura organizativa partidista que el régimen ha venido implantando en su lógica de control del poder, según lo expresa el texto: “Se creará un Gabinete Nacional de la Defensa por la Paz y Seguridad, que incluirá: 1 representante de la Unidad Análisis Financiero, 3 Representantes de la Policía Nacional, los Secretarios Políticos Departamentales, y dos representantes del Ministerio de Gobernación”, cuya tarea principal será «la de Coordinar, Informar y Ejecutar por orden presidencial los planes para la promoción de la Paz y la Seguridad en el país». Además, se articularán entre «las Alcaldías y las Delegaciones Policiales de cada comunidad los Batallones de Defensa y Producción, organizando la Policía Voluntaria [paramilitares] y coordinando los planes de seguridad desde el pueblo y para el pueblo»” (pp.13-14). Esta maniobra de institucionalizar el paramilitarismo, la implantación de mecanismos de control y la persecución política a nivel territorial va acompañada de incentivos materiales y económicos, para lo cual se creó un fondo de atención que se financia con los activos, propiedades, empresas y tierras de las personas que han sido condenadas por terrorismo: “Para la venta, subasta y oportunidades de préstamos para inversión de propiedades y activos del Fondo, se le dará prioridad a Combatientes, Policías Voluntarios y reconocidos Militantes Sandinistas por su defensa inculdicable de la Revolución” (p.27).

El 17 de julio de 2019, mientras se terminaba de revisar este artículo, los nicaragüenses hemos sido testigos de la denuncia de un posible intento de emboscada contra monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa. El jerarca católico se encontraba realizando una actividad pastoral en la comunidad La Joya, municipio de Terrabona, cuando fue advertido por varios campesinos de la zona sobre la presencia de un contingente de hombres uniformados de militares y armados con fusiles de alto calibre. Ante la inminente emboscada, los campesinos decidieron acompañar al obispo, según cuenta él mismo:

Pude ver con mis propios ojos cómo ante la multitud de fieles que venían acompañándome y que se encontraban muy molestos y enardecidos por sentirse lastimados en su dignidad, con sus manos limpias y su propia humanidad prácticamente se enfrentaron a estos hombres que andaban vestidos del típico pinto militar, con fuerte armamento de AK-47 y apertrechados hasta los dientes de municiones y, ante la valentía del campesinado... [los armados] se desplazaron prácticamente huyendo de los campesinos y comenzaron a subir el cerrito que rodea la comunidad de La Joya. Es una enorme y gravísima irresponsabilidad del grupo o escuadra que haya cometido semejante hecho, la enorme y gravísima irresponsabilidad que veo es en las consecuencias funestas que esto podría haber tenido, no

con mi persona, sino con la población, con la gente, porque eran decenas, era una multitud de personas que estaban indignadas, heridas, molestas... (Declaraciones de monseñor Álvarez, en Martínez, 2019, *La Prensa* 18 de julio).

Históricamente, los antecedentes de la región centroamericana en cuanto a grupos paramilitares patrocinados y protegidos por gobiernos han tenido consecuencias perversas en las comunidades afectadas directa e indirectamente durante y después de la represión, por la gravedad de los atropellos a los derechos humanos y por la dramática deuda en materia de esclarecimiento de la verdad, de la determinación de responsabilidades y del enjuiciamiento de los responsables. En Centroamérica, las insuficiencias en los procesos de desmantelamiento de los conflictos armados y en las transiciones hacia la democracia no permitieron desarrollar adecuadamente los programas de reinserción y de atención psicosocial de los desmovilizados. Asimismo, la desarticulación de estos grupos paraestatales en contextos de impunidad y con una deficiente tutela de Estados debilitados institucionalmente provocó que algunas de estas estructuras deviniesen en complejas organizaciones criminales con un enorme impacto político, económico y social en la región. Bobea (2016) explica que en este proceso de “reconversión de agentes desmovilizados de los conflictos armados internos, mezclados con remanentes de grupos criminales previamente constituidos y actores oportunistas, dieron paso al tránsito de la violencia política a la violencia social y de un proceso de acumulación de renta ilícita” (p.68). Esta autora ilustra este fenómeno de un suprasistema de estructuras criminales corporativizadas en lo que se conoció como el “Sindicato” y la “Cofradía” en el caso del expresidente Otto Pérez Molina, que puso en jaque a un gobierno y sumergió a Guatemala en una crisis sociopolítica.

La confluencia de un régimen de impunidad, más la legalización de la paramilitarización y el deterioro de la legitimidad estatal (Gráfico 5) propicia las condiciones y oportunidades para que la criminalidad complejice y consolide estructuras criminógenas con capacidad de controlar territorios, imponer normas, instaurar órdenes sociales, captar liderazgos y abrir nichos productivos y mercantiles ilícitos e incluso proveer servicios bajo condiciones de extorsión a terceros actores que sacan provecho de su condición ventajosa de poder. En palabras de Bobea (2016), en el contexto de la represión hay peligro de que los operadores de la violencia y sus dinámicas criminógenas continúen operando más allá de los cambios orgánicos. Este escenario potencial plantea el reto de cómo crear capacidades para contener y revertir la evolución de la violencia difusa e instrumentalizada.

#### 4. Conclusión

Si bien Nicaragua había iniciado un proceso de transición hacia la democracia, a partir de las elecciones de 1990 –en menos de tres décadas– ha habido un proceso de regresión y deterioro de la democracia hasta el punto



de llegar a un régimen autoritario, cuyos niveles de represión han alcanzado una letalidad sin precedentes, dada la política sistemática impulsada por el Estado que atropella los derechos humanos e incluso perpetra crímenes de lesa humanidad contra una ciudadanía que se ha movilizadado de forma predominantemente pacífica. Este drástico deterioro de la democracia ha sido un proceso larvado y paulatino de instrumentalización de las instituciones del Estado y los mecanismos legales de la democracia por parte de Ortega y su maquinaria partidista, el FSLN, en su estrategia de acceso y permanencia en el poder. Una de las rutas recorridas en este proceso fueron las reformas constitucionales y del régimen electoral, diseñadas a partir de pactos y negociaciones políticas interelitistas con el Partido Liberal Constitucional que posibilitaron en un inicio el control bipartidista de los poderes del Estado.

Cuando Ortega afianzó las condiciones que allanaron su retorno al gobierno, la estrategia consistió en consolidar su hegemonía hasta lograr el control del poder horizontal. En esta lógica, combinó el diseño institucional y el control de los agentes para luego proceder con la manipulación de los procesos institucionales. Un caso emblemático, cuya efectividad ha sido determinante en la consolidación del régimen y sus efectos en la actual crisis sociopolítica, fue la subordinación del Consejo Supremo Electoral y con ello la neutralización de la naturaleza competitiva del sistema electoral, es decir, neutralizó la esencia del núcleo democrático de todo régimen y de toda contienda electoral. De esta manera, Ortega garantizó las “circunstancias calculadas” para las reiteradas supresiones de las condiciones de libertad e igualdad en los procesos electorales, institucionalizando un régimen de *apartheid* político con doble efecto: por un lado, el incremento vertiginoso del número de diputados en tres contiendas electorales, al pasar de 37 diputados en el 2006 a 70 legisladores en el 2016, prácticamente el control suficiente para que el Ejecutivo logre la aprobación de cualquier anteproyecto de ley o reforma constitucional; y por otro lado, el control territorial, con el 88% de la municipalidades otorgadas por el CSE. Una de las lecciones de este proceso de involución y de la actual crisis sociopolítica es el hecho de que las transformaciones del sistema electoral se realizaron con el propósito de adecuar los parámetros de la ley conforme a las posibilidades e intereses de hegemonía del régimen de Ortega, dejando al descubierto la fragilidad institucional ocasionada por el insuficiente proceso de transición política en los años 90. Las elecciones bajo las condiciones que se han descrito constituyen una flagrante manipulación autoritaria con la apariencia de una serie de triunfos democráticos. Desde hace años se ha venido erosionando la legitimidad del régimen y su capacidad de gestionar la energía acumulada por el descontento ciudadano que estalló en abril de 2018, ante el profundo deterioro de las instituciones y el anhelo de enrumbar nuevamente el país hacia la democratización sobre la base de la justicia.

Ortega no sólo logró anular la interdependencia de los poderes del Estado y conseguir la subordinación de sus funcionarios como operadores, sino que la profunda manipulación institucional propició que las autoridades de alto nivel, como es el caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, procedieran de manera transgresora al emitir dos sentencias de la Sala

de lo Constitucional que legalizaron la reelección indefinida, contraviniendo así el artículo 147 de la Constitución de la República, además de atribuirse competencias propias del ámbito legislativo. De igual forma, a raíz del realineamiento de la bancada sandinista el Poder Legislativo ha actuado al margen del Estado de derecho, al apoyar incondicionalmente la aprobación de leyes<sup>21</sup> que atentan directamente contra los derechos humanos, contra las libertades estipuladas en la Constitución Política y contra el derecho de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas a arraigarse en su propio territorio. La reciente Ley de Amnistía es un intento de consolidar la impunidad del régimen en detrimento de los derechos de las víctimas de familiares asesinados, encarcelados, torturados, heridos, desaparecidos, exiliados, expropiados de sus bienes en el contexto de la crisis sociopolítica, cuyo principal perpetrador de violencia ha sido el Estado de Nicaragua. Los regímenes autoritarios constituyen sistemas de dominación política y se basan en instituciones que tratan de saturar, controlar y reprimir todos los espacios de participación y organización ciudadana.

Durante este último decenio el régimen reeditó su estilo de conducción política, caracterizado por una estructura vertical y jerarquizada con un control territorial implantado a través de su estructura partidista –como los Comités de Poder Ciudadano (CPC) y los Gabinetes de Poder Ciudadano (GPC)– que en coordinación con los gobiernos locales y las instituciones del Estado se constituyeron en una infraestructura proselitista. En el contexto de la crisis sociopolítica este entramado organizativo, combinado con la Policía y grupos paraestatales, se constituyó en una maquinaria represiva con un alto poder de destrucción y efectividad, dada la participación de actores con experiencia bélica y de contrainteligencia militar. La combinación de un régimen de impunidad con la institucionalización de grupos paramilitares y la erosión de la legitimidad estatal favorece las condiciones y oportunidades para que la criminalidad sedimente y consolide estructuras criminógenas con capacidad de controlar territorios e imponer normas más allá de la coyuntura actual. Desde la perspectiva del análisis de la política de la incertidumbre y desde el enfoque de los derechos humanos, en el caso de Nicaragua se constata cierta correlación entre los períodos de graves atropellos a los derechos humanos y los procesos de profundo debilitamiento de las instituciones públicas.

---

21 La Ley de Constitución del Banco Nacional (Ley 840) y la Ley de Amnistía (Ley 996).

# Referencias bibliográficas

- Academia de Ciencias de Nicaragua (2015). *El canal interoceánico por Nicaragua: aportes al debate*. Managua: Autor.
- Álvarez, L. & Navas, L. (2019, 9 de junio). “Amplio rechazo a la ley de Amnistía que aprobó el régimen de Daniel Ortega. José Miguel Vivanco expresó que no cree en Ley de Amnistía”, en *La Prensa*, versión digital. Recuperado de: <https://www.laprensa.com.ni/2019/06/09/politica/2557780-amplio-rechazo-la-ley-de-amnistia-que-aprobo-el-regimen-de-daniel-ortega> el 24 de junio de 2019.
- Amnistía Internacional, (2019) *Sembrando el terror: de la letalidad a la persecución en Nicaragua*. Londres: Autor.
- Amnistía Internacional, (2018) *Disparar a matar. Estrategias de represión de la protesta en Nicaragua*. Londres: Autor.
- Amnistía Internacional, (2014). Principales motivos de preocupación sobre la promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua. Información de Amnistía Internacional para el examen periódico universal de la ONU, abril-mayo de 2014. Londres: Autor.
- Arendt, H. (1981). *Los orígenes del totalitarismo*, (3 vols.). Trad. G. Solan. Madrid: Alianza.
- Asamblea Nacional (2018). Ley No. 976. Ley de Unidad de Análisis Financiero. Managua: *La Gaceta Diario Oficial* No. 138, del 20 de julio de 2018).
- Azpuru, D. (2018). Explaining Support for Populism in Latin America: The Case of ALBA Countries. Paper Presented at the Latin American Studies Association Congress in Barcelona, Spain May, 2018.
- Barahona, E. M., & Barahona, A. B. (2012). Cortes Supremas y candidaturas presidenciales en Centroamérica. *Revista de Estudios Políticos*, (158), 165-206.
- Beristain, C. M., Esquivel, A. P. & Riera, F. (1993). *Afirmación y resistencia: la comunidad como apoyo*. Barcelona: La Llevir-Virus.
- Blasco, J. M. T. (2003). La construcción social del enemigo. *Convergencia, Revista de Ciencias Sociales*, (33).
- Bobea, L. (2016). El Estado como demiurgo de la criminalidad. *Nueva Sociedad*, (263), 64-80.
- Calderón, E. J., Cuadra, E., Gallard, J. I., Collado, J. A. P., Pineda, U., Villanueva, G. R. & Sáenz, E. (2016). *El régimen de Ortega: ¿Una nueva dictadura familiar en el continente?* Managua: PAVSA.
- Calero, M. (2018, 23 de abril) “Daniel Ortega publica en La Gaceta la derogación de la reforma al INSS” en *La Prensa* (Managua). Recuperado el 24 de abril de 2018 de <https://www.laprensa.com.ni/2018/04/23/economia/2408575-2408575-daniel-ortega-publica-derogacion-de-reforma-al-inss>
- Calero, M. (2019, 8 de junio). “Alianza Cívica rechaza Ley de Amnistía y la considera una ley de impunidad” en *La Prensa*. Recuperado: 24 de junio

- de 2019 <https://www.laprensa.com.ni/2019/06/08/politica/2557690-alianza-civica-por-la-democracia-y-justicia-rechaza-ley-de-amnistia-y-la-considera-una-ley-de-impunidad>.
- Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, (2013). *Informe de Derechos Humanos* 2013. Managua: Autor.
- Centro Carter. (2011). *Las elecciones de 2011 en Nicaragua: Informe de una misión de estudio del Centro Carter*. Autor.
- Cerda, A. (2018, 02 de febrero). “Los alcaldes eternos”, en *Confidencial* (Managua). Recuperado de <https://confidencial.com.ni/alcaldes-eternos/>
- Chamorro, C.F. (11 junio 2015). “Los petrodólares de Venezuela: Desvío de más de tres mil millones de dólares de cooperación venezolana a las arcas de Daniel Ortega”. *Confidencial*.
- Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+ (2019). *Volviendo a ser humano. Informe preliminar sobre excarceladas y excarcelados políticos*. San José de Costa Rica: Autor.
- Coma, M. I., Norris, P., & Frank, R. W. (2015). Integridad en las elecciones de América 2012-2014. *América Latina Hoy*, (70).
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2018) *Informe de país Nicaragua: graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua*. Managua: OEA.
- Conferencia Episcopal de Nicaragua. (2014). *En búsqueda de nuevos horizontes para una Nicaragua mejor*. Carta del 21 de mayo de 2014. Managua: Autor.
- Confidencial* (2019, 10 de julio). Las razones de las Madres de Abril contra la autoamnistía orteguista. Familiares de víctimas presentan 26 recursos de inconstitucionalidad. Recuperado de <https://confidencial.com.ni/las-razones-de-las-madres-de-abril-contr-la-autoamnistia-orteguista/>
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2005). *Caso Yatama vs. Nicaragua. Sentencia de 23 de junio de 2005. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparación y Costas*. San José de Costa Rica: Autor.
- Costafreda, A. (2013). Instituciones políticas. En: G. Fernández Soto & P. Pérez Herrero (Coords.), *América Latina: sociedad, economía y seguridad en un mundo global*. (pp.91-111). Madrid: IELAT-Universidad de Alcalá-CAF.
- De la Torre, C. (2013). El populismo latinoamericano, entre la democratización y el autoritarismo (pp.121-137). *Nueva Sociedad*.
- De la Torre, C. (2001). Redentores populistas en el neoliberalismo: nuevos y viejos populismos latinoamericanos. *Revista Española de Ciencia Política*, (4), 171-196.
- Dubesset, E. & Majlátová, L. (2012). *El populismo en Latinoamérica. Teorías, historia y valores*. Francia: Presses Universitaires de Bordeaux.
- El Nuevo Diario*, Redacción Central (14 de octubre de 2011). Todos contra el PLI-UNE. (Managua). Recuperado de <https://www.elnuevodiario.com.ni/opinion/229966-todos-pli-une/>, el 14 de octubre de 2011.

- Enríquez, O. (2015, junio 8). Desvío de más de 3,000 millones de dólares de la cooperación venezolana a las arcas de Ortega. El “botín” de los petrodólares. En *Confidencial*, recuperado de <https://confidencial.com.ni/archivos/articulo/21937/el-quot-botin-quot-de-los-petrodolares>
- Envío (2008) Elecciones Municipales: Una Crisis Anunciada - Perdió Nicaragua. Número 320. Noviembre. Versión digital, recuperado de: <http://www.envio.org.ni/articulo/3890>.
- Envío (2000). Exclusión: el pre-fraude. Número 224, noviembre. Versión digital, recuperado de <http://www.envio.org.ni/articulo/1045>
- Esgueva Gómez, A. (2011). *Elecciones, reelecciones y conflictos en Nicaragua (1821-1963)*. Tomo I. Managua: IHNCA-UCA.
- Espinoza, D. (2019, 10 de julio). Discurso del gobierno de Nicaragua en Consejo de Derechos Humanos de la ONU. *El Nuevo Diario*, versión digital. Recuperado de <https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/496108-discurso-gobierno-nicaragua-consejo-onu/>
- Estado de Nicaragua (2018). Observaciones del Estado de Nicaragua respecto del proyecto de informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 21 de junio de 2018. Managua: Autor.
- Farah, D. & Yate, C. (2019). *La última resistencia de Maduro: La supervivencia de Venezuela mediante la empresa criminal conjunta bolivariana*. IBI Consultants. Recuperado de [https://www.ibiconsultants.net/\\_pdf/maduros-last-stand-spanish10640.pdf](https://www.ibiconsultants.net/_pdf/maduros-last-stand-spanish10640.pdf)
- Flores, J. (2019, 17 de abril). Estados Unidos anuncia nuevas sanciones contra Bancorpy Laureano Ortega Murillo. *La Prensa* (Managua). Recuperado de <https://www.laprensa.com.ni/2019/04/17/politica/2543152-john-bolton-anuncia-nuevas-sanciones-contr-bancorpy-laureano-ortega>
- Freedom House. (2019). *Freedom in the World 2019. Democracy in Retreat. Highlights from Freedom House's annual report on political rights and civil liberties*. Autor.
- García, K. (2018, 19 de julio) Migración duplica entrega de pasaportes. *El Nuevo Diario* (Managua). Recuperado de: <https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/469962-migracion-duplica-entrega-pasaportes-crisis-nicara/>, el 19 de julio
- Gianotten, V. & De Wit, T. (1987). Organización campesina y reforma agraria en Nicaragua: Algunas lecciones de la historia. En: Gianotten et al.: *Nicaragua: cuestión agraria y participación campesina*. Cuaderno Delco, 9. Lima: Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, pp.15-67.
- Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (2019). *Política de Estrategia Nacional*. “La defensa es primero... Por la paz, por el bien común, por la producción”. Managua: Gobierno de la República de Nicaragua.
- Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (2018b). Consideraciones del Estado de Nicaragua al denominado informe “Violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua. 18 de abril-18 de agosto” elaborado por OACNUDH, con fecha 24 de agosto de 2018. Managua: Gobierno de la República de Nicaragua.

- Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (2013). *Acuerdo Marco de Concesión e Implementación con relación a El Canal de Nicaragua y Proyectos de Desarrollo*. Managua: Gobierno de la República de Nicaragua.
- Gómez, L. (2018). Testimonio de Ligia Gómez. Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso de los Estados Unidos. Audiencia “Evolución de la crisis de los derechos humanos en Nicaragua”. Washington: Congreso de Estados Unidos.
- Greene, K. F., Slater, D., & Schedler, A. (2015). La política comparada de las elecciones autoritarias: Un debate en torno a The Politics of Uncertainty: Sustaining and Subverting Electoral Authoritarianism de Andreas Schedler. *Política y Gobierno*, 22(1), 227-246.
- Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. (2018). *Informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018*. Managua: Autor.
- Horton, L. (2004). Constructing Conservative Identity: Peasant Mobilization Against Revolution in Nicaragua. *Mobilization: An International Quarterly*, 9(2), 167-180.
- Kapiszewski, D. (2009). Tactical balancing and prioritizing pragmatism: High Court Decision-making on economic policy cases in Brazil. In *Delivery at the Conference Judicial Politics in Latin America*. México: CIDE.
- Knight, A. (2005). *Revolución, democracia y populismo en América Latina*. Santiago de Chile: Centro de Estudios Bicentenario.
- Latinobarómetro. (2018). *Informe 2018*. Santiago de Chile: Autor.
- Levitsky, S. & Ziblatt, D. (2018). *¿Cómo mueren las democracias?* México: Ariel.
- López, M. (2013). *Recurso por inconstitucionalidad. 25 verdades sobre la concesión del Canal Interoceánico de Nicaragua*. Managua: Fundación Popol Na.
- Malamud, C. (2010). *Populismos latinoamericanos: los tópicos de ayer, de hoy y de siempre*. Oviedo: Ediciones Nobel.
- Martí, S. (2016). El régimen patrimonial de Nicaragua y las elecciones de 2016. *Elecciones y partidos en América Latina en el cambio de ciclo*, 40, 303.
- Martí, S. (2012). *Salvador: Nicaragua (1979-1990). La revolución enredada*. Salamanca (España): Creative Commons.
- Martí, S. (2008). El regreso de Ortega: los primeros pasos de su segunda administración. *Revista de Ciencia Política* (Santiago), 28(1), 287-303.
- Martínez, L. & Gallegos, A. (2018, febrero 5). Frente Sandinista destituye a su alcalde en Muy Muy. *La Prensa*, versión digital. Recuperado de <https://www.laprensa.com.ni/2018/02/05/politica/2372035-sandinistas-protestan-en-muy-muy-por-posible-destitucion-de-alcalde-del-fsln>
- Martínez, L. (2019, julio 18). Monseñor Rolando Álvarez denuncia la presencia de hombres armados en Terrabona, Matagalpa. *La Prensa*, versión digital. Recuperado: <https://www.laprensa.com.ni/2019/07/18/>



- departamentales/2570408-monsenor-rolando-alvarez-denuncia-la-presencia-de-hombres-armados-en-terrabona-matagalpa
- McConnell, Shelley (2011). "The Uncertain Evolution of the Electoral System". En: D. Close, S. Martí & S. McConnell, (eds.) *The Sandinistas and Nicaragua Since 1979*. New York: Lynne Rienner.
- Medina, F. (2018). *El preso 198. Un perfil de Daniel Ortega*. Managua: Imprenta Comercial de La Prensa.
- Miranda, W. (2017, abril 24). Golpe a la autonomía municipal. 34 alcaldes y vice alcaldes han sido destituidos desde 2008 por Daniel Ortega. En *Confidencial*. Recuperado de: <https://confidencial.com.ni/golpe-la-autonomia-municipal/>
- Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. (2011). *Nicaragua, Informe Final. Elecciones Generales y al Parlamen 2011*. Autor.
- Mounk, Y. (2018). *El pueblo contra la democracia: Por qué nuestra libertad está en peligro y cómo salvarla*. Barcelona: Paidós.
- Narváez, Z. (2002), Nicaragua, Caso 12,230: Zoilamérica Narváez contra el Estado de Nicaragua, Revista *Envío* N° 240, marzo 2002. Versión digital. Recuperado de: <http://www.envio.org.ni/articulo/1130>
- Navas, L. (8 de junio de 2019). Madres de Abril anuncian lucha legal contra la Ley de Amnistía. *La Prensa* versión digital. Recuperado de: <https://www.laprensa.com.ni/2019/06/08/nacionales/2557683-madres-de-abril-anuncian-lucha-legal-contr-la-ley-de-amnistia>
- GIEI Nicaragua (2018). *Informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018*. OEA.
- Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2018). Violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua. 18 de abril al 18 de agosto de 2018. ONU.
- Prado, S. (2018) Nicaragua, la transición hacia el pasado. En Fernanda Pattaro Amaral et al. (Comp.) *El desangramiento latinoamericano: un panorama político contemporáneo sobre la reorganización y la reconfiguración del estado neoliberal*. Barranquilla: Corporación Universitaria Americana, pp.141-181
- Prado, S. (2016). *La relación de la autonomía política y las modalidades de participación ciudadana en Nicaragua entre 1990 y 2012*. Tesis de doctorado. Madrid: Universidad Complutense.
- Robin, C. (2010). *El miedo*. Fondo de Cultura Económica.
- Rocha, H. (2019). Interrupción del orden democrático y alteración del orden constitucional en Nicaragua. Sesión especial sobre democracia en Nicaragua, viernes 26 de abril de 2019. Washington: Organización de Estados Americanos, Consejo Permanente.
- Rueda, V. (2015). *Recompas, recontras, revueltos y rearmados. Posguerra y conflictos por la tierra en Nicaragua, 1990-2008*. México: Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Universidad Nacional Autónoma de México.



- Salinas Maldonado, C. (2019, febrero 11). “La orden era eliminar a los líderes de la protesta”. *Confidencial* (Managua). Recuperado de <https://confidencial.com.ni/la-orden-era-eliminar-a-los-lideres-de-la-protesta/>
- Sánchez, M. (2017) *Extractivismo y lucha campesina en Rancho Grande. La expresión de un ecologismo político en Nicaragua*. Managua: CASC-UCA.
- Sánchez, M., Castro, D., Rodríguez, R. & Guerra, J. (2016). Movimientos sociales y acción colectiva en Nicaragua: entre la identidad, autonomía y subordinación. *AMNIS, Revue de Civilisation Contemporaine Europees /Amériques*. N° 15, 2016. <https://amnis.revues.org/2813>
- Sánchez, M., Castro, D., & Rodríguez, R. (2015). *Ciudadanía y violencia: una aproximación a sus múltiples expresiones en Nicaragua*. Managua: CASC-UCA.
- Schedler, A. (2004). Elecciones sin democracia. El menú de la manipulación electoral. *Estudios Políticos*, (24), 137-156.
- Schedler, A. (2016). *La política de la incertidumbre en los regímenes electorales autoritarios*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Schmitter, P. (2011). Diagnosing and designing democracy in Europe. In: *The future of representative democracy*, 191-211. Cambridge University Press.
- Serra, L. (1988). Organizaciones populares: entre las bases y el poder. *Pensamiento Propio*, 56.
- Spalding, R. J. (2017). Los empresarios y el Estado posrevolucionario: El reordenamiento de las élites y la nueva estrategia de colaboración en Nicaragua. *Anuario de Estudios Centroamericanos*, 43, 149-188.
- Stuart, R. (2009). *Consejos de Poder Ciudadano y gestión pública en Nicaragua*. Managua: Centro de Estudios y Análisis Político.
- Tilly, C., & Argilés, R. A. (2007). *Violencia colectiva*. Barcelona: Editorial Hacer.

# III. Política, violencia y humanidad

*Juan Pablo Gómez<sup>1</sup>*

En el presente trabajo analizo el discurso estatal elaborado en el marco de la crisis política abierta en Nicaragua a partir del 18 de abril de 2018. La violencia ha constituido la principal y casi exclusiva reacción del Estado al aumento sustantivo de las protestas sociales ocurridas desde esta fecha, lo que ha generado el mayor ciclo de violencia política desde los procesos de pacificación de la última década del siglo pasado. Informes realizados hasta el momento actual señalan como principales agentes de la violencia a las autoridades policiales y cuerpos armados paraestatales y progubernamentales que actúan en coordinación con el Estado. Estos cuerpos armados operan con impunidad y fomentan una cultura de violencia que ha sido perversa para las sociedades centroamericanas.

Mi planteamiento analítico es que existe un vínculo significativo entre discurso estatal, violencia y violaciones a los derechos humanos, mismo que amerita ser estudiado. En el discurso estatal es posible localizar un concepto de política y humanidad indispensable para comprender la centralidad de la violencia y las consecuentes violaciones a derechos y garantías fundamentales. Pienso el discurso estatal como archivo en el que es posible identificar las lógicas de la violencia, que en este caso podrían plantearse en términos de medios con respecto a fines. También lo pienso como lazo social. Esto último me permite, por ejemplo, estudiar la violencia no sólo como levantamiento de datos sobre ejecuciones físicas. Además de ello, me abre puertas a estudiarla en el plano más amplio de lo simbólico, considerándola como una forma de tomar a cargo la vida y gestionar el carácter de humanidad de una sociedad. Como bien ha señalado Pilar Calveiro (2012) al reflexionar sobre memoria y política, “la violencia política no solo cobra vida a balazos y la toma de responsabilidad

---

1 Doctor en Estudios Culturales y Literarios Latinoamericanos por la Universidad Estatal de Ohio. Profesor-investigador del Instituto Interdisciplinario en Ciencias Sociales de la Universidad Centroamericana (IICS-UCA).

por la vida de los otros es algo más que prescindir de balearlos” (p.28). De qué manera el discurso estatal ilustra un tipo de gestión de la política y de la humanidad es una pregunta que trabajo a lo largo del texto y desde la cual deseo brindar insumos para la comprensión de la crisis actualmente abierta en el país.

Siguiendo el ánimo de la cita de Calveiro, mi preocupación por la violencia destaca y considera el vasto número de víctimas producidas. A la fecha en que escribo este texto, el número de personas fallecidas supera las 300, y la cantidad de personas heridas sobrepasa las 2,000. A estas cifras se suman presos políticos, un número no esclarecido de personas desaparecidas, además de un alarmante nivel de desplazamiento y migración forzada (Miranda Aburto, 2018). Sobre esto último, las observaciones preliminares brindadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la visita de trabajo realizada para monitorear la situación de personas nicaragüenses forzadas a huir a Costa Rica señalan que “al momento de la realización de la visita se registraba un total de 40,386 personas que habían manifestado necesitar protección internacional en Costa Rica”.<sup>2</sup>

Además de lo anterior, también pongo la mira en la carga afectiva de la violencia y, junto con ello, la manera en que el discurso estatal puso en entredicho el carácter de ciudadanía y humanidad de quienes han expresado su inconformidad. Esto último es de especial consideración, puesto que veo en ello una estrategia retórica indispensable para justificar violaciones de derechos humanos y, más propiamente, la represión y el exterminio de la disidencia. El discurso interesa en la medida en que adquiere un vuelco tanatopolítico, esto es, gira hacia la muerte, no hacia la vida.

El discurso estatal constituye un campo estratégico de estudio de la crisis política. Desde sus primeros días, las más altas autoridades políticas del

---

2 Sobre el perfil de las personas que se han visto forzadas a desplazarse a Costa Rica, la CIDH señala: “La CIDH pudo identificar que desde mediados de abril hasta mediados de octubre de 2018, las personas que se han visto forzadas a migrar de Nicaragua y solicitar protección internacional en Costa Rica son en su mayoría estudiantes que participaron en las manifestaciones y protestas, defensores de derechos humanos y líderes de movimientos sociales y campesinos, personas que han contribuido y apoyado a estas personas a través de la provisión de alimentos, casas de seguridad y medicinas, así como médicos, periodistas y exmilitares y policías que se han rehusado a participar en actos represivos ordenados por el gobierno [...] La delegación de la CIDH pudo observar que, en los últimos meses, el aumento de personas que se han visto forzadas a desplazarse desde Nicaragua hacia Costa Rica está relacionado de manera directa con las etapas identificadas de la represión de la protesta social ocurrida en territorio nicaragüense desde abril del presente año [2018]. La llegada de la mayoría de las personas a Costa Rica se inicia una vez que comienza la llamada ‘Operación Limpieza’ implementada por la Policía Nacional, así como por fuerzas parapoliciales armadas”. Observaciones preliminares sobre la visita de trabajo para monitorear la situación de personas nicaragüenses que se vieron forzadas a huir a Costa Rica. Comunicado de Prensa, 1 de noviembre de 2018.

país desconocieron por completo su responsabilidad en el ciclo de represión iniciado en la tarde del 18 de abril de 2018. Utilizaron sus intervenciones públicas para dejar esto en claro y, además, para señalar a las ciudadanías disidentes como las responsables de la ruptura de la paz, de los muertos, de los atropellos a los derechos humanos y de la crisis económica. Como bien indica al respecto el informe *Violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua (18 de abril-18 de agosto)*, emitido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH):

en lugar de reconocer cualquier responsabilidad por actos ilícitos o indebidos durante la crisis, el gobierno ha culpado a los líderes sociales y de la oposición, a las personas defensoras de derechos humanos y a los medios de comunicación, por lo que ha denominado “violencia golpista”, así como por el impacto negativo de la crisis política en la economía nacional. Más aún, el Gobierno ha atribuido la responsabilidad por todos los actos de violencia a aquellos que participaron en las protestas, incluidas las 197 muertes oficialmente reconocidas hasta el día 25 de julio. El Gobierno no ha reconocido ningún uso desproporcionado de la fuerza o acción ilegal por parte de los agentes de la policía (OACNUDH, 2018, p.9).

Además de la OACNUDH, los dos informes elaborados por Amnistía Internacional en distintos momentos de la crisis también han destacado el “discurso oficial de negación” como eje vertebral de la estrategia estatal (2018a, 2018b). Pese a que en todos los informes elaborados hasta el momento por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos —con la sola excepción de la comisión creada por el Estado nicaragüense— se considera que el Estado es el principal responsable de la violencia y de las vulneraciones a los derechos humanos, el Estado ha elaborado un discurso en el que asume condición de víctima de un intento de golpe de Estado. Además, demanda “derechos humanos para todos” y “reparación y justicia para las víctimas del terrorismo golpista” (*El 19 Digital*, 20 julio 2018).<sup>3</sup> El discurso ha sido clave para suscitar una inversión de la experiencia en un intento de apropiación de los derechos humanos por parte de agentes que, como mostraré, negaron los derechos humanos de la población no sólo como *sensorium* normativo sino, también, como elemento intrínseco de humanidad.

Analizo una selección breve pero sintomática del discurso estatal con el objetivo de localizar algunas de sus estrategias. Tomo el concepto de estrategia del análisis crítico del discurso (ACD), práctica académica transdisciplinaria que se ha interesado por las relaciones entre discurso, política y violencia. Me

---

3 El texto completo de la campaña está disponible en: <https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:79284-exigen-justicia-para-las-victimas-del-terrorismo-golpista>

apoyo específicamente en el concepto de estrategia trazado por Ruth Wodak (2003) por el cual entiende: “un plan de prácticas (que incluyen las prácticas discursivas) adoptadas para lograr o conseguir un propósito social, político, psicológico o lingüístico” (p.73). Para hablar de las prácticas discursivas que racionalizan la violencia como estrategia para alcanzar ciertos fines me baso en el “carácter instrumental” de la violencia señalado por Hannah Arendt (2006). Ella subraya el uso racional de la violencia y su estatus de medio para lograr fines establecidos.

Especial interés presento en el análisis de intervenciones públicas realizadas por el presidente y la vicepresidenta, Daniel Ortega y Rosario Murillo, principales gestores del discurso estatal en torno a las ciudadanías disidentes. Aunque me concentre en el Poder Ejecutivo, hablo de discurso estatal porque su postura impregnó el accionar de las fuerzas de seguridad y el de los otros poderes del Estado, principalmente el legislativo y el judicial. Nicaragua es, además, un país de fuerte tradición presidencialista y, como es sabido, carece de los contrapesos, los balances y la fiscalización que se espera que existan entre los poderes del Estado para garantizar la democracia. A ello debemos sumar que, culturalmente, en Nicaragua el Estado se percibe como el rostro del Poder Ejecutivo.

## 1. Materia prima: el discurso y el pasado reciente

La tarde del 18 de abril de 2018, grupos de estudiantes, principalmente universitarios, convocaron a una manifestación en Camino de Oriente, un centro comercial de la ciudad de Managua. El objetivo era protestar contra la anunciada reforma al sistema de seguridad social a través del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). El gobierno había anunciado esta reforma dos días antes, el 16 de abril, misma que además de aumentar el aporte de trabajadores y empleadores al sistema de seguridad social, mermaba en un 5% las pensiones en forma de tributo. La reforma debía entrar en vigencia el primero de julio del año en curso, 2018. A diferencia de otras leyes promulgadas en los últimos años, estas reformas no contaron con la venia del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP).

Al plantón de esa tarde en el centro comercial el gobierno respondió de la misma manera que lo había hecho durante los últimos años ante todo intento de expresar públicamente el descontento social. Además de miembros de la Policía, envió al lugar de la protesta contingentes de fuerzas progubernamentales, conformadas principalmente por miembros de la Juventud Sandinista y trabajadores estatales. El informe de la OACNUDH (2018) señala que “estos grupos, conocidos como ‘fuerzas de choque’, ‘turbas’, o ‘motorizados’ estuvieron en la primera línea de ataques físicos contra los manifestantes pacíficos. Las turbas estaban armadas con garrotes,

palos y piedras y portaban cascos” (p.36). Su participación, señala el mismo informe, no fue azarosa. Constituyó, más bien, un patrón continuo desde los primeros días de la crisis política.

Como bien indica el informe citado, en el modelo preventivo de la protesta social, la Policía permite que los grupos progubernamentales usen violencia para disuadir a quienes protestan, aquí denominados protestantes. Por su parte, la Policía observa y asegura el control del espacio público. Esa tarde se cumplió con toda claridad el guion establecido. Ya entrada la noche, un grupo de manifestantes se trasladó a las afueras de la Universidad Centroamericana (UCA). Allí se repitió el guion con un añadido de violencia. La agresión obligó a los estudiantes a refugiarse en la UCA. Como siempre, el ataque contó con la presencia permisiva de miembros de la Policía.

La violencia ha sido una estrategia central de la política gubernamental para contener las protestas sociales entre 2007 y 2018. En 2015, un estudio realizado por el Centro de Análisis Sociocultural de la UCA, titulado *Ciudadanía y Violencia*, llamó la atención sobre la violencia como marcador de la relación entre gobernante y gobernados. Dicho estudio afirmaba que la represión servía como recurso para obstaculizar y negar el ejercicio de derechos ciudadanos. En su análisis, los autores argumentaron que la negación de derechos estaba relacionada con una “progresiva centralización del poder” y con un ambiente de impunidad en su ejercicio por parte de autoridades estatales (Sánchez et al., 2015, p.74).

Mario Sánchez (2017) señala en ese estudio que ante la movilización social que critica la actividad minera, la respuesta característica del Estado consistió en represión y judicialización contra el liderazgo social. Destacan al respecto los conflictos mineros de Santo Domingo, Bonanza y El Limón. El informe elaborado por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) para 2016 y los primeros meses de 2017 confirma lo señalado por Sánchez. Entre los principales factores que influyeron en los atropellos a los derechos humanos figura la represión policial contra la protesta social (2017). El informe asimismo señala a la Policía Nacional como la autoridad más denunciada por cometer atropellos a los derechos humanos. En este informe están patentes las quejas por malos tratos infligidos por la Policía Nacional contra la ciudadanía al momento de realizar detenciones. También se documenta la práctica de la tortura en los sitios de detención. Para mediados de 2017, los informes del CENIDH señalaban la tendencia al recrudecimiento de la represión en aras de “imponer el modelo de desarrollo que ha unido al gobierno y al gran capital” (p.5).

El informe del CENIDH señaló las siguientes como causantes del aumento de la represión estatal: las manifestaciones contra el proyecto de construcción del canal interoceánico; las protestas contra las concesiones otorgadas para la explotación de recursos naturales; las demandas por

elecciones libres y transparentes y, por último, las luchas sociales contra los problemas derivados del régimen de pensiones y las reformas a la seguridad social. Cuando el informe fue publicado, a mediados de 2017, se consideraba que cualquiera de estas circunstancias contenía el potencial de provocar un aumento significativo de la movilización ciudadana y, consecuentemente, una mayor represión por parte del Estado.

Este pronóstico se cumplió más pronto de lo esperado. Tener en mente una tensión preexistente entre represión estatal y obstaculización de derechos ciudadanos es útil para comprender el tipo de respuesta estatal a las protestas sociales iniciadas el 18 de abril. En paralelo a la centralización progresiva de la autoridad política se configuró un modelo represivo diseñado para contener y silenciar el disenso. La represión ha sido en los últimos años el principal instrumento del que se ha servido el Estado nicaragüense para tratar de contener y disuadir la protesta social.

Al plantón del 18 de abril le precedieron varios días de protestas por la deficiente gestión estatal ante el incendio de la Reserva Biológica Indio-Maíz, en el que ardieron más de cinco mil hectáreas de bosque. Este movimiento, conformado principalmente por estudiantes universitarios y denominado #SOSIndioMaíz llamó la atención en todo el ámbito nacional. Al formularse la reforma a la seguridad social, el movimiento prácticamente mutó a #SOSINSS (Salinas, 2018b). Aunque el régimen de pensiones es de alta sensibilidad para toda la sociedad, las primeras manifestaciones criticaban específicamente este paquete de reformas, y no al sistema de gobierno en general.

Las imágenes de la violenta represión contra las personas manifestantes acapararon la atención nacional. Si bien —como ya señalé— no era la primera vez que se reprimía a la población, en esta ocasión las imágenes de la violencia contra personas desarmadas fueron la chispa que encendió una llama. Al día siguiente hubo protestas en varias universidades públicas y privadas del país, así como en varias ciudades. En la ciudad de Masaya, principalmente en los alrededores del barrio Monimbó, la ciudadanía impidió el paso de los antimotines y de otras autoridades del orden público, quienes intentaron entrar a Masaya para reprimir una marcha de la sociedad civil en contra de las reformas al INSS. Las protestas se extendieron a Estelí, Rivas, Jinotepe, León, Granada y Boaco, desafiando así la imagen de una sociedad en la que no existe descontento, según la propaganda oficial de los años recientes. Esta imagen quedó plasmada en informes que señalaban, para 2016 y 2017, que Nicaragua



estaba entre los países con más bajos niveles de protesta en el continente.<sup>4</sup> Informes de organismos internacionales de derechos humanos, como el antes citado de la OACNUDH, afirman que ya el 19 de abril de 2018 la Policía trataba de disolver las protestas usando armas de fuego, balas de goma y gas lacrimógeno.

En pleno auge de las protestas, al mediodía del 19 de abril, la vicepresidenta utilizó su intervención diaria en medios de comunicación para brindar su opinión sobre los acontecimientos del día. En esta comunicación ya es evidente cómo las principales autoridades del país conceptualizaron las protestas. Baste como ejemplo el siguiente párrafo de las declaraciones de la vicepresidenta:

¡Muy buenas tardes, Compañeras, queridas familias de nuestra Nicaragua, Bendita, Unida, Siempre libre! Esta Nicaragua donde tanto nos ha costado la Paz; tanta sangre derramada, tanto conflicto, tanta Historia que hemos venido dejando atrás. Esta Nicaragua donde nos toca todos los días, con responsabilidad, afianzar la Paz, la Armonía, el Diálogo Social, la Justicia. Qué tristeza da la manipulación política de los mismos de siempre, esos minúsculos grupos que azuzan y desestabilizan, para destruir Nicaragua (Consejo de Comunicación y Ciudadanía, 19 de abril, 2018).

Esta cita es muy recordada. La (des)calificación de la ciudadanía que participaba en las protestas como “minúsculos grupos que azuzan y desestabilizan” se convirtió en un acelerador del descontento social. Como señaló el equipo de la revista *Envío* en su edición de mayo de 2018, los “epítetos” proferidos por la vicepresidenta “atizaron el fuego de la indignación”.<sup>5</sup> Sus frases se viralizaron en las redes sociales. También en las multitudinarias marchas que siguieron a sus declaraciones era común ver pancartas que cuestionaban: “¿Quiénes son los minúsculos?”.

Tomo este discurso como punto de partida de un patrón de (des) calificación y desconocimiento respecto de la ciudadanía crítica ante el gobierno sandinista. Los organismos nacionales e internacionales de derechos

---

4 Me refiero específicamente al informe Cultura política de la democracia, ya antes citado. En el capítulo sobre participación ciudadana, José Miguel Cruz (2018), además de afirmar que Nicaragua se encontraba entre los países con más bajos niveles de protesta, agrega: “El promedio regional de participación en protestas por país es de 9.4%. Nicaragua se encuentra por debajo de este promedio. Esto pone en perspectiva los resultados sobre protestas en Nicaragua y sugiere que a pesar de la intervención del gobierno en el tema de participación ciudadana y el legado de la Revolución, muchos ciudadanos en el país están retirándose de la actividad pública en las calles” (p.124). Véase también el artículo de Moisés Martínez e Isela Baltodano: “El mapa que muestra cómo se propagan las protestas en contra de las reformas al INSS”. La Prensa, 20 de abril de 2018.

5 Equipo Envío. “Abril 2018. La insurrección de la conciencia”. Envío, N° 434, mayo 2018.

humanos han incluido la estigmatización de las protestas sociales como uno de los elementos que caracterizan el patrón de violencia estatal. Por ejemplo, el informe titulado *Graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua en el contexto de las protestas sociales*, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH 2018), señala que la violencia estatal siguió un patrón común, y que una de sus características fue “la difusión de propaganda y campañas de estigmatización” (p.22). A pesar de estos obvios llamados de atención, a medida que se ha desarrollado la crisis los descalificativos han ido en aumento.

De la cita anterior llaman la atención varios asuntos. Uno de ellos es el carácter afectivo-religioso del discurso. El saludo introductorio es a una nación bendita, unida y libre. La cultura religiosa convive con la reminiscencia de la “Nicaragua libre”, emblema de la memoria del proceso revolucionario que derrocó a la dictadura somocista en 1979. A continuación se habla de una nación que ha logrado conseguir la paz después de muchos años de conflicto y de mucha “sangre derramada”. La vicepresidenta misma se considera parte de una energía orientada a “dejar atrás” el conflicto como parte de la “Historia”, y trabajar día a día en afianzar la paz.

La cita de la vicepresidenta apela al pasado de conflicto y “sangre derramada” para valorar el presente y, en particular, las protestas iniciadas un día antes de sus declaraciones. Estamos entonces frente a un caso de usos políticos del pasado en el que la vicepresidenta se ocupó de gestionar finamente, a manera de materia prima, el manto afectivo que (res)guarda a la sociedad nicaragüense con respecto a su propio pasado reciente de guerras, violencia política y trauma psicosocial. Su estrategia, para recordar el concepto de Wodak ya antes citado, traza un plan sobre las complejas vivencias y sensibilidades que existen alrededor de estos pasados —imposibles de capturar en su completitud, pero vivos y aprovechables en términos políticos— y apuesta a conseguir un objetivo: desautorizar las protestas sociales que en el momento de sus declaraciones adquirirían un carácter rizomático inusitado e irradiaban un aroma a insubordinación general.

Es fundamental señalar la utilización de la paz como criterio de valoración. Historizar el uso que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ha hecho de la idea de paz no forma parte de mis objetivos. Sí lo es precisar, sin embargo, que paz y reconciliación han sido elementos centrales del discurso sandinista posrevolución. Una vez conseguida la derrota electoral del FSLN en 1990, algunos funcionarios del nuevo gobierno y sectores adversos a la revolución desarrollaron una cruzada cultural antisandinista dispuesta a borrar la revolución y el sandinismo —en términos de narrativa

histórica, política y cultural.<sup>6</sup> Enterrar el sandinismo y no dejar rastro de él fue la premisa de esta cruzada, lo que contravenía el discurso oficial que declaraba reconciliación nacional y transición democrática.

Una parte de esta cruzada consistió en hacer tabula rasa, en eliminar rastros y huellas, en obstaculizar la discusión pública en torno a legados y aprendizajes de experiencias recientes. Margarita Vannini (2017a), estudiosa de las políticas de la memoria en Nicaragua, ve en ello la privatización de una experiencia pública. En sus palabras, “a pesar del dolor, la intensidad y la conflictividad de estos procesos, la sociedad no reflexionó sobre ellos. La memoria se replegó al ámbito privado mientras una enconada lucha por el relato de ese pasado se instaló en la agenda pública” (p.3).

Otra parte de esta cruzada se desenvolvió como construcción de la memoria o, como vimos que le llama Vannini, lucha por el relato del pasado. A lo largo de la década de 1990, diversos actores e instancias públicas construyeron una memoria de los años 80 nucleada en torno a la guerra, el servicio militar obligatorio, la crisis económica y la precariedad material, privilegiando, como argumenta Adriana Palacios (2012), la “experiencia traumática” (p.59). La “gran noche oscura” fue la metáfora que suturó esta memoria.<sup>7</sup>

La publicidad elaborada por partidos políticos antisandinistas para las campañas electorales de 1996 y 2001 es un archivo clave en la elaboración de esta memoria, así como en su difusión y pedagogía al servicio de proyectos políticos en ese entonces en competencia. En estos trabajos de la memoria, como ha señalado Palacios (2012), “el acto de rememorar no busca la restauración sino instalar una memoria como dispositivo de miedo” (p.61). Aún carecemos de estudios suficientes que analicen con detenimiento estos años y que estudien las articulaciones que se produjeron en esa década entre

---

6 Al respecto se destacó Humberto Belli, ministro de Educación. Entre otras cosas lideró el proceso de cambio de nombre de las escuelas e institutos públicos. A su ver, no resultaba “conveniente denominar a los edificios públicos, colegios y escuelas con nombres ligados a la violencia, extremismos ideológicos o partidarismos, contrarios a la democracia y la reconciliación”. La Prensa, 19 de julio de 1992. Karen Kampwirth (2009) señala que en uno de los primeros actos de Arnoldo Alemán como presidente electo (1996-2000), “nombró a un nuevo gabinete y reemplazó a todos los ministros de la administración Chamorro, excepto al ministro de Educación, Humberto Belli” (p.93). Kampwirth ubica a Belli como miembro de la organización católica Opus Dei, uno de los más importantes oponentes al movimiento feminista a nivel nacional e internacional, y uno de los funcionarios que lideró los esfuerzos para erradicar legados de la revolución sandinista. Mucho más moderada fue la posición de la presidenta, Violeta Barrios, y parte de su equipo de trabajo cercano. Al respecto, David Close (2005) afirma que “ellos estaban más interesados en hacer que Nicaragua funcionara correctamente que en ajustar cuentas con el FSLN” (p.71).

7 Frase que utilizó el papa Juan Pablo II en 1995, durante su segunda visita al país, para referirse a su anterior visita en marzo de 1983.

los cambios culturales, las políticas de la memoria y la construcción de ciudadanías posrevolución.

Frente a la cruzada antisandinista brevemente descrita, el FSLN entró a competir en la administración de los afectos que exigían los nuevos tiempos: reconciliación, paz y amor. Así, trató de convencer a la ciudadanía de que su regreso al poder no era signo del retorno a la precariedad, la guerra y el servicio militar obligatorio. También, que era capaz de firmar la paz con sus viejos enemigos: el sector empresarial, la Iglesia, la contrarrevolución y hasta Estados Unidos. Una reingeniería cultural —que, más que comentada, merece ser estudiada en otro momento— fue indispensable para constituir una nueva performatividad, para usar el conocido término de J. L. Austin (1955) con el que analizó la conexión entre lenguaje y acción, decir y hacer. Vistiendo de blanco, arropado por el nuevo color oficial, con un repertorio musical alejado de las tensiones bélicas y antiimperialistas, y tomado de la mano de su otrora enemigo político y ahora vicepresidente, Jaime Morales Carazo, Daniel Ortega celebró la victoria electoral de finales de 2006 que marcó su regreso y el del FSLN a la presidencia.

Me detengo un momento en la sustitución de ideas por sentimientos y afectos, señalada en el párrafo anterior, al afirmar que el FSLN compitió en torno al (res)guardo de los afectos. Para Roger Bartra (2012), la caída del bloque socialista marcó una especie de retroceso de las ideas frente a las pasiones. En la medida en que el corpus ideológico tradicional de la izquierda perdía su capacidad de ilustrar una ruta política, se acudía a los recursos sentimentales en aras de mantener en pie el edificio del progresismo internacional. Del lenguaje de las emociones, precisa Bartra, derivan efectos como el amor por el líder carismático, el odio a los adversarios, considerados como enemigos, y el amor por los pobres.

Pensando justamente en las sustituciones afectivas, llama la atención que en la cita anterior se recurra a un sentimiento para descalificar las protestas sociales. A manera de ilustración, veamos esta frase: “Qué tristeza da la manipulación política de los mismos de siempre”. Tristeza, subrayo yo, porque a su saber las protestas amenazaban uno de los principales logros en la historia reciente del país: la paz. A través de esta apelación a la paz se definió el modo en que el Estado interpretaba la energía social, esto es, como una amenaza. Además, definió su magnitud. No una amenaza particular, focalizada, menor, sino una que atentaba contra el principal bien merecedor de protección gubernamental —la paz social.

Advierto desde ya la intención de traducir como relaciones binarias de guerra y paz las oposiciones heterogéneas que se podían estar convocando en las protestas. Ya sugerí que en Nicaragua la palabra paz se encarna y hace cuerpo muy fácilmente. Con igual facilidad toca fibras neurálgicas. Pero dicha encarnación y afectividad es posible gracias al envés de esta experiencia: la

guerra. La valoración de la paz la hace una sociedad que sabe, en carne propia, qué significa la guerra. En Nicaragua la paz sabe a guerra, como dos caras de una misma moneda; como una experiencia que, al enunciarse, convoca irremediablemente a su contraria. Y sobre esta relación binaria, fundante, por decirlo así, el Estado asentó su estrategia desde un inicio y, dada su mecánica argumentativa, tiende siempre a definir la realidad a partir de otros binarismos visiblemente afectivos, como amigo/enemigo, amor/odio, bien/mal. “Máquinas binarias” según la denominación que hacen Gilles Deleuze y Félix Guattari (2010) para aludir a la codificación del miedo que nos domina. Me ocupo de esto más adelante.

Apunto como estrategia del discurso estatal recurrir a los eventos traumáticos del pasado reciente, como fue la guerra, para (des)calificar las protestas sociales y gestionarlas como amenaza a un bien social que goza de protección. Cito como prueba el discurso del mediodía del 19 de abril de 2018, en el que a pocas horas de iniciadas las protestas, el régimen usó políticamente la historia y las memorias de la guerra, aun cuando las protestas no habían derivado en una insubordinación general. Subrayo que, al aludir a la paz también se convocó el miedo social a la guerra, propiciando una postura emocional de rechazo y, consecuentemente, tratando de disponer las afectividades al servicio de la contención de las protestas.

El pasado traumático adquiere plasticidad: evocado en el presente, sirve para demandar la paz, y al mismo tiempo, hacer la guerra en su nombre. Antes que dirigirse a configurar una posición política razonada –típica en el sandinismo revolucionario– las palabras de la cita anterior son como fibras textiles que bordan sobre una superficie elástica de miedo, odio, amor y alegría, según sea necesario. Subrayar el peso de los afectos en el discurso estatal es importante porque, siguiendo las reflexiones de Mabel Moraña (2012), el “impulso afectivo” modela la lógica relacional con respecto al pasado, a las formas de lectura del presente y a la proyección de un futuro posible, cuestiones que son de nuestro mayor interés.

## 2. La violencia como estrategia disuasiva

Entre el 18 y el 20 de abril de 2018 el discurso estatal se ocupó de las protestas, tomando a su cargo la caracterización y administración de las vidas que en ellas participaban. Además de considerarlas una amenaza a la paz, negó en ellas cualquier fuerza de articulación social genuina. Las calificó como producto de una “manipulación política de los mismos de siempre”, y como “minúsculos grupos que azuzan y desestabilizan”.

Al calificar las protestas como fruto de una manipulación política, el discurso estatal trató de poner en entredicho la índole veraz y autónoma de quienes en las calles se denominaban autoconvocados. La nominación

“minúsculos”, por su parte, desdecía la magnitud de las protestas, presentándolas disminuidas, como un descontento carente de relevancia. Ambas nominaciones son importantes porque indican otro componente de la estrategia estatal: desconocer el estatuto de ciudadanía y el ejercicio de derechos expresados en las protestas.

El régimen, al negarse a reconocer que eran ciudadanos y ciudadanas quienes mostraban en el espacio público su inconformidad con las medidas estatales, se niega a reconocer asimismo que este descontento entraña demandas legítimas que deben gestionarse políticamente. En el acápite anterior señalé que este discurso es relevante porque definió el talante con que el Estado gestionó las protestas. Parte de esta definición consistió en negarse a reconocer la energía social autoconvocada como un ejercicio de ciudadanía que posicionó inconformidades en el espacio público de manera corporal y audible. El discurso estatal registró únicamente desestabilización, caos, desorden. Como argumentaré más adelante, esta estrategia resultó indispensable para negar la humanidad de los protestantes y justificar el atropello a sus derechos humanos.

Uno de los objetivos de menospreciar el descontento social fue no reconocer la existencia de malestares de índole plural, multilocalizados, autoconvocados; adversarios sin jerarquías claramente establecidas, erigidos y en movimiento fuera de los confines de la política tradicional de los partidos. Hacer frente a ello significaba dar espacio a la naturaleza contenciosa de la política, abrir las puertas a la disputa por la hegemonía. En lugar de tramitar esta política, las autoridades estatales y dirigentes del FSLN responsabilizaron a actores tradicionales —el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), los Estados Unidos, “la derecha”, según cada momento de la crisis. La estrategia estatal ha oscilado entre subestimar la magnitud del descontento y refutar su existencia, con lo que justifica su eliminación y su expulsión simbólica o física, según considere oportuno.

Desconocer a los protestantes como ciudadanía y registrarlos como energía desestabilizadora y amenazante es una actitud que se corresponde con la violencia excesiva y desproporcionada con que el Estado respondió a las protestas desde sus inicios. Los informes elaborados por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos sostienen que la violencia ha constituido la principal respuesta del Estado a las protestas y que esta ha estado al servicio de un claro propósito: desvirtuar e invalidar el descontento social.

La correspondencia entre el discurso estatal y la reacción de las fuerzas de seguridad consiste en que mientras el primero definía las protestas como amenaza, las segundas las trataron con ánimo letal. El informe ya citado de la CIDH (2018), al referirse al actuar de las fuerzas estatales habla de un “ataque

indiscriminado con armas letales por parte de agentes de la Policía Nacional y antimotines tanto contra manifestantes que no se encontrarían armados, como contra personas que no habrían estado participando en las protestas” (p.36).

Este informe refuta el intento de argumentar un uso legítimo de la fuerza por parte de agentes estatales, que fue lo que afirmó Francisco Díaz en el acto oficial de su nombramiento como director general de la Policía, el 10 de septiembre de 2018.<sup>8</sup> El informe de CIDH afirma que la violencia estuvo dirigida al “exterminio de los manifestantes, lo que claramente descarta cualquier finalidad legítima” (p.36). Evidencia de este ánimo de exterminio son los fallecimientos acaecidos desde el segundo día de las protestas, la noche del 19 de abril, bajo un patrón de posibles ejecuciones extrajudiciales que requieren investigación detallada. Por su parte, el informe elaborado por la OACNUDH indica que las fuerzas de seguridad desconocieron e incumplieron los protocolos nacionales e internacionales de gestión de protestas sociales, pues respondieron con una fuerza represiva propia de un Estado que reacciona como si estuviera ante una amenaza y no ante su propia ciudadanía. Como ya he indicado, el discurso estatal configuró este tratamiento.

Informes como el de CIDH presentan abundante evidencia de víctimas cuyas edades oscilaban entre 15 y 45 años, que presentaron proyectiles de bala en cabeza, ojos, cuello, tórax y espalda (p.36). Los informes de OACNUDH y de Amnistía Internacional, así como diversas investigaciones de carácter periodístico aportan información a este respecto. El equipo de trabajo de CIDH analizó autopsias y encontró que los orificios de entrada de los proyectiles se ubicaban en zonas corporales de alta letalidad, lo que revela una intencionalidad letal en los disparos (p.38). El mismo informe afirma con contundencia que concentrar la fuerza letal en los órganos vitales de las personas constituye “usos arbitrarios de la fuerza y en el caso de las muertes, ejecuciones extrajudiciales” (p.44).

La intención de matar es aún más clara si tomamos en cuenta que, como indica el informe en cuestión, ninguna de las manifestaciones realizadas

---

8 La cita exacta de Díaz al respecto es la siguiente: “Fuimos atacados en nuestras unidades policiales y en las casas de nuestros policías; jamás atacamos a nadie, hicimos el uso legítimo de la fuerza, conforme a nuestras facultades constitucionales para garantizar la vida, la integridad física y los bienes de las personas, familias y comunidades. Este golpe de Estado fue derrotado con la participación de nuestra comunidad, el apoyo de nuestros hermanos y hermanas Policías Voluntarios en el restablecimiento de la paz en nuestro país” (2018, p.12). Al final de su discurso, Díaz exclamó: “¡Viva nuestra Policía Voluntaria! ¡Viva nuestra Policía Nacional!” (p.14). El discurso de Díaz fue publicado en la edición de septiembre de la revista Visión Policial, así como en notas de prensa oficialistas, como la que sigue: “Director General de la Policía Nacional. Terroristas no pudieron ni podrán vencer los anhelos de paz del pueblo”. El 19 Digital, lunes 10 de septiembre de 2018. Disponible en: <https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:81256-director-general-de-la-policia-nacional-terroristas-no-pudieron-ni-podran-vencer-los-anhelos-de-paz-del-pueblo>



se enmarcaba en condiciones que habilitaran a la Policía a usar armas de fuego contra los manifestantes. A este respecto, el informe de la OACNUDH (2018) sostiene que “desde el inicio de las protestas, existió un uso excesivo de la fuerza generalizado, dando lugar en ocasiones a ejecuciones extrajudiciales, así como ataques perpetrados por elementos armados progubernamentales” (p.22). Como indica el título del primer informe de Amnistía Internacional, la lógica fue *Disparar a matar*, con el propósito de eliminar las amenazas definidas por el discurso estatal.<sup>9</sup>

En el segundo informe de Amnistía Internacional, *Sembrando el terror* (2018), se analizan cinco casos que ilustran con ejemplaridad el ánimo de exterminar. En ninguno de ellos los protestantes representaban una amenaza ni portaban armas letales. En todos los casos el asesinato fue deliberado. Destaco los casos de Faber López Vivas, un policía antimotines que, según la nota de prensa de la Policía, falleció por disparo de arma de fuego por parte de “terroristas armados” durante las “Operaciones Limpieza”. Sin embargo, su familia denunció que el cadáver no presentaba impacto de bala, pero sí múltiples signos de tortura. Esto fue certificado por un médico forense privado. Su familia considera que la Policía lo ejecutó como una forma de castigo por haber solicitado su renuncia formal días antes. Otro caso emblemático es el ataque parapolicial armado a la Universidad Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) y, posteriormente, a la iglesia Divina Misericordia. En este caso, elementos parapoliciales, protegidos por la Policía, descargaron municiones de forma constante durante más de 20 horas. Entre otros daños, hubo 16 personas heridas y dos jóvenes asesinados. Amnistía Internacional considera que estas son posibles ejecuciones extrajudiciales y crímenes de derecho internacional.

Marilena Chaui (2011) afirma que uno de los rasgos de los autoritarismos sociales es que no comprenden las crisis como resultado de contradicciones latentes que ameritan ser entendidas política y socialmente. En su lugar, las crisis son explicadas como una repentina erupción de irracionalidad que amenaza el orden político y social. También son definidas como caos y peligro. En sintonía con la reflexión de Chaui, hemos visto que el Estado no reconoció que se enfrentaba a una crisis política, y que esta requería ser atendida políticamente. El Estado orientó sus energías a comunicar una situación caótica aparecida repentinamente, sin más sentido que la manipulación y el ánimo destructor.

---

9 El título completo del informe elaborado por Amnistía Internacional es *Disparar a matar. Estrategias de represión de la protesta en Nicaragua, 2018*. En el campo de la investigación periodística, puede verse el trabajo realizado por Wilfredo Miranda Aburto, *¡Disparaban con precisión: a matar!* publicado en Confidencial el 26 de mayo de 2018. Disponible en: <https://confidencial.com.ni/42701-2disparaban-con-precision-a-matar/>

Además de evidenciar el talante autoritario, el modo de comprender la crisis política se correspondió con el tipo de gestión que de ella hicieron las fuerzas de seguridad. Desde los primeros días de las protestas quedó claro que las autoridades estatales no consideraron seriamente discutir el contenido de la crisis política. Al sustituir la política por la violencia, su único objetivo fue eliminar el descontento social del espacio público, utilizando la violencia como mecanismo disuasivo.

Según el ya citado informe de la CIDH (2018), el afán por retomar y mantener el control del espacio público fue considerado asunto relevante y elemento constitutivo del patrón de violencia estatal. Llamo la atención sobre la relación entre el afán de control sobre los espacios públicos, la violencia como instrumento para alcanzar tal control y la configuración de autoritarismos sociales. Desde antes de la represión estatal iniciada en abril de 2018 se había configurado un patrón de poder orientado a controlar el uso y la gestión de los espacios públicos.

En sus análisis sobre las políticas de la memoria, Vannini (2017b) señala que las disputas en torno a los significados y usos de la Plaza de la Revolución ilustran el afán de controlar los espacios públicos y de utilizarlos como espacios de impresión y circulación de narrativas sociales. También documenta la lógica de relacionamiento con los adversarios políticos y sus respectivas narrativas. Al respecto ve una lógica de eliminar de forma abrupta y sin ningún tipo de diálogo ni consulta las narrativas disidentes, y de superponer sobre su borradura la propia narrativa. Vannini alude a una especie de lógica perenne de “construir, inscribir sentidos, destruir, modificar y borrar”. Ella destaca que esta lógica se expresa como política pública sobre el espacio urbano, y que este último tiene apenas un carácter provisional y transitorio. Lo que hoy existe mañana se puede borrar y viceversa. Además, señala la ausencia de participación ciudadana en la configuración o desfiguración del espacio público. De particular interés para nuestro análisis es su señalamiento de que este tipo de lógicas que caracterizan la gestión de lo público constituye una “deliberada acción política de invisibilización y eliminación del adversario” (p.117), y que indica “el carácter autoritario del sistema político y una forma encubierta de corrupción y mala administración de los fondos públicos” (p.117).

A la misma vez que el gobierno sandinista intervenía los espacios públicos con su narrativa de paz y reconciliación, también tomaba medidas orientadas a contener otros usos de los espacios públicos. Manifestación temprana de ello durante la administración sandinista fueron los contingentes de “rezadores contra el odio” que se activaron en agosto de 2008, en el primer período del gobierno sandinista en el siglo XXI. Los contingentes de “rezadores contra el odio” consistieron en grupos de mujeres y hombres de extracción popular que se instalaban en las rotondas de la ciudad de Managua.

Entre los lemas que distinguían las camisetas que portaban había mensajes como “El amor es más fuerte que el odio”, frase muy socorrida en el discurso del FSLN. Estos grupos usaban extensas mantas de color rosado en las que se proclamaba “Oración contra el odio”.

### 3. Nos/otros: ¿hacer la guerra para defender la paz?

El discurso estatal promovió una lógica polarizante. A un lado estaban los centinelas de la paz, un *nosotros* dentro del cual se comprendía el gobierno. En la acera opuesta, los *otros*, sin nombre ni forma precisa, pero sí minúsculos, desestabilizadores y azuzadores. Leamos el siguiente extracto de la misma intervención del 19 de abril de 2018 para analizar con más detalle la configuración de polos opuestos y fronteras:

Hemos hecho un esfuerzo enorme como Sociedad, como Gobierno, como Modelo Político de Diálogo Permanente, para instalar un País en Armonía, Tranquilidad, Trabajo, Prosperidad y No Violencia.

Esos esfuerzos, esos esfuerzos, están siendo agredidos y violentados por quienes promueven la destrucción, la desestabilización; esos minúsculos grupos, que atentan contra la Paz y el Desarrollo con intereses y agendas políticas, egoístas, tóxicas, llenas de odio. Esos que no toman en cuenta ni reconocen el Milagro de la Paz, y que se lanzan, con Almas que parecieran envenenadas, pervirtiendo el Ambiente que, con tanta Fé, ese Ambiente Alegre, Seguro, que tod@s queremos y que con tanta Fé y tanta Dedicación hemos venido alcanzando, gracias infinitas a Dios, y de Su Mano, tod@s junt@s en nuestro País. (...) esos grupos minúsculos, esas Almas pequeñas, tóxicas, llenas de odio, no representan el sentimiento, la necesidad de la Paz, de Trabajo y de Cariño del Pueblo nicaragüense que tanto ha sufrido. (Consejo de Comunicación y Ciudadanía, 19 de abril, 2018).

Es fácil reconocer en estas palabras la configuración de una lógica polarizante. En un extremo se encuentra el gobierno, desde donde enuncia, califica, juzga. El gobierno aparece como una especie de vanguardia de la armonía, la prosperidad y la no violencia. En el otro extremo se encuentran quienes promueven la destrucción y la desestabilización, “esos minúsculos grupos que atentan contra la paz y el desarrollo”.

Se califica a los protestantes, pero estos aún aparecen sin cuerpo político definido. Si bien cabe pensar que esto se debe a la pluralidad de sectores que se sumaron a las protestas, no excluyo la posibilidad de que la ausencia de cuerpo y nombre responda al objetivo del régimen de negarles reconocimiento, para así justificar su expulsión del campo político y mantener la gestión estatal en el campo de las emociones, que aquí adquiere la forma imprecisa del peligro y la amenaza. Es una manera de interpretar la alusión no

a un sujeto político, sino a agendas “egoístas, tóxicas, llenas de odio”, como indica la cita anterior, y de negarse a reconocer el evidente malestar social.

Recordando las reflexiones de Chaui sobre cómo las sociedades autoritarias gestionan las crisis sociales, el Estado sí es capaz de registrar una erupción irracional de caos y peligro, pero no percibe ningún sujeto político en movimiento, ni la activación de un malestar o contradicción política. Esto quizá se corresponda con la centralidad del afecto en la razón populista promovida por el discurso oficial. El FSLN elabora el discurso en torno a la reconciliación y la paz en el lenguaje de las emociones y los afectos —“la vida es más linda si nos amamos”, dice la conocida y popular canción *Un día lleno de amor*, del grupo Manifiesto Urbano, de uso oficial.<sup>10</sup> Es entendible que también elabore los contornos del enemigo bajo el mismo impulso afectivo, pero como su opuesto: la irradiación de egoísmo y odio.

Si bien una estrofa de la canción citada, *Un día lleno de amor*, sostiene la potencialidad de una política democrática y pluralista al decir, “Yo te lo quiero decir, aunque tengamos diferencias, en Nicaragua hay amor” (1:34-1:40), no existe cabida alguna para el pluralismo. Especialistas en el análisis crítico del discurso, como Wodak (2003), ya citada, han argumentado que la construcción discursiva de “nosotros y otros”, como la que podemos ver en el discurso estatal, constituye la base de los discursos de identidad y diferencia. A su parecer, estos discursos son claramente de carácter discriminatorio.

Entiendo la discriminación como un acto de desacreditación de las demandas que conduce a la expulsión de los protestantes del campo político. Esa desacreditación fue la premisa para posteriormente reprimir y presentar la violencia estatal como una respuesta proporcionada y legítima. Visto así, el discurso oficial representó la estrategia retórica que justificó la represión estatal de “disparar a matar” a fin de recuperar el control del espacio público, y diseñó un escenario en el que aparece un bien amenazado —la paz, el desarrollo— cuya defensa legitimaba cualquier medida represiva, incluso las ejecuciones extrajudiciales. Al desconocer el estatuto de ciudadanía e incluso de humanidad que sustentaba la manifestación de tensiones políticas, el imperativo de “disparar a matar” tuvo una fase previa retórica, simbólica, indispensable para su posterior ejecución.

La lógica polarizante no es en absoluto novedosa en la política nicaragüense. En *Contramemorias*, Irene Agudelo (2017) analiza la

---

10 Manifiesto Urbano. “Un día lleno de amor” (versión al estilo bomba). Esta canción es utilizada en los actos políticos del gobierno sandinista. Fue producida para el 36 aniversario de la revolución sandinista, oficialmente denominada “36/19...Y vamos adelante. En Fé, Familia y Comunidad!” [sic]. Forma parte de un repertorio más amplio que evidencia la centralidad de la cultura en la configuración de un nuevo discurso sandinista posrevolución, pendiente de estudiar. Disponible en: [https://www.youtube.com/watch?v=V\\_cmIbXjKys](https://www.youtube.com/watch?v=V_cmIbXjKys)

estigmatización como recurso que adquiere especial fuerza en contextos de guerra. Los binarismos radicales, nosotros/otros, amigo/enemigo, por ejemplo, se tornan regulares cuando la lógica militar sustituye a la política. Agudelo postula lo anterior al estudiar la construcción de la imagen del enemigo *Contra* durante la década de 1980.

A diferencia del escenario bélico de los años 80 que estudia Agudelo, en la Nicaragua de 2018 no hay una guerra con cuerpos armados enfrentados. El discurso oficial simula no sólo reconocer esta diferencia, sino utilizarla a su favor, para distanciarse de la violencia. A ese propósito sirve la retórica de la paz, la reconciliación y el lenguaje de las emociones, como la armonía y el amor. A pesar de ello, se reproducen binarismos notoriamente asociados a los que han operado en las guerras recientes de nuestra historia. La gestión de lo social se aproxima más a una lógica de declaración de guerra que a una contienda política de carácter democrático en la que adversarios que se reconocen mutuamente se disputan la hegemonía.

La elaboración de una otredad amenazante no es más que la conversión de la ciudadanía en enemigo al que se atribuye un rasgo exclusivo: su irracional fuerza de desestabilización. Para Chauí (1999), la elaboración de esta otredad deriva de la ruptura del lazo social de mando y obediencia que caracteriza las relaciones sociales e intersubjetivas en las sociedades autoritarias y con pasados de servidumbre. En el caso de Nicaragua, la insubordinación social iniciada el 18 de abril de 2018 rompió el lazo social de mando y obediencia. Como consecuencia, el discurso estatal tradujo esa ciudadanía como otredad amenazante y se negó a reconocerla como sujeto político y de derechos.

#### 4.Tradiciones familiares

El menosprecio y/o desacreditación del descontento social se extendió a las declaraciones gubernamentales de la noche del 19 de abril. En ellas se mantuvieron dos asuntos importantes previamente señalados: el modelo de la familia para explicar la crisis política nacional, y la consideración de la crisis no como expresión de problemáticas latentes en la sociedad, sino como cuerpo amenazante. Leámoslo:

Buenas noches, queridas Familias de nuestra Nicaragua. Esta Nicaragua que hoy sufre la pérdida de varios hijos. Esta Nicaragua que está siendo mancillada por malos hijos. Como decíamos este mediodía, gente pequeña, gente mezquina, gente de Alma pequeña, que no se pone a pensar que hemos trabajado tanto para alcanzar la Paz; que hemos estado todos los días dándole gracias a Dios, porque hay Paz en Nicaragua después de tanto tiempo de sufrimiento, de dolor, de conflicto, de las Familias nicaragüenses. [...] Almas mezquinas que no toman en cuenta a las Luz Marina [...] No una, dos, tres, en este momento, que sufren, y a todas las Madres que sufrieron pérdidas

de hijos, pérdidas de Seres Queridos, las Familias, como resultado de una violencia que creíamos enterrada (Consejo de Comunicación y Ciudadanía, 19 de abril, edición especial de la noche, 2018).

En esta cita Nicaragua aparece como una madre que sufre la pérdida de “varios hijos”. Efectivamente, el informe de la OACNUDH (2018) documenta la muerte de un civil, un policía en Managua, cerca de la Universidad Politécnica (UPOLI), así como también la de un menor en Tipitapa. El mismo informe señala que elementos armados progubernamentales, entre los que había francotiradores, comenzaron a actuar contra los manifestantes desde este día. Sin embargo, en la cita se responsabiliza directamente a los “malos hijos” que mancillan a su madre.

Hablar de Nicaragua como una madre sufriente y mancillada es una estrategia de feminización y maternización que conserva el discurso estatal en el lenguaje de las emociones y los afectos. Como ya hemos visto, el discurso no es de carácter jurídico, ni tampoco político en el sentido liberal del término. Para dar cuenta de lo que acontecía en el país esa noche, no se utiliza ningún concepto del liberalismo político —ciudadanos, protestas, gobernantes, ingobernabilidad, ni ningún otro término similar.

La politicidad del discurso radica en suscitar una disposición afectiva, una sensibilidad. El manejo de las emociones y los afectos es clave en la construcción cultural de cualquier sensibilidad. En este caso, por ejemplo, consistió en promover una actitud de compasión con respecto a la madre sufriente, figura mariana, y de rechazo a los “malos hijos” que la mancillan. No existe ni ciudadanía, ni instituciones. Existen espectadores de un drama familiar, la familia como núcleo de la nación y de la contienda política. Feminizar el discurso estatal favorece el distanciamiento, cuando no desaparición, del ámbito político institucional.

Las emociones y los afectos son medulares en la construcción cultural de la política. En este caso podemos pensar que si en la familia hay una madre sufriente y mancillada por el comportamiento de los malos hijos, es posible recurrir a la figura de autoridad del padre, quien puede imponer la ley como castigo. Al respecto cabe hacer notar las reiteradas alusiones a la represión estatal como una forma de castigo por haber participado en las protestas, alusiones que se detectan en *Sembrando el terror*, el informe citado páginas atrás. Por ejemplo, Amnistía Internacional (2018b) considera que los seis casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales estudiadas en dicho informe constituyeron una forma de castigo. También recordemos que los términos del registro de autoridad familiar son de mando y obediencia.

La cita anterior es sintomática del uso político que a lo largo de los últimos años se ha hecho de la familia. Como sabemos, el orden familiar es central en la sociedad nicaragüense, ilustración del predominio del espacio

privado sobre el público. Pensando en este tema, en *Autoridad/Cuerpo/Nación* (2015) argumenté que, desde su regreso al poder en 2007, el FSLN se ha servido de un patrón de autoridad centrado en la figura del hombre gobernante y su núcleo familiar, y desde esta posición ha recurrido a la religión y a la familia heterosexual como soportes de la autoridad política y como elementos cohesionadores de la cultura nacional. Vista así, la respuesta al alzamiento de las protestas sociales desde sus primeros días siguió localizándose y operando en este registro discursivo.

Utilizar la familia como metáfora de la sociedad refuerza la jerarquización social y el principio de autoridad sostenido sobre una lógica de un superior que manda y un inferior que obedece. Cuando desde el Estado se postula que la nación está siendo mancillada por malos hijos desobedientes, hay una transgresión del lazo de obediencia debida. Dicha transgresión, por tanto, amerita castigo.

Es notable que el modelo familiar sirve como marco de inteligibilidad de relaciones de carácter eminentemente político entre gobernantes y gobernados. Esto, a todas luces, resulta problemático para el concepto de política. Dichas relaciones no deberían estar sujetas a una lógica de mando/obediencia, superior/inferior, porque remiten a una complejidad mucho mayor de carácter contencioso y argumentativo. Para Chauí (1999) servirse del modelo familiar para distribuir el poder en una sociedad constituye uno de los principales rasgos de lo que ella llama “autoritarismo estructural”, un autoritarismo presente en los rasgos generales de las relaciones de una sociedad. Con ello no pretendo afirmar que el autoritarismo estructural sea la única cultura presente en la sociedad nicaragüense. De hecho, gracias a la coexistencia de múltiples culturas fue posible la ruptura del lazo mando/obediencia gestada a partir del 18 de abril. Chauí ilustra esta coexistencia de patrones culturales al pensar una oscilación constante entre el conformismo y la resistencia (2011). Con el término “autoritarismo estructural” señalo, no obstante, un modo de gestión de la tensión política por parte del Estado, así como la capitalización de una tradición cultural para tal fin. Me referiré a esto más adelante.

## 5. Vándalos, pandilleros, terroristas

Tanto el 18 como el 19 de abril de 2018, uno de los asuntos que llamaban la atención a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general era que el presidente no se había pronunciado públicamente sobre la situación del país. En su intervención de la noche del 20 de abril, Murillo adelantó la anuencia del presidente Ortega a instalar una mesa de diálogo y a retomar el modelo de diálogo que hasta antes del anuncio de las reformas al sistema de seguridad social habían desarrollado el gobierno y el Consejo



Superior de la Empresa Privada (COSEP).<sup>11</sup> Nótese que, en ese momento, el único actor social considerado por el gobierno para dialogar fue el COSEP.

Aunque expresaba un talante de apertura, se mantuvo la posición de descalificar las protestas, tildándolas de vandalismo, como se puede leer a continuación:

¡Romper la Paz, romper la Armonía, romper la Tranquilidad, eso es lo que han tratado de alcanzar en estos días [...] Y vandalizar también, desgraciadamente! Tod@s hemos visto a través de los Medios de Comunicación la destrucción que han promovido (Consejo de Comunicación y Ciudadanía, 20 de abril, especial de la noche, 2018).

Tratar las protestas sociales y a la ciudadanía como vándalos en el discurso de la noche del 20 de abril de 2018 fue la antesala de su calificación al día siguiente. La tarde del 21 de abril Ortega apareció en público por primera vez desde el inicio de las protestas. Acompañado de Aminta Granera, entonces todavía directora de la Policía, y Julio Avilés, jefe del Ejército, brindó un extenso discurso en el que se refirió, entre otros asuntos, a un escenario de manipulación y criminalización. Cito:

Es explicable y entendible por la forma en que se pueden manipular y se manipulan las Redes ahora en el Mundo. Ese no es un problema solamente de Nicaragua, sino un problema mundial, pero cuando los que organizan este tipo de protesta vienen e incorporan a Jóvenes, Muchachos o Adultos que han caído en la delincuencia, son delincuentes, ahí está el récord, lo tiene la Policía el récord de estos delincuentes, de los que han sido detenidos, son miembros de pandillas... Cuando incorporan a estos miembros de pandillas, entonces están totalmente criminalizando la protesta, la están criminalizando y están poniendo en riesgo a los mismos muchachos que con buenas intenciones llegaron a la protesta, ¿por qué?, porque desgraciadamente las pandillas son una expresión en el Mundo, de grados de descomposición que se dan en la Sociedad (Consejo de Comunicación y Ciudadanía, 21 de abril, 2018).

---

11 Las palabras exactas fueron las siguientes: “Desde esa Comparecencia y esas Palabras de Mediodía que compartimos plenamente, nuestro Presidente, el Comandante Daniel, me ha pedido que comunique al Pueblo nicaragüense que, el Estado, el Gobierno, la Presidencia de la República ha aceptado ese llamado a reinstalar la Mesa de Diálogo, a retomar la Mesa y el Modelo, porque ninguno de nosotr@s, ninguna de las partes ha dado por concluido o ha dado por cerrado o por clausurado el Modelo de Diálogo, Alianzas y Consensos. Precisamente, al escuchar el llamado del Consejo Superior de la Empresa Privada de nuestro País, estamos respondiendo a ese llamado, confirmando nuestra disposición de retomar ese Diálogo abierto, franco, que nos ha caracterizado, y darle continuidad a ese Modelo que en Nicaragua ha dado tantos frutos, tanto buen resultado; resultados buenos. Modelo de Diálogo...!” (Consejo de Comunicación y Ciudadanía, 20 de abril, especial de la noche, 2018).

Como se puede ver, Ortega registró el papel que las redes sociales estaban desempeñando en las protestas en todo el país. Pero, lejos de registrar su capacidad de convocar y aglutinar el descontento, las concibió como instrumentos de manipulación. Ello se corresponde con la decisión de eliminar la conexión gratuita a internet en los parques, tomada en los días posteriores a la ebullición social (Munguía Argeñal, 2018). Además, distinguió entre los organizadores de las protestas y los jóvenes. Estos últimos no actuaban por voluntad propia. Eran incorporados por los organizadores, a quienes no identificó, en concordancia con las declaraciones ya antes analizadas.

Ortega desconoció el importante liderazgo mostrado por los jóvenes (mujeres y hombres) y marginó una de las principales voces de inconformidad en el país. El único papel que le reconoció a la juventud fue el de ser delincuentes y pandilleros, tratando con ello de restar validez a las demandas políticas. Estas ni siquiera fueron registradas como asunto político, sino como cosa criminal. Así, de un conjunto de inconformidades multisectoriales se trató de sustraer el poder aglutinador de la juventud y de convertir a esa juventud en víctima de intereses ajenos. Veamos: “Cuando incorporan a estos miembros de pandillas, entonces están totalmente poniendo en riesgo a los mismos muchachos que con buenas intenciones llegaron a la protesta” (Consejo de Comunicación y Ciudadanía, 21 de abril, 2018).

En esta intervención se alude a la incorporación de las pandillas como elemento contaminante de los grupos de jóvenes limpios, sanos. El riesgo es entonces el factor de contaminación de las protestas, y con ello se anula cualquier grado de legitimidad de las protestas. Es obvio y reiterado el afán de descalificar y deslegitimar las movilizaciones, y reiterado también el uso de la metáfora médica de la contaminación para ello. Otra evidencia de esto es que, al seguir hablando de las pandillas, el presidente dijo que eran: “una expresión en el Mundo, de grados de descomposición que se dan en la Sociedad” (Consejo de Comunicación y Ciudadanía, 21 de abril, 2018). Es evidente entonces la pretensión de servirse de la metáfora médica de la contaminación y, en este caso, del factor de la descomposición del cuerpo social, para señalar que, dada la infiltración de estos cuerpos contaminantes en las protestas, estas últimas carecen de veracidad y relevancia. En todo caso, pertenecen al campo de lo criminal y no al de la política.

También es relevante la estigmatización que en el ámbito centroamericano han promovido los gobiernos de la región en torno a los grupos juveniles, especialmente en los gobiernos del “manodurismo” en El Salvador y Honduras. En la cita anterior podemos ver que se trató de hallarle sentido a lo que sucedía valiéndose de los factores amenazantes presentes en otros países de la región. Recordemos que la estigmatización de los grupos juveniles en estos países centroamericanos ha dado lugar a que se considere que estos jóvenes son criminales abyectos, no ciudadanos. Esto hay que

destacarlo, dado el afán ya mencionado de refutar la índole cívica de las protestas. Por todo ello se puede afirmar que estas declaraciones presidenciales siguieron la estrategia ya iniciada de desconocer una problemática latente en el terreno político, y sostener que la principal amenaza en ese momento eran las pandillas, como queda claro en la siguiente cita del mismo discurso:

Yo diría que ese es el mayor peligro, la mayor amenaza que se está presentando en estos momentos, estos grupos de pandilla que van allá a la hora del alboroto y que van, sí, respondiendo a una dirección política que los utiliza para que anden volando balas y anden saqueando. Porque, claro, ellos ven una oportunidad de saquear, y van a saquear y a sembrar el terror, sembrar la inestabilidad, sembrar la inseguridad, porque estos siembran el terror y la inestabilidad en todos los Ciudadanos (Consejo de Comunicación y Ciudadanía, 22 de abril, 2018).

El Estado no hizo ningún cambio de dirección en la gestión de las protestas sociales. Continuó tratándolas como amenazas a la paz y la seguridad pública, dominio no de la política, sino de las fuerzas de seguridad. Como antes argumenté, la politicidad de este tipo de gestión radica, en buena medida, en dirigir lo afectivo, esto es, la receptividad activa del cuerpo a una intensidad del momento presente, como lo ha definido Lauren Berlant (2008). En este caso, dicha receptividad giraba, por ejemplo, en torno al temor, el miedo, la ansiedad y un manto emocional aún más amplio generado por la violencia con la que fueron reprimidas las protestas sociales, violencia que los informes de los organismos de derechos humanos calificaron como desproporcionada y excesiva.

La intensidad con que nuestros cuerpos recibieron y se relacionaron con la violencia creó una atmósfera afectiva difícil de verbalizar, más inteligible como textura emocional que como racionalidad. Sobre este tiempo afectivo, ya vivido como fractura para el 21 de abril, cayó el discurso presidencial. Sin embargo, en lugar de rendir cuentas, el gobierno trasladó a los grupos juveniles y a las pandillas el malestar y el desasosiego producido por la violencia de las fuerzas de seguridad, y acusó a los grupos de jóvenes de incurrir en prácticas ilegales. De este modo los cuerpos de seguridad y el Estado quedaron exentos de responsabilidad, puesto que según el discurso estatal su actuación fue una mera función reactiva, y no productora de violencia. La creación de este escenario banalizó a todas luces la represión policial, cuestión que para pensadoras como Chauí es expresión del autoritarismo social y sus micropoderes (1999).

A diferencia de los discursos antes citados, en esta ocasión la amenaza tuvo corporalidad específica: las pandillas. Pero ello sólo permitió dotar de un grado de especificidad a la estrategia de desconocer un escenario de

insubordinación social y trasponerlo a un escenario de vandalismo, inseguridad e ilegalidades. No cambió el núcleo de la estrategia estatal de rehusarse a reconocer la ruptura del lazo de mando/obediencia, como tampoco reconoció la exigencia ciudadana que ya para la tarde del domingo 22 de abril de 2018 coreaba que las protestas no tenían que ver únicamente con las reformas a la seguridad social, sino con una latencia de descontento acumulado durante años.

La figura del pandillero operó en el discurso estatal por lo menos durante los meses de abril, mayo y junio de 2018, hasta que fue sustituido por la figura del terrorista. Ejemplo de ello es que, en Masaya, ciudad en abierta rebeldía, cuando los medios de comunicación no gubernamentales interpelaban al comisionado general de la Policía, Ramón Avellán, sobre la situación de esa ciudad, él negaba rotundamente la existencia de protestantes, argumentando que lo que había era un montón de vagos y pandilleros, borrachos y drogados. “Son *drogos*” dijo en una ocasión a los medios de comunicación, sin mediar mayor explicación y visiblemente irritado (Salazar, 2018a). Lo mismo adujo durante una entrevista Jacinto Suárez, diputado, encargado de relaciones internacionales del FSLN y vieja figura de ese partido político. En una entrevista realizada por Carlos Dada (2018) y publicada en *El Faro*, afirmó que en Monimbó, pueblo indígena de la ciudad de Masaya y uno de los territorios más beligerantes desde el inicio de las protestas, no había protestantes ni opositores, sino “pandilleros”. “Ahí hay nueve pandillas que son las que están allí”, dijo Suárez, con aires de alquimista más que de político experimentado.

Mientras las voces de Avellán y Suárez ilustran cómo el discurso de las más altas autoridades circulaba transparentemente entre miembros de las fuerzas de seguridad y de otros poderes del Estado, la labor periodística elaborada desde el terreno desdijo sus aseveraciones. Por ejemplo, Maynor Salazar, periodista de *Confidencial*, documentó el levantamiento de la ciudadanía de Masaya y constató que en los primeros días de junio los pobladores erigieron hasta 200 barricadas (2018b).<sup>12</sup> A mediados del mismo mes, el 18 de junio para ser exacto, sectores disidentes demandaron la renuncia del presidente y la vicepresidenta. Además de ello, como registró Cinthya Tórrez (2018) para *La Prensa*, miembros de organizaciones autoconvocadas hablaron de la conformación de una junta de “salvación nacional” integrada

---

12 Las barricadas se organizaron como medida de protección ante los saqueos y robos que estaban ocurriendo en esta ciudad. Al respecto, Salazar (2018b) dice: “El pasado primero de junio [2018], después de ser víctimas de saqueos y robos, los ciudadanos se reunieron en el parque central para formar grupos de autodefensas por cada barrio y cuadra. El objetivo era defenderse de las turbas que robaban bajo el amparo de la “Policía de Masaya”. Esa noche no se reportó ningún incidente [...]”.

por miembros de distintos sectores. Dicha junta ejercería las funciones de un gobierno provisional erigido desde las barricadas de esa ciudad.

La “Operación Limpieza”, iniciada días después, modificó sustantivamente este escenario. En su informe *Sembrando el terror* (2018), Amnistía Internacional indica que en el mismo mes de junio el gobierno desarrolló una estrategia represiva “deliberadamente letal e indiscriminada” (p.12), orientada tanto a la desarticulación de las protestas como a castigar a las personas que participaban en las mismas. En el acápite anterior llamé la atención sobre la posible vinculación entre el ánimo de castigo y el modelo familiar de autoridad política.

Como mencioné, el discurso estatal sustituyó la figura del pandillero por la del terrorista. Según documentó Amnistía Internacional, en el mes de julio el calificativo de terroristas y golpistas fue recurrente en el discurso estatal como *la* forma de señalar a los protestantes (Amnistía Internacional, 2018b). Desde el Ejecutivo, el apelativo derivó al uso periodístico, administrativo, policial, judicial y sus combinaciones. Dado este escenario, fue común ver a medios de comunicación dando cobertura a declaraciones públicas realizadas por elementos de la Policía que calificaban y tipificaban como “terroristas” a personas detenidas. Como bien registró Amnistía Internacional, ello atentó contra la presunción de inocencia, cuyo acatamiento es obligatorio para las autoridades civiles. Ninguna autoridad puede hacer declaraciones sobre la inocencia o culpabilidad de una persona acusada si antes no se ha emitido sentencia en un juicio.

La figura del terrorista abrió las puertas a una judicialización sostenida de la protesta social a través de un tipo penal concreto. Si ya la figura del pandillero era perseguible jurídicamente, la de terrorista tiene una materialidad más clara, y una carga política muy específica. Como señala Calveiro (2012), la figura del terrorista en el mundo de hoy resulta más compleja que la del delincuente común, e, incluso, que la del enemigo en el derecho de guerra. A diferencia de estos, el terrorista combina la figura de la repulsión, de lo repugnante por definición, con una suerte de excepcionalidad y una posición fuera de la ley que hace al terrorista objeto de leyes de carácter especial y carente de todo tipo de protección.

El Estado promulgó una ley contra el terrorismo que ha servido de base para los procesos de judicialización que se han realizado. La ley se titula “Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (Ley 977)”.<sup>13</sup> Aunque el texto de esta ley afirma que “tiene por objeto proteger la economía nacional y la integridad del sistema financiero de los riesgos asociados al Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento

---

13 Ley 977, La Gaceta, Diario Oficial, Managua, 20 de julio de 2018.

de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, es claro su carácter de instrumento para la detención y posterior judicialización de ciudadanos y ciudadanas que han participado en protestas sociales.

## 6. Imaginario autoritario y humanidad

El afán de menospreciar o desconocer la existencia de un descontento social es una problemática relacionada con la sedimentación del imaginario autoritario. El discurso en torno a la reconciliación, la paz y la armonía tiene una dificultad inmanente: sólo puede ser efectivo en un escenario carente de conflicto. Pero esta es una condición que no es política ni antipolítica. Si bien esta problemática estaba presente antes de abril, la hemos visto con mayor claridad a lo largo de la crisis política. Cualquier antagonismo que se manifieste en el espacio público es visto como una transgresión al orden mando/obediencia y, consecuentemente, se convierte en una amenaza a la paz. Para el imaginario autoritario del orden, la capacidad autoorganizativa de la sociedad es peligrosa. Es otra política –la calle, la barricada, el atrincheramiento, el tranque– que irrumpe rizomáticamente en el agujero negro de la no política, y presenta estructuras arborescentes, propiciadoras de binarismos y polarizaciones.<sup>14</sup> Notemos esto en la incapacidad del Estado para reconocer el carácter autoconvocado de las protestas sociales.

Definir el carácter político de lo social como una amenaza para la paz conllevó a una única respuesta: represión policial y desprecio a cualquier expresión de disidencia. ¿Cómo definir lo político si su esencia es la posibilidad de expresar y discutir públicamente las diferencias? Lo que hemos visto es que la violencia ocupa el lugar de lo político una vez que la ciudadanía transgredió la mítica imagen de una sociedad conforme. Esta sustitución produce su propia atmósfera social: temor generalizado, frustración y desesperación en la población, según documenta el informe de la OACNUDH (2018). Esa atmósfera viaja con el cuerpo –“en su visita a Costa Rica, Amnistía Internacional fue testigo del temor que las personas mantienen incluso en suelo extranjero” (2018b).

En una sociedad que funciona bajo el imaginario autoritario, la única manera de no atentar contra la paz social es no transgredir el carácter subordinado de la lógica mando/obediencia y mantener un lazo político basado en la cooptación, la cultura del favor, el clientelismo, la tutela y la promesa mesiánica. Todas estas lógicas relacionales están presentes en la sociedad nicaragüense, y su análisis detallado amerita un estudio aparte. Sí postulo, por

---

14 Un análisis detallado de estas políticas puede verse en el trabajo de Irene Agudelo y Jessica Martínez, *Revueltas de abril: narrativas, redes y espacios en disputa*, incluido en este volumen.

ahora, que son el reverso de la ciudadanía, porque reproducen a perpetuidad una sujeción que inhibe la autonomía y, sobre todo, inhiben la construcción de una política democrática a partir de la gestión de los conflictos sociales. De ese modo, la paz no se alcanza mediante la coexistencia de visiones plurales, sino que se pretende gestionar un consenso vacío. Evidencia de esa instancia de consenso vacío es el llamado modelo de diálogo entre gobierno y empresa privada.

La persistencia de la lógica mando/obediencia tensiona el discurso progresista de restitución de derechos con que el FSLN presentó su gestión gubernamental del siglo XXI. La constitución de un proyecto de restitución de derechos implicaría el reconocimiento de que existe deliberación y autonomía. Como hemos visto al estudiar una selección del discurso estatal de los primeros días del auge de las protestas sociales, el Estado ha obstaculizado y cercenado el ejercicio de los derechos fundamentales. No es posible, por tanto, hablar de restitución de derechos en una política incapaz de gestionar el carácter conflictivo que es immanente a lo social.

No es la primera vez que el imaginario autoritario produce graves problemas. Instituir un sistema democrático de carácter representativo y plural ha sido una de las grandes dificultades, no sólo en el pasado reciente, sino durante los casi doscientos años de vida independiente. Uno de los principales desafíos del siglo XIX fue edificar un orden nacional. El reto de garantizar la “paz interior” se topó con múltiples rivalidades locales y regionales, como bien argumenta Frances Kinloch (2015) en su trabajo sobre la organización del Estado nacional en el siglo XIX. Las guerras civiles fueron una constante en las décadas posteriores a la promulgación de la independencia. La disyuntiva era orden o anarquía. Lo primero significaba imposición de unos sobre otros. Lo segundo, ingobernabilidad.

El nuevo Estado se estableció en una sociedad con escasa vida pública y con una tradición de servidumbre racializada y tributo obligatorio, no de ciudadanía ni de derechos. Los primeros textos constitucionales configuraron la ciudadanía, pero únicamente de forma censitaria, asunto que significó la constitución de una palestra de ciudadanos con capacidad de deliberación sumamente restringida y, consecuentemente, un alto número de población sin acceso a derechos políticos. Así las cosas, las elecciones fueron un fenómeno minoritario. Apenas en 1856, después de la guerra nacional, el país encontró un mínimo de paz social y, con ello, inició un proceso de centralización política y un periodo de casi tres décadas de alternabilidad en el poder para los miembros de la oligarquía conservadora.

El período 1893-1909 fue clave en términos de sedimentar la idea de que la paz social sólo puede lograrse a través del liderazgo de *un hombre* que es el único capaz de poner orden y armonizar las diferentes fuerzas sociales. En el siglo XX, la necesidad de orden dio lugar al surgimiento de la dictadura



más duradera en el ámbito continental. Como argumenta Víctor Hugo Acuña (1995), en nuestra historia el autoritarismo ha demostrado ser más “durable y recurrente” que los procesos de democratización social, a los que califica como “frágiles y fugaces”.

## 7. ¿Ni siquiera humanos? Umbral de la violencia

Hay otro asunto que sugiere que el estatuto político de la ciudadanía es aún más problemático. El análisis del discurso estatal que hemos presentado en las páginas anteriores indica una dificultad para reconocer no sólo la índole de ciudadanos de los protestantes, sino también su carácter humano, su humanidad. Noto esta dificultad cuando solamente se reconoce en las protestas a “almas que parecieran envenenadas”, “almas pequeñas”. Enunciados como estos insisten en la minusvalía del descontento social, aduciendo implícitamente que por su minoría de edad ese conglomerado social demanda tutela y no alcanza el rango etario para reconocerle condición de ciudadanía ni para ejercer sus derechos.

Por si fuera poco lo anterior, el Estado ni siquiera registra la disidencia como humanidad. Se les define como “almas”, lo cual es una estrategia que degrada a las personas puesto que, al hacer expresión pública de su inconformidad, transgreden el orden mando/obediencia. Al negarles su humanidad y reconocer únicamente su vitalidad como “alma”, se les niega voz propia y cuerpo, partes vitales de su existencia. Simbólicamente, es un acto violento que expulsa a los protestantes del campo político y de la vida misma.

Al denominarlas como “almas que parecieran envenenadas” veo una estrategia de la forma oligárquica de la política que consiste en justificar una exclusión política mediante metáforas medicalizantes que establecen relaciones binarias como la de sano/insano que aquí vemos operando. Es una condición similar a la enfermedad, propia del repertorio médico. Si están bajo los efectos de un envenenamiento, resulta que la conducta de las personas se debe a que han ingerido una sustancia tóxica que incide de forma patológica en su comportamiento. El efecto político de este recurso es desconocer la capacidad de deliberación y la consciencia de las personas; negar su voluntad y su autonomía y definir su comportamiento como producto de una manipulación. Además, la metáfora del envenenamiento adjudica a los supuestos envenenados una condición de morbilidad contaminante. De este modo el discurso se sitúa fuera del vocabulario de la ciudadanía y nos presenta a un conglomerado de agentes venenosos que contaminan la salud y la paz de la sociedad.

Podemos ver entonces que una situación propiamente política recibe un tratamiento ajeno a la política. He llamado la atención en más de una

ocasión sobre este afán de desterritorializar la política y redirigirla a otros campos de conocimiento e intervención. También he señalado dos propósitos que se cumplen asimismo en este caso. Uno es evitar la constitución de una problemática política que abra una contienda. Otro es servir de pretexto de expulsión hacia otra gestión no perteneciente a la política.

El menosprecio y el envenenamiento trasladan lo político al repertorio médico de las intervenciones quirúrgicas sobre el cuerpo, haciendo un trabajo similar al de la gestión de los impulsos afectivos que antes mencioné. En estos impulsos, el discurso estatal tradujo como odio una energía pletórica de contenido social y político. El descontento no lo manifestaba un sujeto político, sino “Seres mezquinos, Seres mediocres, Seres pequeños”. En su intervención de la noche del 19 de abril, la vicepresidenta dijo: “esos Seres pequeñitos, mezquinos, mediocres, esos Seres llenos de odio, todavía tienen la desfachatez de inventarse muertos” (Consejo de Comunicación y Ciudadanía, 19 de abril, 2018). Si bien el terreno de la salubridad y el afectivo pueden operar independientemente en el discurso estatal, en otras ocasiones caminan de la mano, como en esta que cito: “Ese odio no va a contaminar este País, y eso tengámoslo claro [...] No nos va a contaminar”. Veamos otra evidencia: “denunciamos la toxicidad de las agendas políticas que chupan sangre” (Consejo de Comunicación y Ciudadanía, 19 de abril, 2018).

La toxicidad mantiene el tratamiento en el terreno de la salud pública. Al dirigirlo a este campo, considera a la sociedad como un cuerpo y a las personas que protestaban como un elemento tóxico que amenaza la salud. Es necesaria entonces una terapéutica que elimine la toxicidad. Traducido a la política, es la eliminación de los elementos tóxicos. Asimismo, la preocupación por un odio contaminante conlleva a una necesaria incisión corporal. Las fuerzas de seguridad cumplen una misión no de carácter político, sino de higiene pública. Realizan una “Operación Limpieza” contra los enemigos de la salud pública.<sup>15</sup> Solamente la eliminación de los agentes contaminantes permite restablecer

---

15 “Operación Limpieza” fue el nombre popular para la fase que el gobierno y la Policía definieron como “Operación por la paz”, ejecutada a partir de mediados de junio. En el sitio web de la Policía puede verse una nota de prensa, bajo la autoría de Valeria Díaz Álvarez, con el siguiente encabezado: “Policía presenta resultados de Operación por la paz”. Esta nota, fechada el 16 de julio de 2018, señala que la Policía realizaba estas operaciones “de acuerdo al mandato constitucional y en cumplimiento a lo orientado por el Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional, Comandante Daniel Ortega Saavedra”. En la misma nota se señala: “la Policía Nacional continuará trabajando día a día para garantizar la seguridad en el país, y recuperar la paz y tranquilidad a las familias nicaragüenses” (nota disponible en: <https://www.policia.gob.ni/?p=20022>). El informe de Amnistía Internacional, *Sembrando el terror* (2018), señala que la “Operación Limpieza” u “Operación por la paz” consistió en “destruir por la fuerza las barricadas y enfrentar a las personas manifestantes a través de grupos combinados de parapolicías armados y agentes de la Policía Nacional haciendo uso generalizado de armamento letal militar” (p.9).

la salud del cuerpo social. Así interpreto el ánimo de castigo y exterminio con que se ejecutaron las “Operaciones Limpieza” y la contravención de los protocolos de negociación ya iniciados para el desalojo de algunos tranques y de la UNAN, por mencionar dos ejemplos. Más que despejar la vía pública y restaurar el libre tránsito, se trató de limpiarla de elementos tóxicos, y de ser necesario, de llegar a su exterminio.<sup>16</sup>

Además de despojarla de derechos políticos, se puso en duda la humanidad misma de la población. Al poner a la población en un escenario en que es difícil discernir su carácter humano o no humano, se crea un ambiente que facilita el atropello de sus derechos humanos y vitales. Al analizar el período crítico de la historia colombiana conocido como La Violencia (1946-1964), María Victoria Uribe (2004) destaca la elaboración de bordes imprecisos entre identidades humanas y animales como escenarios detonadores para el ejercicio de la violencia. En nuestro caso, el Estado elaboró bordes imprecisos entre las identidades humanas y las no humanas que configuraron el umbral justificador y alentador de la violencia. Así fue como se montó el escenario propicio para hacer uso desproporcionado de la fuerza.

Como vimos antes, la delimitación de una frontera entre nosotros y otros es un paso importante para aplicar un tratamiento diferenciado en lo que atañe a la ciudadanía y los derechos humanos. Sumemos a ello una formulación discursiva del Otro como irracional, manipulado, ni siquiera humano. Estos procedimientos generaron escenarios que tuvieron consecuencias deshumanizantes y que ayudan a explicar las causas de la violencia y la vulneración de los derechos humanos. Al asignarle al Otro una identidad amenazante, menos que humana, se le degrada para facilitar así su ejecución. Agudelo (2017) argumenta que la construcción de un enemigo sirve para instaurar un miedo, justificar su destrucción y pasar por alto las demandas legítimas que ese enemigo plantea. Por su parte, degradación, destrucción y consumo simbólico es el orden que señala Uribe (2004) y que podemos aplicar también para nuestro caso.

En una fase posterior a la “Operación Limpieza”, el Estado imprimió el sello de la seguridad en el paisaje social, como puede verse en la siguiente cita: “la seguridad se ha venido restableciendo. Nos ha llevado a afirmar nuevamente que somos el País más Seguro de la Región” (Consejo de Comunicación y Ciudadanía, 26 de octubre, 2018). Este es un giro que conviene archivar para el estudio del discurso sandinista. “Trabajar por la paz, la tranquilidad y la seguridad del pueblo nicaragüense” es el imperativo del discurso en torno a la

---

16 En Sembrando el terror (2018): “Para Amnistía Internacional, este sería un indicador de que las autoridades estatales no solo habrían querido derribar las barricadas de forma violenta, sino además castigar (incluso con la muerte) a aquellas personas que participaron de las mismas” (p.22).

formación “policial militar” (Rodríguez Vargas, 2018). Este giro toma cuerpo en una teniente de la Policía que, al finalizar su formación en táctica “policial militar”, afirma: “en este curso hemos enriquecido nuestro conocimiento en tácticas que no sabíamos cómo ejecutarlas a la hora de un combate, hoy en día me siento preparada, con todo el orgullo de representar a las mujeres y con el mayor orgullo de representar a todos los héroes caídos” (Mora, 2018).

Aunque la introducción del concepto de seguridad en el discurso estatal simula un tratamiento de carácter civil a la crisis política, el ánimo mental y operativo continúa siendo de carácter militar. La cita de la teniente de la Policía lo muestra de manera patente. En el momento en que el Estado preparaba la “Operación Limpieza” se publicó una proclama que hablaba de enfrentar “una bien urdida y financiada guerra psicológica que aspira a destruir el poder del pueblo, tan duramente conquistado, usando mentiras, la intimidación y el odio” (Fonseca, 2018). Dado que se presentaba una “guerra”, era necesario “pasar a una contraofensiva” (Fonseca, 2018). También se imponía la lógica binaria de vencedores y perdedores: “Es importante recobrar el optimismo, y estar más claros que nunca que somos y seremos los vencedores. El desánimo y el pesimismo son actitudes que no caben en los revolucionarios” (Fonseca, 2018). Por su parte, las fuerzas de seguridad hablaban de contener un golpe de Estado. En el párrafo anterior, la teniente de la Policía habla de formarse para un combate. Es clara la persistencia de una lógica bélica, aun si esta se hace bajo el concepto de seguridad ciudadana.

La seguridad marca un nuevo elemento en la mitología (¿mitomanía?) nacional, imprimiendo un giro también en los conceptos ya presentes de “la paz y la reconciliación”, que entonces adquieren una clara dimensión de control, y que se refuerzan como piezas del aparato de captura que emplea el Estado. Prueba de ello es la iniciativa de una *Política de promoción de una cultura de paz y reconciliación* orientada a prevenir “todas las expresiones de desencuentro entre las Personas, las Familias y las Comunidades” (2018, p.3).

Siguiendo los planteamientos de Chantal Mouffe (2007), uno de los principales retos para la política democrática en Nicaragua es gestionar la distinción nosotros/otros de una manera que sea compatible con el reconocimiento del pluralismo. La negación del estatus de ciudadanía y de humanidad indica la sedimentación del imaginario autoritario. La oscilación entre obediencia/cooptación y transgresión/represión propicia, según Chauvi (2011), dos problemáticas importantes.

Primero, la política no logra configurarse como un campo social de luchas. Se debate entre la subordinación tutelada –“gracias a la compañera y al comandante”– y la sustitución de la política por la violencia en que, como vimos, la vida es degradada y posteriormente expulsada –a base de “plomo”. Aquí se discierne el impulso de acabar con el contendiente, de manera que el punto óptimo de la política sea no tener contendiente, algo imposible pero

deseable. Para Mouffe, en cambio, la categoría de adversario es crucial para la política democrática. Constituye una posibilidad de domesticar la dimensión antagonica de la política, que en nuestra historia se ha manifestado como violencia política y eliminación simbólica, cuando no física, del enemigo.

Segundo, la política tiende a pasar al plano de la representación teológica. En el modelo mando/obediencia, el dirigente detenta el poder prácticamente en representación de una voluntad divina –“Cumplirle al pueblo es cumplirle a Dios” –y el imaginario político es mesiánico: “Siempre más allá”. En el polo de la transgresión, el gobernante representa el mal que es necesario enterrar. En la crisis actual, esta representación ha tenido como ejemplo la realización de convocatorias a exorcismos, ayunos y cadenas de oración. Como puede verse, el producto intersubjetivo oscila entre la cultura de adoración y exaltación al buen gobernante y, su contrario: la satanización y execración del mal gobernante (Chauí, 2011).

Además de tener como causa inmediata el carácter represivo y desproporcionado de la reacción estatal a las protestas sociales, la crisis política responde a un imaginario autoritario. Al desafío de organizar y distribuir el poder, nuestra sociedad ha respondido, de manera recurrente, con modelos y prácticas autoritarias. Así se ha configurado una cultura que usa e institucionaliza la violencia como instrumento para potenciar una forma de gobierno y eliminar otras. A fin de justificar el uso de la violencia, el autoritarismo convierte a los adversarios en enemigos a los que es necesario eliminar. Estigmatiza la imagen del adversario con el propósito de negar o menospreciar su existencia, y no reconocerle como sujeto político. Las culturas autoritarias operan mediante una lógica en la que vencer al enemigo o a la oposición implica eliminarlo de la contienda política. Podemos llamar tradición autoritaria a la pervivencia de esta cultura en el tiempo. Esto ayuda a comprender la dificultad de construir una política democrática, así como también explica por qué la justicia social se ubica en el horizonte de la utopía.

Con todo el peso de las culturas autoritarias en nuestra historia, la ruptura con el lazo mando/obediencia que ocurre en las revueltas de abril indica que la tradición autoritaria que capitalizó el gobierno sandinista convivía con fuerzas sociales democratizadoras que se desarrollaban no en estructuras arborescentes y binarias, sino como tallos subterráneos que crecen no hacia arriba y en sentido vertical, sino hacia abajo y en sentido horizontal, como raíces. Vale la pena visitar con esta mirada investigaciones realizadas a inicios del presente siglo que subrayaban un talante democratizador en las culturas populares que bordeaba los linderos de la sedimentación autoritaria.

En sus análisis sobre la cultura política de la descentralización, Manuel Ortega Hegg (2001) notó la fuerza democrática de la cultura popular: interés por no reproducir patrones de violencia; reconocimiento del voto como única vía de acceso al poder; tolerancia y convivencia con la disidencia; importancia

de la participación ciudadana. Un interés de descentralización, relocalización y democratización de la distribución del poder, argumentó Ortega Hegg. En su conjunto, “fuertes bases y disposición” en la población para consolidar una cultura política democrática (p.184). Si bien los últimos diez años de historia política reforzaron la tradición autoritaria, las revueltas de abril mostraron el carácter rizomático de las fuerzas sociales. Como las hormigas: por mucho que se intente exterminarlas, no dejan de reconstituirse. La crisis política aún en marcha representa una traumática tensión afectiva con la tradición autoritaria. De este trauma germinará la política posabril, como un principio de esperanza sobre el cual hilar un futuro sin garantías.

## Referencias bibliográficas

- Acuña, V. H (1995). “Autoritarismo y democracia en Centroamérica: La larga duración, siglos XIX y XX”. En K.D. Tangermann (Comp.), *Ilusiones y dilemas: la democracia en Centroamérica*. San José: FLACSO.
- Agudelo, I. (2017). *Contramemorias: Discursos e imágenes sobre/desde La Contra. Nicaragua 1979-1989*. Managua: IHNCA-UCA.
- Amnistía Internacional (2017). *Peligro: derechos en venta: El proyecto del gran canal interoceánico de Nicaragua y la erosión de los derechos humanos en Nicaragua*. Londres: Autor.
- (2018). *Disparar a matar. Estrategias de represión de la protesta en Nicaragua*, 2018. Londres: Autor.
- (2018). *Sembrando el terror. De la letalidad a la persecución en Nicaragua*. Londres: Autor.
- Arendt, H. (2006). *Sobre la violencia*. Madrid: Santillana.
- Baltodano, I. & Martínez, M. (2018, 20 de abril). El mapa que muestra cómo se propagan las protestas en contra de las reformas al INSS. *La Prensa*. Recuperado de <https://www.laprensa.com.ni/2018/04/20/politica/2407266-nicaragua-represion-rosario-murillo>
- Bartra, R. (2012). “La batalla de las ideas y las emociones”. En M. Moraña & I. Sánchez, (Eds.) *El lenguaje de las emociones. Afecto y cultura en América Latina*. pp.17-38. Madrid: Iberoamericana.
- Berlant, L. (2008, december). Intuitionists: History and the affective event. En *American Literary History*, Vol. 20 (4), pp.845-860.
- Calveiro, P. (2012). “La memoria en tanto espacio ético y político”. En A. Hufschmid & V. Durán, (Eds.), *Topografías conflictivas: memorias, espacios y ciudades en disputa*. pp.21-30. Buenos Aires: Nueva Trilce.
- Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (2016). *Derechos Humanos en Nicaragua 2016*. Managua: Autor.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2018). *Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua*. Informe de país. OEA, 21 de junio de 2018.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2018). *Observaciones preliminares sobre la visita de trabajo para monitorear la situación de personas nicaragüenses que se vieron forzadas a huir a Costa Rica*. Comunicado de Prensa, 1 de noviembre de 2018.



- Consejo de Comunicación y Ciudadanía (2018, 19 de abril). Rosario en Multinoticias (19 de abril de 2018). *El 19 Digital*. Recuperado de <https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:76067-rosario-en-multinoticias-19-de-abril-del-2018>
- Consejo de Comunicación y Ciudadanía (2018, 19 de abril, edición especial de la noche). Rosario en Multinoticias (19 de abril de 2018). *El 19 Digital*. Recuperado de <https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:76084-rosario-en-multinoticias-edicion-especial-19-de-abril-del-2018>
- Consejo de Comunicación y Ciudadanía (2018, 20 de abril, edición especial de la noche). Rosario en Multinoticias edición especial (20 de abril de 2018). *El 19 Digital*. Recuperado de <https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:76122-rosario-en-multinoticias-edicion-especial-20-de-abril-del-2018>
- Consejo de Comunicación y Ciudadanía (2018, 21 de abril). Mensaje del Presidente-Comandante Daniel (21 de abril 2018). *El 19 Digital*. Recuperado de <https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:76141-mensaje-del-presidente-comandante-daniel-21-de-abril-del-2018>
- Consejo de Comunicación y Ciudadanía (2018, 22 de abril). Mensaje del Presidente-Comandante Daniel (22 de abril 2018). *El 19 Digital*. Recuperado de <https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:76189-mensaje-del-presidente-comandante-daniel-22-de-abril-del-2018>
- Consejo de Comunicación y Ciudadanía (2018, 26 de octubre). Compañera Rosario en Multinoticias (26 de octubre de 2018). *El 19 Digital*. Recuperado de <https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:83164-companera-rosario-murillo-en-multinoticias-26-de-octubre-del-2018>
- Cruz, J.M., Marengo, E., Rodríguez, M. & Zechmeister, E. (2018). *Cultura política de la democracia en Nicaragua y en las Américas, 2016/17, Un estudio comparado sobre democracia y gobernabilidad*. Vanderbilt University-USAID-LAPOP.
- Chau, M. (1999, septiembre-octubre). “Ética y violencia”, *Nueva Sociedad* 163. pp.30-43.
- Chau, M. (2011). *Between conformity and resistance: Essays on politics, culture and the State*. Palgrave: McMillan.
- Dada, C. (2018, 6 de julio). Los enmascarados son de los dos bandos. Entrevista a Jacinto Suárez. *El Faro*. Recuperado de [https://elfaro.net/es/201807/centroamerica/22202/%E2%80%9CLos-enmascarados-son-de-los-dos-bandos%E2%80%9D.htm?st-full\\_text=all&tpl=11](https://elfaro.net/es/201807/centroamerica/22202/%E2%80%9CLos-enmascarados-son-de-los-dos-bandos%E2%80%9D.htm?st-full_text=all&tpl=11)

- Deleuze, G. & Guattari, F. (2010). *Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia*. Valencia: Pre-Textos.
- Díaz Madriz, F. (2018, septiembre). Palabras del primer comisionado Francisco Javier Díaz Madriz, Director General de la Policía Nacional. *Visión Policial. Revista de la Policía Nacional, Año XV (149), Edición 39 aniversario*. pp.10-14.
- El 19 Digital* (2018, 10 de septiembre). Director General de la Policía: terroristas no pudieron ni podrán vencer los anhelos de paz del pueblo. Recuperado de <https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:81256-director-general-de-la-policia-nacional-terroristas-no-pudieron-ni-podran-vencer-los-anhelos-de-paz-del-pueblo>
- El 19 Digital* (2018, 20 de julio). Exigen justicia para las víctimas del terrorismo golpista (Campaña justicia para las víctimas del terrorismo golpista). Recuperado de <https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:79284-exigen-justicia-para-las-victimas-del-terrorismo-golpista>
- Equipo *Envío* (2018, mayo). Nicaragua, Abril 2018. La insurrección de la conciencia. *Envío*, (434). Recuperado de <http://www.envio.org.ni/articulo/5479>
- Equipo *Envío* (2008, septiembre). Nicaragua ¿Hasta cuándo? *Envío* (318) Recuperado de <http://www.envio.org.ni/articulo/3862>
- Fonseca Terán, C. (2018). A todos los cuadros revolucionarios. A cada uno de los tayacanes. *El 19 Digital*.
- Gómez, J. P. (2015). *Autoridad/Cuerpo/Nación. Batallas culturales en Nicaragua (1930-1943)*. Managua: IHNCA-UCA.
- Kinloch, F. (2015). *El imaginario del canal y la nación cosmopolita, Nicaragua, Siglo XIX*. Managua: IHNCA-UCA.
- López, J. (2017, 10 de octubre). Los medios de la familia presidencial nicaragüense. *Onda Local*. Recuperado de <https://ondalocal.com.ni/especiales/305-los-medios-de-la-familia-presidencial-nicaraguense/>
- Manifiesto Urbano (productor) (2015). Un día lleno de amor (versión bomba) [archivo de video]. Disponible en [https://www.youtube.com/watch?v=V\\_cmIbXjKys](https://www.youtube.com/watch?v=V_cmIbXjKys)
- Miranda Aburto, W. (2018, 26 de mayo). ¡Disparaban con precisión: a matar! *Confidencial*. Recuperado de: <https://confidencial.com.ni/42701-2disparaban-con-precision-a-matar/>
- Miranda Aburto, W. (2018, 5 de noviembre). CIDH: “Hay 400 presos políticos”. *Confidencial*. Recuperado de <https://confidencial.com.ni/cidh-hay-400-presos-politicos/>
- Mora, D. (2018). *Más de 200 oficiales capacitados para brindar seguridad*. Recuperado de <https://www.policia.gob.ni/?p=25017>
- Moraña, M. (2012). “Postscriptum. El afecto en la caja de herramientas”. En

- M. Moraña & I. Sánchez (Eds.), *El lenguaje de las emociones. Afecto y cultura en América Latina*. pp.313-338. Madrid: Iberoamericana.
- Mouffe, C. (2007). *En torno a lo político*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Munguía Argeñal, I. (2018, 24 de abril). Bloquean wifi en los parques de Nicaragua. *La Prensa*. Recuperado de <https://www.laprensa.com.ni/2018/04/24/nacionales/2409159-bloquean-wifi-en-los-parques>
- Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2018). *Violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua (18 de abril-18 de agosto)*. Ginebra: Autor.
- Ortega Hegg, M. (2001). *Cultura Política, Gobierno Local y Descentralización, Nicaragua*. San Salvador: FLACSO.
- Palacios, A. (2012, segundo semestre). “Políticas de miedo y ciudadanías abyectas: la memoria de los años ochenta en Nicaragua”. *Revista de Historia*, No 28. Managua: IHNCA-UCA, pp.59-64.
- Política de promoción de una cultura de paz y reconciliación (2018). Recuperado de <https://www.el19digital.com/app/webroot/tinymce/source/2018/00Noviembre/Del05al11Nov/Viernes09Nov/propuesta%20politica.pdf>
- Rodríguez Vargas, T. (2018). *Clausura séptimo concentrado táctico policial militar*. Recuperado de <https://www.policia.gob.ni/?p=24948>
- Salazar, M. (2018b, 10 de junio). Masaya resiste al pie de barricadas. *Confidencial*. Recuperado de <https://confidencial.com.ni/masaya-resiste-al-pie-de-barricadas/>
- Salazar, M. (2018a, 5 de junio). Masaya otro día más herida, continúa en resistencia. *Confidencial*. Recuperado de <https://confidencial.com.ni/masaya-otro-dia-mas-herida-continua-en-resistencia/>
- Salinas Maldonado, C. (2018b, 30 de septiembre). La mujer del comandante. *Confidencial*. Recuperado de <https://confidencial.com.ni/rosario-murillo-la-mujer-del-comandante/>
- Salinas Maldonado, C. (2018a, 20 de septiembre). Antes y después del 18 de abril en Nicaragua, los primeros 150 días: crónica de la insurrección pacífica. *Confidencial*. Recuperado de <https://confidencial.com.ni/antes-y-despues-del-18-de-abril-en-nicaragua/>
- Sánchez, M. (2017) *Extractivismo y lucha campesina en Rancho Grande. La expresión de un ecologismo político en Nicaragua*. Managua: Centro de Análisis Sociocultural (CASC-UCA).
- Sánchez, M., Castro, D. & Rodríguez, R. (2015). *Ciudadanía y Violencia. Una aproximación a sus múltiples expresiones en Nicaragua*. Managua: Centro de Análisis Sociocultural (CASC-UCA).
- Tórrez García, C. (2018, 19 de junio). Masaya busca crear su propio gobierno.

*La Prensa*. Recuperado de <https://www.laprensa.com.ni/2018/06/19/nacionales/2437509-masaya-exige-renuncia-de-autoridades-y-nuevas-elecciones>

- Uribe Alarcón, V. (2004). *Antropología de la inhumanidad. Un ensayo interpretativo sobre el terror en Colombia*. Bogotá: Grupo Editorial Norma.
- Vannini, M. (2017a). “Las conflictivas memorias de la revolución sandinista”, *Megafón, la batalla de las ideas*. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), No. 16/5.
- Vannini, M. (2017b). *Espacios públicos: Managua, 1979-2016. Resignificaciones, Reescrituras, Borraduras* (tesis inédita de maestría). Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, Universidad Centroamericana (IHNCA-UCA), Managua, Nicaragua.
- Wodak, R. (2003). “El discurso, una aproximación histórica”. En R. Wodak & M. Meyer (Eds.) *Métodos de análisis crítico del discurso*. pp.63-94. Buenos Aires: Gedisa Editorial.

# **IV. “El problema es la política, no la economía”: una mirada crítica a la economía nicaragüense a propósito de la crisis de abril de 2018**

*Jessica Pérez Reynosa<sup>1</sup>*

## **1. Introducción**

La economía nicaragüense ha sufrido serios impactos desde que se inició la crisis sociopolítica en abril de 2018. Según datos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES, 2018), el impacto de la actual crisis sociopolítica en la economía ha significado la pérdida de empleo para 127,000 personas, y 290,000 personas han sido suspendidas de sus labores; se estima que estas cifras representan un aumento de la pobreza general de hasta 38.9% (29.6%, última estimación oficial, 2014) mismo que se podría agudizar con el tiempo. Actualmente, el impacto de la crisis se evidencia en una reducción del turismo (-35%), de la inversión extranjera directa (-53%), depósitos (-25%), préstamos externos (-30%), reservas internacionales (-25%) y consumo privado (-5%) (FUNIDES, 2019). Por tanto, los analistas de la situación afirman que en la medida en que no se dé respuesta a la demanda política de justicia y democratización, y que, por el contrario, continúen los arrestos y los juicios arbitrarios contra quienes participaron en las protestas y se mantenga un ambiente social militarizado de inseguridad, intimidación e incertidumbre, el deterioro de la economía irá en aumento.

---

1 Doctora en Economía por la Universitat Rovira i Virgili de España. Docente e investigadora de la Universidad Centroamericana (UCA) de Nicaragua, directora del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Sociales de la UCA. Mis agradecimientos al profesor Manuel Ortega Hegg por su colaboración en la revisión y discusión de este texto; y a Gerald Marengo por su apoyo en la recopilación de los datos utilizados para elaborar los recursos gráficos del presente capítulo.

Así, varios economistas del país coinciden en que las raíces del problema económico actual no son de índole económica, sino política; por tanto, afirman que ninguna política que se emprenda desde la economía podrá resolver la situación (Avendaño, 2018; Meda, 2018). En este capítulo argumentamos que este planteamiento es parcialmente cierto y que se refiere al corto plazo. Nuestra posición es que el modelo económico nicaragüense amerita ser repensado a fondo y de manera estructural, no sólo coyuntural. Los análisis que revisan la coyuntura actual de la economía suelen centrarse sólo en un enfoque del impacto de la crisis sociopolítica sobre el comportamiento económico, y sus datos muestran que tienen razón; pero esos análisis no reconocen que el agotamiento del modelo económico actual es uno de los múltiples factores que explican la crisis, y que las rupturas que actualmente ocurren en lo político y lo social también deben darse en lo económico, si se espera enmendar el rumbo del país de forma duradera.

De hecho, análisis previos a la crisis actual concluyen que en realidad el modelo económico del país está agotado. Trabajos como los de De Franco (2011), Caldenty (2015) y Murillo (2016) han puesto en evidencia la necesidad de cambiar un modelo económico que hasta ahora se ha basado en la (sobre)explotación de los recursos naturales y humanos a favor de las élites económicas y en detrimento del bienestar social.

Desde la economía, se espera que el gobierno dé una pronta solución política para evitar años de retroceso económico. Y eso es razonable e irrefutable. No obstante, creemos que en el análisis económico coyuntural se ha omitido la influencia de la economía en el surgimiento de crisis políticas y sociales. Y pensamos que ese tema debe ocupar también un lugar en la agenda. Por ello el objetivo de este capítulo es discutir el papel que ha desempeñado la economía en la crisis sociopolítica y de derechos humanos en Nicaragua a partir de los sucesos de abril de 2018. Aclaramos que no es nuestro propósito plantear una respuesta económica a un problema estructural que tiene su origen en una multiplicidad de factores, entre ellos, la economía; pero sí esperamos generar espacios de discusión sobre el tema. Asimismo, resaltamos la necesidad de poner atención a la economía con una visión a largo plazo, y no sólo como una respuesta inmediata a la crisis actual.

Este capítulo se organiza de la siguiente manera. Primero se describe el contexto sociopolítico y económico previo a la crisis de abril. Luego se discute la definición de economía y los sistemas económicos que responden a las tres cuestiones fundamentales de organización económica: *qué producir, cómo producir y para quién producir*. A partir de lo anterior se hace una revisión crítica de cómo ha respondido la economía de Nicaragua a esas preguntas. Finalmente, se presentan las conclusiones, mismas que ofrecen un espacio de reflexión para pensar nuevas formas de hacer economía ante la nueva Nicaragua de abril de 2018.

## 2. El preámbulo político y económico de la crisis de abril de 2018

En enero de 2007, luego de 17 años de gobiernos neoliberales, Daniel Ortega regresa al poder. No obstante, desde 1990, cuando hace entrega de la presidencia a Violeta Barrios de Chamorro, dedica todos sus esfuerzos a “gobernar desde abajo”, es decir, a crear inestabilidad y ofrecerse luego como una alternativa de orden en las siguientes elecciones. Sin embargo, el pasado estaba aún muy cercano en la memoria de los nicaragüenses. El miedo a regresar a un escenario como el de la guerra de los años 80 y a lo que algunos economistas denominaron como la “década perdida” evitó que en las elecciones de 1996 y de 2001 Daniel Ortega regresara nuevamente a la presidencia de la república. Mediante el denominado “pacto Alemán-Ortega” vuelve a ser presidente en el año 2007. A partir de entonces busca su perpetuación en el poder, aprovechando que ese pacto implicó la distribución de puestos estatales entre los dos partidos pactantes<sup>2</sup> y que eso le permitió posteriormente maniobrar para conseguir la reforma a la ley electoral en el año 2000.<sup>3</sup>

Una vez de regreso en el poder, Daniel Ortega se asegura de obtener la mayoría de los votos en la Asamblea Nacional para reformar la Constitución Política de Nicaragua y eliminar la prohibición de reelección continua, y así presentarse de nuevo como candidato en 2011 y 2016, llevando en esta última contienda a su esposa Rosario Murillo como su compañera de fórmula. Durante todo ese periodo (2007-2017), Ortega pone en práctica las lecciones aprendidas en su papel de gobernante en los años 80; por tanto, regresa con un discurso de unidad y reconciliación nacional. A ello se debe que, por un lado, busca la reconciliación con la Iglesia católica, la alianza con el sector privado y se integra a la economía de mercado abandonando el modelo de economía mixta. Por otro lado, se ocupa de fragmentar a la oposición a base de pactar con su principal líder, y procura concentrar todo el poder para situarse por encima del Estado de derecho. El contexto económico favorable de relativa estabilidad macroeconómica y continuo crecimiento le permite lograr todo eso.<sup>4</sup>

Este contexto político previo a la crisis da indicios de que se gesta y se desarrolla un gobierno autocrático y corporativista, en el que actualmente

---

2 Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

3 Jarquín et al. (2016) en el capítulo 3 de su estudio, analizan en detalle todos los procesos que condujeron a poner fin al Estado de derecho mediante reformas constitucionales y legislativas. La reforma establecía un mínimo del 35% de los votos para ganar las elecciones, siempre y cuando el segundo candidato le siguiera con más del 5% de los votos.

4 No se pretende exponer aquí una descripción detallada de la coyuntura política previa a la crisis, sino marcar los hechos relevantes que según la autora ayudan a plantear la tesis del presente capítulo.



nos encontramos;<sup>5</sup> esta pérdida acelerada de la institucionalidad ocurre por efecto de un factor de suma importancia que operó a favor de este proyecto político concentrador del gobierno: la economía. En un contexto favorable de los precios de las materias primas en el mercado internacional y de un apoyo generoso de la cooperación venezolana, el gobierno de Ortega se centró en diseñar políticas sociales y económicas en beneficio de los sectores marginados (Spalding, 2017) e históricamente excluidos por los gobiernos liberales. Por tanto, si bien el país sigue siendo hasta hoy el segundo país más pobre de Latinoamérica, el comportamiento positivo de la tasa de crecimiento económico (superior a la media de Centroamérica e incluso de América Latina) impidió que estallara el conflicto latente emanado de la concentración de poder, permitió continuar el incipiente desarrollo del país, y mantener el consenso alcanzado con la empresa privada como principal aliada para la estabilidad económica, y ahora también con la presencia de élites empresariales sandinistas.<sup>6</sup> De igual forma, la mejora relativa de algunos indicadores sociales propició la estabilidad política.

Según los principales indicadores macroeconómicos publicados por el Banco Central de Nicaragua (BCN, 2006-2017), la economía en el periodo 2007-2017 creció en promedio un 4.2%,<sup>7</sup> mantuvo una inflación estable promedio de 7.41%, buen manejo de las reservas internacionales (cubriendo, en promedio, 2.4 veces el valor del PIB en reservas), aumento de las inversiones (incremento interanual promedio de 6.51%), aumento de los afiliados al INSS (7.34% de incremento promedio anual) y estabilidad del sistema financiero nacional (16.73% de crecimiento promedio interanual).<sup>8</sup> Sin embargo, como veremos más adelante, la base de ese crecimiento no se considera sostenible a largo plazo, puesto que en gran medida se basa en el flujo de ingresos de la cooperación venezolana, y presenta una alta dependencia de la inversión extranjera directa (IED) y de los flujos de remesas.

Ante ese panorama, llega abril de 2018, cuando se produce el incendio de la Reserva Indio-Maíz y la reforma a la seguridad social. Esta última implicaba el aumento de las cotizaciones y la disminución en el monto de las pensiones, acatando las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para hacer frente a la quiebra del INSS (FMI, 2018; Cruz, 2018). Esto

---

5 Carlos Fernando Chamorro, en un artículo de Confidencial publicado el 02 de enero de 2018, presenta una discusión sobre esta definición del nuevo régimen de Ortega. “El corporativismo autoritario es un régimen político no democrático, en el que el Estado, encarnado en el líder máximo a la cabeza de su partido hegemónico, confiere a las asociaciones de grandes empresarios el monopolio de la representación de sus intereses y del resto de la sociedad”. <https://confidencial.com.ni/modelo-Cosep-regimen-ortega/>

6 Como señala Spalding (2017), “su participación [de las élites sandinistas] en la arena empresarial fortalecía su compromiso con la estabilidad macroeconómica, los límites impositivos y la integración de los mercados, alineaban sus intereses con los de las otras élites económicas” (p.166).

7 Únicamente afectado en 2009 por la crisis financiera (-3.3%) y alcanzando las mayores tasas de crecimiento en 2011 y 2012, con 6.3% y 6.5% respectivamente.

8 Datos extraídos de la página web del Banco Central de Nicaragua.

provocó protestas iniciadas por jóvenes universitarios, que demandaban una respuesta inmediata del gobierno para asegurar la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de las personas jubiladas (Centro Humboldt, 2018). Ante las protestas, el gobierno respondió con la misma estrategia de represión desproporcionada que mostró durante sus once años de administración: el uso excesivo de la fuerza policial (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, 2018a).

Desde abril de 2018, la CIDH registró “al menos 212 personas muertas hasta el 19 de junio, 1,337 personas heridas y 507 personas privadas de la libertad registradas hasta el 6 de junio” (CIDH, 2018b). A octubre 2019, se contabilizan 328 personas asesinadas, más de 130 permanecen privadas de libertad, más de 400 profesionales de salud despedidos, 144 estudiantes expulsados como represalia, más de 90 periodistas y trabajadores de medios independientes exiliados y más de 88,000 nicaragüenses huyeron a países vecinos a resultas de la represión (CIDH, 2019). En su discurso, el gobierno cataloga las protestas como un “golpe de Estado” (Anónimo, 2018), mientras que para un amplio sector de la población las protestas se originaron como una resistencia cívica ante las medidas del INSS y, posteriormente, se ampliaron a la demanda de justicia y democratización ante el uso desproporcionado de la fuerza y la clara violación a los derechos humanos.<sup>9</sup> En este contexto, resulta imperativo evaluar y entender que la economía influye en las crisis y las agudiza.

### 3. Definiendo la economía

Para comprender la función que cumple la economía en un sistema social es necesario partir de su definición, ya que esta ha sido objeto de crítica, entre otras cosas, por su carácter instrumentalista (Borgucci & Castellano, 2016). Pese a su índole social, la economía ha intentado aproximarse a la exactitud de las ciencias naturales. Por definición, la economía es una ciencia social que estudia el modo en que las sociedades utilizan los recursos escasos para producir mercancías y distribuirlas entre los individuos (Samuelson & Nordhaus, 1996). Considerando que los recursos son limitados y las necesidades ilimitadas, la economía estudia los mecanismos que se utilizan para responder a los problemas de escasez y eficiencia. Por tanto, una sociedad debe resolver tres cuestiones fundamentales de organización económica: *qué producir, cómo producir y para quiénes producir*.

Según la teoría económica, existe una variedad de formas de organizar la economía para responder esas tres preguntas, lo cual da origen a los sistemas económicos conocidos; tales sistemas se basan en la opción escogida ante la disyuntiva de si la economía debe basarse principalmente

---

9 Si bien esto sobrepasa el propósito de este trabajo, es necesario mencionarlo para poner en contexto el surgimiento de esta crisis, y no pretendemos extendernos al respecto. Los informes de la CIDH, de Amnistía Internacional y de otros organismos registran las graves violaciones a los derechos humanos.

en el mercado privado (economía de mercado) o en las órdenes del Estado (economía estatizada).<sup>10</sup> Por tanto, resulta fundamental determinar la relación entre el mercado, el Estado y la sociedad.

En el *sistema económico de mercado* la economía se basa principalmente en el mercado privado; es decir, los individuos y las empresas privadas llegan a acuerdos voluntarios sobre la producción y el consumo por medio de dinero, a precios determinados en libres mercados y en función de la oferta y la demanda. En este sistema se enmarca el *capitalismo* a través del mecanismo de la competencia, donde cada individuo busca su mejoramiento propio y tiene que adaptarse a los precios que ofrecen sus competidores. El mercado se convierte en un mecanismo de distribución de recursos según lo deseado por la sociedad. Por tanto, un sistema de precios, de mercados, de pérdidas y ganancias y de incentivos determina el qué, el cómo y el para quiénes.

En el *sistema de economía estatizada* las decisiones emanan de la burocracia estatal; es decir, el gobierno determina qué bienes se producen, cómo se producen y para quiénes se producen. Los individuos se motivan por medio de la coerción y las sanciones que establece la ley, las transacciones pueden utilizar o no dinero, y los intercambios pueden realizarse según los precios establecidos. En este sistema el Estado responde a las principales cuestiones económicas a través de la propiedad de los medios de producción (recursos) y de su poder para imponer sus decisiones.

El sistema de mercado y el sistema estatizado son dos categorías extremas. En la actualidad, la mayoría de las economías funcionan como sistemas mixtos; es decir, combinan en mayor o menor medida elementos de las economías de mercado con elementos propios de las economías estatizadas. Así pues, en un término intermedio nos encontramos con las *economías mixtas de mercado*, donde se maximiza la economía de mercado y del sector público mediante la regulación y la política económica. Esto con el objetivo de solucionar las fallas tanto del mercado<sup>11</sup> como del Estado<sup>12</sup> (Moré Olivares, 2014).

En la elección del sistema de mercado predomina lo que se conoce como economía normativa,<sup>13</sup> es decir, lo que “debería ser”; por tanto, las decisiones tienen un claro componente político y moral. En este sentido no es posible obviar que el sistema político y el sistema económico están vinculados

---

10 Para la discusión de los sistemas económicos se han tomado como referencia los estudios de Samuelson & Nordhaus (1996); Dornbusch, Fischer & Startz (2004) y Moré Olivares (2004).

11 Por ejemplo: la existencia de monopolios; las externalidades negativas por el funcionamiento de las empresas —como la contaminación, que afecta la salud y el medio ambiente—; la deficiente distribución de la renta, etc.

12 Entre ellos: la dificultad para controlar los monopolios naturales; el desconocimiento, por falta de competencia, de los costos reales de producción; las externalidades políticas resultantes de las actividades de presión ante grupos particulares, etc.

13 La economía normativa, como señalan Samuelson y Nordhaus (1996) se refiere a preceptos éticos y juicios de valor sobre el qué, el cómo y el para quién de la economía. Mientras que la economía positiva describe los hechos y su conducta.

y que ambos forman parte de un sistema social. En particular, cada país debe elegir el *modelo económico* que representa el funcionamiento específico del sistema económico, respondiendo a un contexto histórico y conceptual. Mientras que los *modelos de desarrollo* especifican la organización política, económica, social y cultural de una sociedad.

#### 4. El modelo económico de Nicaragua

La actual crisis sociopolítica demanda cambios no sólo en la forma de hacer política, sino también en el modo de hacer economía. Antes de la crisis de abril, el país recibía las felicitaciones de la comunidad internacional por el buen desempeño de la economía, puesto que se mantenía con un ritmo de crecimiento del 5%. En declaraciones a un medio oficialista en 2013, el entonces presidente del Banco Central, Alberto Guevara, afirmó que en una reunión de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) les felicitaban diciendo que “el modelo que está desarrollando Nicaragua es el modelo soñado para América Latina”. Es por ello que el gobierno, a raíz de la crisis, argumenta que las protestas destruyeron el “paraíso” que había construido; por lo que considera que el problema no es el modelo de desarrollo, sino las condiciones excepcionales en las que se encuentra el país: la coyuntura.

A siete meses de haberse iniciado la crisis, la economía continúa en desaceleración, es decir, hay una reducción en el ritmo de crecimiento. Esto como resultado del desempleo, la disminución de la inversión extranjera y nacional, la disminución del consumo y la reducción en la recaudación de impuestos. En contraste con lo que afirma el gobierno, esta coyuntura sí pone en evidencia los problemas estructurales de la economía. El modelo de desarrollo no es viable ni sostenible a largo plazo, entre otros factores por su alta dependencia de la cooperación y de las relaciones externas; ello lo hace muy vulnerable a presiones foráneas, como las que se están impulsando desde Estados Unidos para restringir los préstamos de instituciones financieras internacionales con el fin de obligar al gobierno a restituir la democracia y a respetar el Estado de derecho.<sup>14</sup>

La fragilidad de la economía tiene su origen en cómo se da respuesta a las tres grandes preguntas de organización económica ya discutidas: *qué producir, cómo producir, para quiénes producir*. En las últimas décadas en Nicaragua ha prevalecido el modelo de economía de mercado, y cada gobierno lo ha adaptado a la coyuntura del país y del contexto internacional mediante el establecimiento de planes de desarrollo. En la Figura 1 se destacan los principales elementos de los modelos de desarrollo adoptados por Nicaragua

---

14 La “Nicaraguan Investment Conditionality Act” (Nica Act) fue presentada en 2016 por la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen y por el congresista demócrata Albio Sires. La ley pretende que Estados Unidos vote en contra de los préstamos que el gobierno de Nicaragua solicite ante entidades financieras multilaterales. Esta ley sería suspendida sólo si el gobierno de Ortega llega a promover elecciones “libres, justas y transparentes”.

desde 1950 hasta la actualidad, lo cual permitirá entender el condicionamiento del modelo actual y cómo la economía ha derivado en crisis sociales.<sup>15</sup>

En el periodo 1950-1970 se desarrolla en el país el llamado modelo agroexportador, acompañado por una incipiente industrialización y sustitución de importaciones (ISI), lo que da por resultado una importante efectividad en términos económicos. En este periodo Nicaragua se conoce como el “granero de Centroamérica”, impulsado mayormente por el desarrollo de la economía algodonera que, como veremos más adelante, tuvo repercusiones sociales a largo plazo. Sin embargo, este modelo generó también mucha desigualdad e inequidad social.

*Figura 1. Modelos de desarrollo económico de Nicaragua (1950-2018).*



Fuente: Elaboración propia a partir de Arana (2010).

En la década de los 80 se pone en práctica el modelo de economía mixta con énfasis en la seguridad alimentaria. Este periodo se caracteriza por un proceso de reforma agraria, política fiscal expansiva, política monetaria acomodaticia, nacionalización de la banca y del comercio exterior, además de una guerra civil desde 1983 hasta 1989. Nicaragua sufre un bloqueo económico por parte de Estados Unidos, lo que la lleva a ocupar el cuarto lugar mundial en materia de hiperinflación en el siglo XX. Para finales de 1989 la deuda externa de Nicaragua ascendía a US\$ 9,597 millones, las exportaciones FOB (“free on board”)<sup>16</sup> habían caído a US\$ 310 millones, y el producto interno bruto (PIB) per cápita había disminuido a US\$ 252. En estos diez años ocurre

<sup>15</sup> Se retoma la presentación de la conferencia de Mario Arana (2010) para hacer la revisión de dichos modelos, complementada con los aportes de otros autores, como Oscar René Vargas.

<sup>16</sup> La valoración de las exportaciones de mercancías a precios FOB incluye el transporte de los bienes a la frontera aduanera, gravámenes a las exportaciones y los gastos de carga de las mercaderías del medio de transporte utilizado.

un retroceso económico equivalente a 50 años, por lo que Nicaragua vino a ser el segundo país más pobre de América (Biblioteca Enrique Bolaños, s.f.).<sup>17</sup>

En el periodo 1990-1996, luego del proceso de guerra civil que deja al país destruido, sin divisas, sin capacidad exportadora y con una enorme deuda externa, se establece un modelo de desarrollo con políticas ortodoxas de ajuste estructural y que fue avalado por el FMI y el Banco Mundial (BM), por lo que el país se orientó hacia una economía de mercado. En este contexto se lleva a cabo la apertura y liberalización de la economía, y se eliminan los monopolios estatales de importación y exportación. A esto se suma una contracción fiscal y una reducción del gasto social, lo que da por resultado más rezago social. El crecimiento económico permaneció estancado hasta la primera mitad de la década de los 90; sólo se logró reducir la hiperinflación a partir de abril de 1991.

En el periodo 1997-2001 se continúa con el modelo de economía de mercado y ajuste estructural, pero con un enfoque de desarrollo rural y aumento del gasto social. En 1996, el FMI y el BM lanzan la iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés), por lo que Nicaragua se inserta en la iniciativa, cumpliendo con un plan estricto de saneamiento de sus finanzas públicas y aprobando leyes que acatan las consideraciones del FMI (Biblioteca Enrique Bolaños, s.f.). La política económica se subordina a la ejecución de los programas financieros; esto supuso una alta dependencia respecto de la comunidad internacional, donde los países desarrollados impusieron programas acordes con el FMI para que los países pobres se beneficiasen con la condonación de deuda externa, y con la cooperación y recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), del Banco Mundial (BM) y de otros (Vargas, 2012).

En el periodo 2002-2007 se establece un plan nacional de desarrollo humano con un modelo de conglomerados y competitividad por sectores. En abril de 2006 entra en vigencia plena el Tratado de Libre Comercio entre EEUU, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés), lo que permite a estos países el libre comercio y el acceso a mercados. Comienza un periodo de estabilidad macroeconómica y una mejora en el clima de inversiones. Como resultado de los ajustes, a partir de 2007 se logró reducir la deuda externa a un 60%, lo que le permitió a Nicaragua reinsertarse en la comunidad de países económicamente viables y reducir significativamente el riesgo país, de tal forma que se reactivaron fuentes de financiamiento externo que permitieron incrementar los niveles de inversión pública y la creación de empleos productivos.

En el periodo de 2007-2017 Daniel Ortega asume al modelo de economía de mercado, se establece un nuevo plan nacional de desarrollo humano y se cambia el énfasis de conglomerados productivos a apoyo dirigido a las empresas micro, pequeñas y medianas (mipymes). Se continúa con la atracción de grandes flujos de inversión en proyectos de infraestructura,

---

17 En la década de los 80 el nivel de deuda representaba el 940% del PIB.

principalmente energía; se incrementa el gasto social; se retoma el énfasis en seguridad alimentaria y protección ambiental y se desarrollan programas de protección social a los grupos más vulnerables. Se establece un nuevo modelo denominado “Modelo de Desarrollo del Poder Ciudadano”, donde el gobierno “visualiza a las ciudadanas y a los ciudadanos como impulsores de cambio y generadores de desarrollo” (Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, GRUN, 2012). Asimismo, se profundizó la apertura comercial con la adhesión a la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA), y el Tratado de Libre Comercio (TLC) con China-Taiwán.

Los modelos de desarrollo anteriormente descritos no son casualidad. En general, la adopción de un modelo económico responde a la “necesidad” de los países de insertarse en una economía global. Por tanto, el agotamiento del modelo no sólo es un caso particular de Nicaragua, sino de toda la región y del mundo. La globalización ha implicado la propagación mundial de los modos capitalistas de producción y de consumo. La interdependencia económica entre los países obliga a asumir modelos de desarrollo que encajen con el sistema de mercado vigente. Por tal motivo, las crisis económicas, políticas, sociales y ambientales se propagan con facilidad en un mundo cada vez más interconectado. Los países más desarrollados son los que imponen las reglas del juego en cuanto a las tres preguntas básicas de la economía, las cuales deben cumplir los países que tienen menor capacidad productiva para poder insertarse en una economía de mercado cada día más competitiva en términos de demanda de tecnología y conocimiento.

¿Qué produce la economía de Nicaragua?

La estructura productiva del país no ha cambiado en casi 60 años; se basa sobre todo en el sector primario de la economía (extracción y producción de materia prima) sin mayor valor agregado. En un estudio sobre la diversificación de la matriz productiva promovido por la Fundación Friedrich Ebert se destaca que la economía de Nicaragua presenta déficits estructurales tanto en su modelo de desarrollo como en su matriz productiva. Asimismo, se propone la urgencia de transitar de un enfoque tradicional de economía de mercado a otro de transformación social y ecológica (Murillo, 2016).

La matriz productiva de Nicaragua está poco diversificada y responde más a las necesidades del mercado internacional que a las necesidades del propio país. El modelo de producción es extractivista con desventajas en términos de intercambio, puesto que produce con un bajo valor agregado, pero demanda bienes y servicios con alto valor agregado. De ahí que siempre presente un déficit en la balanza comercial (las importaciones son mayores que las exportaciones). La producción es tradicionalmente agrícola basada en la explotación de los recursos naturales. Por tanto, el contexto internacional es determinante para la economía, ya que su crecimiento depende del



comportamiento de los precios internacionales.<sup>18</sup>

Al ser una economía eminentemente agrícola, los conflictos socioambientales son inherentes. En el contexto sociopolítico actual se ha establecido una continua comparación con la dictadura de Anastasio Somoza García. En esa época el desarrollo de la economía algodonera fue una fuente de crecimiento económico y marcó varias décadas; ese auge algodonero sobrepasó al del café, que era poco competitivo en la esfera internacional. No obstante, su expansión empujó a los pequeños productores hacia zonas menos desarrolladas en infraestructura y con menor fertilidad; más importante aún, ocasionó que los pobladores de la zona y del hábitat circundante sufrieran contaminación por insecticidas, lo que tuvo repercusiones a largo plazo. El daño ecológico que produjo el cultivo redujo de manera permanente la capacidad productiva del país (De Franco, 2011).

En un contexto más actual, Mario Sánchez (2017) analiza la lucha campesina y de los grupos sociales en contra del extractivismo para el caso particular de Rancho Grande en Matagalpa. En este estudio se destaca que Nicaragua se ha convertido en uno de los mayores productores de oro en Centroamérica, con un 35.4% de aporte de la producción regional. En los últimos diez años, el número de concesiones mineras se incrementó en un 310.84%, pasando de 83 en 2006 a 258 en 2017, y abarcando una extensión de 10,027.87 km, que representan el 8.43% del territorio nacional. La actividad minera se enmarca en un modelo de economía de enclave, es decir, es la explotación de recursos naturales por capitales extranjeros con fuertes incentivos del gobierno (subsidios, exoneraciones) para su posterior exportación, lo cual genera poco o nulo desarrollo en los territorios.

La industria minera es una de las actividades económicas que actualmente representa un conflicto social importante; esto emana de la pregunta *qué producir*. Si bien la minería es una actividad histórica, el gobierno de Daniel Ortega ha priorizado la promoción del sector minero como un elemento de contribución al desarrollo del país. Cuando los movimientos sociales emprenden la defensa de los derechos socioambientales, económicos y laborales, la reacción del gobierno es autoritaria y represiva, lo cual genera una creciente tensión entre ambos actores (Sánchez, 2017). Este caso en particular demuestra que la economía ha contribuido de forma sistemática a generar conflictos sociales derivados de las políticas económicas y de los modelos de desarrollo.

---

18 Actualmente son 17 los principales productos de exportación: café, frijol, carne de bovino, azúcar, oro en bruto, langosta, maní, carne, queso, camarón, banano, harina de trigo, tabaco, galletas, bebidas y rones; los cuales son generadores de divisas, pero presentan bajos niveles de productividad y existe poca diversificación de los mercados de exportación.

## ¿Cómo produce Nicaragua?

Para responder a esta pregunta hay que averiguar quién produce qué, con qué recursos y con cuáles técnicas de producción. La globalización demanda modificar los sistemas de producción de extensivos a intensivos, es decir, utilizar más intensivamente tanto la tecnología como los conocimientos a fin de mejorar la productividad (Murillo, 2016). Según Weil (2006) el crecimiento de la productividad implica un crecimiento de la producción. Los componentes fundamentales de la productividad son la tecnología (conocimientos sobre la forma de producir) y la eficiencia (cómo se utilizan la tecnología y los factores de producción para producir). En términos de eficiencia son determinantes la organización de la economía, los incentivos disponibles para los individuos y las empresas, y asimismo, las instituciones del país. En la tecnología resulta relevante la investigación y el desarrollo, así como la difusión de la información y de los avances científicos.

La conducta de los gobiernos influye en la acumulación de factores, en la tecnología y, principalmente, en la eficiencia. El financiamiento para la educación, la investigación y el desarrollo conlleva algunas formas para acumular factores. Por su parte, el establecimiento de las reglas del juego entre las empresas y los trabajadores influye en la cantidad de esfuerzo que se dedica a las actividades productivas respecto de las improductivas, e influye también en la forma en que se organiza la producción en la economía (Weil, 2006). Por tanto, no se puede negar que las decisiones de un gobierno tienen un impacto en el crecimiento y el desarrollo de un país, principalmente en el establecimiento de las políticas económicas.

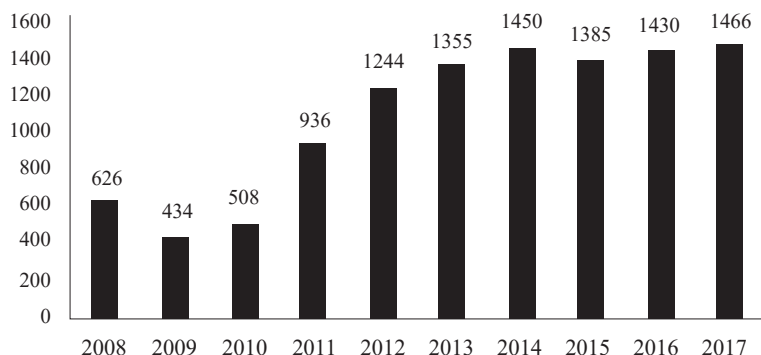
Nicaragua ocupa el último lugar en productividad en América Latina, con un rezago de más de cuatro décadas en materia de producción y desarrollo (Murillo, 2016). Los esfuerzos de quien produce se concentran en atraer inversión extranjera. ProNicaragua<sup>19</sup> se ha convertido en un instrumento clave del gobierno para ello, en razón de la desconfianza que generaba el regreso de Daniel Ortega a la presidencia. En su página web, este organismo promueve a Nicaragua como el país más seguro de la región, donde el talento es abundante y calificado, los costos de operación son competitivos; la legislación ofrece garantías para la inversión, generosos incentivos para la inversión, además de conectividad y acceso a mercados. No obstante, este modelo de atracción de inversión no permite un desarrollo sostenible e integral del país, sino que únicamente deriva en una alta dependencia de la IED. Los flujos de IED han sido promovidos por el gobierno hacia sectores que no demandan un capital

---

19 ProNicaragua es la agencia oficial de promoción de inversiones del gobierno, y desde el año 2002 funciona como programa de desarrollo económico. A partir de octubre de 2015, la Asamblea Nacional oficializó su creación mediante una ley, como un ente descentralizado del Estado, bajo la rectoría sectorial de la Presidencia de la República y con una junta directiva público-privada.

humano cualificado, como son las zonas francas, la energía, el turismo y la minería.<sup>20</sup> En el Gráfico 1 se observa el incremento de la IED, que sin embargo presenta una tasa decreciente.

*Gráfico 1.* Comportamiento de la inversión extranjera directa (en millones de dólares).



Fuente: ProNicaragua.

En términos de los recursos, el modelo económico no demanda mano de obra calificada ni elevados niveles de tecnificación. Por tanto, la inversión en educación no resulta relevante en las políticas públicas.<sup>21</sup> El capital humano nicaragüense se cataloga como mano de obra “barata”; el sistema no brinda incentivos para elevar los niveles de productividad porque no hay un retorno positivo en la inversión en educación. Por eso, ante la falta de oportunidades de trabajo con salarios competitivos que permitan cubrir algo más que las necesidades básicas, la población se ve obligada a emigrar a otros países en busca de un futuro mejor (principalmente hacia Estados Unidos y Costa Rica).

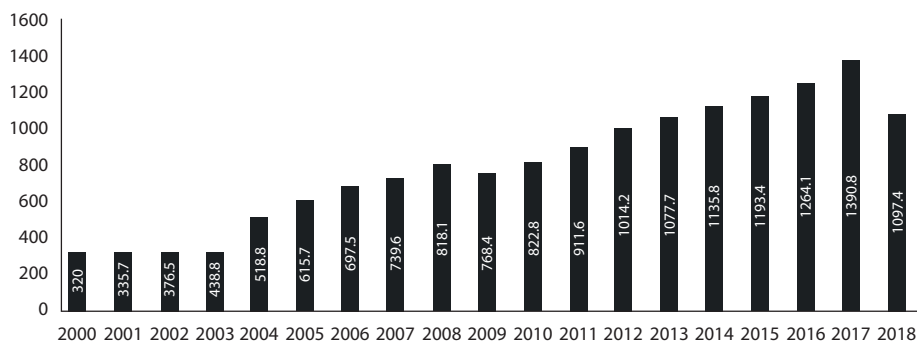
Esto hace que el modelo sea expulsor de su capital humano y dependiente de las remesas familiares; los analistas coinciden en que este último componente es lo que ha permitido un respiro a la economía en la crisis actual. En 2017, el 10.3% de la población había emigrado por razones

20 Esto lo confirman las leyes que promueven generosos incentivos para la inversión, entre ellas: Ley de Concertación Tributaria (Ley 822), Régimen de Admisión Temporal (Ley 382), Ley de Zonas Francas Industriales de Exportación (Ley 917), Ley para la Promoción de Generación Eléctrica con Fuentes Renovables (Ley 532), Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas (Ley 387), Ley de Incentivos Turísticos (Ley 306), Ley para Pensionados y Retirados (Ley 694).

21 Según datos del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEP, 2017), para Nicaragua la inversión en educación representa el 4.7% del PIB, superado por Honduras y Costa Rica con 5.23% y 7.79%, respectivamente. Para 2017, el gasto en educación representó el 23% (23.2% en 2016) del gasto total. Hay un consenso entre los expertos en cuanto a que el país necesita invertir anualmente no menos del 7% del PIB si quiere iniciar una ruta de desarrollo sostenible.

económicas en su mayoría; mientras que en 2005 esta cifra representaba el 7.8% (Bejarano & Martínez Rocha, 2018). La situación de violencia actual ha orillado a mucha gente a migrar, sobre todo a las personas jóvenes; por tanto, se debe analizar a fondo el impacto que esto tendrá en la sociedad, y en la economía en particular (cómo producir). En el Gráfico 2 se muestra el incremento del flujo de remesas familiares.

*Gráfico 2. Comportamiento de las remesas (millones de dólares).*

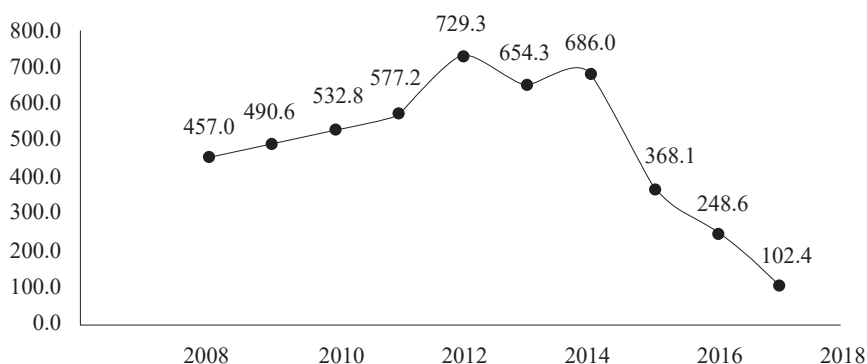


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del BCN (2018).

Para este gobierno en particular, la cooperación venezolana ha representado grandes flujos de inversión que ayudaron a mantener el crecimiento. No obstante, en el Gráfico 3 se muestra que esa cooperación comenzó a disminuir a partir de 2014, lo que ha generado una presión sobre el futuro económico del país y ha influido en la desaceleración de la economía desde 2017. A ello ha contribuido también el descenso de los precios internacionales de las materias primas, que ya se observaba desde 2016. A lo anterior deben sumarse las expectativas frustradas centradas en el florecimiento de megaproyectos, como un puerto de aguas profundas en el Caribe, la refinería El Sueño de Bolívar, obras hidroeléctricas, y el gran canal interoceánico, y otras que no lograron fructificar en inversiones. El caso particular del gran canal interoceánico con el que el gobierno prometió sacar al país de la pobreza y alcanzar el pleno empleo no llegó a iniciarse.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> La Academia de las Ciencias de Nicaragua presentó en 2015 su libro “El canal interoceánico por Nicaragua”, que contiene aportes al debate sobre las implicaciones ambientales, económicas y jurídicas de este proyecto.

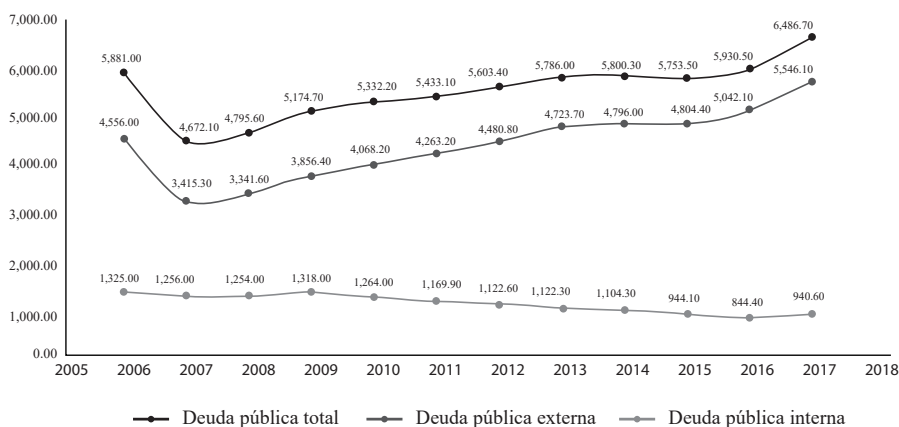
Gráfico 3. Cooperación venezolana en el marco del ALBA-TCP (2008-2017, en millones de dólares).



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del BCN.

Otro tema de especial atención en la discusión es que el crecimiento también supone un incremento de la deuda pública. Nicaragua no es un país que tenga capacidad de ahorro, por lo que todas las inversiones que llegue a desarrollar sólo podrán activarse mediante la cooperación o el endeudamiento. Como se visualiza en el Gráfico 4, la deuda pública externa comenzó a crecer a partir de 2007. Esto no resultaría negativo si ese incremento de deuda fuese acompañado por un incremento en la productividad.

Gráfico 4. Deuda pública total (2006-2017, en millones de dólares).



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del BCN.

Asimismo, no se puede omitir en la discusión que el modelo económico actual también requiere de la incorporación de las mujeres a la economía. En el ámbito mundial, la equidad de género es una tarea pendiente, dado que alcanzarla podría incrementar el capital humano en un 18%. Actualmente las mujeres representan menos del 40% del capital humano mundial, debido a que perciben menos ingresos a lo largo de sus vidas (BM, 2018). En Nicaragua, si bien el gobierno ha impulsado la equidad de género en la elección de diputados, alcaldes y vicealcaldes a partir de la Ley 50-50, la brecha de género sigue siendo un reto para que las políticas gubernamentales sean inclusivas para las mujeres. Además, resulta cuestionable si las mujeres ejercen un liderazgo real en la política, y si esa equidad en verdad permea a toda la sociedad, puesto que las mujeres siguen padeciendo violencia y exclusión.

¿Cómo se distribuye lo que se produce?

La región centroamericana ha experimentado dificultades para responder a sus problemas estructurales de desigualdad, pobreza e inadecuada inserción. Caldentey (2015) considera que los fundamentos de un modelo de desarrollo que surgieron de los Acuerdos de Paz de Esquipulas<sup>23</sup> están agotados, y ello se manifiesta en la debilidad de los proyectos nacionales. Ese nuevo modelo de desarrollo implicaba un proceso hacia la transición democrática con avances significativos en el desarrollo económico y político de Centroamérica.

En este sentido, existe una crítica sobre esos acuerdos de paz, pues se considera que consolidaron el modelo económico predominante basado en el dominio de pequeñas élites y en la incapacidad del Estado para asegurar un bienestar y resguardar el Estado de derecho; ese modelo no logró reducir las diferencias sociales y económicas que siguen siendo un reto para toda la región. Todo ello se enmarca en el agotamiento del modelo de globalización, que hace necesario reconocer el trilema político de la economía mundial señalado por Dani Rodrik.<sup>24</sup> De ahí surge la necesidad de iniciar una discusión sobre un modelo de desarrollo que responda a los retos actuales de la región en un contexto global de crisis, haciendo una revisión de los paradigmas de desarrollo desde una mirada interdisciplinar, y no sólo desde la economía como ciencia.<sup>25</sup>

---

23 Entre 1989 y 1996 se firmaron en Centroamérica los Acuerdos de Paz en el marco del proceso de Esquipulas. El propósito era facilitar una solución regional para los conflictos generados por la guerra, las dictaduras militares y los movimientos revolucionarios en los años 70 y 80 (Caldentey, 2015).

24 Según Dani Rodrik, el trilema plantea que la democracia política, la globalización económica y el Estado-nación son mutuamente incompatibles, por lo que sólo se puede optar por dos de esos elementos.

25 Caldentey (2015) presenta una revisión más detallada de las implicaciones de los Acuerdos de Paz en el desarrollo centroamericano.

Los modelos de desarrollo impulsados a lo largo de la historia económica de Nicaragua han implicado elevados costos sociales para la población, y en especial para los grupos más vulnerables. El modelo de economía de mercado del sistema capitalista predominante obliga a reproducir la pobreza y a centrarse en la estabilidad de la macroeconomía.

En el caso de Nicaragua, el modelo de consenso desarrollado entre el gobierno y el Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua (COSEP) ha permitido un cierto crecimiento económico, pero también ha profundizado las desigualdades y ha inclinado la balanza a favor del gran capital. Ya desde los tiempos del presidente Enrique Bolaños, su Plan Nacional de Desarrollo señalaba la necesidad de construir “consenso” para llevar a cabo un proyecto de nación que “provenga de un arreglo social no superficial entre los diversos grupos, clases o agentes sociales, sobre la producción y distribución, tanto entre ellos como en una perspectiva intergeneracional” (Gobierno de Nicaragua, 2002). Sin embargo, ese consenso sólo se ha logrado con las élites económicas del país.<sup>26</sup> Así pues, esta experiencia aconseja que se debe promover un modelo inclusivo, y no uno que priorice arreglos con sólo algunos grupos de interés.

Por tanto, el reto de Nicaragua, y de toda Centroamérica, es la construcción de un modelo de economía de bienestar incluyente que permita lograr sociedades más justas y equitativas, centradas en el desarrollo humano. Ponderar el papel de las élites económicas es clave para no seguir aplicando un modelo de exclusión que sólo busca el bienestar de una minoría, y también para equilibrar la predominancia de lo privado sobre lo público y del interés individual sobre el interés colectivo. En esta línea, Manuel Ortega Hegg, en el Seminario Nacional sobre la Diversificación de la Matriz Productiva, expone que el modelo de desarrollo de Nicaragua está obsoleto y en franco agotamiento y necesita repensarse conforme a las nuevas coordenadas, puesto que se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo, dado que impide transitar hacia el tipo de economía y de sociedad dominante en el mundo desarrollado, que es el de la economía y la sociedad que se basan en el conocimiento.

De Franco (2011) señala que el crecimiento de Nicaragua se ha caracterizado por una tendencia decreciente, y por una tendencia excluyente y generadora de pobreza. Asimismo, analiza que el país se encuentra sumergido en la trampa de la pobreza;<sup>27</sup> por lo que un alto crecimiento económico no conlleva necesariamente a reducir la pobreza.<sup>28</sup> El crecimiento por persona en los últimos cien años ha sido mínimo, cuando mucho 1% anual. El mínimo requerido para entrar en una senda de crecimiento sostenido requiere de una inversión de capital de US\$ 14,083 por persona.

---

26 Spalding (2017) explica cómo se han desarrollado y fraguado estas élites; así como el mecanismo de establecimiento del diálogo entre el gobierno y el COSEP.

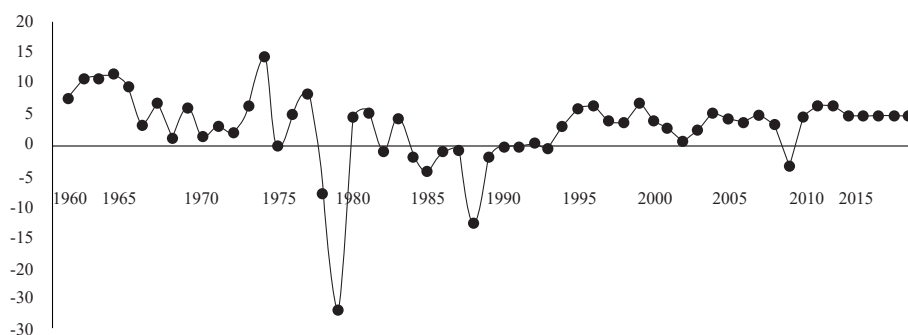
27 Se refiere a una condición en la cual una economía, una familia o un individuo se ven atrapados de manera persistente en un círculo vicioso de pobreza y escaso crecimiento. De Franco (2011) presenta un amplio estudio al respecto.

28 De Franco (2011) ofrece una revisión histórica de la evolución del crecimiento de Nicaragua, donde hace evidente la vulnerabilidad que caracteriza a la economía nacional por haber estado inmersa en doce ciclos económicos de auge y depresión durante el periodo de 1920 a 2004.



En el Gráfico 5 se presenta el comportamiento de la tasa de crecimiento del PIB durante el periodo 1960-2017, donde se observa que la economía aún no alcanza los niveles de crecimiento de la década de los 70. Asimismo, se observa que partir de 2012 la economía se comienza a desacelerar por efecto de un contexto internacional adverso. En este aspecto, el FMI (2018) advierte que “los riesgos para las perspectivas de crecimiento de Nicaragua parecen estar, en general, equilibrados en el corto plazo, pero continúan inclinándose a la baja en el mediano plazo”. De tal forma que el país no estaba exento de una crisis económica en el mediano plazo, por consiguiente, la crisis sociopolítica actual sólo pone en evidencia la fragilidad de la economía y su incapacidad para responder a las presiones externas.

*Gráfico 5. Tasa de crecimiento del PIB 1960-2017.*



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del BCN.

Finalmente, cuando se explica el crecimiento de la economía en los informes anuales publicados por el BCN se puede inferir que el país es altamente dependiente de los términos de intercambio, las condiciones climáticas, las remesas, la inversión extranjera directa y la cooperación internacional. Por tanto, no es de sorprender que la productividad laboral sea baja, que la probabilidad de recibir remesas sea alta y que los salarios reales sean bajos. A esto hay que sumar que Nicaragua es el país de la región donde la energía eléctrica es más cara; por consiguiente, los altos costos inhiben el desarrollo tecnológico y el crecimiento de la productividad. Por ello, el crecimiento económico que venía experimentando el país en los últimos años, si bien es resultado de años de esfuerzos y de costos sociales para los más vulnerables, resulta insostenible a largo plazo.

## 5. Conclusiones

Desde 2017 la economía de Nicaragua presentaba las primeras señales de desaceleración, en gran parte por las condiciones del contexto internacional y por la reducción del apoyo de la cooperación venezolana. El impacto de la crisis sociopolítica de abril de 2018 en la economía permite centrar nuevamente la mirada en la urgencia de cambiar el modelo. La coyuntura puso en evidencia la necesidad urgente de atender los problemas estructurales que tiene la economía, mismos que propician crisis debido al mecanismo de organización de la economía para determinar qué se produce, cómo se produce y para quién se produce.

Este capítulo se une a la discusión que se ha empezado en los últimos años sobre el agotamiento del modelo de desarrollo económico de Nicaragua, el cual es de índole extractivista y muy dependiente de factores externos tales como los términos de intercambio, la cooperación internacional, la inversión extranjera y las remesas familiares. Es un modelo que funciona únicamente por la inversión externa, el apadrinamiento de la cooperación externa, la fuerza de trabajo barata, la explotación indiscriminada de la naturaleza sin producir valores agregados de importancia, y que tiene además un límite estructural determinado por la educación. El modelo promueve la expulsión del capital humano del país, desaprovechando así las ventajas para el desarrollo que el país podría percibir mediante el fenómeno del bono demográfico.

Los modelos económicos actuales nos exigen pensar en nuevos conjuntos de reglas que sean inclusivas, donde se incorpore el conocimiento y su base de desarrollo sea la creación de capacidades, como propone Amartya Sen. En este sentido, la educación es fundamental para un desarrollo sostenible a largo plazo, y es lo que permitirá al país salir de la trampa de la pobreza. El capital humano es el fundamento de la economía y es el componente principal de la sociedad, puesto que las empresas están conformadas por personas, los gobiernos son dirigidos por personas y las familias están integradas por personas. Por tanto, nuestra economía debe priorizar la inversión en las personas si queremos un modelo de desarrollo que a la par de crecimiento genere inclusión, equidad social y calidad de vida para todos.

## Referencias bibliográficas

- Anónimo. (2018). Gobierno de Nicaragua da a conocer informe sobre fallecidos en el contexto del Golpe de Estado. *El 19 de Digital*. Recuperado de <https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:79977-gobierno-de-nicaragua-da-a-conocer-informe-sobre-fallecidos-en-el-contexto-del-golpe-de-estado>
- Arana, M. (2010, agosto). *Modelos de Desarrollo Económico de Nicaragua: Evolución y Perspectivas*. Conferencia presentada en la Universidad Centroamericana, Nicaragua.
- Avendaño, N. (2018). ¿Qué límites económicos tiene el proyecto político de Ortega? Revista *Envío*, (438). Recuperado de <http://www.envio.org.ni/articulo/5530>
- Banco Central de Nicaragua. (2018). *Sector Externo*. Recuperado de [https://www.bcn.gob.ni/estadisticas/sector\\_externo/index.php](https://www.bcn.gob.ni/estadisticas/sector_externo/index.php)
- Banco Central de Nicaragua. (2006-2017). *Informe Anual*. Recuperado de [https://www.bcn.gob.ni/publicaciones/periodicidad/anual/informe\\_anual/index.php](https://www.bcn.gob.ni/publicaciones/periodicidad/anual/informe_anual/index.php)
- Banco Mundial (2018). *The Changing Wealth of Nations 2018: Building a Sustainable Future*. Recuperado de <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29001>
- Bejarano, M., & Martínez Rocha, M. (2018, 05 de junio). Durante y después de la crisis, a Nicaragua le espera más migración. *El Nuevo Diario*. Recuperado de <https://www.elnuevodiario.com.ni/economia/466361-crisis-nicaragua-migracion-remesas/>
- Biblioteca Enrique Bolaños. (s.f.) *HIPC*. Recuperado de <https://www.enriquebolanos.org/articulo/hipc>
- Borgucci, E., & Castellano, A. (2016). La teoría económica y la epistemología. *Económicas CUC*, 37 (1), 9-40.
- Caldentey del Pozo, P. (2015). Desarrollo económico en Centroamérica: vigencia y revisión de los acuerdos de Esquipulas. *Revista Icade* (96). Recuperado de <http://revistas.upcomillas.es/index.php/revistaicade/article/view/6608>
- Centro Humboldt. (2018). *Informe de la crisis sociopolítica ambiental actual en Nicaragua*. Recuperado de <https://humboldt.org.ni/informe-de-la-crisis-socialpolitica-ambiental-actual-en-nicaragua/>
- Chamorro, C. F. (2018, 02 de enero). ¿“Modelo COSEP”, o el régimen de Ortega? *Confidencial*. Recuperado de <https://confidencial.com.ni/modelo-COSEP-regimen-ortega/>
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2019). *Situación de los derechos humanos en Nicaragua*. Recuperado de <https://www.oas.org/es/cidh/actividades/visitas/2018Nicaragua/Boletin-MESENISeptiembre2019.pdf>

- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2018a). *Observaciones preliminares de la visita de trabajo de la CIDH a Nicaragua*. Recuperado de <http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/113.asp>
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2018b). *Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua*. Recuperado de <http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Nicaragua2018-es.pdf>
- Cruz, J. D. (2018, 07 de febrero). FMI: INSS necesita reforma. *El Nuevo Diario*. Recuperado de <https://www.elnuevodiario.com.ni/economia/455116-fmi-inss-necesita-reforma/>
- De Franco, M. A. (2011). *Causas del (de)crecimiento económico de largo plazo de Nicaragua*. Managua: FUNIDES.
- Dornbusch, R., Fischer, S., & Startz, R. (2004). *Macroeconomía* (9ª ed.). Madrid: McGraw-Hill.
- Fondo Monetario Internacional. (2018). *Nicaragua: Declaración final de la visita del personal técnico del FMI*. Recuperado de <https://www.imf.org/es/News/Articles/2018/02/06/ms020618-nicaragua-staff-concluding-statement-of-an-imf-staff-visit>
- Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social. (2019). *Nicaragua en crisis política y socioeconómica. Informe de coyuntura septiembre 2019*. Recuperado de [http://www.funides.com/media/attachment/FUNIDES\\_-\\_PPT.\\_Coyuntura\\_de\\_Nicaragua.\\_Septiembre\\_2019\\_02-10-19.pdf](http://www.funides.com/media/attachment/FUNIDES_-_PPT._Coyuntura_de_Nicaragua._Septiembre_2019_02-10-19.pdf)
- Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social. (2018). *Proyección de la actividad económica para 2019*. Recuperado de <http://www.funides.com/noticias/439-proyeccion-de-la-actividad-economica-para-2019/>
- Gobierno de Nicaragua. (2002). Propuesta de Plan Nacional de Desarrollo. Recuperado de <https://sajurin.enriquebolanos.org/docs/Plan%20Nacional%20de%20desarrollo.pdf>
- Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. (2012). *Desarrollo Humano*. Recuperado de <http://www.pndh.gob.ni/desarrollohumanopndh.shtml>
- Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas. (2017). *Inversión pública en educación y los desafíos de la calidad educativa*. Recuperado de <https://www.ieepp.org/media/files/publicacion-7-529.pdf>
- Jarquín, E., Cuadra, E., Icaza, J., Peraza, J. A., Pineda, U., Rothschuh, G. et al. (2016). *El régimen de Ortega: ¿una nueva dictadura familiar en el continente?* Managua: PAVSA.
- Medal, J. L. (2018, 10 de octubre). La transición pendiente. *Confidencial*. Recuperado de <https://confidencial.com.ni/la-transicion-pendiente/>
- Moré Olivares, E. (2014). *Sistemas económicos y modelos de economía moderna*. Bogotá: Editorial Universidad Autónoma de Colombia.
- Murillo, L. (2016). *Diversificación de la matriz productiva. Alternativa para reducir la dependencia de precios volátiles de las materias primas, y altos niveles de pobreza y desigualdad social en América Central*. Managua: Fundación Friedrich Ebert.

- Ortega, M. (2016). *Conclusiones del Seminario Nacional: Diversificación de la matriz productiva en el contexto de una transformación social y ecológica*. Conferencia presentada en Universidad Centroamericana, Nicaragua.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (1996). *Economía* (15ª ed.). Madrid: McGraw-Hill.
- Sánchez, M. (2017). *Extractivismo y lucha campesina en Rancho Grande: La expresión de un ecologismo político en Nicaragua*. Managua: Centro de Análisis Socio Cultural (CASC).
- Spalding, R. J. (2017). Los empresarios y el Estado posrevolucionario: El reordenamiento de las élites económicas y la nueva estrategia de colaboración en Nicaragua. *Anuario de Estudios Centroamericanos*, (43). Recuperado de <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/anuario/article/view/31556/31163>
- Vargas, O. R. (2012). *Nicaragua y la crisis financiera actual: efecto y reacción en la lucha contra la pobreza*. Recuperado de <http://xivrem.ujaen.es/wp-content/uploads/2011/11/92-R-121M534.pdf>
- Weil, D. N. (2006). *Crecimiento económico*. Madrid: Pearson Educación.

## V. Algo nuevo va a nacer

Sergio Ramírez<sup>1</sup>

*Esa gente no aceptará esta clase de existencia para la siguiente generación. Nosotros no lo haríamos, ellos no lo harán. Habrá cambios. Así que una revolución está a las puertas, una revolución que será pacífica si nosotros somos lo suficientemente sabios; compasiva, si nos preocupamos lo suficiente; exitosa, si somos afortunados, pero al fin y al cabo una revolución, lo queramos o no. Podemos afectar su carácter, pero no podemos evitarla.*

Robert Kennedy  
The New York Times, 1966.

El Frente Sandinista de Liberación Nacional, fundado en 1961, nació entre estudiantes de la izquierda en las aulas universitarias, y quien sería su fundador, Carlos Fonseca, había dejado poco antes la Escuela de Derecho para pasar a la clandestinidad.

Cayó en las montañas del norte de Nicaragua en 1976, a menos de tres años del triunfo de la revolución, el cual no hubiera sido posible sin un cambio fundamental de rumbo. La estrategia guevarista del foco guerrillero en la montaña fue superada a partir de 1977 por una ofensiva generalizada contra las tropas de Somoza, junto con la articulación de una alianza política con todas las fuerzas antisomocistas.

El Grupo de los Doce, formado ese mismo año por empresarios, sacerdotes, profesionales e intelectuales, fue esencial para el cambio de percepción que la sociedad tenía del FSLN como un grupo de guerrilleros valientes y sacrificados, pero sin consenso social ni posibilidades de alcanzar el poder político. Y el asesinato del periodista Pedro Joaquín Chamorro Cardenal en enero de 1978 catapultó la lucha.

---

<sup>1</sup> Sergio Ramírez Mercado es escritor, Premio Cervantes 2019. En los años 80 fue vicepresidente de la República de Nicaragua.

El triunfo de 1979 fue el fruto del heroísmo de miles de jóvenes combatientes que lograron derrotar al ejército pretoriano de Somoza, pero también lo fue, y en una medida trascendental, de una hábil y brillante operación política que movilizó a la población, despojó de temores a la clase media, pospuso las aprehensiones de los empresarios, logró un sólido respaldo internacional y una interlocución con el gobierno de Estados Unidos.

Una “transición ordenada” fue negociada con la administración Carter, lo que implicaba la salida de Somoza al extranjero con su familia y allegados, y la formación de un mando conjunto del nuevo Ejército, entre oficiales de la Guardia Nacional y comandantes guerrilleros. No resultó así al final, porque el vicepresidente Urcuyo, que sólo debía entregar el mando a la Junta de Gobierno, desconoció el acuerdo, y eso precipitó el avance de las fuerzas insurgentes y el desmoronamiento del Ejército.

Hay pecados capitales que definen la historia de un proceso revolucionario, y definen, a fin de cuentas, la historia misma. Un pecado capital de la revolución nicaragüense consistió en poner la ideología por encima de las posibilidades de la realidad. El socialismo, como idea redentora, despreció la realidad, y esta terminó imponiéndose.

La revolución era, en primera instancia, una sincera ilusión de cambio en la mente de quienes la habían hecho posible. Fue una empresa abierta, realizada con voluntad espontánea por gente de distintas clases sociales que no se detuvo a considerar asuntos de ideología, menos una ideología férrea basada en el protagonismo hegemónico de una clase obrera que a duras penas existía en un país de fundamento agrario.

Pero convertir a los pobres en protagonistas de la historia era parte central de la idea de revolución, compartida por marxistas y por cristianos partícipes del proceso, promotores de la opción preferencial por los pobres del Concilio Vaticano II y del Congreso Eucarístico de Medellín. Y era un sentimiento de la sociedad en general; una revolución sin cambios estructurales no puede merecer ese nombre.

Pero las concepciones leninistas sobre el poder no dejaban de flotar arriba, en el estrato de la vanguardia, encarnada en los nueve comandantes, dueños del papel de conducir la revolución, que se había hecho con novedad e imaginación.

Cuando se dio el triunfo en julio de 1979, apenas pocos meses atrás el Frente Sandinista se hallaba aún dividido en tres tendencias, que no eran más que la representación de concepciones intelectuales sobre las formas de tomar el poder.

Los jóvenes y adolescentes que luchaban en la clandestinidad, tras las barricadas y en las montañas, y la gente que los apoyaba jugándose también la vida, entendían poco de aquellos artificios ideológicos, y su urgencia era derrocar a una dictadura opresora y corrupta. Y allá abajo empezaron a juntar sus fuerzas y recursos antes de que se llegara a firmar un acuerdo de unidad.

Por primera vez en la historia de Nicaragua no había un caudillo. Las tres tendencias aportaron cada una tres miembros de igual rango a la Dirección Nacional, y se dio el fenómeno, nuevo, de un equilibrio de mando dentro de un cuerpo colectivo de nueve personas sin un dirigente visible.



De ese delicado equilibrio dependía el consentimiento, y por tanto la adhesión de todas las fuerzas guerrilleras, que tenían su referente único de autoridad en un colectivo, y no en un solo hombre. Y quienes formaban ese colectivo entendían que la ruptura del equilibrio implicaba el riesgo de una lucha intestina, con miles de armas en manos de los combatientes que apenas tomaban respiro de la guerra de liberación recién concluida, mientras se iba articulando el nuevo poder.

Este cuerpo colegiado, sin embargo, ejercía un poder vertical. Para la teoría quedaba que desde las bases se elaboraban las decisiones estratégicas, las cuales, depuradas instancia tras instancia, eran aprobadas o consensuadas en el último nivel. Semejante procedimiento fue siempre una quimera política. De la Dirección Nacional partían “líneas” u “orientaciones” iguales a las de un buró político, y algunas veces bajaban, para su lectura religiosa y aprobación sin enmiendas, a la Asamblea Sandinista, que hacía las veces de Comité Central.

El fenómeno de equilibrio y mutua contención explica el surgimiento de la figura de Daniel Ortega, porque era el que poseía menos condiciones de caudillo. No era ni histriónico, ni demagogo. No era carismático, no tenía dotes para la oratoria, y aburría a la gente en las plazas con sus largas tiradas históricas.

Partía con ventaja, pues además de ser parte de la Dirección Nacional, estaba en la Junta de Gobierno de cinco miembros, civiles todos menos él, y tenía el respaldo de su hermano Humberto, jefe del Ejército.

La Junta tampoco tenía jefatura formal. En 1983 Daniel era ya su coordinador, y también coordinador de la Dirección Nacional. Un título que no llamaba la atención.

En 1985 resultó electo presidente de la república, y secretario general de la Dirección Nacional. Pero el colectivo, con sus pesos y contrapesos, seguía funcionando.

Había una rendición mutua de cuentas. En cada sesión, los días viernes, el primer punto de la agenda era la crítica y autocrítica. Cualquiera que hubiera sobrepasado sus límites tenía que mostrar firme propósito de enmienda. Los pecados de vanidad y soberbia, o exceso de figuración, eran juzgados con severidad.

Desde el primer momento, en el proceso revolucionario convivieron dos planos: uno interno, donde se amparaban las intenciones de crear a largo plazo un Estado socialista bajo la guía de un partido único, o al menos hegemónico; y en el plano externo, la proclama del pluralismo político, la economía mixta y el no alineamiento internacional.

La revolución logró un buen grado de credibilidad en Europa Occidental, fue aceptada con algo de reticencia por los nuevos gobiernos democráticos de América Latina, que entonces sustituían a las dictaduras militares, pero nunca convenció a los Estados Unidos de Reagan, quien dio su respaldo inmediato al ejército de la Contra, y así sobrevino en Centroamérica – tomando en cuenta las guerras en El Salvador y Guatemala – una confrontación de la Guerra Fría en una oscura esquina del tablero mundial.

En términos estratégicos la revolución se amparó en el campo soviético, y en Cuba, para el apoyo militar, y para los suministros básicos que incluían el petróleo, mientras del otro lado prevalecía el embargo comercial de Estados Unidos junto con una decidida política de aislamiento que, a los ojos del mundo, situaba a David frente a Goliat.

Antes de un año, la unidad de fuerzas políticas diversas que hizo posible el derrocamiento de la dictadura había saltado en añicos. Muy temprano el FSLN decidió que la responsabilidad de gobernar era en exclusiva suya, y este fue otro pecado capital. No sólo alejó a sus aliados, sino que les estorbó, o impidió que formaran o consolidaran partidos de oposición. Cuando se convocó a las elecciones de 1984, ya en auge la guerra de los *contras*, quiso atraerlos de nuevo, pero la administración Reagan les impidió participar, como parte de la estrategia de guerra.

La única posibilidad de redimir a los pobres era creando riqueza, pero la estatización de sectores claves de la propiedad, empezando por la agraria, y los controles del comercio exterior e interior, dentro de una economía mixta restringida, resultaron en fracaso; y la guerra consumió los recursos y vino a desbarajustar las iniciativas de transformación social que eran la razón de ser de la revolución: salud, educación, vivienda, bienestar.

La empresa privada sobrevivía maniatada, sin iniciativas ni confianza, sujeta a las expropiaciones arbitrarias, y después se fue también por el embudo de la debacle que representó la falta de divisas para los suministros básicos, a lo que se sumaba la inflación y el desabastecimiento.

Nadie en la dirigencia sandinista imaginó la llegada de Gorbachov para sustituir a los viejos carcamales del Kremlin, ni que años después aterrizaría en Managua el canciller Shevardnadze con la notificación de que el apoyo estratégico llegaba a su fin, y que era necesario entenderse con Estados Unidos para que la guerra de los *contras* terminara; era un acuerdo entre Washington y Moscú. Tampoco fue previsible la desaparición de la Unión Soviética ni la caída del muro de Berlín.

Cuando —agotadas las posibilidades de seguir adelante con una guerra que había desangrado hasta la extenuación al país— se impuso la necesidad de los acuerdos de paz con la Contra, que también se había quedado sin respaldo del Congreso de Estados Unidos, vinieron, como consecuencia, las elecciones de 1990, que el sandinismo terminó perdiendo, y con las elecciones no sólo perdió el gobierno, sino el control de las instituciones públicas y de las fuerzas militares y de seguridad. El proyecto revolucionario colapsó, y las concepciones ideológicas cogieron rápidamente herrumbre.

La revolución terminó entonces mediante una gran paradoja: por la vía de unas elecciones que eran el símbolo de la democracia representativa, que la teoría marxista rechazaba por opuestas a la democracia popular.

Y no pudo sobrevivir a la derrota. Fue un proyecto complejo que dejó una marca en la historia, con su voluntad de cambio y sus virtudes e ideales, y sus errores, deficiencias y defectos de concepción; pero no un proyecto de plazo indefinido, como se pensaba.

La Dirección Nacional ya no fue capaz de conducir al Frente Sandinista carente de poder, y estallaron las contradicciones antes reprimidas, hasta que terminó desintegrándose, igual que se desintegraron las estructuras del partido.

Es de esa dispersión y de esa desarticulación que Ortega fue surgiendo como caudillo único. Aceptó la derrota electoral con buen talante, pero de inmediato se contradijo, y sembró la primera semilla de su poder arbitrario al proclamar que iba a “gobernar desde abajo”.

Es decir, con asonadas en las calles, huelgas fabricadas, tranques, barricadas, choques con la Policía con saldo de muertos y heridos, decidido a frustrar el gobierno legítimo de doña Violeta Barrios de Chamorro. Así se ganó la lealtad de quienes, engañados por la promesa de retornar al poder por la fuerza, empezaron a verlo, con nostalgia agresiva, como encarnación de la revolución perdida, y se reagruparon a su alrededor. Su tesón en reunir los restos del partido derrotado, a los viejos combatientes, colaboradores históricos, líderes de los sindicatos en escombros, remanentes de las organizaciones populares, le rindió frutos.

Se reinventó a sí mismo en la soledad, y se apropió de los símbolos de la vieja revolución, de sus consignas, de su retórica antiimperialista y antioligárquica, y soportó tres derrotas electorales, sin lograr superar nunca la cota de un tercio de los votos que en cada ocasión su electorado fiel le daba.

En el 2000 pactó con el expresidente liberal Arnoldo Alemán una reforma de la Constitución que rebajaba al 35% los votos para ser electo en primera vuelta. A cambio, le abrió a Alemán las puertas de la cárcel, condenado ya como estaba por lavado de dinero. Ortega, en su lenta y sagaz reconstrucción del poder, controlaba ya los tribunales de justicia.

Y aunque la Constitución le prohibía reelegirse, hizo que la Corte Suprema decretara que semejante prohibición era inconstitucional. Es decir, la Constitución fue declarada inconstitucional.

Cuando en 2006 ganó otra vez la presidencia, se prometió seguramente que nunca volvería a perder. Ya tenía también el control del Consejo Supremo Electoral y de la Asamblea Nacional, y fue copando a la Policía y al Ejército, buscando la lealtad personal de sus mandos.

También pactó con su acérrimo enemigo el cardenal Obando y Bravo, arzobispo de Managua. Y con el gran capital y las cámaras de empresarios: a cambio de plenas garantías para prosperar en sus negocios, les quedaba vedado el territorio político. Y creó, con ventaja, su propio poder empresarial, gracias al petróleo venezolano de Chávez, que en diez años llegó a representar cuatro mil millones de dólares.

Ha sido electo ya tres veces a la presidencia, la última acompañado por su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta, con lo que se repite el modelo familiar al que habíamos puesto fin a un costo de miles de vidas en 1979. Ningún otro presidente de Nicaragua, ninguno de los Somoza, ha gobernado tantos años.

Ortega es una mixtura del viejo caudillo latinoamericano que piensa en el poder omnímodo para siempre, y del marxista tradicional que también piensa en el poder para siempre. Y parecía no tener desafío.

Cualquier amago de protesta, por pequeño que fuera, era sofocado de inmediato por las fuerzas de choque, auxiliadas por la Policía. La regla del temor y el silencio funcionaba sin estorbos. Crecimiento económico, empresarios contentos, el país más seguro de Centroamérica, el gobierno de Estados Unidos a distancia. ¿Qué más podía desear?

Sin embargo, de pronto, a partir del 18 de abril de 2018 había perdido las calles, invadidas por gigantescas manifestaciones de repudio; los “árboles de la vida”, símbolos esotéricos del poder de su esposa, empezaron a ser derribados. Y comenzó a reprimir a sangre y fuego.

Perdió el apoyo del gran capital, y las cámaras empresariales, los obispos y el clero de la Iglesia católica alzaron sus voces en contra. Y ahora tenía del lado de la oposición a los pequeños y medianos productores, la sociedad civil, los estudiantes, la gente de los barrios, mientras el Ejército se resguardó en proclama de neutralidad. Y su aislamiento internacional se hizo cada vez más evidente. Sólo puede contar ahora con Cuba, Venezuela y la lejana Rusia. Más la neutralidad de México.

Le queda el control de las estructuras del Estado, la Policía Nacional, los paramilitares y las fuerzas de choque; el núcleo duro de la militancia, y el aparato judicial, que tiene un papel asignado en la represión.

No hay compatibilidad posible entre el caudillo que se apropió de una revolución ya muerta, y la sociedad nicaragüense de hoy, que no acepta nada que no sea la democracia plena.

La “normalidad” se impuso con centenares de muertos, miles de heridos, centenares de prisioneros políticos, miles de exiliados. Con él, las caravanas de paramilitares enmascarados, los juicios ilegales, los secuestros, las desapariciones, la criminalización de las protestas, la prohibición de las marchas.

Pero la única normalidad posible es la democracia, y Ortega no entra en ese nuevo paisaje. Los jóvenes de hoy, perseguidos y reprimidos a muerte, son como éramos nosotros entonces, una generación que, igual que esta, convirtió sus ideales en convicciones; la primera de ellas una sociedad justa e igualitaria. Estos son los nietos de aquella revolución, empeñados en otra revolución, sólo que esta vez sin armas.

Tras la caída de la dictadura de Somoza, José Coronel Urtecho escribió el poema “No volverá el pasado”:

Ya todo es de otro modo  
Todo de otra manera  
Ni siquiera lo que era es ya como era  
Ya nada de lo que es será lo que era  
(...)  
Es el principio de una nueva historia  
La vieja historia se acabó, ya no puede volver  
Esta, ya es otra historia (...)

Este nuevo ciclo de un nuevo poder familiar se cierra indefectiblemente, porque ya se agotó. “Es el principio de una nueva historia”. Las posibilidades

de gobernar se erigen sobre un consenso que puede ser activo, o pasivo; o como lo fue en muchos sentidos hasta el 18 de abril de 2018, un consenso acalambrado, o temeroso.

El régimen entre esotérico y populista que pasó diez años ensayando la represión a dosis calculadas, y luego salió a reprimir sin medida, ya no es posible. Desde que en abril de 2018 murió el primer joven en las calles, inició su viaje hacia ese pasado de manera irreversible.

Es un poder en tiempo pasado que sigue reprimiendo desde el pasado, incompatible con el presente, pero más incompatible aún con el futuro.

La respuesta reiterada del poder, machacada en los oídos, ha sido que se trata de una conspiración orquestada para desprestigiar a la democracia plena que Nicaragua disfruta, con su cauda benéfica de libertades públicas. Un golpe de Estado. Un plan del imperialismo. Una conspiración contra una democracia encapuchada.

El Diálogo Nacional es la única manera de buscar un cambio de gobierno y evitar que se desate en Nicaragua una nueva guerra civil. La lucha ha sido cívica, y son los desarmados quienes han puesto la abrumadora mayoría de los muertos.

Esto hace la diferencia. Y crea la esperanza de un cambio que no siendo el resultado de un enfrentamiento armado, pueda traer el asentamiento de la democracia y el fortalecimiento de las instituciones. Que acabe ese juego de espejos que siempre refleja un nuevo caudillo.

“La vieja historia se acabó, ya no puede volver. Esta, ya es otra historia...”



## VI. La crisis en Nicaragua: cronología de los principales sucesos

*Hellen Castillo Rodríguez<sup>1</sup>*

A continuación se presenta una cronología de los principales acontecimientos ocurridos desde el inicio de la crisis sociopolítica de Nicaragua en abril de 2018 hasta el 10 de abril de 2019, empezando por unos breves antecedentes inmediatos.

Evolución de la crisis sociopolítica en Nicaragua 2018-2019 (Antecedentes inmediatos)	
7 de febrero 2018	– La Ley 331, Ley Electoral de Nicaragua, se reforma para dar más atribuciones al vicepresidente del Consejo Supremo Electoral, Lumberto Campbell, quien asume en la práctica la presidencia de esa entidad.
12 de marzo 2018	– Alarma en Nicaragua por la intención del gobierno de emitir leyes para controlar el internet y las redes sociales.
20 de marzo 2018	– Madres, hermanas y amigas de mujeres víctimas de femicidio en Nicaragua –se registraban 16 femicidios en lo que iba del año–, protestan frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Managua, y demandan que se tomen medidas públicas para poner fin a la violencia de género.

---

<sup>1</sup> Comunicadora social e investigadora asistente en el Instituto Interdisciplinario de Ciencias Sociales (IICS-UCA).



3 de abril 2018	– Incendio forestal en la Reserva Biológica Indio-Maíz en el departamento de Río San Juan, frontera con Costa Rica.
7 de abril 2018	– El gobierno de Nicaragua decreta alerta amarilla –cuatro días después de originarse el incendio-, cuando el fuego había consumido ya más de 3,000 hectáreas en la Reserva Biológica Indio-Maíz.
11 de abril 2018	– Manifestación de más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, para denunciar la “negligencia gubernamental” y la “ineficiencia del Estado” ante el incendio en la Reserva Indio-Maíz, considerado la peor catástrofe ecológica en la historia de Nicaragua. Este fue el inicio de otras manifestaciones por este motivo.
12 de abril 2018	– Jóvenes autoconvocados marchan para exigir una respuesta al incendio que inició desde el 3 de abril. Minutos después, miembros de la organización juvenil del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), conocida como Juventud Sandinista 19 de Julio (JS), oficiales de la Policía Nacional (PN) y fuerzas especiales de Policía Antimotines reprimen la movilización.
14 de abril 2018	– El gobierno central informa que el fuego en la Reserva Biológica Indio-Maíz había sido controlado por completo. Unas 5,484.7 hectáreas, equivalentes a 7,786.44 manzanas, fueron afectadas por el incendio que duró diez días, y que logró sofocarse mediante esfuerzos comunitarios locales, del Ejército, de los bomberos, de la cooperación internacional y, finalmente, la precipitación de lluvias en la zona.
16 de abril 2018	– El gobierno de Nicaragua, a través del presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) anuncia sorpresivamente y de forma unilateral una reforma al sistema de seguridad social, imponiendo incrementos importantes en sus aportes respectivos a empleadores y trabajadores y estableciendo una exacción del 5% sobre las pensiones de los jubilados.
18 de abril 2018	– El gobierno de Nicaragua publica en <i>La Gaceta</i> las reformas a la Ley de Seguridad Social de Nicaragua, anunciada el día anterior.

<p>Erupción de la crisis</p> <p>(Estallido de las protestas y represión gubernamental)</p>	
18 de abril 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– En las ciudades de León, Managua y Matagalpa, ancianos, mujeres y jóvenes salen a las calles a protestar contra las reformas al INSS. Periodistas de diversos medios cubren la noticia.</li> <li>– Agentes de la Policía, fuerzas de choque y miembros de la JS reprimen con gases lacrimógenos, palos, tubos metálicos y piedras a jóvenes y a adultos autoconvocados que se habían reunido en el centro comercial Camino de Oriente, en Managua, para protestar por las reformas al INSS. Los periodistas también son agredidos, y sus cámaras y equipos son objeto de robo.</li> <li>– El gobierno suspende las emisiones de varios canales independientes: <i>100% noticias</i>, <i>Canal Católico</i>, <i>Confidencial</i>, <i>CDNN 23</i>, <i>Canal 12</i> y <i>Telenorte</i>, de Estelí. Los únicos canales disponibles son medios oficialistas, propiedad de los hijos de la pareja presidencial Ortega-Murillo.</li> </ul>
19 de abril 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y de la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPO-LI) se suman a las protestas por las reformas al INSS.</li> <li>– La represión policial empieza a emplear armas y municiones letales. Mueren las tres primeras personas durante la represión policial: dos estudiantes y un policía.</li> <li>– Por primera vez desde la revolución de 1979, la comunidad indígena de Monimbó, en Masaya, se subleva en repudio a la represión gubernamental y en apoyo a las protestas. Durante más de seis horas se enfrenta a fuerzas especiales de la Policía.</li> <li>– El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) exige al gobierno que respete el derecho constitucional a la protesta y que no reprima las manifestaciones.</li> </ul>

<p>20 de abril 2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Las movilizaciones contra la reforma del INSS se multiplican por todo el territorio nicaragüense; al mismo tiempo la represión se endurece y emplea armas letales y francotiradores. Los medios independientes, las comisiones nacionales de derechos humanos y las redes sociales señalan que sólo en estos días mueren cerca de 30 personas, la mayoría estudiantes.</li> <li>– La población apoya a los protestantes abriendo centros de acopio de víveres e insumos médicos, y creando brigadas médicas de apoyo.</li> <li>– Se reporta el deceso de la víctima más joven: el adolescente Álvaro Conrado, de 15 años. Se le había trasladado de urgencia al Hospital Cruz Azul, pero el personal del centro cierra las puertas y le niega atención médica.</li> <li>– La Catedral Metropolitana de Managua es atacada por antimotines. Más de 500 personas quedan atrapadas en su interior.</li> <li>– En Managua, manifestantes derriban la primera estructura de los denominados “árboles de la vida” o “arbolatas”, en repudio a la dictadura Ortega-Murillo. Estos derribamientos de arbolatas continuarán a lo largo de las protestas.</li> <li>– En los departamentos de Managua, León y Granada se registra la quema de algún edificio público, algunas instalaciones municipales y algunos centros universitarios. La actitud de la Policía es de total pasividad frente a estos hechos vandálicos.</li> <li>– Ante la crisis, el COSEP pide al gobierno iniciar un proceso de diálogo y convoca a la primera marcha nacional, realizada el 23 de abril en la rotonda Rubén Darío, para demandar el respeto a los derechos constitucionales: libertad de expresión, de información y de manifestación.</li> </ul>
---------------------------------	--

<p>21 de abril 2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, acepta instalar una mesa de negociación con el COSEP para analizar las reformas al INSS y abordar el tema de las exoneraciones y subsidios, como lo demandan los organismos financieros internacionales.</li> <li>– El contexto de las protestas da un giro y pasa a exigir la renuncia de la pareja presidencial, en respuesta a la represión y a los atropellos a los derechos humanos perpetrados por paramilitares y la PN.</li> <li>– El periodista Ángel Gahona es asesinado mientras transmitía en vivo los acontecimientos ocurridos en el complejo judicial de la ciudad de Bluefields, a través de las redes sociales del noticiero <i>El Meridiano</i>.</li> </ul>
<p>22 de abril 2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Inicia ola de saqueos en establecimientos comerciales y supermercados en Managua. La población reporta en los medios y redes sociales que miembros de la JS, apoyados por la Policía, son responsables de estos actos. En respuesta, la población custodia centros comerciales, supermercados y negocios.</li> <li>– Daniel Ortega emite por la televisión estatal un mensaje a la nación en el que revoca la reforma del INSS, a fin de aplacar las protestas.</li> </ul>
<p>23 de abril 2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Desde España, donde ha acudido a recibir el premio Cervantes, el escritor nicaragüense Sergio Ramírez dedica el galardón a los asesinados en Nicaragua por reclamar justicia.</li> <li>– Miles de nicaragüenses protagonizan una gran marcha en Managua, hacia la UPOLI, para presentar un nuevo pliego de demandas a Ortega que implica el fin de la violencia y un diálogo para abordar las causas profundas de la crisis.</li> <li>– La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, convoca a una réplica de la gran marcha opositora y la denomina: “El Gobierno quiere diálogo y paz”.</li> <li>– Campesinos (hombres y mujeres) convocan a un paro nacional hasta que se cumplan las exigencias de las juventudes atrincheradas en las universidades, principalmente el cese de la represión y la liberación inmediata de los más de 200 jóvenes capturados por ejercer su derecho a manifestarse en las calles del país.</li> </ul>

24 de abril 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Luego de la gran marcha en Managua que exigía la renuncia de Daniel Ortega, el presidente invita a la Conferencia Episcopal de Nicaragua a ser mediadora en un diálogo nacional.</li> <li>– El gobierno de Daniel Ortega intenta aminorar el impacto de las redes sociales, y para ello suspende el <i>wifi</i> gratuito en los parques públicos del país.</li> <li>– La Iglesia católica de Nicaragua acepta mediar en el diálogo solicitado por el COSEP y el gobierno de Daniel Ortega, pero aún no se precisa fecha.</li> <li>– Desde la comunidad internacional llegan las primeras advertencias. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) urge a asegurar que se hagan investigaciones inmediatas, profundas, independientes y transparentes sobre las muertes en Nicaragua.</li> <li>– Se libera a 120 estudiantes víctimas de detenciones arbitrarias e ilegales, confinados en el sistema penitenciario La Modelo. Los detenidos reportan haber sido torturados.</li> </ul>
25 de abril 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Continúan las protestas pacíficas y las agresiones de las fuerzas progubernamentales en distintas partes de Nicaragua. La sociedad civil hace un llamado a guardar tres días de luto nacional.</li> </ul>
26 de abril 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) contabiliza 63 fallecimientos y 15 desaparecidos durante las protestas.</li> </ul>
27 de abril 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– La Fiscalía nicaragüense anuncia que investigará las muertes ocurridas en el marco de las protestas.</li> <li>– La Asamblea Nacional, cuya mayoría son miembros o simpatizantes del partido de gobierno, anuncia la creación de una Comisión de la Verdad, integrada en su totalidad por reconocidos militantes o aliados del partido en el gobierno. Los manifestantes y las ONG califican de farsa ese intento.</li> </ul>

28 de abril 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Miles de opositores vuelven a marchar en Managua y en varias ciudades del país para manifestarse en contra del gobierno. Las consignas mantienen la exigencia de que los gobernantes renuncien, y ahora exigen democracia y una reforma electoral para tener elecciones anticipadas.</li> <li>– Las juventudes universitarias exigen la presencia en Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).</li> </ul>
29 de abril 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– En Managua se lleva a cabo otra gran marcha convocada por la Conferencia Episcopal de Nicaragua para rezar por las víctimas y por el éxito del diálogo.</li> <li>– Al terminar un oficio religioso, un motociclista irrumpe en la nave central de la Catedral de Managua, en un acto de irrespeto al lugar y de intimidación al cardenal Leopoldo Brenes, mediador y testigo del Diálogo Nacional a solicitud del gobierno.</li> </ul>
5 de mayo 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Se crea la Coalición Universitaria, formada por cinco movimientos estudiantiles: Movimiento Universitario 19 de Abril, Movimiento Estudiantil 19 de Abril, Alianza Universitaria Nicaragüense, Movimiento Universitario 19 de Abril UNA, Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia.</li> <li>– Continúan las manifestaciones en las ciudades de Managua, Chinandega, León y Estelí. Los obispos de Nicaragua exigen “esclarecer a fondo” las muertes ocurridas en las protestas estudiantiles.</li> </ul>
7 de mayo 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Se generalizan en todo el país las protestas cívicas. La respuesta del régimen es la represión en Managua, Masaya, Chinandega, León y Estelí.</li> <li>– El estudiantado se atrinchera en la estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) y reivindican justicia social y apoyo a las demandas del movimiento.</li> <li>– La Coalición Universitaria selecciona a sus cinco representantes para participar en el Diálogo Nacional.</li> </ul>
9 de mayo 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Los manifestantes celebran la tercera gran marcha contra Daniel Ortega, en la que participan el Movimiento por Nicaragua, el Movimiento Campesino y la sociedad civil. Asisten más de 70,000 personas. El oficialismo responde con su propia y reducida contramarcha en Managua.</li> </ul>

<p>10 de mayo 2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Inicia movimiento de la sociedad civil por recuperar los símbolos patrios. Pintan de azul y blanco las aceras, postes de luz y pedestales de monumentos que mostraban los colores del FSLN, y eliminan la bandera rojinegra de lugares públicos e instituciones municipales.</li> <li>– Se crea la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, conformada por los invitados a participar en el Diálogo Nacional: miembros de la Coalición Universitaria, del Movimiento Campesino, de la empresa privada, de la sociedad civil y del sector académico.</li> </ul>
<p>11 de mayo 2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– La población autoconvocada inicia la instalación de tranques en varias ciudades del país. Continúan las manifestaciones multitudinarias de protesta en todo el país, pese a la violenta represión contra la población desarmada.</li> <li>– Fuerzas antimotines y parapoliciales perpetran violentos ataques y saqueos en Masaya.</li> </ul>
<p>12 de mayo 2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Masaya se convierte en escenario de feroces enfrentamientos entre manifestantes y policías, a los que –según denuncias en redes sociales y en la prensa nicaragüense independiente– se suman grupos armados afines al gobierno. Según las crónicas locales, la ciudad amanece al día siguiente como un “campo de batalla”.</li> <li>– El Ejército de Nicaragua rompe su silencio sobre los hechos de violencia en el país en los que dice no haber participado, y emite un comunicado en el que llama a decir “no a la violencia, no a la inestabilidad, sí a la tranquilidad, y sí a la paz”, y afirma que “Somos el pueblo mismo uniformado”.</li> </ul>



13 de mayo 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Manifestantes de Managua realizan una caravana en apoyo a la ciudad de Masaya, que había resistido más de 48 horas casi ininterrumpidas de lucha contra los ataques de antimotines y fuerzas parapoliciales. Se contabilizaron casi 22 km continuos de automóviles a lo largo de la carretera Managua-Masaya.</li> <li>– Una mesa multisectorial –integrada por la Coalición Universitaria, el Movimiento Campesino, organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y el sector académico– envían una carta a Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la CIDH invitando al organismo a investigar, evaluar y diagnosticar las denuncias de violencia, persecución, represión y muerte acontecidas en Nicaragua desde el inicio de las protestas en abril.</li> </ul>
14 de mayo 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) anuncia que el Diálogo Nacional comenzará dos días después.</li> <li>– El gobierno por fin accede a que una misión de la CIDH visite el país para “observar la situación de derechos humanos”. Así lo informa el secretario general de la OEA Luis Almagro.</li> </ul>
16 de mayo 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Tiene lugar la primera sesión del Diálogo Nacional en la sede del Seminario de Nuestra Señora de Fátima, en Managua. Protegidos por un desmesurado despliegue policial y militar, con fuerzas especiales, helicópteros, drones, avionetas y guardaespaldas fuertemente armados, Daniel Ortega y Rosario Murillo acuden en su calidad de jefes del gobierno. A la entrada del recinto, multitudes indignadas los abuchean a su paso y refutan las descalificaciones que los gobernantes han hecho de los manifestantes; además les echan en cara su responsabilidad en los asesinatos de jóvenes desarmados. Como contraparte en el Diálogo Nacional se presentan la Alianza Cívica, la Conferencia Episcopal de Nicaragua (como mediadora y testigo), y el cuerpo diplomático acreditado en el país.</li> </ul>

17 de mayo 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Un grupo de representantes de la CIDH llega a Nicaragua para observar la situación y recoger las denuncias de la población civil. Al final de su estancia publican un Informe Preliminar en el que, teniendo como fuente información oficial del gobierno, confirman que las personas fallecidas suman 76, los heridos son 868 y hay 438 personas detenidas. Recomiendan crear un Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y un grupo de expertos independientes de la CIDH, a fin de esclarecer los hechos de abril.</li> <li>– Se crea el Grupo de Apoyo a las Madres de Abril.</li> </ul>
18 de mayo 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Se realiza la segunda sesión del Diálogo Nacional, donde se llega al primer acuerdo entre ambas partes: tregua de 72 horas para detener la violencia y flexibilizar los tranques a lo largo del país. Asimismo, a propuesta de la Alianza Cívica, todos los participantes de la mesa del diálogo aprueban el informe preliminar de la CIDH y acuerdan cumplir sus 15 recomendaciones.</li> </ul>
19 de mayo 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Con la “Caravana de la Valentía en Managua” se conmemora el primer mes del inicio de las protestas. En todo el país se efectúan marchas y plantones para honrar a los asesinados por el gobierno.</li> <li>– En León se realiza la marcha del Movimiento por Nicaragua y del Movimiento 19 de Abril de esa misma ciudad, a la que acuden más de 100,000 personas.</li> <li>– Durante la noche las fuerzas policiales y parapoliciales atacan la Universidad Nacional Agraria (UNA). Ese ataque lo constatan presencialmente los representantes de la CIDH. Con esa agresión el gobierno viola el acuerdo de tregua establecido en la primera sesión del Diálogo Nacional.</li> </ul>
21 de mayo 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Se lleva a cabo la tercera sesión del Diálogo Nacional, sin mayores resultados.</li> </ul>
23 de mayo 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Se efectúa la cuarta sesión del Diálogo Nacional. La Alianza Cívica hace un llamamiento a democratizar Nicaragua. Daniel Ortega se rehúsa y denuncia un “golpe de Estado blando”. La falta de consenso obliga a la Conferencia Episcopal a suspender las conversaciones, y propone una comisión mixta conformada por tres representantes de cada parte, en un intento de superar el estancamiento.</li> </ul>

<p>24 de mayo 2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Aparece un cadáver en el cauce de la cuesta El Plomo, con claros signos de tortura. Lo ingresan sin identificación al Instituto de Medicina Legal.</li> <li>– Continúan las detenciones arbitrarias e ilegales. Mediante la presión social se logra la liberación de uno de los detenidos.</li> <li>– Se informa que en El Chipote<sup>2</sup> se encuentran muchas otras personas detenidas no reportadas.</li> <li>– En las redes sociales se empiezan a visibilizar más denuncias sobre jóvenes nicaragüenses desaparecidos.</li> <li>– Continúa la represión en varias partes del país. Las ciudades de Chinandega y León son atacadas por fuerzas parapoliciales, dejando como resultado tres personas fallecidas.</li> </ul>
------------------------	---

---

2 El Chipote es una cárcel situada en lo alto de la loma de Tiscapa, en Managua. Durante la dictadura somocista fue uno de los principales centros de tortura. Actualmente las comisiones nacionales de derechos humanos denuncian que existen allí muchas personas detenidas a las que se les aplican torturas, particularmente en este período de crisis.

26 de mayo 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Un informe de Amnistía Internacional (AI) afirma que el gobierno ha cometido “crímenes de derecho internacional” al “ejercer una política represiva letal”.</li> <li>– Marchas, plantones y tranques se mantienen. Los atrincherados en los tranques en varias ciudades del país son objeto de ataques con todo tipo de armas por parte de fuerzas parapoliciales.</li> <li>– Inicia ola de violencia callejera en la que turbas y delinquentes que la población identifica como afines al gobierno salen durante las noches, disparando a civiles y generando caos.</li> <li>– Se publica en <i>Confidencial</i><sup>3</sup> un artículo que recoge varias historias de casos que ilustran a cabalidad el patrón de los disparos contra los manifestantes en Nicaragua, lo cual permite conjeturar que la PN empleó francotiradores.<sup>4</sup></li> </ul>
28 de mayo 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Estudiantes se toman la UNI. A las diez de la mañana inician ataques de la Policía Nacional, antimotines y fuerzas parapoliciales. Los enfrentamientos continúan hasta las seis de la tarde. Se reportan tres muertos, muchos heridos y varias personas detenidas.</li> <li>– Se realiza la primera jornada de trabajo de la Comisión Mixta; se llega al consenso de flexibilizar los tranques, siempre y cuando el primer tema de agenda en el diálogo –a reanudarse el 31 de mayo– sea el cese de la represión, la desarticulación de grupos paramilitares, y la convocatoria a elecciones generales adelantadas, entre otros puntos.</li> </ul>
29 de mayo 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Manifestaciones y tranques se mantienen de forma generalizada en todo el país.</li> <li>– Amnistía Internacional presenta un informe sobre la situación del país, titulado “Disparar a matar”, en el que se concluye que el “Gobierno de Nicaragua utiliza una estrategia de represión letal”.</li> </ul>

3 *Confidencial* es una revista que se publica en Nicaragua desde julio de 1996, como un medio de información y análisis entre tomadores de decisiones en el ámbito gubernamental, diplomático, sector privado y sociedad civil. En el año 2010 se relanzó al público como periódico digital interactivo.

4 El artículo es del periodista Wilfredo Miranda Aburto, quien particulariza que: “*Confidencial* tiene en su poder 19 tomografías realizadas en el Hospital Lenin Fonseca. Las tomografías revelan disparos precisos en las frentes, parietales, temporales y occipitales de las víctimas. Los impactos de bala presentan en su mayoría orificios de entrada y salida. Trayectorias que dejan una estela de destrucción en la masa cerebral” (2018).

30 de mayo 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Con motivo del Día de las Madres en Nicaragua, y en apoyo a las más de 90 madres que hasta ese momento habían perdido a sus hijos o hijas a causa de la represión gubernamental, se realiza en Managua la llamada “Madre de Todas las Marchas”. Se estima que acudieron a marchar más de 500,000 personas. La marcha estaba llegando a su punto de cierre cuando los asistentes fueron atacados por francotiradores y grupos paramilitares afines al gobierno. A las cinco de la tarde son asesinados los primeros estudiantes, entre ellos un niño de 15 años, abatido frente a su madre con un disparo en el cuello.</li> <li>– En otros puntos de la capital, como en la Carretera a Masaya, se registran enfrentamientos de policías y paramilitares contra manifestantes. Hechos similares ocurren en otras ciudades, y en total se reportan 19 muertos y decenas de heridos. Daniel Ortega anuncia que no dejará el poder.</li> </ul>
31 de mayo 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia emite un comunicado anunciando que, tras la masacre del 30 de mayo, no están dispuestos a reanudar el Diálogo Nacional en tanto el gobierno no dé la orden de cesar la represión y la violencia contra la población nicaragüense.</li> <li>– Los pobladores de la ciudad de Masaya, de la comunidad indígena de Monimbó y del municipio de Waslala instan a un paro nacional, tras la ola de violencia y represión perpetrada por el gobierno.</li> </ul>
1 de junio 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– En la ciudad de León grupos afines al gobierno de Ortega incendian el Ministerio Agropecuario (MAGFOR) y generan caos.</li> <li>– La Provincial Centroamericana de la Compañía de Jesús se pronuncia repudiando la masacre perpetrada por el gobierno, por la Policía Nacional y por fuerzas parapoliciales en Nicaragua. A la vez, denuncian en carta abierta y pública amenazas recibidas contra la vida del padre José Alberto Idiáquez, rector de la Universidad Centroamericana (UCA), quien participa en la mesa del Diálogo Nacional como parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.</li> </ul>
4 de junio 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Masaya sufre un ataque armado que deja cinco muertos.</li> <li>– Monimbó se mantiene en pie de lucha.</li> </ul>

6 de junio 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– La OEA insta a todas las partes a “impulsar negociaciones pacíficas con resultados claros que aborden los desafíos fundamentales del país, incluido el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la celebración de elecciones libres, justas y oportunas”.</li> </ul>
7 de junio 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Las manifestaciones contra Daniel Ortega y Rosario Murillo continúan por todo el país.</li> <li>– El toque de queda no declarado se impone en Managua y en otras ciudades. Cuando cae la noche, patrullas oficialistas y paramilitares toman las calles.</li> <li>– Los obispos se reúnen con el gobierno para intentar reactivar el diálogo. El presidente pide 48 horas a la Conferencia Episcopal para “reflexionar” sobre su propuesta de democratización.</li> <li>– Estados Unidos decide no esperar y suspende la emisión de visados para “los individuos responsables de los abusos de los Derechos Humanos y de socavar la democracia en Nicaragua”. Aunque no revela nombres, indica que la medida afecta a miembros del gobierno y de la Policía Nacional.</li> </ul>
10 junio 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Propiedades de entre 5 y 1,500 manzanas de extensión empiezan a ser invadidas por <i>tomatierras</i> organizados por el partido FSLN y funcionarios de los gobiernos municipales.</li> </ul>
12 de junio 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– El público se entera de que Daniel Ortega, para zanjar la crisis, se muestra anuente a adelantar las elecciones presidenciales, previstas para 2021. La propuesta supuestamente fue presentada a los obispos y a la Alianza Cívica por la embajadora estadounidense Laura Dogu y por Caleb McCarry, un delegado del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense que visitó Nicaragua el 9 de junio y que se entrevistó con Ortega. Hechos y discursos posteriores desmentirían esa disposición de Ortega.</li> </ul>
13 de junio 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia convoca a un paro general de 24 horas para aumentar la presión sobre el gobierno, una medida que hasta entonces se había negado a tomar debido a las consecuencias que podría tener sobre la economía nicaragüense. A estas alturas la crisis ha costado al país 600 millones de dólares.</li> </ul>

15 de junio 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– El Diálogo Nacional se reanuda. El gobierno y la Alianza Cívica abordan la “hoja de ruta” para “democratizar” el país, en concreto la propuesta de adelantar al año 2019 las elecciones presidenciales. A instancias de la Alianza Cívica las partes acuerdan invitar a observadores internacionales para investigar los actos de violencia.</li> </ul>
17 de junio 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Seis miembros de una familia –incluidos dos niños pequeños– mueren calcinados en su vivienda en un incendio provocado deliberadamente por las fuerzas afines al gobierno, en la ciudad de Managua. Una sobreviviente y varios vecinos aseguran que el ataque que produjo el incendio lo cometieron grupos parapoliciales del gobierno, con apoyo de la PN.</li> <li>– Con este crimen, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) denuncia un escalamiento de la brutal represión del régimen Ortega-Murillo. Además, la organización lamenta que en estos 60 días han sido asesinados otros 12 menores.</li> <li>– Muere el joven Darwin Potosme, de 33 años, a manos de un francotirador durante un ataque en el parque central de la ciudad de Masaya.</li> </ul>
Levantamientos de pobladores y ataques	
18 de junio 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– La población de Masaya, a 28 kilómetros de Managua, se declara “territorio libre del dictador”. La ciudad se mantiene asediada por fuerzas represivas oficialistas.</li> <li>– El Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, plantea que la situación en Nicaragua “bien podría merecer” la creación de una investigación internacional.</li> <li>– Estaba prevista la reanudación del Diálogo Nacional, que finalmente se retrasó una semana, y contó con representantes de la CIDH.</li> </ul>



19 de junio 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– El cantautor Carlos Mejía Godoy presenta una nueva canción: “Monimbó siempre con vos”, en honor al pueblo indígena de Monimbó.</li> <li>– Nuevos enfrentamientos dejan al menos tres muertos y 30 heridos. En los siguientes días aumenta la represión contra los estudiantes de la UNAN.</li> </ul>
21 de junio 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Se reorganiza un trabajo de defensa de Monimbó, donde se refuerzan barricadas para evitar el ingreso de las fuerzas antimotines y grupos paramilitares. Las barricadas son custodiadas las 24 horas del día por la población.</li> </ul>
22 de junio 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– La CIDH presenta un informe que eleva las cifras a 212 muertos, 1,337 heridos y 507 detenidos por “la acción represiva del Estado” que, según denuncia, “ha estado dirigida a disuadir la participación en las manifestaciones y sofocar esta expresión de disenso político”.</li> </ul>
23 de junio 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Grupos armados atacan una barricada resguardada por estudiantes atrincherados en el recinto universitario Rubén Darío, hiriendo de bala a 15 estudiantes y secuestrando a tres jóvenes protestantes.</li> <li>– Es asesinado el niño Teyler Leonardo Lorío Navarrete, de 14 meses de edad. Según testimonio de su madre, Teyler es alcanzado por una bala de la Policía cuando su familia lo llevaba a la casa de su abuela en un barrio del este de la capital. La Policía refuta esa versión y acusa del hecho a un delincuente. Su madre, sin embargo, mantiene que su niño fue asesinado por la Policía.</li> </ul>
25 de junio 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Se retoma el diálogo en el país, con presencia de un equipo técnico de la CIDH. El grupo forma parte del Mecanismo de Seguimiento de Nicaragua (MESENI) encargado de vigilar el cumplimiento de las recomendaciones y medidas cautelares emitidas anteriormente por la CIDH.</li> <li>– Cientos de nicaragüenses que viven en Nueva York y en otros estados aledaños en Estados Unidos recorren doce cuadras en el centro de Manhattan, Nueva York, clamando por el cese de la represión en Nicaragua.</li> </ul>
26 de junio 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Un equipo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) llega a Nicaragua para participar, junto a los expertos de la CIDH, en las investigaciones sobre los hechos violentos en Nicaragua.</li> </ul>

1 de julio 2018	– Se realiza “La marcha de las flores”, que recorre Managua en memoria de los menores fallecidos durante las protestas. Es la primera vez que se celebra una gran marcha desde la trágica jornada del 30 de mayo. Los grupos de choque y paramilitares vuelven a atacar y matan a otra persona.
5 de julio 2018	– Estados Unidos sanciona a tres altos funcionarios nicaragüenses, en el marco de la llamada Ley Magnitsky (Magnitsky Act). Se trata de Francisco Díaz, jefe de la Policía Nacional y consuegro de Daniel Ortega; Fidel Moreno Briones, secretario general de la Alcaldía de Managua; y Francisco López Centeno, vicepresidente de Albanisa – empresa estatal asociada a la Empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA).
7 de julio 2018	– Como parte de la “Operación Limpieza”, <sup>5</sup> Ortega lanza una nueva ofensiva contra las ciudades “rebeldes”: Matagalpa, Jinotepe, Diriamba, León, Masaya. – Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la CIDH, denuncia desde Nicaragua que “grupos armados progubernamentales apoyados por la Policía entran en las ciudades de manera masiva”. “Tiroteos y ráfaga de balas. Ayer Matagalpa. Ahora alrededores de Jinotepe y Diriamba”, relata. En apenas cuatro días se cuentan cerca de 40 muertos.
9 de julio 2018	– Se suspenden las mesas de trabajo del Diálogo Nacional debido a las agresiones sufridas por los obispos en la basílica de San Sebastián, en la ciudad de Diriamba.
10 de julio 2018	– Ortega comparece ante los medios oficialistas para aclarar que finalmente no habrá adelanto electoral. “Ya habrá tiempo, tal y como manda la ley, habrá tiempo para elecciones. Todo tiene su tiempo”, advierte.
11 de julio 2018	– El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, expresa su preocupación por la “intensificación” de la violencia en Nicaragua y señala que el diálogo es la única forma de encontrar “una solución pacífica a la crisis actual”.

5 La “Operación Limpieza”—término utilizado popularmente— consistió en el desmantelamiento conjunto y por la fuerza de tranques y barricadas, ejecutado por miembros de la Policía Nacional, paramilitares y turbas afines al gobierno, así como ataques armados contra la población que se manifestaba contra Ortega.

<p>12 de julio 2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– El Consejo Permanente de la OEA se reúne para abordar la situación en Nicaragua. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, aboga por adelantar las elecciones presidenciales y ofrece su ayuda a Daniel Ortega para que sea “un proceso limpio y transparente”.</li> <li>– Ese mismo día, decenas de miles de nicaragüenses se toman las principales calles de Managua al grito de “Juntos somos un volcán” y “El pueblo unido jamás será vencido”. En todo el recorrido de la marcha campea la consigna mayoritaria: “Ortega y Somoza son la misma cosa”.</li> <li>– La Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC) da a conocer que unas 5,500 manzanas de tierra para uso agrícola, pecuario, habitacional y forestal habían sido invadidas por personas fuertemente armadas, mismas que saquearon y despojaron violentamente de sus respectivas posesiones a los propietarios legítimos.</li> </ul>
<p>13 de julio 2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Nicaragua amanece bajo un paro nacional de 24 horas.</li> <li>– Acompañado por una caravana militar de automóviles y motocicletas, la pareja presidencial festeja en la delegación policial de Masaya el 39 aniversario del histórico “Repliegue Táctico”. Por primera vez desde 1980 el Repliegue no culminó en la comunidad indígena de Monimbó, en Masaya.</li> <li>– Durante el Repliegue, los pobladores de Monimbó se mantienen atrincherados en barricadas, y toda la población de Masaya se encierra en sus casas para manifestar su repudio al gobierno.</li> <li>– Finalizado el “Repliegue Táctico”, la Policía Nacional ejecuta un fuerte ataque contra la población que protesta en Monimbó. El ataque dura unas dos horas y media y deja como resultado dos personas muertas.</li> <li>– Medardo Mairena, coordinador del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia es capturado y trasladado a las celdas de El Chipote. El líder campesino es acusado <i>a priori</i> de terrorismo y del asesinato de cuatro policías en el municipio de Morrito, del departamento de Río San Juan.</li> </ul>

14 de julio 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Grupos armados atacan la UNAN de Managua. Los estudiantes se refugian en la cercana iglesia de la Divina Misericordia, donde pasan más de 15 horas bajo fuego constante de metralla de policías y paramilitares. Este acto represivo deja otros dos muertos.</li> </ul>
15 de julio 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mueren otras diez personas a manos de policías y paramilitares en una serie de ataques a la comunidad indígena de Monimbó, en la ciudad de Masaya.</li> </ul>
16 de julio 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Con fuerzas combinadas del gobierno continúa la llamada “Operación Limpieza” contra cinco ciudades del Pacífico, entre ellas Managua, Masaya, Diriá y Catarina; sus habitantes se mantienen en estado de angustia y máxima alerta. Se reportan dos personas fallecidas.</li> </ul>
17 de julio 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Más de 1,500 efectivos del Ejército, la Policía y paramilitares asedian la ciudad de Masaya y lanzan contra el barrio indígena de Monimbó un ataque que dura más de siete horas y deja como resultado cuatro personas muertas.</li> <li>– La Organización de Estados Americanos (OEA) convoca para el 18 de julio una sesión extraordinaria para abordar la crisis nicaragüense cuando entra en su tercer mes.</li> </ul>
18 de julio 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Se cumplen tres meses del inicio de las protestas contra el régimen impuesto por el presidente Daniel Ortega, con una cifra cercana a 300 personas fallecidas.</li> <li>– Un grupo de senadores estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, presentan el proyecto de “Ley de 2018 para los Derechos Humanos y la Lucha contra la Corrupción en Nicaragua”, que busca poner fin a la ola de violencia que sufre Nicaragua, y que contempla la aplicación de nuevas sanciones al gobierno de Daniel Ortega y la exigencia de convocar a elecciones anticipadas.</li> </ul>
19 de julio 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Daniel Ortega celebra el 39 aniversario de la revolución sandinista reafirmando que no se va del poder y lanzando un virulento ataque contra la Conferencia Episcopal de Nicaragua, acusándola de “golpista”. El evento contó con la presencia del cuerpo diplomático acreditado en el país, entre los que se incluye el representante del Vaticano, nuncio apostólico monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag.</li> </ul>

20 de julio 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Se publica en <i>La Gaceta</i> No. 138 la “Ley 977 Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”. Los organismos defensores de derechos humanos en Nicaragua afirman que esta legislación permite una alta discrecionalidad a las autoridades judiciales para procesar por el delito de terrorismo a cualquier ciudadano que se oponga al régimen del presidente Daniel Ortega.</li> </ul>
21 de julio 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– La Iglesia católica, que dice “no sufre por ser calumniada (...), sufre por quienes han sido asesinados”, convoca a los feligreses a una jornada de ayuno.</li> </ul>
23 de julio 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Tras nueve años de no brindar declaraciones a medios nacionales ni medios internacionales, Daniel Ortega ofrece una entrevista para el programa <i>Special Report</i> de <i>Fox News</i>, la cadena televisiva de tendencia conservadora y afín al presidente Donald Trump. En la entrevista –conducida por el periodista Bret Baier– Ortega niega las acusaciones de represión y violación a los derechos humanos que le imputan organismos internacionales, afirma que existe un panorama de normalidad en su país y rechaza la convocatoria a elecciones anticipadas.</li> <li>– Es asesinada la estudiante brasileña Raynéia Gabrielle Lima, de 31 años. Raynéia fallece de un disparo en el tórax cuando paramilitares rafaguearon su vehículo que circulaba por el reparto Lomas de Monserrat, en Managua.</li> </ul>
24 de julio 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Al cumplirse cien días de la crisis, Daniel Ortega asegura haber “derrotado el golpe”. En una entrevista al canal interestatal <i>TeleSur</i> acusa de “intervencionismo” a Estados Unidos y expresa que sería “ideal” un diálogo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para tratar sobre la política de ese país con respecto a Nicaragua.</li> </ul>
Persecución y criminalización	
2 de agosto 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– La Organización de Estados Americanos (OEA) aprueba la creación de un grupo de trabajo para Nicaragua con el fin de apoyar el Diálogo Nacional y contribuir a la “búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles”.</li> </ul>

26 de agosto 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– En el vecino país de Costa Rica se lleva a cabo una marcha masiva de repudio a la xenofobia hacia los inmigrantes nicaragüenses que llegan al país huyendo de la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua.</li> </ul>
27 de agosto 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Condenan a 23 años de cárcel a Brandon Lovo, y a 12 años de cárcel a Glen Slate, por el supuesto asesinato del periodista Ángel Gahona, ocurrido el 21 de abril en la ciudad Bluefields. Ambos jóvenes afrodescendientes se convirtieron en los primeros presos políticos que son condenados por el régimen dictatorial Ortega-Murillo. La familia del periodista asesinado refuta la versión del gobierno sobre la culpabilidad de los sentenciados.</li> </ul>
31 de agosto 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Daniel Ortega da por concluida la invitación de Nicaragua a los representantes del ACNUDH, luego de que esta presentara un informe en el que denuncia los atropellos a los derechos humanos y los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad del gobierno durante las protestas ocurridas desde abril en Nicaragua.</li> <li>– La Unión Europea suspende el programa de cooperación con la PN de Nicaragua, del cual no se habían ejecutado 3.5 millones de euros.</li> <li>– Autoridades de la UNAN-Managua expulsan a 82 estudiantes por participar en las protestas contra el régimen de Daniel Ortega.</li> </ul>
1 de septiembre 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– La delegación de la OACNUDH sale de Nicaragua hacia Panamá a raíz de que el Gobierno les “invitara a salir” del país.</li> <li>– En la rotonda Jean Paul Genie en Managua grupos de simpatizantes del partido de gobierno destruyen el memorial realizado por familiares y amigos de las víctimas de la represión.</li> <li>– La Policía Nacional y miembros de la JS asedian a pobladores autoconvocados en las ciudades de Granada y Nandaime para impedir que marchen.</li> </ul>
2 de septiembre 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Paramilitares a bordo de tres camionetas disparan contra participantes de la “Marcha de las Banderas” y hieren de bala a dos personas.</li> <li>– Simpatizantes del partido de gobierno realizan caravana por los barrios y vías principales de Managua para pedir justicia contra “los terroristas”.</li> </ul>

4 de septiembre 2018	– Es apresado Edwin Carcache (27 años) dirigente del Movimiento Estudiantil 19 de Abril, por unirse a la lucha universitaria y protestar contra Daniel Ortega y Rosario Murillo.
8 de septiembre 2018	– Se realiza la “Marcha de los Globos”, convocada por padres de familia y familiares de todas las personas que han sido detenidas y que enfrentan diversos procesos judiciales acusados principalmente de terrorismo. En la marcha se destaca el azul y blanco, colores de la bandera nacional.
10 de septiembre 2018	– Amaya Coppens (23 años), lideresa estudiantil del Movimiento 19 de Abril, es capturada en León, junto a Sergio Midence Delgadillo (28 años), acusados por los delitos de secuestro simple, terrorismo y lesiones psicológicas leves.
20 de septiembre 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Caravana de solidaridad por Nicaragua llega a Perú para exponer y denunciar los asesinatos y abusos que vive el pueblo nicaragüense ante la peor crisis sociopolítica que ha vivido el país en las últimas décadas.</li> <li>– Se inicia el desalojo selectivo de algunos de los denominados <i>tomatierras</i>, quienes habían invadido terrenos en distintas ciudades de Nicaragua. El último reporte de la UPANIC indica que de 9,800 manzanas de las propiedades privadas que fueron invadidas, unas 2,483 manzanas se reconocían como recuperadas.</li> </ul>
21 de septiembre 2018	– El gobierno de Daniel Ortega ordena a trabajadores (hombres y mujeres) de las instituciones del Estado montar plantones en las principales rotondas de la capital, para impedir la concentración de miembros de los movimientos de autoconvocados.
24 de septiembre 2018	– Se emite orden de captura contra Félix Maradiaga, académico y director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), quien a inicios de septiembre denunció ante el Consejo de Seguridad de la ONU la persecución y represión del gobierno nicaragüense contra la sociedad civil.



27 de septiembre 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Liberan de la cárcel de mujeres “La Esperanza” a las estudiantes universitarias Elsa Valle, Elizabeth Centeno y Yuri Valerio, tras ser arrestadas el 14 julio por protestar contra la dictadura de Daniel Ortega. Días después, Elsa Valle revelaría que sufrió un aborto en prisión como consecuencia de los maltratos padecidos durante su reclusión.</li> </ul>
2 de octubre 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba la <i>Ley Nicaraguan Investment Conditionality Act</i>, conocida como Nica Act, una ley que impone sanciones al gobierno de Daniel Ortega. La legislación se opone a que instituciones financieras internacionales otorguen préstamos al gobierno de Nicaragua, y exige que se tomen medidas para garantizar la transparencia electoral y combatir la corrupción. Para convertirse en ley, se requiere la aprobación del Senado estadounidense y la anuencia del presidente Donald Trump.</li> </ul>
4 de octubre 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Se presenta oficialmente la denominada “Unidad Nacional Azul y Blanco”, conformada por los diversos sectores sociales que se oponen al régimen de Daniel Ortega, entre ellos la Alianza Cívica y la Articulación de Movimientos Sociales, con el fin de luchar por la democratización y la justicia en Nicaragua.</li> </ul>
9 de octubre 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– El manifestante antigubernamental Carlos José Bonilla es sentenciado a 90 años de prisión por asesinato agravado en perjuicio del policía Jilton Rafael Manzanares, y por asesinato frustrado en contra de otros cuatro policías.</li> </ul>
14 de octubre 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– La Policía impide la realización de la primera marcha convocada por la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), y captura a 38 personas.</li> </ul>
17 de octubre 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– El lápiz labial rojo se convierte en símbolo de protesta contra la dictadura de Daniel Ortega. Las redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) propagan una campaña digital feminista y masiva denominada “#SoyPicoRojo” como una nueva forma de exigir la libertad de las presas y presos políticos.</li> <li>– La PN reprime y militariza la isla de Ometepe, con el propósito de capturar a todos los isleños que se han manifestado contra la dictadura Ortega-Murillo.</li> </ul>

<p>18 de octubre 2018</p>	<p>– Amnistía Internacional publica el informe “Sembrando el Terror”,<sup>6</sup> en el que un equipo de expertos en análisis de imágenes, armas y municiones evidencian que: “Durante los meses de junio y julio de 2018, se identificó a grupos de policías nacionales uniformados de negro, utilizando una amplia variedad de armamento de tipo militar y armas de efecto indiscriminado. Entre las armas que portaban se identificaron rifles tipo AK-47 que utilizan únicamente munición letal, rifles de francotirador ruso Dragunov, rifles tipo Remington M24 SWS y FN SPR, que permiten disparos precisos a muy larga distancia, ametralladoras ligeras RPK y ametralladoras PKM (armas que funcionan de manera completamente automática, y por tanto de ninguna manera es aplicable para tareas de seguridad pública). Además, pistolas <i>slam gun</i>, lanzagranadas antitanques portátiles tipo RPG-7 (...), todos ellos disparados en ocasiones de manera indiscriminada”.</p>
<p>20 de octubre 2018</p>	<p>– El Banco Central de Nicaragua (BCN) notifica a los bancos comerciales la suspensión del mecanismo de compra de dólares en línea. Dicha disposición indica que, para solicitar la compra de dólares, deberán hacerlo por escrito, con 48 horas de antelación, indicando el monto, el objetivo y los actores de la transacción. Ese tipo de medida fue considerado por algunos analistas como una suerte de “precorralito financiero”.</p>

---

6 Sobre las “posibles violaciones graves de derechos humanos y crímenes de derecho internacional” que habrían cometido las autoridades de Nicaragua entre el 30 de mayo y 18 de septiembre, véase el informe completo de Amnistía Internacional *Sembrando el terror: De la letalidad a la persecución en Nicaragua* (2018).

21 de octubre 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Es puesta en libertad la universitaria María Alejandra Castillo García, de 19 años, luego de sufrir un aborto en las celdas de El Chipote, donde se encontraba recluida desde el 23 de septiembre.</li> <li>– Tras la misa del domingo, luego de tres semanas desde que la Policía incrementara el asedio a las marchas azul y blanco, cientos de nicaragüenses protestan en la Catedral de Managua para exigir la liberación de las presas y los presos políticos.</li> <li>– La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH)<sup>7</sup> publica un informe en el que revela que las víctimas de la represión suman 528 personas fallecidas; unas 4,102 personas heridas; 1,609 personas secuestradas por grupos armados no autorizados, de las cuales 1,486 aún permanecen detenidas de forma ilegal o desaparecidas, y 21 viviendas de ciudadanos destruidas debido a que sus habitantes protestaron de forma cívica y pacífica contra el régimen. Desde el 19 de abril a la fecha, la ANPDH no deja de registrar denuncias sobre secuestros perpetrados por paramilitares.</li> </ul>
25 de octubre 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Se filtra que el gobierno de Daniel Ortega estaría quitándole el 4% del salario a cada uno de los trabajadores del Estado con el objetivo de mitigar la escasez de fondos en el partido y el Estado.</li> </ul>
26 de octubre 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Autoridades de Nicaragua niegan el ingreso a autoridades del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), quienes pretendían entrar al país para reunirse con representantes de la CIDH a fin de analizar la situación de Nicaragua.</li> </ul>
27 de octubre 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– El presidente Daniel Ortega, a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) ordena a las empresas que proveen servicios de TV por cable en todo el país sacar del aire la señal de <i>100% Noticias</i>, empresa opositora que transmitía por cable en el Canal 15, y poner en su lugar el oficialista Canal 6.</li> </ul>

7 Ese informe de la ANPDH (2018) presenta datos puntuales sobre las víctimas fallecidas durante la crisis en Nicaragua por haber ejercido su derecho a la protesta cívica.

<p>30 de octubre 2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 17 presas políticas recluidas en el Sistema Penitenciario Nacional de Mujeres La Esperanza denuncian –ante sus familiares y organismos de derechos humanos– que autoridades penales permitieron la incursión a su celda de unos veinte hombres vestidos de negro y encapuchados, quienes las golpearon salvajemente.</li> <li>– Una delegación del MESENI y de la CIDH solicita entrar a la cárcel de mujeres La Esperanza para comprobar el estado de salud de las 17 presas políticas que fueron golpeadas. Las autoridades impiden su acceso.</li> </ul>
<p>31 de octubre 2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– La gasolinera DNP Petronic (Distribuidora Nicaragüense de Petróleos) cambia su imagen corporativa tras las pérdidas económicas que ha sufrido la empresa a raíz de una campaña en su contra difundida en las redes sociales. Su nombre actual es PETROCEN. Esta empresa es socia de la petrolera venezolana PDVSA y está vinculada a familiares de los gobernantes de Nicaragua.</li> </ul>
<p>1 de noviembre 2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Rosario Murillo anuncia la creación de una política de paz y de un proyecto de ley llamado “Ley de Reconciliación Nacional”; la lectura que hace la oposición sobre estas medidas es que su verdadero objetivo es preparar las condiciones para promulgar una ley general de amnistía que deje impunes los crímenes cometidos durante la crisis.</li> </ul>
<p>2 de noviembre 2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Es arrestado violentamente y por sexta vez consecutiva don Álex Vanegas, conocido como “El Maratonista”. Esta vez su “delito” consistió en depositar flores en las tumbas de las víctimas de la represión. Don Álex, a sus 61 años, ha corrido en diversas partes de Managua vistiendo una camisa azul y blanca –colores de la bandera nacional–, en demanda de libertad para las presas y los presos políticos de la dictadura.</li> </ul>

6 de noviembre 2018	– La Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) <sup>8</sup> divulga una sistematización <sup>9</sup> sobre los casos de violaciones a la libertad de prensa donde reporta que entre el 18 de abril y el 18 de octubre se cometieron 420 violaciones contra la libertad de prensa en Nicaragua.
7 de noviembre 2018	– El Ministerio Público demanda 21 años de prisión a nueve estudiantes de la UNAN-Managua que sobrevivieron al ataque a la iglesia Divina Misericordia cometido el 14 de julio y que fueron arrestados posteriormente. Se les declaró culpables por los delitos de terrorismo y portación ilegal de armas.
8 de noviembre 2018	– El COSEP presenta un informe sobre el monitoreo de las actividades económicas de Nicaragua <sup>10</sup> donde revela que entre abril y septiembre de este año 417,000 personas han perdido su empleo o han sido suspendidas de sus puestos de trabajo.
26 de noviembre 2018	– Es detenida y expulsada de Nicaragua la defensora de derechos humanos Ana Quirós, de 62 años. La vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, informa horas más tarde que Ana es llevada al puesto fronterizo de Peñas Blancas, donde es recibida por autoridades costarricenses.
13 de diciembre 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– La PN allana sin orden judicial las oficinas del CENIDH, el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (IPADE), el Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILS), la Fundación del Río, y Popol Na, que previamente habían sido despojadas de su personería jurídica por la Asamblea Nacional.</li> <li>– La PN asalta y saquea la redacción de los medios de comunicación <i>Confidencial</i>, <i>Esta Semana</i> y <i>Esta Noche</i>, del periodista Carlos Fernando Chamorro.</li> </ul>

8 La Fundación Violeta Barrios de Chamorro es una organización de la sociedad civil que trabaja por la defensa y consolidación de la libertad de expresión e información en Nicaragua.

9 Periodismo en Las Américas: “Organización nicaragüense reporta 420 violaciones contra la libertad de prensa en los últimos seis meses”, 7 de noviembre de 2018, disponible en <https://knightcenter.utexas.edu/es/blog/00-20318-organizacion-nicaragueense-reporta-420-violaciones-contrala-libertad-de-prensa-en-los>

10 Ver monitoreo de noticias empresariales del COSEP, 9 de noviembre de 2018, disponible en <http://www.cosep.org.ni/index.php/comunicaciones/monitoreo-de-medios/6754-monitoreo-de-noticias-empresariales-9-de-noviembre-de-2018>

19 de diciembre 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– La CIDH informa que el MESENI y el GIEI, entidades encargadas de monitorear la crisis de derechos humanos en Nicaragua, son suspendidas de forma temporal por el gobierno de Nicaragua.</li> </ul>
21 de diciembre 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– El GIEI presenta en Washington un informe que concluye que no existe evidencia de golpe de Estado, pero sí una estrategia de represión ejecutada con el conocimiento de altos representantes del gobierno nicaragüense.</li> <li>– La Policía allana el canal de televisión <i>100% Noticias</i> y desmantela los estudios y equipos de transmisión; además suspende la transmisión del medio, con sede en Managua. En el operativo es detenido su director, Miguel Mora, y la periodista y jefa de prensa, Lucía Pineda Ubau.</li> </ul>
9 de enero 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Rafael Solís, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, renuncia a su cargo en ese poder del Estado y también a su militancia en el FSLN. En una carta enviada a Daniel Ortega y a Rosario Murillo, Solís señala el aumento de la violencia y la represión hacia la población y una total partidización del Poder Judicial en Nicaragua.</li> </ul>
11 de enero 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>– La OEA lleva a cabo una sesión extraordinaria para analizar si se le aplica o no la Carta Democrática a Nicaragua ante la situación social y política que vive el país, al entender que se están vulnerando las libertades básicas y los derechos ciudadanos.</li> </ul>
16 de febrero 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>– El régimen de Ortega informa que ha sostenido un intercambio con un grupo de empresarios privados ante la presencia de dos prelados de la Iglesia católica, a fin de “empezar una negociación” sobre temas importantes para el país.</li> </ul>
18 de febrero 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Edgard Altamirano López, titular del Juzgado Noveno Distrito de lo Penal de Juicio de Managua, sentencia a 216 años y tres meses de cárcel al líder campesino Medardo Mairena, quien participó en el Diálogo Nacional como parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. En la misma sentencia se condena al dirigente campesino Pedro Mena a 210 años de prisión, y a Luis Orlando Icabalceta a 159 años.</li> </ul>
21 de febrero 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Para superar la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018, Daniel Ortega convoca a unas negociaciones que sustituyen el Diálogo Nacional.</li> </ul>

26 de febrero 2019	– La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia anuncia una sesión preparatoria de cara a la instalación de una mesa de negociación con el gobierno. En su comunicado, <sup>11</sup> la Alianza Cívica explica que su agenda es “(...) la liberación de los presos políticos y el restablecimiento de las libertades, derechos y garantías, establecidos por la Constitución Política”.
27 de febrero 2019	– Inicia un nuevo Diálogo Nacional con representantes del gobierno y de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, pero sin la participación del presidente Daniel Ortega. Pocas horas antes del inicio del diálogo, el gobierno informa que un centenar de presos políticos han sido puestos en libertad.
15 de marzo 2019	– Se libera a un segundo grupo de presos políticos. La liberación se produce luego de que la Alianza Cívica amenazara con abandonar la mesa de negociación que busca resolver la crisis sociopolítica que vive Nicaragua.
16 de marzo 2019	– Más de 160 personas son detenidas en Managua mientras se concentraban para participar en una protesta convocada por la UNAB para exigir la libertad de las presas y los presos políticos. Las personas detenidas son puestas en libertad luego de varias gestiones efectuadas por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, así como por el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag.
29 de marzo 2019	– Como parte del Diálogo Nacional iniciado entre miembros de la Alianza Cívica y representantes del gobierno de Daniel Ortega, se firma un acuerdo <sup>12</sup> que comprende la liberación de todos los presos políticos y el respeto a los derechos constitucionales de las y los ciudadanos.
31 de marzo 2019	– La UNAB se declara en permanente movilización y convoca a la población nicaragüense a realizar jornadas de “piquetes <i>express</i> ” <sup>13</sup> para exigir al gobierno de Daniel Ortega justicia y libertad para las personas presas por motivos políticos.

11 Para conocer más sobre la jornada de preparación de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, véase el comunicado completo publicado el 26 de febrero de 2019: Preparándonos para el inicio de la negociación (<https://www.alianzacivicanicaragua.com/preparandonos-para-el-inicio-de-la-negociacion/>).

12 El acuerdo para “fortalecer los derechos y garantías ciudadanas” establece el compromiso de cumplir al menos diez principios constitucionales en un plazo no mayor de 90 días.

13 Los “piquetes *express*” fueron convocados por la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) como una forma de protesta que resguarda la seguridad de las y los manifestantes, luego de que la Policía Nacional prohibiera las protestas azul y blanco en todo el territorio nacional.



5 de abril 2019	– Son excarcelados 50 presos políticos de la dictadura de Daniel Ortega, quienes se encontraban detenidos en la cárcel de hombres La Modelo, en Tipitapa.
10 de abril 2019	– Los periodistas Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora cumplen 110 días de encierro forzado en la cárcel El Chipote, luego de haber sido detenidos de forma arbitraria por ejercer su profesión de forma valiente. Lucía y Miguel viven su cautiverio en condiciones inhumanas, a lo que se suma un proceso judicial que se ha pospuesto tres veces.
20 de mayo 2019	– Las negociaciones del Diálogo Nacional entre los representantes del gobierno y miembros de la Alianza Cívica se suspenden a raíz del asesinato en la cárcel La Modelo del preso político Eddy Montes, <sup>14</sup> a quien le disparó uno de los custodios.
11 de junio 2019	– El régimen de Ortega y Murillo excarcela a 56 presos políticos, entre ellos a los periodistas Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora. Sin embargo, agentes policiales continúan deteniendo a jóvenes que participaron en las manifestaciones de protesta, por lo que se contabilizan más de un centenar de detenidos, según organismos de derechos humanos.
13 de julio 2019	– Es detenida María Guadalupe Ruiz, estudiante de 22 años, por haber participado en las protestas estudiantiles contra el régimen de Ortega y Murillo. Ella es actualmente la única mujer que está presa por motivos políticos, además de 120 presos políticos que se mantienen en las cárceles de Nicaragua. El régimen se niega a excarcelarlos, en algunos casos negando haberlos detenido o aduciendo sin pruebas la comisión de delitos comunes.

14 Véase el artículo: Así ocurrió el asesinato de Eddy Montes, según los relatos de los excarcelados políticos. Disponible en <https://www.laprensa.com.ni/2019/05/21/nacionales/2551494-asi-ocurrio-el-asesinato-de-eddy-montes-segun-los-relatos-de-los-excarcelados-politicos>

31 de julio 2019	<p>– El régimen notifica oficialmente el fin de las negociaciones al Vaticano y a la OEA, entidades que eran mediadoras y testigos del proceso, por lo que queda parcialmente cumplido el acuerdo de libertad para los presos políticos y totalmente incumplido el acuerdo de restitución de las libertades ciudadanas. Quedan sin efecto también los acuerdos de democratización y las reformas electorales; el tema de la justicia, verdad, reparación y no repetición, así como sus respectivos mecanismos de implementación, entre ellos el retorno seguro de exiliados, la libertad de expresión, la restitución de personerías jurídicas y bienes confiscados a organismos no gubernamentales; el desarme de parapoliciales y la vigencia plena de la autonomía para las universidades, los municipios y los gobiernos regionales de la Costa Caribe.</p>
------------------	---

## Referencias bibliográficas

- Aburto Miranda, W. (2018, 26 de mayo). “¡Disparaban con precisión: a matar!”. *Confidencial*. Recuperado de <https://confidencial.com.ni/42701-2disparaban-con-precision-a-matar/>
- Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. (2019). *Preparándonos para el inicio de la negociación*. Recuperado de <https://www.alianzacivicanicaragua.com/es/preparandonos-para-el-inicio-de-la-negociacion/>
- Amnistía Internacional (2018). *Sembrando el terror: De la letalidad a la persecución en Nicaragua*. Londres: Autor.
- Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. (2018). *Informe preliminar de ciudadanos muertos en protesta cívica como un derecho humano, período 19/04/2018 al 20/10/2018. (185 días calendario)*. Recuperado de <https://twitter.com/AsociacionPro/status/1054158319999422467>





